



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

## Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

SA 5016.13

**Harvard College Library**



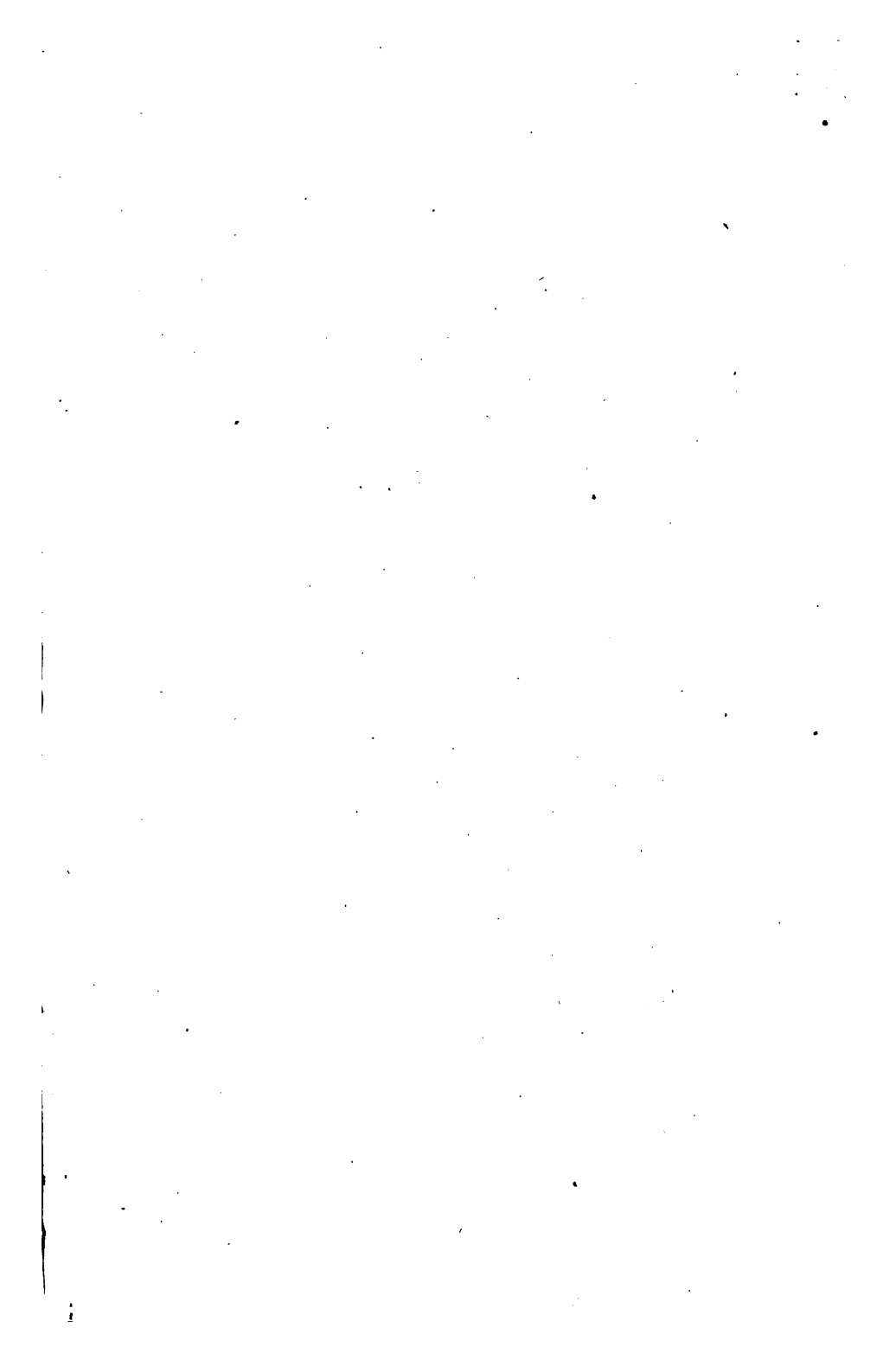
**FROM THE FUND**

**FOR A**

**PROFESSORSHIP OF  
LATIN-AMERICAN HISTORY AND  
ECONOMICS**

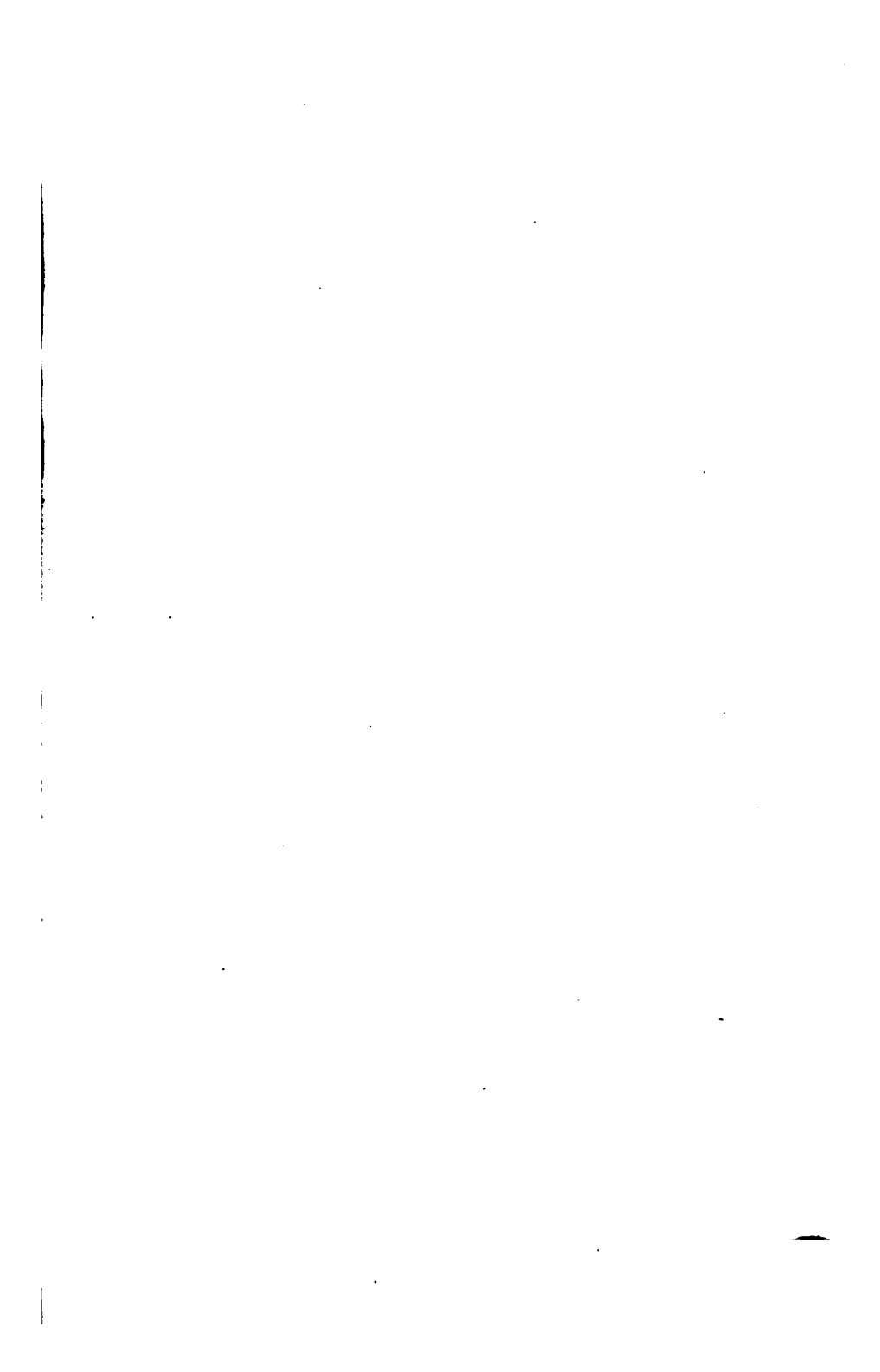
**ESTABLISHED 1913**













SA 5016.13

DISCURSOS PARLAMENTARIOS

SOBRE EL

DERECHO DE INTERVENCIÓN

POR EL

DOCTOR MANUEL QUINTANA

y

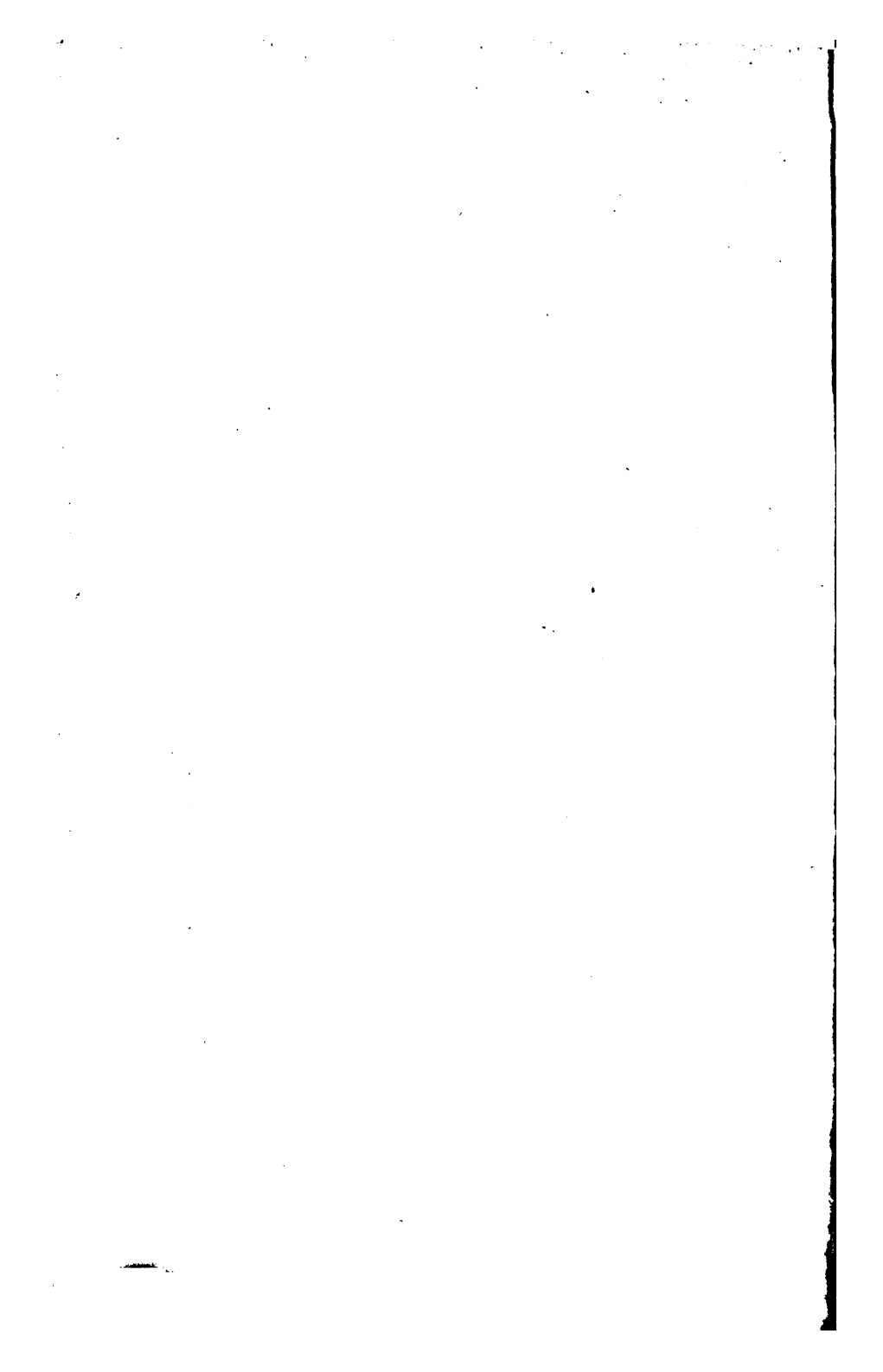
SEÑOR NICASIO OROÑO



BUENOS AIRES

Imprenta y Librería—BOHLENSA—Entre Ríos 1009

1909



0

# DISCURSOS PARLAMENTARIOS

SOBRE EL

## DERECHO DE INTERVENCIÓN

POR EL

DOCTOR MANUEL QUINTANA

Y

SEÑOR NICASIO OROÑO



BUENOS AIRES

Imprepta y Librería—BOULLEOSA—Entre Ríos 1275

1902

2017  
10/6

SA5016.13

**HARVARD COLLEGE LIBRARY**

**DEC 24 1915**

**LATIN-AMERICAN  
PROFESSORSHIP FUND.**

**MAY 10 1916**



# Derecho de Intervención

---

## I

El derecho de intervención importa una de las cuestiones más vitales de la república federativa, y es indudablemente una de las dificultades que pueden suscitarse en la aplicación del régimen de gobierno que nos hemos dado. En 1869, con motivo de los sucesos de San Juan, esta cuestión fué tratada extensamente en el Senado, manifestándose además de los talentos oratorios, conocimientos profundos en el derecho constitucional.

Todos los que han observado los sucesos políticos desde cuarenta y siete años á esta parte, han presenciado los numerosos abusos á que dió lugar la facultad concedida por la Constitución al Ejecutivo nacional. Durante el gobierno del Paraná, bajo el régimen de la Constitución de 1853, el Gobierno federal podía intervenir con requisición *ó sin ella*, es decir, cuando se le antojaba. La autonomía provincial desaparecía completamente



en la aplicación de semejante sistema. Durante siete años, Buenos Aires se resistió á formar parte de una confederación falseada por la introducción del principio unitario, y cuyo Gobierno abusó sobremanera de la intervención.

En 1860, la Constitución fué reformada en el sentido de la autonomía provincial; el Gobierno general pasó al año siguiente de los sucesos de Pavón, del Paraná á Buenos Aires, pero así mismo continuaron las intervenciones. El general Mitre y el señor Sarmiento intervinieron, tanto como el general Urquiza y el señor Derqui. El Dr. Avellaneda intervino clandestinamente, produciendo la anarquía en algunas provincias. Las cosas habían llegado á tal punto que los espíritus desinteresados, los observadores imparciales, dudaban á veces de la eficacia, de la realidad de las instituciones libres. El mismo Norte América, que durante tanto tiempo nos había suministrado ejemplos dignos de imitarse, parecía á esa fecha inclinarse también hácia el unitarismo. Era difícil prever dónde pararía ese movimiento de reacción contra los derechos de los Estados, que fué el punto de partida de la emancipación política. Con todo, allá pudo tener alguna razón de ser si se considera la institución de la esclavitud, anomalía imposible de admitir en una nación republicana; pero no se explica entre nosotros, sinó por un deseo de imitación mal comprendido.

El derecho de intervención necesita reglamentarse absolutamente, porque abre la puerta á interpretaciones peligrosas para la libertad, para

la autonomía de los pueblos. Las medidas que se han tomado, las precauciones que se han adoptado á consecuencia de tantos y respetables ejemplos, no son suficientes. El artículo 6º habla de la forma republicana de gobierno que debe garantizarse, y efectivamente, este es el objeto del contrato federativo; pero hemos visto que con este motivo, con este pretexto, se han cometido actos que daban resultados completamente opuestos.

Tantos han sido los abusos, que algunos espíritus, no habiendo otro medio de precaverse contra las intenciones manifiestas ó solapadas del poder central, fueron hasta pedir la supresión completa del derecho de intervención, dejando á los pueblos de las provincias que arreglasen de por sí sus dificultades internas. Así tendrían ménos duración los disturbios domésticos; no habría partidos ficticios que contarían con apoyos ajenos para lograr la consecución de sus fines, ni mayorías falseadas: lo que los ampararía sería siempre la verdadera mayoría, la expresión genuina de la voluntad popular.

Otros han contestado entonces que, si las provincias quedasen abandonadas á sí mismas, pronto serían presa de la anarquía, de la violencia, del caudillaje, de la tiranía doméstica, desapareciendo por eso mismo el objeto del contrato federativo, que es la garantía recíproca que los pueblos unidos se deben unos á otros.

Hemos visto también desarrollarse una teoría que nos ha dado la clave de ciertas tendencias gubernativas: la de la soberanía popular en con-

traposición á la soberanía provincial. Háse dicho que no existen dos soberanías, que no hay más que una: la nacional, que se pone en práctica por dos órganos, dos instrumentos, el nacional y el provincial, pero el primero es siempre prepotente á tal punto, que la soberanía nacional pudo, si así se le hubiese antojado, suprimir completamente la autonomía provincial. Bajo ese sistema no hay contrato federativo, propiamente hablando; hay una ley fundamental llamada constitución, que ha dividido las atribuciones para el ejercicio de la soberanía popular. Tan cierto es, que la constitución se hizo en nombre del pueblo y no de los Estados. Por consiguiente, si mañana el pueblo juzga conveniente abolir los gobiernos provinciales, estaría en su perfecto derecho.

## II

Tal es el argumento que hemos encontrado en ciertas publicaciones de Norte América, donde parece que se había desarrollado como una nueva teoría para contrarestar las tendencias separatistas del Sud y combatir la *rebelión* en el terreno de la lógica después de haberla vencido en los campos de batalla.

Comprendemos las dificultades de la cuestión. Si se adopta la hipótesis del contrato federativo, no puede negarse la consecuencia, que es la facultad de separación, de disolución, y entonces la nación desaparece. Pero si se toma por pun-

to de partida la formación nacional, si se le subordina todo, estamos expuestos á caer en otro peligro, cual es la absorción completa, el aniquilamiento de las autonomías locales y provinciales. Volveremos á caer en el abismo del unitarismo, que es lo que queremos evitar á todo trance.

Por otra parte, no comprendemos que las naciones libres puedan formarse de otro modo que por el libre contrato. Si se rechaza esto, es menester acudir á la guerra, á la fuerza, á la conquista, es decir, á procedimientos que pugnan con la esencia de la república, y entonces iremos á parar á la centralización más absoluta. Y aún cuando hiciésemos arrancar nuestras concesiones políticas de los hechos históricos, desde que en ellos queremos introducir el raciocinio y la lógica, estamos obligados á dar á todos los órganos políticos la independencia que necesitan para obrar en el conjunto armónico de las sociedades y de los gobiernos.

### III

¿Cuál es, pues, la solución del problema político?

No puede ser otra que la descentralización. El municipio, que es una creación espontánea de la sociedad y de la naturaleza, debe tener su autonomía perfecta, lo mismo que la provincia ó el Estado, que es también un engendro de la geografía y no una obra artificial de la voluntad humana.

La provincia no debe ser absorbida ni aniquilada bajo ningún pretexto.

El despotismo más terrible es el de la mayoría, es decir, de la mitad más uno, pues así es como viene á ser en la práctica el ejercicio en la soberanía popular: gran escollo de la república unitaria, que no es, en resumidas cuentas, sinó una transformación de la monarquía. La teoría que combatimos, dándolo todo á la soberanía popular, restringiendo y aún negando la soberanía de los Estados, vendría á anular las ventajas del sistema federativo, que consisten precisamente en organizar un sistema de garantías, en tomar precauciones contra la omnipotencia de la mayoría verdadera ó ficticia, contra la brutal soberanía del número, descomponiendo la autoridad en fracciones más y más diminutas, repartidas en toda la superficie del territorio. Las instituciones libres correrían un serio peligro el día que esa teoría hubiese prevalecido definitivamente: la historia nos demuestra que la soberanía popular, ejercida de un modo unitario, conduce tarde ó temprano á la dictadura, al cesarismo.

En cuanto á la intervención del Gobierno General en los asuntos locales, debe, pues, reducirse á la menor expresión, al menor número de casos que sea posible, rodearse de todas las precauciones, desde que no habiendo cosas perfectas en este mundo, no puede suprimirse completamente. Los gobiernos locales, sabiendo que no deben contar con un apoyo extraño si faltan á los deberes que les imponen las pres-

cripciones constitucionales, serían más exactos en el cumplimiento de aquellos; y en caso de revolución justamente motivada, el Gobierno General no correría el riesgo de sofocar lo que es la expresión legítima de la voluntad popular, cerrando el oído á los gritos de la opinión.

#### IV

No pudiendo un Estado ser admitido á la Unión sin llenar completamente las condiciones que exige la *forma republicana*, la intervención por la fuerza de las cosas vendría á ceñirse á los casos de invasión de otra provincia ó de ataque exterior. En los casos de sedición interna, sería de absoluta necesidad que el Congreso se reuniese inmediatamente, no pudiendo el Poder Ejecutivo tomar otras medidas que las absolutamente indispensables en semejantes emergencias.

La intervención prodigada ha sido convertida en instrumento de gobierno, ha producido el falseamiento de las instituciones republicanas federativas, ha sido un arma electoral. Mientras no se reglamente seriamente, no tendremos la realidad del régimen liberal; solo estaremos con la sombra.

Obsérvese que no es siempre necesario que la intervención se practique de un modo manifiesto; existen también los procedimientos ma-

...destinas por  
...manejos  
...resultado:  
...dirección de

...examen  
...maestría  
...puede  
...insur-  
...derecho  
...de  
...Patria-  
...y to-  
...aciones  
...pro-  
...na-  
...uso

...reordinó  
...com-  
...eximen-  
...reordinado i  
...Inca  
...reordinó  
...dirección  
...ver

dades y las hiciesen llegar en fin al terreno de la práctica!

Desde que los pueblos supieran á qué atenerse y los poderes públicos tuviesen reglas establecidas, determinadas por sanciones legislativas de un carácter permanente, ni los gobernadores de provincia ni los pueblos, estarían pendientes para conocer el resultado final de sus contiendas, de los caprichos ó simpatías personales del Presidente de la República.

Existen actualmente en el Congreso personas que gozan de una reputación de suficiencia merecida, familiarizados con el estudio de las prácticas constitucionales de otros pueblos.

Alguno de ellos podía tomar la iniciativa y presentar algún proyecto de ley.

Recordaremos con este motivo las opiniones de uno de los diputados al Congreso por la provincia de Buenos Aires, que más se ha distinguido por sus vastos conocimientos en los puntos de política y de legislación federal. <sup>(1)</sup>

## VI

«En cuanto á la cuestión de intervenciones, nos decía en otra época, juzgando un trabajo que sobre esta materia habíamos publicado,—difiero en algo de las opiniones de Vd. No me parece ajustado al derecho federal caracterizar con ras-



gos tan acentuados la autonomía de los Estados ó Provincias. Esa autonomía existe entera tratándose de lo meramente administrativo; pero me parece que no debe existir tratándose de lo legal ó constitucional federal.

«En los Estados Unidos se entiende de otra manera, si no me equivoco, el vínculo federal que une los Estados en una nación.

«La ley y su aplicación no reconocen autonomía, dentro del límite constitucional; y no veo que el Congreso argentino se haya formado una idea exacta en la manera práctica con que los Estados Unidos ejercen el derecho coercitivo federal en los Estados. Ejercido por el Ejecutivo nacional va á caer necesariamente en la tiranía; ejercido por el Congreso, que es la opinión de Vd., <sup>(1)</sup> les dá á las mayorías el terrible poder de anular la Constitución á impulso de las pasiones ó intereses de esas mayorías, mal formadas entre nosotros generalmente; y esto vendría á sancionar el poder eventual *de esas leyes de circunstancias*, sobre el poder permanente de la ley constitucional, que es invariable y que debe excluir toda otra ley coexistente.

«En una palabra, me parece *que hacer ley para cada caso ocuriente*, es contra los principios de toda constitución liberal, y sobre todo federativa. Así pues, yo creo que ese poder de intervenir no debe ser provocado y ejercido por *decreto ni por ley*, sino por *sentencia*, que es cosa diversi-

---

(1) Es el Congreso el que debe acordar ó nó la intervención y el Poder Ejecutivo ejercerla. Así lo dispone la Constitución.

simas. La sentencia aplica la ley preexistente: aplica la ley constitucional: no hace ley para el caso, que es una arbitrariedad, sino que el caso cae bajo el imperio de la ley dada, y por consiguiente impersonal.

«De ahí la inmensa importancia que el poder judicial federal goza en la constitución norteamericana».

En efecto, el poder judicial federal en Estados Unidos ha gozado siempre de gran preponderancia, ha justificado con su proceder la opinión de Washington que le llamaba la *bóveda maestra* del edificio; pero en ningún caso ha tenido la facultad de decidir sobre las intervenciones, ni la Constitución en ninguna de sus disposiciones le confiere ese poder.

Convenimos, sin embargo, con el autor de las opiniones transcriptas, en que es preferible que la intervención del Gobierno federal en las provincias se ejercite aplicando las disposiciones de una ley preexistente, y no haciendo declaraciones como la que hizo el Senado Argentino en el gobierno del doctor Avellaneda, apartándose de todas las reglas de buena legislación y divorciándose hasta con el buen sentido.

Si esa declaración inspirada por el señor Sarmiento, reputado uno de los primeros constitucionalistas, hubiera prevalecido, si nó hubiese sido rechazada por inconstitucional y atentatoria á los derechos de los pueblos, en vez de dos casos de intervención tendríamos cuatro.—La intervención según los artículos 5º y 6º de la Constitución, y

las intervenciones que el Poder Ejecutivo ha ejercido en virtud del artículo 23 y la que se quería hacer prevalecer arrancándola del 22.

El proceder en este último caso, tenía siquiera el *mérito de la sencillez*, pues la intervención podría desempeñarse por el Senado bajo la forma *sumaria de los interdictos judiciales*, y la fuerza pública ó el ejército, habría servido como el oficial de justicia en los pleitos civiles, para hacer ejecutar lo resuelto por el Senado.

Pero, dejando á un lado estos recuerdos históricos sobre errores que han consumido la fortuna de la Nación y la sangre de sus hijos, volvemos á insistir en la necesidad de dar una ley reglamentando la intervención, colocándonos en el verdadero camino de la libertad y de los progresos que el país tiene derecho á esperar.

## VII

Señalar el límite que separa el poder nacional del provincial, ha sido por mucho tiempo un problema entre nosotros.

El principio unitario y el principio federal dividen aún las opiniones de los hombres de estado.

El primero, herencia de nuestros padres, echó raíces tan profundas, que la escuela moderna de descentralización no ha conseguido estirparlas.

El segundo, planta exótica en nuestra tierra

*española*, vive merced á los paliativos que de cuando en cuando se le aplican.

Nuestras instituciones, esencialmente federales están en pugna con nuestras costumbres y con nuestros hábitos; por esto, cada vez que se presenta un conflicto entre el poder nacional y el poder provincial, vuelven á la arena de la discusión los partidarios del sistema unitario, no obstante la claridad de los preceptos constitucionales que señalan la esfera de acción á cada poder.

Para resolver todo conflicto que se presente, basta saber lo que son las provincias con relación á la nación.

Las provincias son verdaderos organismos políticos, creados por el pueblo de la república para cumplir los fines de la existencia social.

Estos organismos gozan de vida propia; son relativamente soberanos, es decir, aptos para formar el gran concierto nacional.

Pero relativamente soberanos, no significa sujeción, dependencia del poder nacional; y así, cualquier intervención de este poder en las atribuciones comprendidas en la esfera provincial, es una usurpación condenada por la ley fundamental.

Las provincias, en virtud de su soberanía, tienen sus propias instituciones; se gobiernan por mandatarios elegidos por ellas, examinan y corrijen los actos de esos mandatarios con entera independencia del Gobierno nacional.

La concurrencia de esos organismos soberanos al todo nacional es lo que se llama sistema fede-

ral, que no es un pacto, un convenio entre partes, sinó un sistema, un modo adoptado por el pueblo para su gobierno.

Es la ley quien ha creado los Estados; es la ley que los ha dotado de vida propia; es la ley la que señala el límite de cada poder.

Comprender, interpretar de otra manera la Constitución, es alterar su espíritu y su letra, es invertir el sistema federal de gobierno.

Ahora bien: si las provincias son soberanas, si elijen sus mandatarios, si se dan sus propias leyes, no es posible admitir el tutelaje del Gobierno nacional en los asuntos provinciales, sin destruir el sistema adoptado.

El poder nacional nada tiene que ver en las provincias; su esfera de acción está también demarcada por la ley; no puede intervenir *motu proprio* en las cuestiones provinciales, así como el poder provincial no puede intervenir en las cuestiones nacionales.

Si se argumenta con el ejemplo de los Estados Unidos durante la guerra civil, diremos que los casos son completamente distintos.

Allí había hasta cierto punto dos potencias beligerantes, reconocidas por las naciones extranjeras en tal carácter, y el Gobierno de la Nación, una vez vencidos los Estados del Sud, les trató como á pueblos conquistados, reformando sus instituciones con arreglo al sistema federal.

Nosotros, que jamás hemos presenciado sucesos semejantes, no podemos servirnos de ese

antecedente para resolver nuestros conflictos, ni para autorizar las intervenciones del poder nacional en los Estados. ¿Qué guerra de ese género hemos tenido?

Deducir de ese ejemplo principios en favor de las intervenciones de nuestros gobiernos, es tergiversar los hechos, y darles un significado de que carecen.

El Gobierno nacional no puede examinar ni resolver cuestiones provinciales sin ultrapasar sus facultades, sin convertirse en gobierno centralista y unitario.

El Gobierno nacional no puede decir: este gobernador está mal elegido—porque las Provincias son soberanas, y porque tienen autoridades propias, que resuelven sus propias cuestiones.

## VIII

El Gobierno nacional no puede decretar elecciones en un Estado; el Gobierno nacional no puede poner el ejército á disposición de un partido local, para que realice sus ambiciones, porque nuestras instituciones se oponen á ello.

Las provincias pueden, sí, pedir el amparo de la fuerza nacional por medio de sus representantes legítimos, para reponerlos, cuando hubiesen sido derrocados.

Pero esto es facultad de las provincias, cuyo

ejercicio corresponde única y exclusivamente al poder provincial.

Un gobernador derrocado, una legislatura desconocida, pueden pedir la intervención del poder nacional á los fines constitucionales, pero este poder no puede intervenir sin aquella requisición bajo ningún pretexto, ni para ningún objeto.

El poder nacional no puede intervenir para juzgar la validez de una elección provincial, sino para reponer autoridades derrocadas, á requisición de éstas.

Esto manda la Constitución; esto mandan los principios federales adoptados por el pueblo argentino.

## IX

Después de estos antecedentes, la cuestión queda despejada, y la luz aclara todas las dificultades que se han promovido en los casos de intervención.

El Gobierno interviene solo á requisición de una autoridad, pero nó para examinar, después de la intervención la validez de tal ó cual elección. Sin embargo, los Presidentes anteriores, ultrapassando sus facultades y haciéndose eco de los círculos, fueron hasta resolver cuestiones del resorte local, cuando el poder general no ha sido llamado para eso, cuando la Constitución prohíbe semejantes actos.

¿Cómo se puede sostener sin violación de los principios federales, que el poder nacional tiene facultades para inmiscuirse en asuntos locales?

Señálese la disposición de la Constitución que autorice semejante proceder.

La elección de un gobernador solo puede decretarse por autoridad provincial; la validez de esa elección solo puede ser juzgada por autoridad provincial.

Las declaraciones del Presidente, la intervención solicitada con el objeto de proceder á nueva elección, como sucedió en Mendoza, en Santiago, en Corrientes y se intentó en Santa Fé, son actos completamente inconstitucionales y violatorios del sistema federal.

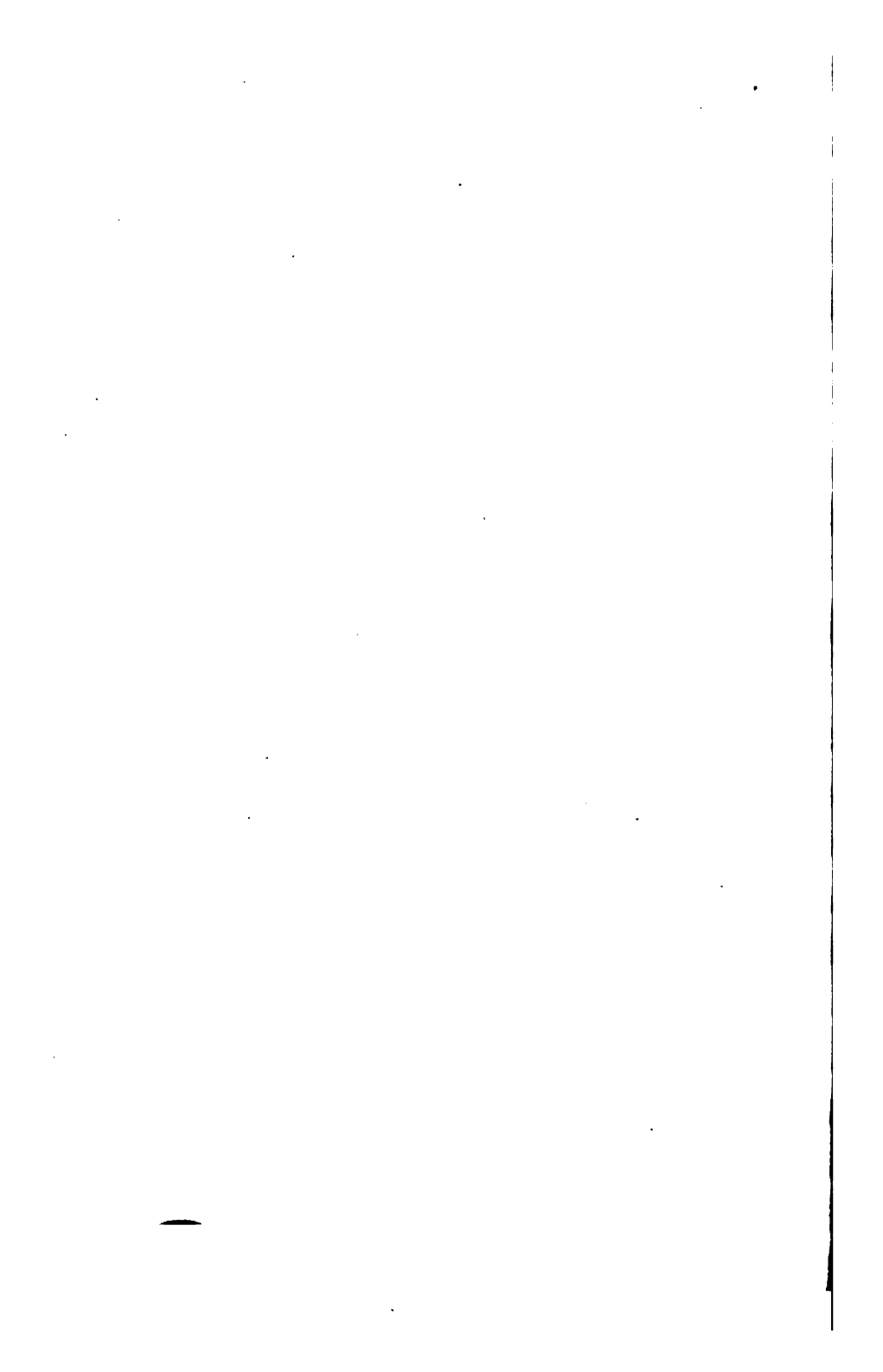
El Congreso está llamado á resolver esta cuestión fundamental del Gobierno,—y para ello debe inspirarse en el más alto patriotismo y en los verdaderos principios, so pena de sentar un precedente funestísimo y destructor de nuestro sistema de gobierno, desentendiéndose de los grandes deberes que le impone su misión y creando además un tutor para cada Estado ó Provincia, cuya influencia será siempre temida.

Una ley de intervención de caracter permanente, sellará para siempre la paz interior de la República.

*N. Oroño.*

---







# Intervención Nacional

---

## ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA

“El Gobierno Federal interviene en el territorio de las Provincias, para garantir la forma republicana de gobierno ó repeler invasiones exteriores; y á requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas ó restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por invasión de otra Provincia.”

---

La general aceptación que han merecido los discursos de nuestro inteligente amigo el doctor D. Manuel Quintana, pronunciados en la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de ley de intervención; y la enseñanza que contienen sobre la pura doctrina constitucional que rige la garantía acordada á los Estados por nuestra ley fundamental, nos han movido á hacer de ellos un folleto que permita difundir su conocimiento y ponerlo más fácilmente al alcance de los encargados de resolver esta cuestión en el Congreso, y de los que se dedican á los estudios políticos.

Una recopilación de producciones de este género y en la forma que le damos, llenará mucho mejor el objeto que ordinariamente no alcanzan los esfuerzos aislados de los periódicos.

En estos discursos el doctor Quintana, á la par que trata la materia con inteligencia y altura, y con una competencia incuestionable por el estudio especial que de ella ha hecho, se encuentra claramente diseñado el giro que ha ido tomando la discusión parlamentaria, y que el orador ha perseguido tenazmente hasta ver triunfantes sus opiniones por el asentimiento uniforme de la Cámara de Diputados.

La cuestión intervención está, sin embargo, lejos de encontrarse resuelta. La Cámara no ha hecho más que establecer los principios por medio de su distinguido orador, evidenciando la buena voluntad y sana intención de que se siente animada, mientras que con más desahogo y mejores elementos pueda acometerla de nuevo en las próximas sesiones legislativas.

En ella está interesado todo el país, y especialmente los derechos de los Estados federales.—Los pueblos esperan de esa solución su restablecimiento ó su ruina definitiva. Quizá no aventuráramos la verdad en sentar—que así como en este punto estriban la prosperidad futura ó la continuación de la decadencia actual del país, esa es la palabra que va á decidir igualmente de la consolidación de la paz ó de la reaparición de la anarquía.

No hay orden posible, no hay paz donde falta la libertad en todas ó en algunas de las Provincias en aquellas manifestaciones de la opinión que estén en armonía con los preceptos de la ley fundamental.

No hay paz ni orden posible, donde falta en los gobiernos la lealtad á los compromisos contraídos, y ese respeto al pacto social en que reposan los derechos de los particulares y la garantía de los Estados.

El desconocimiento de una obligación contraída según la ley orgánica, supone necesariamente la disolución de los vínculos que unen á las partes contratantes.

En este asunto, en la manera de entender y ejercer la facultad constitucional de intervenir para garantizar el orden interno y la estabilidad de las instituciones de los Estados, se juega nada menos que el pacto social.

Considerada la cuestión de intervención bajo este punto de vista, como la considera todo el país, dejamos suficientemente explicado el interés que nos induce á dar á luz este folleto, conteniendo los notables discursos de nuestro amigo el doctor Quintana.

Es un poderoso contingente que llevamos al edificio de la moral, de la libertad, de la paz y de la prosperidad futura de nuestro país, siendo la satisfacción que por ello experimentamos, la única recompensa á que aspiramos.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1869.

N. OROÑO.

---





# DISCURSOS

PRONUNCIADOS POR EL DIPUTADO

DOCTOR MANUEL QUINTANA

EN EL CONGRESO ARGENTINO

EN LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INTERVENCIÓN

Sesión del 9 de Agosto de 1869

*Señor Quintana*—Señor Presidente: cuando el periódico, que sistemáticamente defiende hasta los errores gubernativos, amenazaba de muerte el proyecto que se discute; cuando un funcionario de la más alta posición nacional se creía en el caso de bajar á la prensa para desacreditarlo por todos medios ante la opinión; cuando el P. E. se hacía la violencia de enviar otro proyecto con un extenso mensaje para contrarestarlo ante el Congreso; cuando, en fin, el Ministerio, por primera y única vez durante la actual administración, acudía en masa á las conferencias de la comisión para combatirlo en su seno, entonces no podía ménos de traer á mi memoria los recuerdos de aquellos grandes debates que forman época en los anales de nuestra vida parlamentaria y me decidí á agotar mis fuerzas intelectuales para sostener dignamente el combate, haciendo fuego con una ba-

tería de libros que tengo preparada á todo evento. (Aplausos).

Pero, cuando ese periódico, después de injuriar audazmente á los representantes del pueblo, se limitaba hasta ahora poco á anunciar que el proyecto del Gobierno había caído como una bomba el día mismo en que la Comisión lo rechazaba unánimemente por la forma ó por el fondo; cuando ese funcionario se retiraba de la prensa corrido por sus propias herejías constitucionales (bravo); cuando el P. E. entregaba su proyecto á la caridad de algún Diputado benévolo; cuando el Ministro abandona su puesto en el momento crítico de la lucha y, sobre todo, cuando está en la conciencia pública que este proyecto ha de pasar casi á unanimidad de votos, parece que prolongar la discusión solo servirá para fatigar la atención de la Cámara y que ni siquiera reportará á los autores del proyecto la satisfacción de obtener la victoria por medio de titánicos esfuerzos.

En presencia de estos hechos tan singulares, nosotros no faltaríamos á ningún deber contentándonos con el decisivo discurso del miembro informante de la mayoría de la C. de N. C. y confiando nuestro proyecto á la fuerza invencible de la opinión que lo sostiene dentro y fuera del Congreso (aplausos); más, conociendo la táctica de todos los vencidos y no queriendo dejarles ni la triste satisfacción de decir que los hemos derrotado con el número y no con la razón, nos hemos decidido á sostenerlo á todo trance y yo voy á romper el fuego, contestando al señor Diputado, miembro disidente de la C. de N. C., en una réplica cuya extensión no puedo medir, pero que será suficiente para dejar evidenciada la oportunidad del proyecto, su perfecta constitucionalidad y muy especialmente su indisputable superioridad sobre el enviado por el P. E. (bravos).

Señor: la elección, á que el señor Diputado y yo debemos el honor de estar sentados en esta Cámara, tenía por bandera la conservación de la Constitución Nacional y la sanción de todas las leyes orgánicas que debían complementarla. La idea de ese programa fué mía

y su redacción del actual Ministro de R. E. Fondo y forma fueron aceptados por el señor Diputado, por otro más con quien también tengo el honor de acompañarme en este momento y por el actual Vice-Presidente de la República.

Además, cuando el P. E. era interpelado en la Cámara de Senadores acerca del fusilamiento de Segura, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, después de dar todas las explicaciones que creyó conducentes para salvar la responsabilidad del Gobierno, concluía pidiendo á Senadores y Diputados que apartaran sus ojos de los hechos pasados para fijarlos en el porvenir, presentando y sancionando proyectos de ley que salvaran todas las dificultades y abrieran en adelante un camino fácil para la marcha de todos los poderes públicos. Este pedido del señor Ministro de Relaciones Exteriores era calurosamente apoyado por todos los partidarios de la actual administración y por todos los amigos de la tranquilidad general.

Finalmente, de los números uno y dos del Redactor de la Comisión de la Convención Provincial de Buenos Aires que examinó la Constitución de 1853, resulta que los miembros de esa Comisión, entre los cuales se hallaba el Presidente de la Nación, reconocían que las reformas introducidas en la materia de intervenciones, que nos ocupa, no bastaban para evitar todos los abusos que pudieran cometerse y que era necesario buscar la plenitud de la garantía en las leyes orgánicas que debían complementar el artículo 6 de la Constitución vigente. Sin embargo, y á pesar de que después de la reforma se han operado muchas intervenciones, nadie ha llenado todavía la legítima aspiración de la Comisión indicada.

No es mi ánimo hacer con estos recuerdos el proceso de la conducta oficial del señor Diputado, porque no es esta la oportunidad de hacerlo ni yo tendría al efecto bastante imparcialidad, combatido por dos fuerzas contrarias, nuestras disidencias políticas y nuestras afecciones personales. Los he traído simplemente para mos-



trar que si el señor Diputado ha sido consecuente con sus opiniones del año pasado, yo no lo soy menos con el voto de mis electores, con los deseos del P. E. y con las aspiraciones de la Convención reformadora.

Durante los tres años que llevo en esta Cámara, he respondido al voto de mis electores, presentando diversos proyectos de ley sobre Capital de la República, sobre acefalía del P. E. y sobre elección del Presidente y Vice-Presidente. y he cooperado, además, á que la Cámara se ocupara á la brevedad posible, de otros proyectos análogos, por ejemplo, el relativo á la contabilidad nacional, tan reclamado para la regularidad de la Administración y la vigilancia que el Congreso debe ejercer sobre ella.

He de satisfacer los deseos del Gobierno sobre la cuestión relativa á los tribunales militares, presentando, así que pase esta cuestión, otro proyecto de ley que determine con precisión y claridad la jurisdicción de esos tribunales, para que en adelante los ciudadanos no se vean expuestos á caer bajo la cuchilla de los consejos de guerra. (Aplausos).

He creído llenar en parte las aspiraciones de la Convención examinadora con el proyecto de ley que actualmente se discute, dándole preferencia sobre todos los otros, porque en realidad merece la prioridad por razón del tiempo en que han ocurrido los sucesos y por razón de la importancia de la materia sobre que versa.

La cuestión de San Juan acaba en efecto de conmover hondamente la República entera, y la ansiedad pública ha llegado á su colmo por la incertidumbre en que la resolución del Senado ha dejado varios de los grandes principios comprometidos en aquel solemne debate acerca de las prerogativas del Congreso y la misión del P. E. en materia de intervenciones. El tono de los periódicos ministeriales y los anuncios que se hacen relativamente al envío de fuerzas al interior de la República para formar grandes ejércitos, han hecho acrecer, si es posible, la viva y justa ansiedad de algunos pueblos y

gobiernos; pues se lleva la insensatez hasta el extremo de amenazar al Congreso con los Tribunales de Justicia, y la fuerza pública empieza á ser acuartelada en las capitales de las Provincias, desatendiendo la frontera y conmoviendo la paz interna de la Nación. (Aplausos). Y como si esto no fuera todavía bastante, esos mismos periódicos anuncian todos los días, sin que nadie los desmienta, que baterías de cañones rayados marchan al interior de la República para situarse en una de sus más grandes ciudades donde debe formarse el cuartel general del proyectado ejército.

¿Cuál era la misión del Congreso en presencia de hechos tan graves y de circunstancias tan críticas? La misión del Congreso era ponerse á la altura de las necesidades públicas y hacer oír su voz sobre esta importante cuestión para tranquilizar al país, salvando los principios comprometidos en anteriores debates.

Esto no es renovar la cuestión de San Juan. Nosotros no hemos venido á recoger del polvo de la derrota las armas de los vencidos. Simplemente queremos salvar los principios incidentalmente comprometidos en el debate, principios que tal vez no han sido envueltos por la resolución del Senado. Pero, como de la semejanza de este proyecto con la cuestión San Juan, se ha querido forjar un argumento para aterrar al Senado con el fantasma de la contradicción, séame permitido contestar, aunque de paso, que este asunto no puede ser equiparado con la cuestión de San Juan, por la sencilla y concluyente razón de que cualquiera que sea el éxito de este proyecto, aunque él merezca la sanción de las dos Cámaras, aunque él triunfe del veto anunciado del P. E., las cosas de San Juan seguirán, por desgracia, como ahora, es decir, que el gobernador Zavalla quedará sin ser repuesto y la revolución legislativa continuará triunfante.

Esta simple observación basta efectivamente para revelar, pero revelar á la evidencia, que el proyecto de intervención es distinto de la cuestión San Juan, por más que con ella tenga sus puntos de contacto. Si algo

fuese necesario agregar, diría que la cuestión San Juan, se ocupaba del pasado, mientras que nosotros apartamos con dolor los ojos de ese pasado, para ponerlos con fé en el porvenir. (Aplausos).

Más decía, que este proyecto solo importaba volver por los principios comprometidos en el debate de la cuestión San Juan; porque si hay una verdad, conocida por todos los que se ocupan de la cosa pública, es que las intervenciones siempre han sido discutidas con los hechos por delante y por consiguiente bajo la influencia decisiva de las pasiones y de los intereses más ó menos legítimos que tales hechos despertaban.

Comprendo perfectamente que muchos espíritus se detuviera ante la reposición del gobernador Zavalla, acusado de haber atentado contra la inviolabilidad de los representantes del pueblo, aunque no justifico que el temor del escándalo de una reposición semejante autorizara para retroceder ante la lógica inflexible de los principios; pero sostengo que es necesario que la resolución que condenó al gobernador Zavalla, no envuelva también la condenación de las prerogativas del Congreso desconocidas oficialmente en aquella ocasión.

No tratamos, repito, de salvar al gobernador Zavalla ni á gobernador alguno de la República: tratamos únicamente de salvar las facultades constitucionales del Congreso devolviendo á todos la tranquilidad perdida por medio de leyes dictadas en interés de pueblos y gobiernos.

Esto no es usurpar las facultades del P. E.: es dar á cada poder la parte que constitucionalmente le corresponde en materia de intervenciones. No es atar los brazos del Presidente de la República: es impedirle que rompa sus ligaduras constitucionales (¡muy bien!) No es subordinarlo indebidamente al Poder Legislativo: es evitar que se sobreponga al Congreso. No es, en fin, convertirlo en criado nuestro: es privar que se convierta en mandón del pueblo. (Aplausos).

Queremos esto con la voluntad, sin la voluntad y aún contra la voluntad del Presidente, porque arriba de esa

voluntad está la Constitución Nacional y la decisión que tenemos de hacerla respetar por gobernantes y gobernados. (Aplausos).

Tal es, el verdadero espíritu y el justo alcance del proyecto que discutimos.

¿A qué se esperaría para dictar la ley de intervenciones? Si la paz está segura con esa ley, la conservaremos. Si por el contrario, la paz está amenazada con esa ley, la salvaremos. De todos modos esa ley, sin perjuicio de los poderes públicos, ha de ser una poderosa palanca en pró del orden constitucional del país.

A pesar de esto, las furias oficiales y oficiosas se han desatado contra ese proyecto; á pesar de esto, la prensa ministerial ha agotado los dicterios de la lengua contra todas sus disposiciones; á pesar de ésto, sus autores han sido torpemente ultrajados en la sinceridad de sus móviles, en la rectitud de sus propósitos y en la independencia de su carácter.

Yo podría, á mi turno, contestar estos excesos, fulminando rayos, no de elocuencia, pero sí de indignación, contra esa política personal, intolerante y avasalladora, que, por desgracia, se está desplegando de algún tiempo á esta parte.

Yo podría sostener con la historia de todos los tiempos en la mano, que semejantes abusos son agenos de gobiernos que aspiran al título de liberales.

Yo podría asegurar que nunca llegó á tanto ni el mismo Jackson, llamado el león de los Presidentes de la Unión y el único hombre que en aquel país ha tenido la audacia necesaria para atropellar la patriótica tradición de Washington, presentando por tercera vez su candidatura á la Presidencia de la República.

Podría, en fin, decir... pero no quiero internarme en el extraviado camino de las recriminaciones y prefiero ser tolerante una vez más. Quiero dar así una prueba elocuente de respeto á las opiniones ajenas, para que otros más elevados aprendan á respetar las que no les pertenecen. No quiero arrojar más combustible á la hoguera de las pasiones agitadas que actualmente

nos rodean. Haré este sacrificio en aras de la patria, cuya imagen siempre querida, ha sido evocada para que no descendiera al fango de las discusiones personales que tan insensatamente se provocaban al mismo tiempo.

Pero que estas indicaciones sirvan siquiera de justo desagravio para los Diputados á los cuales he tenido el honor de acompañar y por los cuales he tenido el honor de ser acompañado en este asunto, y que sirvan sobre todo de saludable advertencia para aquellos que, á pesar de su edad, de su experiencia y de su posición, no saben todavía contenerse y no trepidan en desbordarse ante simples disidencias de principios por más legítimas y fundadas que sean.

En cambio, ya que hasta los deberes del elector y los compromisos del partidario han sido también invocados en este asunto, permítame la Cámara una ligera digresión para emitir una vez por todas, mis ideas sobre este punto con la franqueza que caracteriza todos mis actos públicos y privados.

Jamás me he encontrado afiliado en ningún partido personal. Nunca he tenido más que un programa y ese programa ha sido la felicidad de la patria por la práctica sincera de la constitución. Así, cuando he sido elegido, nunca he sentido el placer de una ambición personal satisfecha. Cuando he sido elector, jamás he sido impulsado por mezquinos intereses de círculo.

Yo estaba, pues, decididamente resuelto á apoyar la administración actual, á cuya elevación había contribuido y de la que he recibido las más inmerecidas pruebas de distinción; pero á lo que jamás estuve dispuesto es á abdicar mis opiniones y principios en obsequio de nadie ni por nada. Todavía estoy firmemente decidido á sostener la administración siempre que sus actos giren dentro de la órbita constitucional y siempre que sus medidas tiendan á promover el bien del país. Más si desgraciadamente sus hechos fueran contrarios á tan sagrado objeto ó, en vez de marchar por el recto camino de la Constitución, se empeñara en la tortuosa senda

de la arbitrariedad, entonces, con intenso dolor, pero con inquebrantable energía, si no soy el primero, no seré tampoco el último que me interponga para detenerle en su extraviada marcha.

Sé perfectamente que este no es el camino que conduce á los altos puestos de la administración. No importa. Jamás he sacrificado el interés del pueblo á mis conveniencias particulares. Nunca he aspirado á gobernar á mis conciudadanos y siempre me he encontrado satisfecho de militar en sus filas. Si todavía se me enrostrase mi inmovilidad política, contestaría que prefiero sumergirme en el fondo con mis ideas á trepar á la superficie con las ajenas.

También sé que esta conducta á pocos satisface, que los partidos políticos son siempre exigentes y que solo se contentan con una servil adhesión.—Tampoco importa.—Siempre conservaré la franqueza de mis opiniones por más que mis correligionarios se crean autorizados á condenarme por una simple disidencia de principios y por más que en su loco desvarío se atrevan á estampar la mancha del traidor sobre la frente siempre erguida del hombre independiente. — Y si porque no me presto á seguir ciegamente las inspiraciones de los correligionarios ó á secundar sumisamente los deseos del poder se pretendiera estigmatizarme, llamándome apóstata de los partidos y enemigo de los gobiernos, yo apelaría entonces á mi conciencia ante la cual sería el guardián de la Constitución y el amigo de los pueblos. (Aplausos).

Pero, basta de digresiones, para concluir esta parte de mi discurso estableciendo que el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión de N. C. ha tenido plena razón para sostener la oportunidad de este proyecto de ley, y que todas las objeciones en contrario se han de estrellar impotentes ante las consideraciones emitidas. Si algo faltase me permitiría invocar el ejemplo mismo de los Estados Unidos, que todos los días se presenta ante nuestros ojos. Entonces diría que así como los disturbios de Massachusset fueron la causa

que decidió á la Convención constituyente para acordar á los Estados la garantía de la forma republicana y de un orden interno, y que así como la rebelión de los condados occidentales de Pensilvania fué la que dió lugar á la sanción de la ley de 1795, cuya imitación servil se nos propone, así también la situación actual del país y la necesidad de salvar la paz pública son las razones que deben impulsarnos á dictar la ley aconsejada en materia de intervenciones.

Señor: Sintiéndome en extremo fatigado por la agitación que se apodera de mi ánimo siempre que me ocupo de estos asuntos, pido á la Cámara tenga la deferencia de pasar á cuarto intermedio ó levantar la sesión.

*El Señor Presidente*—Creo que sería más conveniente levantar la sesión.

La Cámara de Senadores ha cedido el local para que la de Diputados pueda reunirse mañana; de consiguiente, la sesión tendrá lugar mañana á la hora de costumbre. (Prolongados bravos y aplausos).

*(Se levantó la sesión.)*

---

## Sesión del 10 de Agosto de 1869

Señor Presidente:

No estoy aún plenamente repuesto de la fatiga del día anterior; pero, felizmente estoy ya sereno de espíritu, y por consiguiente voy á continuar la tarea que entonces me impuse.

Creo que en la sesión precedente he dejado evidenciada la oportunidad de la sanción del proyecto aconsejado por la C. de N. C. Paso ahora á demostrar su perfecta constitucionalidad. La Cámara sabe que no

acostumbro molestarla con citas ni lecturas; más espero que me acordará su indulgencia si esta vez me aparto de mis hábitos en presencia del pedido que se me ha hecho para que apoye mis palabras en autoridades reconocidas y en presencia, sobre todo, de aquella osada aserción de que basta que un Diputado ó Senador argentino asegure una cosa, para que sea puesta en duda; pero, que basta que cualquier librejo Norte Americano la afirme, para que sea creída con toda fé. Pido, pues, de nuevo á la Cámara me disculpe si por esta vez abandono mi propósito y entro de lleno en materia.

Según el artículo 108 de la Constitución que nos rige, las Provincias no pueden tener ejército, ni celebrar tratados políticos, ni contraer alianzas; no pueden, en suma, ejercer ninguno de los poderes delegados en los tres departamentos que componen el Gobierno de la Nación. Pero la anarquía podía asomar su cabeza en el territorio de las provincias; el despotismo podía atropellar la forma republicana de Gobierno, y entonces estaba en el interés de las provincias como en la lealtad de la unión, proteger á los Estados contra toda insurrección interior y garantizarles una forma republicana de Gobierno. De aquí la necesidad de la garantía consagrada en las constituciones de todos los pueblos que han adoptado el sistema federal de Gobierno, desde los Estados Unidos de América, hasta la Confederación Suiza y la República Argentina.

Para llenar esta necesidad y este deber, la Constitución de 1853 había establecido la obligación de la garantía en términos bien explícitos; pero la reforma de 1860, encontrando en las palabras del artículo de su referencia una extensión que había servido de pretexto al Gobierno General para inmiscuirse en el orden interno de las Provincias, se ocupó de reformarla en esta parte, consignándola en los términos en que están hoy redactados los artículos 5º y 6º de la Constitución vigente.

Antes de ahora, y sobre todo, después del recuerdo que el señor Diputado Montes de Oca ha hecho del Dia-



rio de Sesiones de la Convención, he recorrido con ansiedad sus páginas para ver si se había suscitado alguna vez la cuestión que hoy se agita en esta Cámara y que divide á sus miembros. Con toda la sinceridad de que soy capaz, y en presencia del mismo señor Diputado, que felizmente acaba de entrar, declaro á la faz de la Cámara, que semejante cuestión no ha sido ni incidentalmente tocada en los debates de la Comisión examinadora, ni en los de las convenciones reformadoras de la antigua Constitución. Si mi palabra es desautorizada, á pesar de la ingenuidad que siempre la caracteriza, apelo al Diario de Sesiones que en este momento tengo delante de mí y lo pongo á la disposición del señor Diputado para que se sirva mostrar la página donde tal cuestión haya sido ventilada.

Hagamos, pues, á un lado el citado Diario de Sesiones y apartémonos de los debates de la convención reformadora para atenernos á las disposiciones expresas de nuestra Constitución y las de las naciones extranjeras que han adoptado la misma forma de Gobierno que nos rige, á las sentencias de los tribunales propios y extraños, á los debates de los Congresos Americano y Argentino y á las doctrinas de los autores de ambas naciones para, á presencia de autoridades tan irrecusables, decidir á quiénes corresponde hacer efectiva la intervención de la Nación en favor de las Provincias.

Por mi parte, no trepido en afirmar, y aquí tengo una ligera disidencia con el miembro informante de la Comisión de N. C., que la intervención no es un derecho del P. E. ni tampoco del Congreso, ni del P. J. exclusivamente, sinó que es una obligación de la Nación y como tal, confiada á los tres Departamentos que componen su gobierno.

Toda la cuestión está en decidir cual es el rol que á cada uno incumbe en la materia, y tampoco trepido en afirmar que al Congreso compete declarar el caso de la Intervención y proveer al P. E. de los medios indispensables para ejecutarla; que al P. E. solo corresponde ha-

cer uso de la autorización del Congreso para ejecutar la intervención y que al P. J. toca juzgar del caso particular creado por situación tan anormal. Estos son los diversos roles de los tres Departamentos Nacionales y esta es la única combinación con la cual se satisface la letra expresa y el espíritu claro de nuestras prescripciones constitucionales.

Principiemos por la Constitución.

Tantas veces se han citado las categóricas palabras de las Constituciones Argentina y Americana, que me encuentro excusado de repetirlas una vez más. Me basta dejar consignado, como punto de partida sobre esta parte de mi argumentación, que la Constitución Argentina establece la intervención como un deber y un derecho del Gobierno Federal y que la Constitución Norte-Americana la reconoce como un deber y un derecho de los Estados Unidos.

La palabra *Gobierno Federal*, en el sentido lato de la expresión, comprende incuestionablemente los tres Departamentos que componen el Gobierno de la Nación. Si alguna duda surgiera sobre el particular, el artículo correlativo de la Constitución Norte-Americana, poniendo la intervención á cargo de los Estados Unidos, como acabo de indicarlo, debiera bastar para disiparla. No conozco Presidente alguno de la Unión que se haya atrevido á parodiar el despótico dicho de Luis XIV «El Estado soy yo» diciendo á su turno «Yo soy los Estados Unidos de Norte-América».

¿Se quiere algo más explícito todavía? Pues ahí está la Constitución Suiza, sancionada en 1848, que se encuentra en la página 84 de la colección de Laferriere, y que no ha sido aún traída al debate. En su artículo 5 dice: «La Constitución garante á los cantones su territorio, su soberanía en sus límites fijados por el artículo 3, sus constituciones, la libertad y los derechos; los derechos constitucionales de los ciudadanos así como los derechos y las atribuciones que el pueblo ha conferido á las autoridades».—En el artículo 6 agrega: «á este efecto los cantones están obligados á pedir á

« la Confederación la garantía de sus constituciones.  
« Esta garantía es acordada siempre: —a— Que estas  
« constituciones nada contengan contrario á las disposiciones de la Constitución Federal: —b— Que ellas  
« aseguren el ejercicio de los derechos políticos, según  
« formas republicanas, representativas ó democráticas:  
« —c— Que ellas hayan sido aceptadas por el pueblo y  
« que puedan ser revisadas cuando la mayoría absoluta  
« de los ciudadanos lo exija».

No puede exigirse una analogía más completa entre los artículos 5 y 6 de la Constitución Suiza y los artículos 5 y 6 de nuestra Constitución; pero la cuestión está más explícitamente resuelta por otro artículo de la misma Constitución Suiza.

Ese artículo es el 74, cuyos incisos 7º y 8º, tratando de las atribuciones de la Asamblea Federal, compuesta, según el artículo 61, de un Consejo Nacional elegido por el pueblo de acuerdo con el artículo 61 y de un Consejo de los Estados elegido por los Cantones de conformidad al artículo 69, como si dijéramos de una Cámara de Diputados elegida por el pueblo de la República y de una Cámara de Senadores elegida por las legislaturas de provincia, que es como se divide y se elije el Congreso Nacional por los artículos 36, 37 y 46 de nuestra Constitución; colocan entre ellas la garantía de las instituciones provinciales y todas las medidas necesarias al efecto.—

« La garantía, dice el primero, de la Constitución y del  
« territorio de los Cantones; la intervención como consecuencia de esta garantía, las medidas para la seguridad interior de la Suiza, para el mantenimiento de la  
« tranquilidad y del orden; la amnistía y el ejercicio del  
« derecho de gracia. Las medidas, dice el segundo,  
« para hacer respetar la Constitución Federal, y asegurar las garantías de las constituciones de los Cantones,  
« como las que tienen por fin obtener el cumplimiento  
« de los deberes federales ó mantener los derechos garantidos por la Confederación».

No crea la Cámara que redacta las disposiciones de la Constitución Suiza para acomodar sus palabras á mis

argumentos, cuando no hago más que repetir sus términos mismos, puesto que parece que tales prescripciones hubieran sido solícitamente redactadas en previsión del debate que sostenemos; pero como ellas se ocupan de las intervenciones indispensables durante el período de las sesiones de la Asamblea Federal y como á la previsión de los autores de la Constitución Suiza no podía escapar la necesidad de hacer efectiva la garantía de las instituciones cantonales durante el receso de aquella Asamblea, me parece oportuno invocar por último el artículo 90 de la Constitución Suiza en la parte relativa á las atribuciones y obligaciones del Consejo Federal en materia de intervenciones. Según los artículos 83, 84 y 86, dicho Consejo ejerce la autoridad ejecutiva de la Confederación, se compone de siete miembros, es nombrado indirectamente por el pueblo Suizo, es presidido por el Presidente de la Confederación y tiene además su Vice-Presidente elegido de su propio seno, de suerte que en el mecanismo de la Constitución Suiza ocupa el lugar que tiene entre nosotros el P. E. Nacional. Ahora bien, aún cuando entre sus atribuciones entra « velar por las garantías de las constituciones cantonales » y « por la seguridad interior de la Confederación », como dicen los incisos 3º y 10, solo en caso de urgencia y cuando la Asamblea Federal no está reunida, el Consejo general está autorizado á levantar las tropas necesarias y á disponer de ellas bajo reserva de convocar inmediatamente los Consejos si el número de tropas levantadas pasa de dos mil hombres ó si permanecen reunidas más de tres semanas », según las palabras textuales del inciso 11 del citado artículo 90.

De la precedente exposición resulta, pues, que la Constitución Suiza decide categóricamente que la intervención para hacer efectiva la garantía de las instituciones de los cantones es una atribución de la Asamblea federal de la Suiza, que es el Poder Legislativo de aquella Nación.—Que el Consejo federal, que es su Poder Ejecutivo, no puede hacer efectiva dicha garantía sinó

durante el receso de la Asamblea Federal.— Que su deber es convocarla inmediatamente para darle cuenta de todo lo obrado en el caso supuesto.

Y para que las prescripciones de la Constitución Suiza ejerzan sobre el ánimo de la Cámara la influencia decisiva que tienen para mí, solo debo agregar que la Constitución de 1853 no fué tanto calcada sobre la Constitución de los Estados Unidos como sobre la Constitución de la Confederación Suiza, según lo prueba el testimonio de los constituyentes de 1853 y el estudio comparativo de dichas Constituciones. Esta fué entre otras una de las principales razones de la reforma de 1860, cuyo verdadero objeto fué asimilar la Constitución Argentina á la Constitución Americana. Pero, esta misma razón demuestra que en todo lo que no ha sido materia de reforma, como no lo ha sido el punto relativo al Departamento á quien corresponde declarar los casos de intervención, la Constitución Suiza es para nosotros un guía más seguro que la misma Constitución Norte Americana.

¿Que se ha dicho entre tanto para destruir la imponente autoridad de esta argumentación? Apenas se ha pretendido que el Presidente de la República es el Gobierno Federal á que se refiere el artículo 6 de nuestra Constitución. Tal es la verdad, por más increíble que parezca. Todo se reduce así á una pretensión condenada por la ciencia constitucional, por las mismas leyes que se citan y hasta por la Constitución, cuyo apoyo se invoca.

En derecho constitucional, las palabras Gobierno Federal comprenden efectivamente los tres grandes Departamentos creados para la mejor administración del país. Esto es tan elemental que detenerse á demostrarlo pudiera parecer depresivo del respeto debido á la ilustración de la Cámara; más, ya que no se ha temido defender lo contrario, yo no debo trepidar en apoyarlo con autoridades irrecusables. Block, en la página 1105, tomo 1º de su Diccionario General de la Política, dice categóricamente:—«Gobierno es el conjunto

« de poderes á los cuales pertenece en cada Estado el « ejercicio de la soberanía efectiva ».—Y para escapar al reproche de que no cito un Norte-Americano, recordaré á Young en el párrafo 11, página 17 de su *Government Clas Book*—« El objeto, dice, de los hombres, « al formar una asociación, ó, como algunas veces se ha « dicho, al entrar en sociedad civil, es procurar su mú- « tua seguridad y felicidad.—Uniéndose con este pro- « pósito, consienten en ser gobernados por ciertas re- « glas y principios establecidos al efecto; y el hecho « de gobernar, según estas reglas, es llamado gobierno « civil.—La palabra gobierno también significa las re- « glas y principios mismos por los cuales son goberna- « das las gentes y á veces las personas que administran « el Gobierno, esto es, aquellas que hacen y ejecutan « las leyes de un estado, son llamados el Gobierno ».—He acentuado intencionalmente las palabras *que hacen*, porque ellas encierran la doctrina del libro sobre el punto que tratamos. Siendo el Poder Legislativo el único que hace la ley, es evidente que, según Yung, está tan comprendido como el Poder Ejecutivo en la frase Gobierno Federal.

Las leyes de Justicia Nacional, promulgadas en Septiembre de 1863, carecen de toda importancia en la materia, puesto que su objeto no es definir lo que se entiende por Gobierno Federal, sinó deslindar la competencia de la Justicia Federal, determinar los delitos sometidos á su jurisdicción y establecer sus reglas de procedimiento. Sin embargo, como ellas han sido invocadas para restringir la verdadera significación de las palabras « Gobierno Federal » hasta convertirlas en « Presidente de la República », la Cámara me permitirá demostrar que ellas no autorizan semejante restricción.

Según el artículo 7 de la ley, designando los crímenes cuyo juzgamiento compete á los Tribunales Nacionales y fijando su penalidad, comprometen la paz y dignidad de la Nación los que por actos hostiles, no aprobados por el Gobierno, diesen motivo á una declaración de

guerra, etc. Según el artículo 14, cometen delito de rebelión los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional para:—destruir la Constitución y cambiar la forma de *Gobierno*:—deponer el *Presidente*:—impedir las elecciones de Senadores ó Diputados Nacionales:—estorbar las reuniones del *Congreso*, disolverlo ó impedir las funciones de los *Poderes Colegisladores*. — Según el artículo 19, hay sedición: cuando una Provincia se alza en armas contra otra sin autorización del *Gobierno Nacional* y cuando se impide la promulgación ó ejecución de las leyes del Congreso. Por último, según el artículo 30, cometen desacato contra las autoridades:—los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores, injurian, insultan, ó amenazan en los mismos actos á algún Diputado ó Senador: los que le calumnian, insultan ó amenazan por las opiniones manifestadas en las Camaras: los que lo hacen contra los Ministros del Gobierno Nacional ú otras autoridades en el ejercicio de su cargo, etcétera.

De consiguiente, como el Congreso es el que autoriza las declaraciones de guerra y los tratados de paz, como cometen delito de rebelión los que impiden las elecciones nacionales, como hay sedición cuando se imposibilita la promulgación ó ejecución de las leyes del Congreso, y finalmente, como es desacato perturbar el orden de sus sesiones ú ofender á sus miembros, es evidente que las leyes de Justicia Nacional, lejos de prestarse á la interpretación restrictiva que sobre ellas se ha querido fundar, vienen, por el contrario, en apoyo de la doctrina según la cual el Gobierno Federal es compuesto de los tres Departamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Constitución, autoridad más alta é irrecusable que todas las demás, confirma la misma inteligencia de la palabra «Gobierno Federal» de una manera tan clara que destierra toda duda del ánimo más prevenido, como lo demostrará un breve análisis de varias de sus disposiciones. Por el artículo 1º la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana

federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos subsiguientes, es decir, la división del gobierno en los tres departamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por el 2º el Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano y es sabido que el Congreso es el único que vota los fondos necesarios al efecto. Por el 3º las autoridades que ejercen el Gobierno Federal deben residir en la ciudad que se declare capital de la República y á nadie se le ha ocurrido excluir al Congreso de esta prescripción constitucional. Por el artículo 5º el Gobierno Federal garantiza á cada Provincia el goce de sus instituciones representativas republicanas y la existencia del Poder Legislativo, requisito esencial de dicho sistema. Antes de pasar á otros artículos constitucionales, creo conducente recordar á la Cámara que los que dejo citados se hallan entre las declaraciones, derechos y garantías acordados por la Constitución, que ellos preceden al artículo 6º que se ocupa de la materia de intervenciones y que son en consecuencia los más aptos para fijar el verdadero alcance de las palabras de que éste se vale.

Siguiendo el análisis empezado, encontramos que por el artículo 104, las Provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal y todos saben que sus delegaciones comprenden facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Por el artículo 105 las Provincias se dan sus propias instituciones locales, eligiendo sus autoridades sin intervención del Gobierno Federal, cuya exclusión alcanza también al Congreso.—Por el artículo 108 las Provincias no ejercen el poder delegado á la Nación y el Gobierno de ésta es ejercido por tres poderes, entre los cuales se halla el Legislativo. Por el artículo 109 las hostilidades entre las Provincias son actos de guerra civil que el Gobierno Federal debe reprimir conforme á la ley; pero esa represión no puede tener lugar sin la intervención del Congreso que vota la fuerza y el gasto. En fin, por el artículo 110 los gobernadores de Provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir las leyes de la Nación,



cuyas leyes son precisamente dictadas por el Poder Legislativo.

Como talvez se repita en la Cámara lo que ya se ha dicho en el seno de las comisiones, á saber, que los artículos precedentes carecen de otros correlativos que determinen las autoridades comprendidas en las palabras «Gobierno Federal», mencionaré algunos que tienen esa correlación que se echa de ménos y que servirán, por tanto, para desvanecer la objeción.—Por el artículo 4 el Gobierno Federal provee á los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro público, y su correlativo se halla en los incisos 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 67, autorizando al Congreso para imponer contribuciones, contraer empréstitos internos ó externos, disponer de las tierras de propiedad nacional y fijar anualmente el presupuesto de gastos de la administración general del país.—Por el artículo 25, el Gobierno Federal debe fomentar la inmigración europea, y por el inciso 16 del artículo 67 el Congreso es quien ha de proveer lo conducente á la prosperidad general, promoviendo la inmigración de personas, industrias y capitales extranjeros. Por el artículo 26, las autoridades nacionales deben reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, mientras que por el inciso 9 del artículo 67, es el Congreso quien debe expedir esos reglamentos, habilitando puertos, creando y suprimiendo aduanas. Finalmente, por el artículo 27, el Gobierno Federal está obligado á afianzar sus relaciones exteriores por medio de tratados de paz y comercio, prescripción que tiene sus correlativos en el inciso 17 del artículo 86, autorizando al Presidente de la República para celebrarlos, y en el inciso 19 del artículo 67 defiriendo al Congreso su aceptación ó rechazo.

Adelantando este análisis, tenemos que, según el artículo 7, el Congreso debe determinar la forma probatoria de los actos públicos y procedimientos judiciales de las Provincias; por el 9, sancionar las tarifas para las Aduanas Nacionales; por el 13, intervenir en la admisión, división ó refundición de Provincias; por el 21,

dictar leyes sobre la milicia nacional; por el 24, promover la reforma de la actual legislación y el establecimiento del juicio por jurados; por el 30, declarar la necesidad de la reforma parcial ó general de la Constitución, y por el inciso 28 del artículo 67, hacer todas las leyes convenientes para poner en ejercicio los poderes constitucionales de los tres Departamentos del Gobierno; más, á pesar de que todas estas atribuciones están expresamente conferidas al Poder Legislativo, nadie niega al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir en su ejercicio, bajo todas las formas á que se presta su rol de poder colegislador derivado de los artículos 68 á 73 de la misma Constitución.

Continuando este análisis, vemos que por el artículo 107, las Provincias necesitan del asentimiento del Congreso Federal para celebrar tratados parciales sobre administración de justicia, intereses económicos ó trabajos de utilidad común y que por el artículo 108 no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del mismo Congreso Federal, lo que sirve también para revelar de parte de la Constitución la inquebrantable voluntad de que el Congreso haya de intervenir especialmente en todo lo que atañe al ser político, judicial ó económico de las Provincias en sus relaciones con la Nación.

Apurando el análisis que nos ocupa, podríamos llegar hasta encontrar que la división de los poderes establecida por la Constitución no es tan absoluta, que los separe al extremo de negar absolutamente á los unos toda intervención en el ejercicio de las facultades acordadas á los otros; puesto que, por los incisos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67, el Congreso crea y suprime empleos con sus correspondientes atribuciones; admite ó desecha la dimisión del Presidente ó Vice-Presidente de la República; aprueba ó desaprueba los tratados con las naciones extranjeras y arregla

el ejercicio del Patronato en toda la Nación; permite ó rehusa la introducción de nuevas órdenes religiosas; autoriza la declaración de guerra ó la celebración de paz; concede patentes de corso ó de represalias y reglamenta las presas; fija el ejército de línea y ordena su gobierno; autoriza la reunión de las milicias en ciertos casos, dispone su organización, armamento y disciplina y establece su administración y gobierno cuando están al servicio de la nación; autoriza la introducción de tropas extranjeras en su territorio y la salida de las nacionales fuera de él; declara en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior y aprueba ó suspende el declarado por el Ejecutivo durante su receso.

Para concluir con este largo aunque convincente análisis, llamaré toda la atención de la Cámara sobre la siguiente observación, tan sencilla como decisiva. La parte segunda de la Constitución está destinada á tratar de las autoridades nacionales, su título primero se ocupa del Gobierno Federal, la sección primera versa sobre el Poder Legislativo. La segunda establece el Poder Ejecutivo y la tercera crea el Poder Judicial. Así es como el Gobierno Federal está dividido en tres grandes Departamentos que giran en sus respectivas esferas desempeñando las funciones que constitucionalmente les corresponden en toda materia, incluso la de intervenciones.

Me parece pues, que los adversarios del proyecto no pueden sostenerse en el terreno del derecho constitucional: veamos si pueden hacerlo en el de los actos legislativos.

En la primera sesión de la Cámara sobre este proyecto, el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales citó un mensaje del Presidente Tyler para demostrar que en los Estados Unidos el Poder Ejecutivo nunca se había rehusado á someter al Congreso todas sus medidas de intervención. Dando á los precedentes nacionales la merecida preferencia sobre los hechos extranjeros, empezaré por el Parlamento

Argentino para probar que por nuestra propia jurisprudencia solo el Congreso tiene derecho de autorizar una intervención, y que la misión del Poder Ejecutivo se reduce á desempeñarla en los términos y con los recursos designados por el Poder Legislativo. En seguida terminaré con varios antecedentes norteamericanos en pró de la misma jurisprudencia.

Estudiando los anales parlamentarios de la antigua Confederación de las trece Provincias, he tropezado con una publicación oficial de algunas sesiones de la Cámara de Senadores acerca de la intervención llevada por el Poder Ejecutivo á la Provincia de Mendoza durante el receso del Congreso, entre 1858 y 1859. Esa intervención debió su origen á una perturbación ocurrida en aquella Provincia á fines del citado año de 1858. El comisionado nacional, general Echagüe, asumió resueltamente el Gobierno de la Provincia con pretextos que nunca faltan á los interventores. Esta situación anormal imperó durante el receso del Congreso y amenazaba perpetuarse á pesar de su reunión. Entonces el Senado de la Confederación, sin embargo de ser Cámara conservadora por la naturaleza misma de su composición, y no obstante la deferencia atribuida á la Legislatura de la Conferación hácia todos los actos del Poder Ejecutivo de la misma, no pudo guardar silencio en presencia de tan clara infracción de todas las garantías constitucionales y sancionó con gran mayoría de votos el cese de la intervención á Mendoza.—Larga y animada fué la discusión que se suscitó entre los que defendían y los que atacaban la conducta del interventor. Ningún Senador llegó, sin embargo, á desconocer, ni aún á poner en tela de duda la competencia del Poder Legislativo, así para traer á exámen la intervención y el interventor, como para ordenar su cese inmediato. Aún más, el Poder Ejecutivo, apesar de toda la arrogancia que caracterizaba sus actos políticos y de toda la exageración que envolvían sus doctrinas sobre la materia, lejos de disputar al Congreso sus atribuciones, en vez de amenazarlo con los Tribunales Federales, en vez

de anunciar el uso del veto y sin esperar siquiera que el asunto pasara á la Cámara de Diputados, se apresuró á acatar la sanción del Senado haciendo cesar toda intervención en la Provincia de Mendoza y dejándola en el tranquilo ejercicio de sus instituciones locales.

¿Desea la Cámara otro ejemplo más oportuno y decisivo que el precedente? Lo tengo aún y éste no será de la antigua Confederación que el señor Diputado disidente me ha de rechazar sinó de la Administración anterior, cuya legitimidad no será puesta en duda por el señor Diputado, es decir, versa sobre hechos acaecidos, no bajo el imperio de la Constitución dictada en 1853, sinó bajo el de la reformada en 1860. Tal es el que se produjo con motivo de los disturbios suscitados en la Provincia de Salta á mediados de 1864.

Una rebelión, que parecía contar con el triunfo definitivo, había derrocado los poderes públicos de la Provincia de Salta. Ninguno de ellos requería la intervención del Gobierno Federal para reponer el orden de cosas caído y esta ausencia de toda requisición confirmaba la creencia del triunfo definitivo de la rebelión. La República estaba escandalizada por el atentado y el Poder Ejecutivo creyó que debía volver por el orden constitucional del país reprimiéndolo pronta y eficazmente. Más, lejos de dejarse arrebatar por la corriente de los sucesos, procediendo lijera y á intervenir de propia autoridad, acudió por el contrario al Congreso refiriéndole los sucesos y pidiéndole la correspondiente autorización para intervenir en Salta al solo efecto de restablecer el orden constitucional alterado por la rebelión. También fué larga y animada la discusión que se suscitó en el Senado Nacional; pero tampoco surgió la mínima duda acerca de la competencia del Congreso para acordar ó negar la intervención pedida por el Poder Ejecutivo, pues todos, Ministros y Senadores, la reconocieron unánimemente. Es verdad que la autorización fué rehusada; más el diario de Sesiones de esa época, página 139 adelante, revela que únicamente lo

fué, porque la mayoría del Senado creía que el Gobierno Federal en ningún caso podía intervenir sin prévia requisición de las autoridades provinciales, creencia que en nada afecta la cuestión de competencia para autorizar la intervención en los casos y en las formas constitucionales, que es el único punto que actualmente nos ocupa. Permítaseme, sin embargo, agregar, aunque sea de paso, que no reputo acertada la creencia de la mayoría del Senado, fundándome en que del diario de Sesiones de la Convención Reformadora de la Provincia de Buenos Aires, resulta á la evidencia que la voluntad de la Convención fué excluir la requisición de todos aquellos casos en que fuera imposible por la desaparición de las autoridades constituídas ó por la violencia que sobre ellas se ejerciera, como puede verse en la segunda parte de la 4ª Sesión, página 148, adelante.

Ya que he hablado de una intervención negada por una Cámara, quiero recordar ahora una intervención acordada por el Congreso en una época mucho más reciente. Me refiero á la última intervención en Catamarca.

Con motivo de las perturbaciones que aparecieron en esa provincia á mediados de 1866, el Poder Ejecutivo solicitó del Congreso la autorización necesaria para intervenir en ella á los efectos del artículo 6º de la Constitución. El Congreso, después de un maduro exámen de los hechos y de una detenida discusión del derecho, dictó la ley fecha 4 de Octubre de 1866 acordándole la autorización solicitada, prescribiéndole la forma de la intervención y ordenándole que oportunamente lo instruyera de su resultado. Entonces, como antes, nadie se avanzó á negar la competencia del Congreso para dictar esa ley que debería servir de norma para las que en adelante tengan que dictarse, si desgraciadamente se repitieran los hechos ilegales que pueden determinar constitucionalmente la necesidad de una intervención cualquiera. Es tan importante esa ley, que no puedo resistir al deseo de leerla íntegramente para la mejor instrucción de la Cámara. Según su texto inserto en la

página 252 del segundo semestre del Registro Nacional de 1866, ella dice así:—Art. 1º Autorízase al Poder Ejecutivo para intervenir en la provincia de Catamarca con el objeto de restablecer las autoridades constitucionales.—Art. 2º En caso de acefalía imprevista por la Constitución de la provincia, el Poder Ejecutivo usará de esta misma autorización, designando algún ciudadano á fin de que, con el carácter de Gobernador Provisorio, presida los actos estrictamente indispensables para reorganizar los poderes públicos, conforme á su Constitución.—Art. 3º El Comisionado, que el Poder Ejecutivo nombra á los fines de esta ley, preferirá los medios pacíficos y los simplemente conminatorios antes de acudir al recurso extremo de las armas.—Art. 4º El uso de aquellos medios no excluye el apresto de la fuerza que la intervención pudiese requerir.—Art. 5º En todo caso, para que el empleo de la fuerza sea justificado, jamás dejará de preceder una intimación, al menos por parte del Comisionado.—Art. 6º El Comisionado no asumirá el Gobierno de la provincia.—Art. 7º El Poder Ejecutivo queda autorizado para movilizar la Guardia Nacional que considere necesaria para la ejecución de esta ley.—Art. 8º Está igualmente autorizado para hacer los gastos que ella demande.—Art. 9º El Congreso será instruído del estado ó del resultado de la intervención oportunamente si se halla en sesión ó inmediatamente después de la apertura del próximo período Legislativo.—Art. 10 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

En vano se desconocerá la autoridad de los precedentes de la antigua Confederación, se invocará la negativa de la intervención á Salta, se anatematizará la intervención en Catamarca y se han aducido otras intervenciones no autorizadas por el Congreso. Los precedentes de la Confederación hacen jurisprudencia, como sus leyes son obligatorias, siempre que no estén en contradicción con la reforma constitucional de 1860 ó que no hayan sido derogadas por otras leyes posteriores. La negativa de la intervención en Salta en nada se relacionaba con la cuestión de competencia y procedía solo de

la errada opinión de que, en ningún caso, puede llevarse una intervención que no sea para garantir la forma republicana, sin prévia requisición de las autoridades locales. La eficacia ó ineficacia de la intervencion en Catamarca, es de todo punto ajena á la cuestión de competencia, resulta, en ese caso en favor del Poder Legislativo á pedido y con asentimiento del Poder Ejecutivo.

Los precedentes aducidos son exactos, pero ocurridos todos durante el receso del Congreso, y nada prueban por consiguiente en contrario. Lo mismo diría, aún cuando se hubieran producido durante el período de las sesiones, porque no alcanzarían á enervar la fuerza de la jurisprudencia constitucional, basada sobre los antecedentes que invoqué en su auxilio. En Derecho Constitucional y tratándose de las facultades de los poderes públicos, es completamente desconocida la institución de la prescripción autorizada entre los particulares por el Derecho Civil. La prescripción de cosas privadas, cuya justicia niegan algunos, pero cuya conveniencia proclaman todos, por razones de utilidad general, no tendría razón de ser con relación á los Departamentos que componen el Gobierno de la Nación. La división de los poderes públicos obedece á supremas razones de interés común, que no pueden ser desatendidas estableciendo una prescripción que, además de inconveniente, sería injusta y sobre todo harto peligrosa. Su admisión produciría en último resultado la absorción de todos los poderes del Gobierno por una Cámara que constituiría una oligarquía, por un hombre que personificaría el despotismo ó por un pueblo que sucumbiría en la anarquía. (Aplausos).

Por esto es que el Congreso ha podido abstenerse del ejercicio de sus facultades en materia de intervenciones sin que hayan sufrido el mínimo menoscabo y sin que se haya operado ninguna transmigración de poderes; porque repito que el derecho político reniega esa monstruosa doctrina, en cuya virtud se pretende convertir al Presidente de la República en heredero forzoso de to-



das aquellas facultades que el Congreso no haya querido, podido ó debido ejercitar. (Aplausos). Si de alguna se apoderó en mala hora el Poder Ejecutivo, el Congreso existe y lo que es más las reclama.—Restituylámosela, pues, pacífica y constitucionalmente. Pero terminemos con los precedentes argentinos, y vengamos de una vez á los antecedentes norte-americanos, ya que nuestros propios hechos son mirados con tanto desden, que es necesario autorizarse á cada paso con los ejemplos extranjeros, por más que sean de los Estados Unidos. (Aplausos).

En la sesión á que antes me referí, el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales invocó muy acertadamente dos párrafos del Mensaje que el Presidente Tyler pasó á la Cámara de Diputados de la Unión en Abril de 1844 cumpliendo, sin demora ni dificultad, la resolución dictada en 23 de Marzo del mismo año, pidiéndole todos los documentos relativos á la intervención decretada en el Estado de Rhode Island, no para garantir la forma Republicana de Gobierno, como lo dió á entender el señor Diputado á quien contesto, sinó para proteger las autoridades constituidas contra la violencia de una gran parte del pueblo del Estado que de grado ó por fuerza intentaba echar abajo al antiguo gobierno de la carta colonial, para elegir nuevas autoridades con arreglo á otra constitución más liberal y democrática. En esos párrafos el Presidente Tyler decía:—

«Se me permitirá negar completa y resueltamente el  
« derecho del Ejecutivo para hacer de cualesquier defec-  
« tos reales ó supuestos en la Constitución de algún Es-  
« tado ó forma de Gobierno el pretexto para no cum-  
« plir las leyes ó las garantías de la Constitución de los  
« Estados Unidos, con referencia al antedicho Estado.  
« En los términos más enfáticos que pueda emplear,  
« repudio completamente la idea de que esas leyes ó  
« garantías no deban ser ejecutadas porque el Presi-  
« dente pueda creer que el derecho de sufragio ó cual-  
« quiera otro gran derecho popular esté demasiado res-  
« tringido ó ampliado en demasía.

« Con igual fuerza rechazo la idea de que el Ejecutivo tiene competencia para decidir, en controversias de la naturaleza de la que existió en Rhode Island, de qué lado esté la mayoría del pueblo ó la extensión de los derechos de una mayoría simplemente numérica. Para el Ejecutivo, asumir tal poder, sería asumir un poder del carácter más peligroso.

« Bajo tales suposiciones los Estados de esta Unión no tendrían seguridad para la paz y podrían ser convertidos en unos meros instrumentos de la voluntad del Ejecutivo. Movidó por propósitos interesados, podría llegar á ser el gran agitador fomentando avances sobre las constituciones del Estado y declarando la mayoría de hoy ser la minoría de mañana y la minoría á su turno, la mayoría ante cuyos decretos el orden de cosas establecido en el Estado sería subvertido.—Revoluciones, conmociones civiles y derramamiento de sangre, serían las consecuencias inevitables. La provisión de la constitución hecha para la seguridad de los Estados se convertiría así en el instrumento de su destrucción. El Presidente vendría á ser de hecho el gran fabricante de Constituciones para los Estados y todo el poder vendría á quedar entre sus manos.»

Apesar de que el señor Diputado que me ha precedido en la palabra, conoció de antemano el Mensaje de Tyler transcripto en la página 130, tomo 15, de los Debates del Congreso que he visto en su poder, apesar de que debe haber buscado con ahinco otro documento igualmente decisivo en contrario, apesar de que habrá sin duda meditado detenidamente todas las objeciones á que pudiera prestarse su espíritu ó su letra, apesar de todo, decía, sus observaciones se han reducido á suponer la omisión casual del párrafo anterior del mismo mensaje que minoraba la importancia dada á los siguientes y á insinuar la idea de que Tyler, lejos de ser un presidente enérgico contra las resoluciones del Congreso, no podía resistir las decisiones de una sola Cámara. Intencionalmente he prescindido de mi traducción

del mensaje para servirme de la del señor Diputado Keen y lo primero que echo á la vista es precisamente el párrafo á que aludía el señor Diputado. ¿Cuál es la importancia de ese párrafo, en que el señor Diputado se apoyaba para elevar la temeraria pretensión de que el Presidente Tyler no había reconocido la competencia del Congreso para traer á juicio todos sus actos en la intervención de Rhode Island?

En ese párrafo, cuyas palabras prefiero repetir para escapar al reproche de que las desvirtúo por medio de una referencia infiel, el Presidente Tyler decía:—«Tengo que informar á la Cámara que el Ejecutivo no creyó de su deber intervenir con las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos en los últimos disturbios de Rhode Island, que ninguna orden fué dada por el Ejecutivo á otros departamentos ó jefes militares para la movilización ó empleo de tropas en ó para Rhode Island fuera de las que acompañan este mensaje y que, considerada la fuerza de la guarnición del Fuerte Adams en relación á la extensión de la agitación de Rhode Island fueron reputadas necesarias y juiciosas; que ninguna orden se había dado á gefes navales á fin de preparar vapores ú otros buques de los Estados Unidos para servicio en las aguas de Rhode Island; que ninguna orden se había dado á los jefes de las embarcaciones guarda-costas para dicho servicio; que ningunas instrucciones se dieron por el Secretario de Guerra en Rhode Island al tiempo de su visita en 1842 para revistar las tropas del Gobierno Constitucional y que ningunas órdenes fueron dadas al jefe ó jefes del Ejército ó Escuadra para presentarse al Gobierno Constitucional. Requisiciones y aplicaciones fueron dirigidas al Ejecutivo para llenar las garantías de la Constitución, que impone al Gobierno Federal la obligación de proteger y defender cada Estado de la Unión contra «disturbios domésticos ó invasión extranjera», pero, el Ejecutivo nunca se pudo convencer de que había llegado el casus fœderis que requiriera la interposición del poder militar ó naval,

« en la controversia que, desgraciadamente, existía entre los habitantes de Rhode Island. »

De ningún modo me consideraba impedido para intervenir por la duda de si Rhode Island existía ó no como un Estado independiente de la Unión bajo una carta acordada hacía tiempo por la Corona de la Gran Bretaña.

Era bastante para el Ejecutivo saber que estaba reconocido como un Estado soberano por la Gran Bretaña, mediante el tratado de 1783 que, poco después en común con los Estados hermanos derramó su sangre y gastó sin reserva su tesoro en la guerra de la revolución, que era parte en los artículos de la confederación; que poco después aceptó la constitución de los Estados Unidos como Estado libre, independiente y republicano; que en tal carácter siempre tuvo su plena representación en el Senado y Cámara de Diputados, y que hasta hace muy poco había dirigido sus asuntos domésticos y llenado sus deberes como miembro de la Unión en la paz y en la guerra, bajo el gobierno de la Carta, como fué denominado por la resolución de la Cámara, fecha 3 de Marzo último.

Después de esta lectura, bastante en realidad para hacer toda la luz necesaria sobre el punto en cuestión, apenas necesito agregar que si algo puede deducirse de esta parte del mensaje de Tyler, es que declara no tener facultad para intervenir en ningún Estado de la Unión á fin de garantizar la forma Republicana de Gobierno y que, aún en caso contrario, jamás hubiera osado desconocer la forma republicana en un Estado reconocido por las dos Cámaras del Congreso, mediante la admisión de sus Senadores y Diputados, de manera que esta misma parte del Mensaje es más bien contraproducente porque envuelve una doctrina en diametral oposición á la sostenida por el P. E. en la cuestión San Juan, en la que, yendo más lejos que las leyes norteamericanas de 1792 y 1795 y que el mismo proyecto enviado á la sanción del Congreso, llegó hasta sostener su perfecto derecho á intervenir sin ley, no solo para pro-

tejer las autoridades legales, sinó especialmente para garantizar la forma republicana de gobierno.

Para demostrar que el miembro informante de la Comisión diseñó con tanto laconismo como exactitud la conducta enérgica del Presidente Tyler, oponiendo el veto á la ley del Banco Nacional, y que el señor Diputado disidente es quien ha incurrido en un doble error histórico, desconociendo el verdadero carácter de Tyler, y confundiéndolo con el Presidente Jackson, haré algunas ligeras referencias de los actos más culminantes de su administración, que pondrán de manifiesto que no solo hizo uso del veto constitucional, observando entre otras la mencionada ley del Banco, sinó que inventó un nuevo veto tan singular como inconstitucional, guardándose una ley que no quiso observar ni promulgar, por cuya razón fué denominado veto de bolsillo. (Aplausos).

El primer veto de Tyler en fecha y en importancia fué el que opuso á la ley creando un Banco Nacional en Agosto 16 de 1841. El proyecto de ley decía: Una ley para incorporar á los suscriptores al Banco fiscal de los Estados Unidos.—Los fundamentos del veto fueron: que la ley era una tentativa para crear un banco con el objeto de obrar *per se* sobre la Unión, y por esto inconstitucional; que era un banco de descuento y de consiguiente inconstitucional; que no era banco limitado exclusivamente á hacer operaciones de cambio, lo que sería constitucional y sumamente útil, si se observaba el plan del antiguo banco; y que no estaba suficientemente asegurado el asentimiento de los Estados para establecer sucursales.

El segundo veto llevaba la fecha de Septiembre 9 de 1841. El proyecto de ley decía: «Bill para proveer á la mejor percepción, conservación é inversión de la renta pública por medio de una corporación denominada Corporación Fiscal de los Estados Unidos».

Los fundamentos de este veto son semejantes á los anteriores. Los dos motivos principales que se atribuyeron á esta conducta de Tyler, fueron sus escrúpulos constitucionales con la determinación de conservar su

reputación de hombre persistente en sus opiniones y el deseo de congraciarse con el partido democrático, á fin de ser reelegido á la espiración de su período gubernativo.

El tercer veto fué el 29 de Junio de 1842. La ley decía: «Una ley (act.) para extender por un período limitado las actuales leyes sobre imposición y percepción de derechos sobre la importación.»

El cuarto es de 9 de Agosto de 1842. El Bill decía: «Una ley para proveer de las importaciones á la renta, y para cambiar y modificar las leyes existentes sobre derechos á la importación y para otros propósitos». Tanto esta ley como la anterior tenían el doble objeto de proveer á las necesidades del erario y proteger la industria americana. Los fundamentos de ambos vetos son muchos; pero el principal era que las dos leyes contenían una cláusula que invertía la renta procedente de las tierras públicas en otros objetos que los generales, lo cual era resistido por el Presidente, quien decía, que por esta causa, el derecho á la importación había sido muy elevado.

El quinto veto tiene la fecha 11 de Junio de 1844, y fué opuesto á una ley que tenía por objeto tomar disposiciones sobre ciertos puertos y ríos.

El fundamento del veto era la inconstitucionalidad del proyecto, pues el Presidente creía que se atentaba contra los derechos de los Estados.

El sexto veto, en Febrero 20 de 1845. «Ley relativa á las embarcaciones guardacostas». Sus fundamentos eran: la ley me prohíbe construir ó comprar más embarcaciones de este género, sin previa autorización, y como yo he celebrado ya contratos para la construcción de dos, no creo que hay derecho para semejante violación de la fé debida á los contratos legalmente celebrados.

Esta última ley tuvo posteriormente dos terceras partes de votos.

El proyecto de ley para tomar disposiciones respecto de ciertos puertos y ríos, tuvo también la sanción de ambas Cámaras al fin de la sesión; pero no se convirtió

en ley porque fué retenido por el Presidente, á lo que se llamó «veto de bolsillo» (poket-veto), siendo este último acto de la administración de Tyller, semejante á uno del Presidente Jackson en 1837.

A consecuencia de estos vetos.

El Presidente Tyller descendió sin las simpatías de ningún partido, apesar de haber sido una Administración importante, que durante ella se operó la anexión de Texas, se dictó la ley sobre tarifas protectoras y se celebró el arreglo de la cuestión con la Gran Bretaña sobre los límites del Nord-Oeste, como puede verse en el Manual del Hombre de Estado por Williams, en el compendio Histórico de los Estados Unidos por Quakenbot, y en los capítulos 81 y 82 de la obra de Benton titulada 30 años en el Senado de los Estados Unidos.

Y sin embargo, este presidente que tanto se excedió en sus relaciones con el Congreso es el mismo que, á mérito de la simple decisión de una sola Cámara, no trepidó en enviarle hasta sus cartas confidenciales para que se instruyera plenamente de todo lo relativo á la intervención solicitada por el Estado de Rhode Island, terminando su Mensaje con un párrafo que desearía escuchar de parte de los presidentes de la República Argentina, toda vez que se dirigieran al Congreso, para imponerle de las intervenciones que en adelante pudieran ocurrir.

« Con la dispersión de las tropas de Mr. Dorr, acabaron todas las dificultades.—Una convención fué poco después convocada en forma legal para enmendar la Carta fundamental y una nueva Constitución, basada en principios más liberales que la abrogada, fué propuesta y aceptada por el pueblo.—Así el gran experimento americano de introducir cambios en el Gobierno, bajo la influencia de la opinión y no de la fuerza, ha sido de nuevo coronado por el éxito, y el Estado y pueblo de Rhode Island reposan con seguridad sobre sus instituciones de su propia adopción, temerosos por cualquier perspectiva de cambio futuro, y seguros contra disturbios domésticos ó invasiones extranjeras.

« Felicito al país por una terminación tan feliz de un  
« estado de cosas que antes amenazaba la paz pública.  
« Debe justamente mirarse como digno del siglo y del  
« país en que vivimos.»

Muchos años después, con motivo de la colosal revolución de 1861, suscitóse de nuevo en los Estados Unidos la cuestión de intervenciones, no para los Estados contra disturbios domésticos, como en el caso de Rhode Island, sinó para garantir su forma republicana de gobierno y proceder á la reconstrucción de sus poderes públicos. Entonces, el Presidente de la Unión dictó varias proclamas estableciendo reglas adecuadas al objeto, pero todas ellas fueron completamente desaprobadas por el Congreso, en cuya Cámara de Diputados pronunciaba Stevens las siguientes palabras, que he tomado de su discurso publicado en la página 205 de la Enciclopedia Americana correspondiente el año 1867: «La reconstrucción de la Nación, decía, la ad-  
« misión de Estados nuevos, la garantía de gobiernos  
« republicanos á Estados antiguos, son todos actos  
« legislativos. El Presidente reclama el derecho de  
« ejercerlos. El Congreso se lo niega y sostiene que  
« el derecho pertenece al ramo legislativo. Han re-  
« suuelto defender estos derechos contra todo usurpador.  
« Han determinado que la Constitución no ha de ser  
« violada impunemente mientras esté confiada á ellos.  
« Considero que esta es la gran cuestión entre el Pre-  
« sidente y el Congreso. El reclama el derecho de  
« reconstruir por su propio poder. El Congreso le nie-  
« ga todo poder en la materia, á excepción de un con-  
« sejo, y ha resuelto sostener esta negativa. Su polí-  
« tica sostiene entero poder en el Ejecutivo. La política  
« del Congreso le prohíbe ejercer ahí poder alguno.»

De acuerdo con estas doctrinas fueron dictadas en sesiones extraordinarias las leyes de Marzo y Julio de 1867, negando al Presidente todo poder en la reconstrucción de los Estados. En la Cámara de Diputados y en la de Senadores pasaron casi á unanimidad de votos, mereciendo la aprobación de los hombres más distin-



guidos del Congreso y aún de los Estados Unidos. Ellas anulan todos los gobiernos que se habían dado los rebeldes bajo la protección del Presidente. Establecen comandantes militares á cuya autoridad los sometían, y los cuales solo debían recibir órdenes del generalísimo que luego se nombró. Y, como habían pasado á tan inmensa mayoría de votos, triunfaron del veto que oportunamente les fué opuesto por el Presidente, formando en el día la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos.

A fin de enervar la influencia decisiva de esta jurisprudencia, se ha censurado acremente la conducta del Congreso Norte Americano; se ha pedido un acto legislativo aprobando ó reprobando la conducta del P. E. en otros casos de intervención; se ha invocado con toda solemnidad la proclama dictada por el Presidente Lincoln en Diciembre de 1863; y se ha recordado por último la insurrección de Pensilvania en 1794, sofocada por orden del presidente Washington sin prévia autorización del Congreso.

Aunque mi posición en este debate no me obliga á traer á juicio la conducta del Congreso Norte-Americano en los últimos sucesos, yo no puedo menos de condenar también algunos de los medios de que se ha echado mano para hacer triunfar radical y definitivamente la sagrada causa de la libertad humana. Los Estados del Sud, reducidos á la condición de pueblos conquistados, gobernados despóticamente por Jefes militares y sometidos al imperio de la bárbara ley marcial, son realmente hasta una contradicción política de ese Congreso, que para libertar á los hombres no ha debido ir hasta esclavizar á los pueblos. (Aplausos).

Pero estos excesos, completamente ajenos á mis opiniones bien conocidas en contra de esa sangrienta escuela del sable, que otros quieren de nuevo implantar en el país, estos excesos, decía, no alcanzan á demostrar que el Congreso de los Estados Unidos haya sostenido una mala doctrina al decir que al Poder Legislativo co-

responde dictar las medidas de reconstrucción é intervenir, de consiguiente, en todo lo relativo al ser político de los Estados. Por más apasionada y revolucionaria que haya sido la conducta del Congreso en contra de los antiguos Estados rebeldes, ella ha sido perfectamente ajustada á las prescripciones constitucionales y á los antecedentes legislativos del país en lo que concernía al Departamento competente para garantir á los Estados su forma republicana de Gobierno. Contra los rebeldes habrá imperado la pasión; en el punto de competencia solo ha dominado la razón. (Aplausos).

Llégame por fin la oportunidad de cumplir la palabra empeñada en la sesión anterior, en que, respondiendo á una provocación del señor Diputado, le ofrecí citar, no uno, sinó varios actos legislativos desaprobando intervenciones ejercidas de propia autoridad por el P. E. Para lograrlo, no necesito felizmente de grandes esfuerzos, y me basta por el contrario referirme á las leyes de reconstrucción que dejo prolijamente analizadas; pues ellas envuelven el ejercicio más pleno y absoluto de la competencia del Poder Legislativo para pronunciarse sobre el mérito de las intervenciones del P. E.—Es verdad que, después que recojí su guante, el señor Diputado, previendo mi categórica respuesta y deseando parar el golpe, manifestó la esperanza de que yo no le contestaría con semejantes leyes de reconstrucción; pero permítame defraudar por esta vez su irrealizable esperanza.—Cuando el señor Diputado se anticipaba á mi respuesta, era porque precisamente la esperaba y la esperaba con razón, porque él sabía bien que en Estados Unidos no se conocen otros casos de verdadera intervencion que el de la decretada para Rhode Island y el de la ejercida sobre los Estados del Sud, de los que ya nos hemos ocupado extensamente, mostrando que ambos han sido materia de discusión ante el Congreso.—Si acerca del primero no recayó resolución alguna, fué á causa de que la intervención no pasó de un simple decreto que bastó para disipar la insurrección que lo motivaba; más en el segundo, en que la intervención

llegó á convertirse en hechos, en que fué necesario reconstruir los Estados en que se tenía que fijarse las reglas á que debían sujetarse para obtenerlo, entonces el P. L. no se limitó á desaprobare las medidas ordenadas por el P. E., sinó que llegó hasta dictar un plan de reconstrucción por medio de leyes vigentes aún.—Sírvase el señor Diputado indicarme otras intervenciones del Ejecutivo y yo le mostraré entonces otras resoluciones del Legislativo.—Mientras no lo haga, tenga á bien contentarse con las citadas; porque debe comprender que los debates y los fallos del Congreso no han podido recaer sobre el vacío, representado en este caso por la ausencia de toda otra intervención —Insistir en su pedido, sería, pues, exigirme el imposible. (Aplausos).

Viniendo á la proclama del Presidente Lincoln, no puedo ni quiero desconocer su autenticidad; pero sí puedo y quiero negar la importancia que se le atribuye; El señor Diputado, miembro informante de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales, ha dicho que los Estados Unidos han tenido un Dictador y que ese Dictador ha sido Jorge Washington. Ignoro si alguien se habrá escandalizado de esta aserción, basada sobre la verdad histórica; pero pido que nadie se escandalice al oírme que los Estados Unidos han tenido otro Dictador y que ese Dictador ha sido Abraham Lincoln. Así como el señor Diputado Keen no abrigaba la intención de ultrajar la memoria del Presidente Washington, tampoco es mi ánimo ofender la reputación del Presidente Lincoln, afirmando que, bajo el imperio de las circunstancias que el país atravesó durante su administración, se creyó autorizado para ejercer la dictadura á fin de someter á los Estados del Sud y restablecer la unión de la gran familia norte-americana. Por más avanzada que esta proposición pueda parecer á primera vista, su perfecta veracidad está acreditada por dos leyes del Congreso de los Estados Unidos y por el testimonio irrecusable del mismo Lincoln.

Durante las sesiones de 1863 y á propuesta del Diputado Stevens, el Congreso sancionó un bill de indemni-

dad á favor del Presidente Lincoln y de todos los empleados que hubieran tomado parte en los arrestos ordenados por el Presidente á virtud de la suspensión que hizo del *writ of habeas corpus*.

Durante las sesiones de 1866, el Congreso sancionó una adición á la ley anterior en favor de los actos ejecutados por orden de autoridades militares superiores, durante la época de la guerra con los Estados del Sud. La constitucionalidad de estas leyes fué ardientemente combatida en las Cámaras del Congreso; pero ambas pasaron con gran mayoría de votos, poniendo así á salvo al Presidente con sus empleados civiles y militares de toda responsabilidad política ó judicial por las medidas á que dichas leyes se referían según puede verse in extenso, en los tomos de la Enciclopedia americana correspondientes á los años 1864 y 1867.

El mismo Lincoln en su carta á Horacio Greeley, redactor de *La Tribuna* de New York, y en su contestación á las resoluciones del meeting de Alvany, que pueden verse en las páginas 186 y 200 de su vida, traducida por el actual Presidente Sarmiento, reconoce ingenuamente haber suspendido de propia autoridad el *habeas corpus*, el juicio por jurados, la acción de los Tribunales ordinarios, la inviolabilidad de la prensa y la libertad de la palabra, medidas todas verdaderamente despóticas por defecto de prévia autorización legislativa, como vino á quedar indeleblemente consagrado por los dos bill de indemnidad que dejó referidos, y sobre todo por una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que puso á cargo del Tesoro Nacional las indemnizaciones procedentes de los actos ejecutados en su virtud. (Aplausos).

Para concluir esta parte de mi réplica, solo me resta hablar de la insurrección de Pensilvania, que el señor Diputado no ha podido recordar como caso de verdadera intervención, sinó merced á un doble error histórico-constitucional á que ha sido probablemente inducido por una carta del Ministro Norte Americano Wor-

thingtong, que clandestinamente se ha deslizado en el Mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia que nos ocupa. Y digo clandestinamente, porque su traducción venía dentro del pliego dirigido á la Cámara sin estar mencionada en el Cuerpo del Mensaje, á pesar de lo cual no he querido rechazarla como un papel anónimo, y he preferido repartirla como un documento auténtico por motivos de delicadeza personal que no escapan á la penetración de la Cámara. Pero el señor Diputado ha tomado un mal consejero; pues esa carta, de la cual deploro tener que hablar en ausencia de su autor, solo sirve para comprometer al señor Worthingtong presentándolo, además de inhábil diplomático, como peor historiador y pésimo constitucionalista (Aplausos); de suerte que no sé qué admirar más, si la falta de meditación con que ha sido escrita, ó la ligereza con que ha sido enviada en apoyo de las doctrinas del Poder Ejecutivo.

La Cámara me perdonará si apelo de nuevo á los libros para demostrar que, si mi juicio es severo, no es por cierto injusto.

*Señor Mármol*—Hable de la carta, señor Diputado. Es bueno se conozca que no todos los de Norte América saben de Norte América.

*Señor Quintana*—Sí, señor. Después de afirmar sin temor de ser contradicho, y bajo promesa de justificarlo en caso necesario, que no es acto de buena diplomacia emitir oficialmente opinión sobre los debates de los poderes públicos del país, donde se representa un Gobierno extranjero, con la autoridad de Witt, que ha escrito la historia de Washington y la vida de Jefferson, voy á patentizar los errores históricos y constitucionales en que el señor Worthingtong ha incurrido al apreciar los sucesos de Pensilvania y hablar de las intervenciones en Estados Unidos.

Contando con la indulgencia de la Cámara por las incorrecciones que pudiera cometer al traducir en este acto las palabras de Witt, diré que, después de pintar el historiador el desenfreno de la oposición democrática

contra Washington, en la página 292 agrega: « Jefferson  
« usaba este lenguaje en el momento en que las excita-  
« ciones licenciosas del periódico de Freneau y de las  
« sociedades democráticas, acababan de producir sus  
« frutos. Trece mil insurgentes se habían declarado en  
« guerra abierta contra el Gobierno en el seno mismo  
« del Estado en que el poder central había establecido  
« su residencia.

« Bajo pretexto de oposición á una ley particular, pero  
« en realidad con su espíritu enemigo de todo orden,  
« los condados Occidentales de la Pensilvania se ha-  
« bían coaligado desde el año 1791, para impedir la per-  
« cepción del impuesto sobre las bebidas. En vano el  
« Congreso, á pedido de Washington, había revisado  
« la ley sobre contribuciones indirectas, á fin de ha-  
« cerla más aceptable; en vano, en una proclama so-  
« lemne, refrendada por Jefferson mismo, el Presidente  
« había amenazado á los rebeldes con entregarlos á los  
« Tribunales. Los oficiales de Justicia, encargados de  
« perseguir á los delincuentes, fueron amenazados de  
« muerte, atacados á mano armada en sus propias casas  
« y obligados á huir para no ser allí mismo quemados  
« por la muchedumbre. La mala-posta de Filadelfia fué  
« desvalijada, las cartas fueron abiertas y transformadas  
« en instrumentos de convicción contra los ciudadanos  
« que no se mostraban bastante complacientes hácia el  
« desorden: los sospechosos fueron proscriptos, y los  
« poderes públicos delegados en una convención. Es-  
« tos excesos amenazaban volverse contagiosos: sínto-  
« mas de sublevación aparecían en la Virginia y en la  
« Marilandia; la indignación y el terror cundieron entre  
« las gentes honradas. Washington quiso aprovechar  
« la oportunidad para descargar sobre la anarquía un  
« golpe decisivo y ruidoso. Era necesario dar á los  
« buenos ciudadanos confianza en su fuerza; era nece-  
« sario desplegar á los ojos de los demagogos todos los  
« recursos que el gobierno podía sacar del país mismo  
« para la defensa del orden en peligro; el aparato de la  
« represión fué formidable,

« Por una nueva proclama, el Presidente intimó á  
« los facciosos someterse en un plazo de tres semanas,  
« después del cual serían dispersados á viva fuerza.  
« Terminado el plazo, fueron convocadas las milicias  
« de la Virginia, de Marilandia, de Nueva Jersey y de  
« la Pensilvania. Desde mediados de Octubre, quince  
« mil hombres se apresuraban á responder al llama-  
« miento y venían á colocarse bajo las órdenes de Was-  
« hington. »

Después de bosquejar su entusiasmo, termina el his-  
torador diciendo: « La presencia de Washington en  
« medio de semejantes soldados no fué por mucho tiem-  
« po necesaria para asegurar su triunfo, y pudo, des-  
« pués de haberles pasado revista, volver á Filadelfia  
« para proveer á los otros negocios del Estado, mientras  
« que el ejército, dejado al mando del general Enrique  
« Lee, gobernador de la Virginia, atravesaba las Alle-  
« ganis y se esparcía en los condados insurrectos. Co-  
« lumnas ligeras recorrían todo el país; en ninguna  
« parte la insurrección se detuvo ante ellas. Existen  
« sin duda por acá y por allá algunas bandas errantes,  
« pero que no se presentarían al ataque—escribía al  
« Presidente el Secretario del Tesoro, Hamilton, que  
« seguía los movimientos del ejército. Ni un tiro se  
« disparó, y el 20 de Noviembre las milicias estaban  
« en marcha para volver á sus hogares, no dejando en  
« medio de esa población facciosa, donde su presen-  
« cia fué suficiente para abatir la insurrección, más que  
« un débil destacamento, destinado á secundar la acción  
« de la justicia. »

Tal fué el origen, el desarrollo y la conclusión de la  
insurrección de Pensilvania, conocida bajo el nombre  
de insurrección de los Wiskey á causa de haber des-  
plegado la bandera de oposición al pago del impuesto  
sobre las bebidas. Con la autoridad del historiador he  
patentizado que esa insurrección no fué materia de in-  
tervención alguna. El Poder Nacional no trató de pro-  
teger á ninguna autoridad local contra violencias domés-  
ticas, ni de garantizar la forma republicana de Gobierno

contra veleidades monárquicas, cuyos casos son los únicos de verdadera intervención en el régimen propio de los Estados. Procuró simplemente el cumplimiento de una ley nacional sobre impuestos que los insurrectos se negaban á pagar aún después de condenados por la justicia federal.

*Señor Montes de Oca*—¿Me permite el señor Diputado una palabra?

*Señor Quintana*—Con mucho gusto.

*Señor Montes de Oca*—Yo creo que no he hablado de la intervención de Pensilvania. Si lo hubiera hecho de ella, habría aducido otros argumentos que tengo apuntados, tomados de la historia de los Estados Unidos por Prescott, que prueban que esos revolucionarios que tomaban por pretexto los impuestos, acabaron por amenazar que iban á separarse, en primer lugar, del Estado de Pensilvania; y en segundo lugar de la Unión americana si no se hacía lugar á su pretensión.

Pido disculpa al señor Diputado por haberle interrumpido, pero lo he hecho porque me ha dicho una cosa que extraño muchísimo en el señor Diputado que me ha demostrado siempre la mayor deferencia. Me ha dicho que he tomado un mal consejero en el Ministro Worthington á quien no he citado; ni he tenido para nada en cuenta la carta del ex-Ministro. Tampoco no he tocado la cuestión de Pensilvania, porque pensaba, continuando la discusión sobre el asunto, hablar largamente sobre esa intervención. Pido de nuevo disculpa al señor Diputado.

*Señor Quintana*—Lejos de tener que pedirme disculpa el señor Diputado, debe aceptar mi agradecimiento por esta interrupción, porque ella me da lugar para hacerle presente que si por desgracia olvido alguna de sus observaciones, es porque, sin saber cómo, se me ha extraviado la orden del día donde había apuntado los argumentos capitales del discurso que el señor Diputado pronunció en la sesión anterior, y porque me habilita también para apoyar mis asertos con la opinión de Prescott que acaba de citar el señor Diputado, y que



viene á corroborar la de Witt respecto de la insurrección de los condados occidentales de Pensilvania en 1794.

El señor Diputado ha dicho lo mismo que decía Witt, á saber, que los insurrectos negaban el pago del derecho nacional impuesto por el Congreso sobre las bebidas. Por consiguiente, el señor Diputado reconoce que el programa revolucionario era la negativa al cumplimiento de una ley nacional que establecía el pago de derechos nacionales. Entonces, el señor Diputado no puede menos de reconocer en su ilustración, que el caso de Pensilvania no es caso de intervención á los efectos de la garantía constitucionalmente acordada á los Estados, porque el cumplimiento de las leyes nacionales es de todo punto independiente del orden interno de los Estados, cuya garantía se hace efectiva por medio de la intervención.

Este es el error en que ha incurrido el ex-Ministro de los Estados Unidos, que me felicito no haya sido el maestro del señor Diputado, porque confunde el cumplimiento de las leyes de la Nación con la intervención en los Estados para garantizar la forma republicana de Gobierno ó proteger sus autoridades locales.

Solo por este gravísimo error cometido en el punto de partida, es que ese señor ex-Ministro ha podido aventurarse á decir que los casos de intervención han sido frecuentes en Estados Unidos, cuando, repito, que nadie conoce allí más intervenciones que la decretada en el antiguo caso de Rhode Island y la ejercida en el reciente caso de la reconstrucción de los Estados del Sud.

Más no paran aquí los errores históricos del señor ex-Ministro.

Ha dicho que para la intervención de Rhode Island, fué necesario hacer uso de la fuerza de línea. Permítame decirle que se equivoca completamente. El mensaje antes citado del presidente Tyler declara terminantemente que el simple anuncio de haberse concedido la intervención para proteger al Gobernador de la Carta, mister King, contra las tropas del Gobernador insurgente

mister Dorr, fué bastante para restablecer el orden, bajo cuyo amparo se procedió posteriormente á la reforma constitucional de Rhode Island. Hubo en realidad orden de disponer de la guarnición de línea del fuerte Adams para el caso en que los revolucionarios pretendieran llevar á cabo su amenaza de atacar á mano armada á Providence, capital del Estado. Hubo también autorización para reunir las milicias de Massachussetts y Con-nethicut, siempre que lo solicitara el Gobernador legal del Estado en perturbación. Pero ninguno de esos casos llegó; las fuerzas de línea no se movieron de su puesto, y las milicias no fueron convocadas, porque, como lo dice Tyller, el simple anuncio de la intervención bastó para que todo volviese á su antigua calma.

Ya ve la Cámara que los adversarios del proyecto en discusión tampoco pueden sostenerse en el terreno de los actos legislativos. Véamos ahora si son más felices en presencia de las decisiones de los Tribunales.

En la sesión anterior, el señor Diputado disidente, citó una sentencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, para demostrar que no existen poderes concurrentes, y que la facultad de intervenir pertenece de consiguiente al Poder Ejecutivo, sentencia que antes invoqué ante la Cámara en el debate sobre la traducción de la obra de Winting acerca de los poderes del Presidente en tiempo de guerra, y que posteriormente facilité á la Comisión de Negocios Constitucionales para que la tuviera presente al tiempo de ocuparse del Decreto relativo al Departamento Topográfico Nacional. Pero ¿dice esa sentencia que el Poder Ejecutivo es el Departamento á quien toca autorizar toda intervención, lo cual es el punto en discusión? Para que la Cámara pueda apreciarla en su justo valor, referiré primero sus antecedentes, leeré luego sus considerandos y terminaré con los comentarios correspondientes.

De la relación que encabeza la causa en la página 32 tomo I de los Fallos de la Suprema Corte, aparece que el 26 de Febrero de 1859 el P. E. dictó un decreto, erigiendo á los capitanes de puerto en Jueces de 1ª Ins-

tancia en las causas civiles y criminales pertenecientes á la jurisdicción marítima, con calidad de someter su contenido á la aprobación del Poder Legislativo. A virtud de este decreto y antes de las leyes organizando los Tribunales Nacionales, el capitán del puerto del Rosario se creyó autorizado para sumariar y condenar á Ramón Ríos, Francisco Gómez y Saturnino Ríos por salteamiento, robo y homicidio perpetrados abordo del Pailebot Nacional *Unión* en el Río Paraná. Venida la causa en apelación á la Suprema Corte, los defensores de los acusados dedujeron el recurso de nulidad contra todo lo obrado fundándose en la incompetencia del Capitán del Puerto del Rosario para atribuirse el conocimiento del asunto. El Procurador General reconociendo la falta de jurisdicción de dicho funcionario para constituirse en Juez de la causa, pretendía sin embargo la validez del sumario levantado, y la Corte dictó su fallo de conformidad á virtud de los siguientes considerandos:

«Considerando primero que la facultad de establecer  
«Tribunales inferiores para ejercer la jurisdicción que  
«corresponde á la justicia nacional, se ha depositado  
«en el Congreso por el artículo 94 é inciso 17 del artículo 67 de la Constitución de la República, y por el  
«inciso 28 de este último, la de hacer las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio  
«los poderes del Congreso, y todos los otros concedidos al gobierno de la Nación; y que entre los asignados al P. E. en el artículo 68, no se encuentra el de  
«desempeñar funciones legislativas, por alguna razón ó  
«en algún caso; 2º que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno  
«en tres grandes departamentos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su  
«esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de  
«cada uno le son peculiares y exclusivas: pues el uso  
«concurrente ó común de ellas, haría necesariamente  
«desaparecer la línea de separación entre los tres altos  
«poderes políticos y destruiría la base de nuestra forma

« de gobierno; 3º que por consiguiente el citado decreto del P. E., en virtud del cual se ha considerado competente para conocer de esta causa el capitán del puerto de la ciudad del Rosario no tiene valor alguno legal; porque él importa una usurpación de las atribuciones del Poder Legislativo.»

Basta sin duda lo expuesto, para que la Cámara se penetre de que la sentencia que nos ocupa no hace directamente al caso en cuestión, y mucho menos para fundar la competencia exclusiva del Presidente en materia de intervenciones. La única doctrina consagrada por esta sentencia es que el Poder Ejecutivo carece de autoridad, tanto dentro como fuera del período de las sesiones, para dictar decretos sobre materias legislativas, por más que contengan la cláusula de ser oportunamente sometidas á la aprobación del Congreso. Y ella ha sido justamente consagrada por la Suprema Corte, porque es la única doctrina arreglada á las prescripciones constitucionales. La Constitución al determinar las atribuciones del P. E., no ha establecido la mínima distinción por razón del período de las sesiones ó del receso del Poder Legislativo. Ambas circunstancias son impotentes para ampliar ó restringir las facultades del Presidente de la República. Así como el Congreso no puede durante sus sesiones limitar los derechos del Presidente, así tampoco puede el Presidente extenderlos durante su receso. La doctrina contraria, según la cual el período del receso legislativo constituye una nueva fuente de poderes para el Presidente, es una doctrina condenada por un buen sistema constitucional y atentatoria del principio fundamental de la división de los Departamentos del Gobierno. Una vez admitida no se haría esperar el caos político con su inseparable cortejo de males y trastornos (Grandes aplausos). Me parece, pues, que el señor Diputado no ha sido oportuno en la cita, puesto que sin hacer directamente al caso, ella envuelve la condenación más terminante de las doctrinas que sostiene el P. E. y que alguna vez ha apoyado con su palabra ó con su voto.

*Señor Presidente*—Si á la Cámara le parece, pasaremos á cuarto intermedio.

*Señor Quintana*—Con todo placer, no solo por que descansaré yo, sinó porque descansarán los señores Diputados que me hacen el honor de escucharme. (Grandes y calurosos aplausos).

Se pasó á cuarto intermedio, después del cual siguió con la palabra el señor Quintana.

*Señor Presidente*—Cuando pasamos á cuarto intermedio, iba á entrar á las decisiones de los Tribunales Norte Americanos.

La primera, aunque nó la más importante de esas decisiones, es la que la Suprema Corte expidió por conducto del Juez Story en Enero de 1827, con motivo del caso de Martín contra Mott y que se registra en la página 10, tomo 7º de la colección de Curtis. Martín había sido condenado por un consejo de guerra, á causa de no haber acudido á prestar sus servicios en virtud de la convocatoria hecha por el Presidente de la República con el objeto de repeler una invasión exterior. Sus bienes habían sido embargados y se quejaba del procedimiento seguido contra él. Después de los trámites respectivos, la Corte pronunció una larga sentencia, cuyos puntos culminantes son los que siguen:

Hablando de la convocación de las milicias, la sentencia dice que: « La Constitución declara que el Congreso « tendrá el poder de convocar la guardia Nacional para « ejecutar las leyes de la Unión, sofocar insurrecciones, « repeler invasiones y al mismo tiempo para proveer á « la organización, armamento y disciplina de la Guardia Nacional y para mandar una parte de ella que sea « necesario emplear en el servicio de los Estados Unidos. Conforme á esta autoridad, el acta de 1795, ha « sancionado que cualquiera vez que los Estados Unidos fueren invadidos ó estuvieran en peligro inminente de invasiones extranjeras ó de indios, se considerará legal que el Presidente de los Estados Unidos llame el número de Guardias Nacionales del Estado

« ó Estados que considere convenientes al paraje del  
« peligro para repeler tales invasiones y dar su orden  
« con este objeto á cualquier oficial ú oficiales de la  
« Guardia Nacional que considere más aparentes. Igua-  
« les provisiones se han hecho en otros casos de la  
« Constitución. No se ha negado aquí que el acta de  
« 1795 está dentro la autoridad constitucional del Con-  
« greso, ó que el Congreso no pueda legalmente pro-  
« veer en caso de peligro inminente de invasión, así  
« como para aquellos en que una invasión ha tenido  
« lugar. En nuestra opinión, no puede caber duda so-  
« bre este punto. Aún suponiendo que cupiese duda,  
« es evidente que el poder para proveer los medios para  
« repeler invasiones, incluye el poder para proveer  
« contra el atentado y peligro de invasión, como re-  
« curso necesario y propio para alcanzar dicho objeto.  
« Uno de los medios más eficaces para repeler una in-  
« vasión, es preparar las fuerzas necesarias para el  
« combate, antes que el invasor haya pisado el terri-  
« torio».

Analizando en seguida la naturaleza de este poder, la sentencia continúa diciendo: « El poder que el Con-  
« greso deposita de esta manera en manos del Presi-  
« dente, es indudablemente de una naturaleza muy  
« alta y delicada. Un pueblo libre es naturalmente ce-  
« loso del uso que se hace del poder militar y el poder  
« para convocar la Guardia Nacional al servicio activo,  
« es indudablemente uno de aquellos poderes de mag-  
« nitud poco común. Pero no es un poder que pueda  
« ejercitarse sin la responsabilidad correspondiente. Es  
« por sus propios términos un poder limitado y circuns-  
« cripto á casos de invasión real ó peligro inminente de  
« invasión».

Pasa luego la Corte á demostrar que los subalternos militares del Presidente no son los jueces de esas limitaciones, estableciendo que—« La ley no acuerda apela-  
« ción alguna del juicio del Presidente, ni tampoco de-  
« recho alguno á los oficiales subalternos para pasar  
« en revista su decisión y privarla de todo efecto. Siem-

« pre que un estatuto confiere á cualquier persona un  
« poder constitucional para que lo use según su opinión  
« acerca de ciertos hechos, es una regla indisputable de  
« lógica que el estatuto lo constituye único y exclusivo  
« Juez de la existencia de esos hechos. Y en el presente  
« caso todos somos de opinión que este es el verdadero  
« sentido del acta de 1795».

Finalmente, la sentencia termina haciéndose cargo de la posibilidad del abuso y presentado el correctivo constitucional. « No debe objetarse, dice, que sea posible  
« abusar de tal poder, porque no existe poder que no  
« sea susceptible de abuso. El remedio para esto y  
« para cualquier falta oficial que pudiera cometerse,  
« debe buscarse en la misma Constitución. En un go-  
« bierno libre el peligro debe estar lejano, desde que  
« además de las altas cualidades que deben presumirse  
« en el Ejecutivo de virtud pública y devoción leal á los  
« intereses comunes, la frecuencia de las elecciones y  
« la vigilancia de los representantes de la Nación traen  
« consigo todas las garantías conducentes para resguar-  
« darse contra usurpaciones ó tiranías».

Nada más terminante que esta sentencia; pero al mismo tiempo nada más inconducente para fundar la facultad privativa del Presidente de la República en materia de intervenciones. Ella no versa en rigor sobre un caso de verdadera intervención en el régimen interno de los Estados, sinó únicamente sobre un caso de convocatoria de la milicia para prevenir ó repeler una invasión exterior. No declara tampoco que el poder de convocar la milicia pertenece originariamente al P. E., y dice por el contrario, que le ha sido conferido por una autorización del P. L. No pretende del mismo modo que esa prerrogativa sea secundaria é ilimitada, puesto que reconoce lo delicado de su naturaleza y lo circunscrito de su acción. No estatuye siquiera que sea un poder absoluto; porque solo niega el recurso á la justicia ordinaria ó al juicio propio de los subalternos. No consagra por último la irresponsabilidad de su ejercicio, pues enuncia la vigilancia de los representantes de la

Nación como una de las mejores garantías contra todo abuso y usurpación. Así, pues, esta sentencia, aunque dictada bajo el imperio de la ley de 1795, de que carecemos nosotros y á cuya ciega adopción nos oponemos con todas nuestras fuerzas, ni afecta directamente al punto en cuestión, ni desconoce las atribuciones del Congreso, ni amengua la gravedad de la autorización, ni niega su verdadero carácter, ni erige el despotismo irresponsable. Las doctrinas que desarrolla, están por el contrario en perfecto acuerdo con las nociones de la ciencia constitucional, con las exigencias de una buena administración y con las garantías indispensables de la libertad.

¿Qué sistema republicano de gobierno sería aquel en que un solo hombre pudiera disponer á discreción de los tesoros del país y de la vida de sus conciudadanos? ¿Cómo podría la administración responder á los grandes fines que le están encomendados si sus mandatos hubieran de ser á cada instante suspendidos por la acción de los tribunales ó la desobediencia de los particulares? ¿Cuál sería la duración de la libertad si las usurpaciones del P. E. no pudieran ser contenidas por la voluntad del pueblo representado en el P. L. (Aplausos). Pero de aquí á pretender la arbitrariedad absoluta y la irresponsabilidad completa del Presidente en materia de intervenciones, hay tanta distancia como la que media entre el despotismo personal y el gobierno del pueblo. (Aplausos).

Después de la sentencia analizada viene la que la misma Corte Suprema de los Estados Unidos pronunció por conducto del Juez Taney en Diciembre de 1848 sobre el caso de Luther versus Borden, la cual se registra en la página primera, tomo 17, de la citada colección de Curtis.

Aunque los antecedentes de esta sentencia han sido largamente expuestos ante el Senado y ante la Cámara, su importancia me obliga á recordarlos con toda la brevedad posible. En 1841, una fracción del pueblo de Rhode Island, alegando la inconstitucionalidad de la



carta constitutiva del gobierno del Estado y no habiendo obtenido de la Legislatura la nueva Constitución que deseaba, provocó de propia autoridad la reunión de una convención constituyente. La convención proyectó una constitución liberal que fué sometida á la aprobación directa del pueblo. Atento el resultado del escrutinio, la convención declaró que había sido aceptada por la mayoría del pueblo, lo comunicó á las antiguas autoridades del Estado y convocó á elecciones para crear otras autoridades, organizándose en consecuencia un nuevo gobierno que empezó á funcionar desde el 3 de Mayo de 1842. El gobierno establecido desconoció la validez de todos estos actos, declarándolos revolucionarios. El gobernador elegido acudió á las armas y en esta circunstancia fué que Borden allanó el domicilio de Luther para apoderarse de su persona en cumplimiento de órdenes militares que había recibido al efecto. En 1843, pasados los sucesos y restablecido el orden, Luther se querelló contra Borden ante la Corte del distrito, alegando que era inconstitucional el gobierno por cuyas órdenes había procedido al allanamiento de su domicilio.

La Corte de distrito rechazó la querella declarando su incompetencia para desconocer la constitucionalidad del antiguo gobierno del Estado y su sentencia, traída en apelación ante la Corte Suprema, fué recién confirmada en 1848, lo que, séame lícito observarlo de paso, revelará á los yankees del Sud que los pleitos duran también años entre los yankees del Norte (Aplausos).

Por lo que respecta á la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en materia de intervenciones, la sentencia declara que: «Las cortes de justicia uniformemente sostienen que corresponde al poder político « declarar si el gobierno legal ha sido depuesto ó nó « y cuando esta decisión haya tenido lugar, deben « limitarse á tomar nota de ella como la ley suprema « del Estado, sin necesidad de informes verbales ni examen de testigos.»

En lo relativo á la jurisdicción constitucional, la sentencia estatuye que: «La sección 4ª del artículo 4º de  
« la Constitución de los Estados Unidos garante á cada  
« Estado una forma republicana de gobierno, prote-  
« giéndolos contra invasiones, etc. Con arreglo á este  
« artículo de la Constitución, toca al Congreso deter-  
« minar qué clase de gobierno es el que se halla esta-  
« blecido en un Estado. Como los Estados Unidos  
« garanten á cada Estado una forma republicana de go-  
« bierno, el Congreso debe necesariamente decidir qué  
« gobierno es el establecido en el Estado, antes de  
« poder determinar si es republicano ó nó. Y cuando  
« los Senadores ó representantes de un Estado son  
« admitidos en los consejos de la Unión, la autoridad  
« del Gobierno, bajo el cual han sido nombrados, así  
« como su carácter republicano, es reconocido por la  
« competente autoridad constitucional. Esta decisión  
« es obligatoria para los otros Departamentos del Go-  
« bierno, y no puede ser cuestionada por un tribunal  
« judicial.»

Desarrollando la misma doctrina, la sentencia agrega que: «Pertenece igualmente á la antes citada cláusula  
« de la Constitución lo relativo á proveer á los casos  
« de violencia doméstica. También en estos casos toca  
« al Congreso determinar acerca de los medios que  
« deben adoptarse para hacer efectiva la garantía.  
« Pudo, por lo tanto, si así lo hubiese juzgado más con-  
« veniente, haber atribuído á un Tribunal la facultad de  
« decidir cuando había llegado el caso que requería la  
« intervención del Gobierno Federal.»

Tratando en seguida la cuestión del punto de vista de la legislación vigente, la sentencia dice: «Pero el Con-  
« greso pensó de otro modo, y muy sabiamente sin  
« duda; y por la ley 28 de Febrero de 1795 dispuso que  
« en el caso de insurrección en algún Estado contra  
« el Gobierno del Estado, será permitido al Presidente  
« de los Estados Unidos, sea á requisición de la Legis-  
« latura del Estado, sea á requisición del Ejecutivo,  
« cuando la Legislatura no puede ser convocada, movi-

« lizar las milicias de cualquiera de los Estados en el  
« número que considere necesarias á fin de dominar la  
« insurrección».

En cuanto á la responsabilidad del Presidente usando de esta facultad, que no es suya por la constitución y que le es conferida por ley del Congreso, la sentencia establece: «Si el Presidente ejerciendo este poder cometiese error ó invadiese los derechos del pueblo del Estado, estaría en las facultades del Congreso aplicar por sí mismo el remedio. En cuanto á las cortes, deben administrar la ley tal como la encuentran».

No puede exigirse un documento público más respetable ni terminante que esta sentencia, de perfecto acuerdo con las doctrinas del mensaje de Tyller, escrito cuatro años antes, á pesar del error cronológico padecido por el señor Diputado disidente. Con toda la autoridad legal y moral de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ella consigna en palabras intergiversables que la facultad de autorizar las intervenciones corresponde originariamente al Congreso, que puede legislar sobre ella reteniendo su ejercicio ó confiándolo á otro Departamento del Gobierno y que, aún en este último caso, conserva el derecho de remediar los errores ó los abusos que pudieran cometerse.

En balde se ha procurado menoscabar su importancia decisiva atribuyéndola á un juez de ingrato recuerdo y observando que estas conclusiones solo fluyen de sus considerandos. Cualquiera que sea la reputación del Juez Taney, cuya memoria no estoy obligado á defender, ni la sentencia le pertenece exclusivamente, ni su reputación ha sufrido á causa de las doctrinas que ella contiene. La sentencia ha sido dictada por la Corte Suprema de que Taney solo era un simple vocal y su impopularidad proviene de la sentencia dada en la causa de Drew Scott en contra de las tendencias abolicionistas que actualmente imperan en los Estados Unidos. La otra observación no debía salir del señor Diputado y carece por lo demás de toda significación. Lo primero

porque el señor Diputado la condenó involuntariamente trayendo al debate los considerandos de la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia que anteriormente examiné. Lo segundo, porque así como la parte dispositiva de una sentencia importa la resolución del caso sub judice, así también la exposición de sus fundamentos envuelve la consagración de las doctrinas que con ella se relacionan. (Aplausos).

En atención á lo expuesto, creo que los adversarios del proyecto no son más felices con las decisiones de los Tribunales. Veamos si pueden apoyarse en la doctrina de los autores.

Para proceder con toda la claridad apetecible en esta complicada discusión, he dividido los autores en varias categorías según lo explícito de las opiniones que profesan sobre la cuestión que nos ocupa.

Hamilton, en el número veinte y uno del *Federalista*, Hent en sus comentarios, Rawle y Serjeant en sus tratados sobre la Constitución nada dicen á su respecto; pues ninguno de ellos se ha preocupado de averiguar á qué Departamento del Gobierno compete autorizar cada caso de intervención á los efectos de la garantía que la constitución acuerda á los Estados de la Unión Americana.

Young, en la página 159 de su libro sobre el gobierno constitucional y Curtis en las páginas 65, 157 y 421 de su historia de la constitución traducida por el señor Cantilo tampoco tratan especialmente la cuestión; pero, como no hablan de poder ejecutivo ni legislativo y se refieren siempre á los Estados Unidos y al Gobierno Federal, pueden ser invocados sin violencia en favor del proyecto de la Comisión, puesto que el Presidente de la Unión no alcanza á constituir por sí solo el Gobierno Federal ni los Estados Unidos de Norte América.

Madisson en el número 43 del *Federalista*, declara terminantemente que la facultad de intervenir pertenece al Congreso y como el señor Diputado disidente no ha querido detenerse en este punto, prefiriendo extensas

lecturas de párrafos menos pertinentes á la cuestión, la Cámara me permitirá que repita el párrafo ya citado por el miembro informante de la mayoría de la Comisión. Después de demostrar la necesidad de la garantía, de asegurar que no podía haber sido mejor establecida por la constitución y de mencionar repetidas veces al gobierno federal, dice textualmente:

« En los casos en que sea dudoso de qué lado está  
« la justicia ¿qué mejores árbitros pueden desearse por  
« dos violentas fracciones que acuden á las armas y  
« despedazan un Estado, que los representantes de  
« los Estados confederados que no están inflamados  
« por la llama local? A la imparcialidad de jueces re-  
« unirían la afección de amigos. Ojalá todos los go-  
« biernos libres contasen con un remedio semejante  
« para sus crisis y que un proyecto igualmente eficaz  
« pudiera establecerse para la paz universal de la espe-  
« cie humana».

Son tan categóricas las precedentes palabras de Madison que el señor Diputado disidente, no pudiendo tergiversarlas, ha procurado desvirtuarlas con otras del mismo autor en el número 46 del citado libro. Tan lejos ha ido en este camino que, perjudicando el número 43 á la tesis que el señor Diputado sostiene, no era entonces Madison más que un vulgar escritor que se contradecía á renglón seguido; mientras que, pareciéndole favorable el número 46, con tan poco intervalo de tiempo ya había logrado ser el ilustre Madison. Pero, pronto vamos á ver que la contradicción imputada á Madison solo ha existido en la mente del señor Diputado, y que Madison ha sido, sinó tan ilustre, por lo menos tan ilustrado en uno como en otro número del *Federalista*. Para demostrarlo no amenazaré á la Cámara con nuevas lecturas y me concretaré á simples referencias suficientes para ilustrar su juicio.

El número 46 del *Federalista*, al cual pertenecen los párrafos leídos por el señor Diputado, lleva el siguiente epígrafe:—«Resumen del asunto tratado en el número anterior y examen comparativo de los medios de in-

« fluencia así del gobierno federal como de los gobiernos de Estado. » A fin de apreciar la verdadera significación de este número del *Federalista*, tenemos, pues, que remontarnos al número anterior, que es el 45, escrito por el mismo Madison y que tiene por epígrafe: — « Discusión del supuesto peligro que los poderes de la Nación pueden hacer pesar sobre los gobiernos locales. » Estas simples consideraciones bastan para mostrar que todos los párrafos leídos por el señor Diputado no tenían por objeto establecer entre los poderes mismos de la Unión un paralelo desfavorable para la circunspección y respetabilidad del Congreso Nacional, y mucho menos ocuparse directa ni indirectamente del departamento del gobierno á quien corresponde autorizar las intervenciones. Un estudio más prolijo de ambos números del *Federalista* pondría, además, en evidencia que su único y verdadero propósito era desvanecer los recelos que los Estados empezaban á manifestar por el porvenir de sus instituciones locales que creían en peligro de ser absorbidas en un tiempo más ó menos remoto por la creación de un gobierno general, tal cual nunca había existido en aquel país.

Si alguna deducción pudiera sacarse de ambos números del *Federalista* con referencia á la cuestión que debatimos, ella sería favorable á los fines de los sostenedores del proyecto de la Comisión; porque si la creación de un gobierno nacional pudiera poner en riesgo inminente la existencia de los gobiernos de Estado, sería leal y prudente colocar las instituciones locales y todo lo que se refiere al ser político de los Estados bajo la doble salvaguardia de los poderes legislativo y ejecutivo de la Nación, oponiendo así una barrera insalvable á las tendencias centralizadoras que pretendieran aniquilar la soberanía interna de los Estados. (Aplausos).

Story en sus famosos comentarios á la Constitución americana, tomo II, páginas 629 á 663, con una franqueza que hace honor á su ilustración, declara que nada nuevo ni mejor tiene que decir sobre la materia y se

limita á transcribir lo que Hamilton y Madisson habían escrito en los números 21 y 43 del *Federalista*, de suerte que puedo vindicar en favor del proyecto la autoridad por todos atacada del célebre jurisconsulto Story.

Pomeroy, en el párrafo 210 de su introducción al derecho constitucional, publicada en 1865, se decide por la competencia del Congreso, cuando, después de fundar el derecho de los Estados para la calificación de los electores, agrega: «A pesar de que la Constitución da á este respecto á los Estados una facilidad tan grande, tan próxima á lo absoluto, ella está con todo limitada por el artículo 4º, sección 4ª, que dice que los Estados Unidos garanten á cada Estado una forma republicana de gobierno. Parece ser evidente que un Estado, con el pretexto de determinar las calificaciones de los electores, podría colocar el poder en manos de una oligarquía y erigir un organismo político que no sería republicano bajo ningún respecto. Si esto se hiciese, el Congreso podría indudablemente intervenir en ese Estado al objeto de garantizar la forma república.»

Farrar, publicista moderno, que ha publicado en 1867 un Manual de la Constitución Norte Americana, se declara también por la competencia constitucional del Congreso, diciendo en la página 228, párrafo 214: «La 4ª sección del artículo 4º es otro ejemplo de poderes importantísimo que deben ser ejercidos por el Congreso, que no pueden serlo sin él y donde sin embargo no se le escita á hacer cosa alguna. Los Estados Unidos garanten á cada Estado una forma republicana de gobierno y protegerán á cada uno de ellos contra invasiones, y á requisición de la Legislatura ó del Ejecutivo, cuando la Legislatura no puede reunirse, contra violencias domésticas. El deber impuesto aquí es á los Estados Unidos, á todo el Gobierno, como el deber de ejecutar la Constitución. Pero aquella parte de él que requiere ó admite legislación cae por fuerza en el Congreso, como la rama

« legislativa y como que tiene todo el poder legislativo. Tampoco pertenece al Congreso porque por disposiciones especiales el Congreso ha sido constituido depositario de ciertos poderes que deben necesariamente ejercerse al cumplir con los deberes impuestos aquí »

Paschal, posterior á Farrar, pues ha publicado su libro en 1868 y que es probablemente el último autor que ha comentado la Constitución Norte Americana, es también de la misma opinión.

En el párrafo 233, página 242 de su Constitución, anotada, inserta la cláusula constitucional de los Estados Unidos, indica que es la única vez que la Constitución habla del Gobierno en nombre corporativo, dice que la cuestión de competencia surgió con motivo de las leyes de reconstrucción y transcribe parte de la sentencia de la Suprema Corte en el caso de *Luther versus Borden*.

Ocupándose en seguida de la intervención para garantizar la forma republicana de gobierno, en la página 244 dice textualmente que: « Si se examina la práctica, el precedente de *Luther versus Borden* y la opinión común, la cuestión aparece resuelta en favor de la facultad del Congreso para determinar cuando un Gobierno de Estado es ó nó republicano. »

Pasando luego á las intervenciones para proteger las autoridades locales contra violencias domésticas, termina en la página 246 con las siguientes palabras: « Si surgiese un conflicto armado, se produce un caso de violencia interna y una de las partes debe hallarse en insurrección contra el gobierno legal. Como las leyes dan un poder discrecional al Presidente para ejercerlo según su juicio respecto de los hechos, él es el único juez de la existencia de esos hechos. Si erra, el Congreso puede aplicar por sí el remedio adecuado. »

Después de esta detenida exposición de las doctrinas de los tratadistas Norte Americanos y en defecto de autoridades propias á que acudir, me creo autorizado para sentar que los adversarios del proyecto no



pueden apoyar sus objeciones en las doctrinas de los autores.

Voy, pues, á concluir esta parte de mi discurso con un reto lanzado á la faz de la Cámara. Provoco á los contrarios á que citen una convención constituyente, un Congreso Legislativo, un Tribunal de Justicia ó un expositor de derecho constitucional, chico ó grande, nuevo ó viejo, de mucha ó poca fama, que haya negado al Poder Legislativo y atribuído exclusivamente al Poder Ejecutivo el derecho originario y privativo de autorizar las intervenciones en el territorio de los Estados.

Mientras no se haga esa cita, repetiré que el Congreso debe vindicar para sí esa facultad apoyado en la autoridad de las constituciones, de los congresos, de los tribunales y de los autores. (Aplausos).

Señor Presidente: Puedo todavía continuar, pero me falta aún la tercera parte del discurso que será algo extensa.—Siento haber ocupado tanto la atención de la Cámara y no quisiera seguir abusando de su benevolencia. Propongo, pues, que se levante la sesión quedando con la palabra para el día siguiente.

Así se acordó por lo avanzado de la hora y se levantó la sesión á las 5 de la tarde en medio de prolongados aplausos.

---

### Sesión del 11 de Agosto

*Señor Quintana*—Señor Presidente: en la sesión anterior he puesto de manifiesto la constitucionalidad del proyecto de la Comisión. Para terminar mi tarea, cumpliendo la promesa hecha, paso ahora á demostrar su inquestionable superioridad sobre el remitido por el P. E. y prohibido por el señor Diputado disidente. Al

efecto, los estudiaré separadamente; más no se alarme la Cámara temiendo que sea demasiado extenso. He usado demasiado de su indulgencia para tomarme la libertad de abusar de ella. Seré, pues, tan sobrio en lecturas como parco en reflexiones.

Establecido, como lo está, que la facultad de autorizar las intervenciones pertenece constitucionalmente al Congreso, el artículo primero del proyecto que sostengo no se presta á la mínima objeción. El no hace más que declarar que toda intervención debe ser autorizada por ley especial y no es, por consiguiente, más que la consagración del principio general en presencia del caso particular. Defender la atribución del P. L. para entregarla en seguida al P. E. sería un contrasentido inexplicable, porque envolvería una abdicación condenada por todo principio de buen gobierno. Es, por consiguiente, lógico y constitucional que el Congreso se reserve en general el uso de una facultad de ejercicio tan delicado y peligroso.

Más como el Congreso solo funciona ordinariamente durante cinco meses del año, era posible y aún probable que, reservándose absolutamente el uso de la facultad de intervenir, las tentativas revolucionarias esperarán el período del receso legislativo para tomar desarmado por el momento al Gobierno Federal y confiar su triunfo á la perniciosa influencia de los hechos consumados. Los peligros de una situación semejante no podían ocultarse á la previsión de los autores del proyecto y de aquí su artículo segundo habilitando en tal caso al Poder Ejecutivo para intervenir á fin de proteger ó restablecer las autoridades legales.

La autorización no comprende las intervenciones para garantizar la forma republicana de gobierno; pero esta restricción implícita no puede servir de argumento contra el artículo de que me ocupo. En los Estados Unidos, las leyes del 92 y del 95, contienen idéntica restricción y en la misma forma, pues solo acuerdan el dinero y las milicias necesarias para proteger las autoridades constituidas contra las violencias domésticas que compromete-

tieran su existencia. La falta de urgencia viene también en apoyo de semejante restricción, porque los hechos capaces de trastornar la forma republicana de gobierno, se producen generalmente de una manera gradual y paulatina que permite preveerlos con anticipación, impedirlos con acierto ó sofocarlos en oportunidad. Si algún caso saliera de estas condiciones generales y por su naturaleza requiriera una solución inmediata, para eso el Poder Ejecutivo está constitucionalmente facultado á convocar extraordinariamente al Congreso á fin de proveer con prontitud á todas las emergencias que pudieran surgir. Lo que hay de cierto es, pues, que este artículo no puede ser rechazado por aquellos que pretenden tener siempre armado el brazo del P. E. para descargar el rayo sobre la cabeza de los revoltosos; porque no sería regla de buena lógica rehusar una parte so pretexto de que no se dá el todo. (Aplausos).

La dificultad podría más bien venir de parte de aquellos que defienden la prerogativa del P. L. y que podrían ver en esta autorización una delegación parcial que con el andar de los tiempos podría degenerar en una verdadera abdicación. Pero ellos mismos deben tranquilizarse con la doctrina de Cowley y con la precaución final del proyecto. Según Cowley en la página 116 de sus Limitaciones Constitucionales, publicadas á fines del año pasado, autorizaciones del género de la que nos ocupa, no importan delegaciones inconstitucionales de los poderes legislativos del Congreso. y no pasan de leyes condicionales para casos cuyo arribo debe ser apreciado por aquél á quien se defiende la averiguación de su existencia. Según el proyecto, esa autorización no es tan definitiva y absoluta que no se haya tomado precaución alguna contra su abuso, y su correctivo se halla por el contrario en el artículo 4º imponiendo al Ejecutivo la obligación de someter sus actos á la aprobación del Congreso. Nada hay, pues, que decir del artículo 2º.

El tercero es la consecuencia lógica del anterior. Los medios ordinarios del Poder Ejecutivo podrían ser in-

suficientes para cumplir con todos sus deberes de inter-  
ventor y era por consiguiente indispensable habilitarlo  
de todos los recursos necesarios á fin de lograr el sano  
propósito de la autorización conferida. De aquí, la fa-  
cultad que se le otorga por este artículo para disponer  
de las milicias y hacer todos los gastos necesarios siem-  
pre que los sucesos lo obliguen á intervenir de acuerdo  
con el proyecto en discusión.

Llegamos por fin al cuarto y último artículo de que  
antes hice mención y que ha sublevado con más fuerza  
los ánimos de los adversarios. Desde que no se trataba  
de una verdadera abdicación, ni aún de una simple de-  
legación de facultades, nada más natural que imponer  
al Poder Ejecutivo la obligación de someter á la apro-  
bación del Congreso el uso que hiciera de su autoriza-  
ción para intervenir en el orden interno de las Provin-  
cias. Confiarle esta autorización para un caso cualquiera  
sin más reglas que su propio juicio, ni más limitación que  
su misma voluntad, habría equivalido á desprenderse en  
parte de la facultad de intervenir, y aún llegado á renun-  
ciar al elevado rol de pasar todos sus actos por el crisol  
de su examen á los efectos de la Constitución.

Contra esta saludable doctrina se eleva la temeraria  
pretensión de que los actos del P. E. no pueden ser con-  
trolados por el P. L., sinó mediante el juicio político y  
de que sus errores no pueden ser corregidos por ningún  
otro Departamento del Gobierno. Esta pretensión, que  
no es legítima en tesis general, es de todo punto infun-  
dada en el caso especial que discutimos. Para mí,  
es tan inexacto pretender que ningún acto político ni  
administrativo del Presidente de la República pueda ser  
traído á juicio por el Congreso sinó mediante acusación  
formal, como sostener que todo acto político ó adminis-  
trativo deba ser sometido á su aprobación. La verdad  
no está en ninguno de ambos extremos igualmente ab-  
solutos y por lo mismo igualmente falsos. (Aplausos).

A fin de probarlo, siento la necesidad de apoyarme  
nuevamente en autoridades reconocidas y así lo haré  
con la brevedad posible.

Según el inciso 27 de nuestra Constitución, el Gobierno Federal está obligado á afianzar sus relaciones exteriores por medio de tratados de paz y comercio; mientras que según el inciso 14, artículo 88, el Presidente concluye esos tratados y que, según el inciso 19, artículo 67, el Congreso los acepta ó rechaza. Por el artículo 4, el Gobierno Federal provee á los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional; mientras que, por el inciso 13, artículo 80, el Presidente recauda é invierte las rentas públicas con arreglo al presupuesto y que, por el inciso 7, artículo 67, el Congreso fija anualmente el presupuesto y aprueba ó desecha la cuenta de su inversión.

Mediante el artículo 23, es derecho del Congreso declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior, mientras que mediante el inciso 19, artículo 87, puede hacerlo el Presidente durante el receso legislativo y que, mediante el inciso 26, artículo 17, puede el Congreso aprobar ó suspender ese estado de sitio así declarado. Estas prescripciones se hallan más ó menos consignadas en términos análogos en las Constituciones Norte-Americana y Suiza; pero esta última contiene la disposición especial del inciso 11, artículo 90, en cuya virtud el Consejo Federal está autorizado para disponer de las tropas necesarias en caso de intervención, bajo reserva de convocar inmediatamente á los Consejos si excediesen de dos mil hombres ó permaneciesen reunidos más de tres semanas.

Las prescripciones relativas á los tratados y los gastos bastarían á mi propósito en general porque versan sobre actos que el Congreso debe juzgar sin necesidad de acusación alguna. La disposición referente al estado de sitio la satisfaría en particular, porque la intervención importa un verdadero estado de sitio contra las instituciones locales. La última declaración de la Constitución Suiza, tan especial y tan directa al caso en cuestión, viene á llevar la convicción al ánimo más parcial.

Nuestros Congresos y Ejecutivos siempre han reco-

nocido la misma doctrina. En el caso de la intervención á Mendoza, citada en la sesión anterior, el Presidente mandó cesar una intervención á virtud de simple decisión del Senado. En la de Catamarca, también citada en la misma sesión, la ley obligaba al Presidente á someter todas sus medidas á la sanción del Congreso. La misma administración actual ha enviado á su aprobación los decretos sobre la exposición nacional, sobre la clausura de la consolidación de la deuda y otras materias, acerca de las cuales había dictado varias disposiciones durante el receso legislativo. Y al hacerlo, ha procedido con cordura, porque, sin perjuicio de mis opiniones individuales acerca de las intromisiones de un Departamento del Gobierno en los asuntos que son del exclusivo resorte de otro, no podía menos de someterse á la necesidad de buscar en la aprobación del Congreso la sanción legislativa de que dichos decretos carecían.

Los Congresos y Presidentes Norte-Americanos han observado la misma conducta en casos semejantes. En dicha sesión expuse todos los antecedentes relativos á la intervención de Rhode Island, de los cuales resultaba que, á la simple requisición de la Cámara de Diputados, el Presidente Tylley se apresuró á poner en su conocimiento hasta las cartas confidenciales que había cambiado sobre el asunto. Entonces recordé también el ejemplo de la reconstrucción de los Estados del Sud, en que el Congreso había desaprobado todos los procederes del Ejecutivo y dictado un nuevo plan de reconstrucción para dichos Estados. No se ha citado en contraposición un solo acto en que cualquier Congreso de aquella Nación se haya reconocido incompetente para obrar idénticamente en casos de la misma naturaleza.

Nuestros tribunales no han tenido aún ocasión de fallar en asuntos de este género; pero en el único que puede ofrecer algún punto de contacto, la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional la pretensión de ejercer facultades legislativas durante el receso.

del Congreso, aún bajo calidad de darle oportunamente cuenta para su aprobación ó rechazo.

Y por lo que hace á los Norte-Americanos, hemos visto que, en todos los casos ocurridos, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha consagrado en sus decisiones la supremacía del Poder Legislativo y su competencia para traer á examen los actos del Poder Ejecutivo en casos de intervención ú otros análogos, aplicando el remedio adecuado contra los errores ó los abusos en que pudiera haber incurrido. En el caso de *Martin versus Mott*, la Corte, por conducto del Juez Story, declaraba que la vigilancia de los Representantes de la Nación era una de las más grandes garantías contra todo exceso en el uso de la autorización conferida por la ley del 95 para hacer gastos y disponer de milicias á los objetos de su sanción. En el caso de *Luther versus Borden*, la misma Corte, por intermedio del Juez Taney, después de comentar la cláusula constitucional y la disposición legislativa de la materia, decía que si el Presidente, ejerciendo la autorización de intervenir, cometiera error ó invadiera los derechos de los Estados, el Congreso tenía plena facultad para avocarse el conocimiento de los hechos y aplicarles el remedio que ellos demandaran. Y si algo necesitara yo agregar para poner de relieve toda la influencia decisiva de ambas sentencias, me bastaría recordar á la Cámara que la ley de 1795, como la de 1792, no contenían cláusula alguna imponiendo al Presidente la obligación de someter á la aprobación del Congreso los actos que ejerciera á virtud de la autorización de su referencia, y que sin embargo, la Corte no ha trepidado en declarar espontáneamente el derecho del Congreso para proceder, diré así, de oficio, trayendo ante él todos esos actos del Poder Ejecutivo.

Los autores no son menos favorables á la doctrina que sostengo.

En otra ocasión, Pomeroy ha sido invocado en su contra: esto no obstante, yo no puedo dejar de citarlo en su favor. Las palabras de este autor, recordadas en apoyo del P. E., se limitan á establecer en general que

es una rama independiente del Gobierno, que es exclusivo en el ejercicio de sus atribuciones y que solo puede alcanzarle una acusación cuando haya usado criminalmente de su poder, como puede verse en la página 7 del capítulo sobre los poderes ejecutivos del Gobierno de los Estados Unidos, traducido por el Sub-Secretario del Ministerio del Interior. Pero el mismo autor, desde la página 10 á 19, analiza extensamente la diversa naturaleza de las funciones del Ejecutivo dividiéndolas en tres categorías distintas. La primera comprende el manejo de las relaciones exteriores, la iniciativa en la legislación y la convocación ó próroga del Congreso—estas funciones le pertenecen constitucionalmente, son independientes de toda legislación y su correctivo estriba en el juicio político. La segunda incluye como las funciones más importantes las que le competen como Comandante en Jefe, la facultad de perdonar y el poder de nombrar empleados—éstas también le pertenecen constitucionalmente pero no pueden ser ejercidas sin una ley que ofrezca la oportunidad de hacerlo, é imponen así mismo responsabilidades efectivas por medio del juicio político. La tercera abarca las demás funciones del Ejecutivo, dependen completamente de la voluntad del Congreso y su ejercicio puede ser reprobado sin necesidad de una acusación previa.

Como este es el punto cardinal de la cuestión, la Cámara vá á oír las palabras terminantes del autor. Definiendo la naturaleza de estos poderes, en la página 15 dice textualmente que: « La tercera clase de las atribuciones y funciones ejecutivas son aquellas que dependen de algunas leyes anteriores del Congreso, « no solo por las ocasiones y oportunidades de su ejercicio, sinó también por su número, carácter y objeto. « Sobre esta clase la Legislatura tiene un poder completo. Sanciona las leyes que deben ejecutarse. » Hablando de las personas que deben ejercitarla, agrega: « No es necesario dejar nada á la discreción del Presidente. A la verdad, la ejecución inmediata, puede « ser confiada á determinados empleados subalternos,



« y estos empleados pueden ser dirigidos en los términos más claros y positivos en la marcha que deban seguir y en los deberes que tengan que llenar. En tales casos, el único deber del Presidente es tener cuidado de que las leyes sean ejecutadas fielmente. Esta clase, evidentemente abraza la mayor parte de la legislación del Congreso, y de las funciones ejecutivas que en ellas se basan. » Hablando de la responsabilidad de los ejecutores, continúa diciendo: « Pero con respecto á las funciones comprendidas en la tercera clase, el Presidente puede ser privado de toda participación. Empleados especiales pueden ser encargados por el Congreso de llevar á cabo sus medidas. Esos empleados están sujetos á una doble dependencia. » Y termina el autor apoyando sus doctrinas en una sentencia que la Corte Suprema de los Estados Unidos expidió por conducto del célebre justicia mayor Marshall en el gran caso de Marbury versus Madisson.

A esta clase de funciones pertenece la de intervenir que nos ocupa, de manera que, desde que la facultad de declarar el caso de intervención pertenece al Congreso y desde que puede autorizar al Presidente para hacerlo durante el receso, es evidente que está en su derecho para imponerle las limitaciones que reputa convenientes y traer la intervención á su examen para tomar las medidas á que diere lugar, doctrina que puede también apoyarse en la autoridad de Paschal, el cual reproduce la declaración de la Corte en el caso de Luther versus Borden, como lo demostré con sus propias palabras leídas en la sesión anterior.

Stuart-Mill, autor citado ante la Cámara de Senadores para demostrar las facultades de la Legislatura de San Juan, en la página 103 de la traducción del doctor González, dice que: « Gobierno representativo, significa que la Nación entera ó al menos una parte numerosa de ella, ejerza por medio de los Diputados que nombra periódicamente el poder de inspección superior, poder que en todas las constituciones debe residir en alguna parte. Ese poder supremo de la

« Nación debe poseerlo en toda su perfección. Ella  
« debe ser cuando quiera, la señora de todas las opera-  
« ciones del Gobierno. No es necesario que la ley  
« constitucional misma le dé este imperio». Y en  
la página 275, agrega: « No he tomado en considera-  
« ción el caso en que un gran poder centralizado en-  
« tre las manos del primer magistrado y el insuficiente  
« amor del pueblo á las instituciones libres, diesen á  
« este magistrado ocasión de salir triunfante en una  
« tentativa para destruir la Constitución y usurpar el  
« poder. En donde tal peligro existe no debe haber  
« primer magistrado á quien el parlamento no pueda  
« reducir con un solo voto á la condición de hom-  
« bre privado. En un estado de cosas en que esta  
« falta de fé no es posible, esta prerogativa del parla-  
« mento por enorme que parezca, no es sinó una débil  
« garantía ».

El doctor González, catedrático de Derecho Consti-  
tucional de la Universidad de Buenos Aires, también  
trae algo aplicable al punto en la obra que acaba de  
publicar bajo el título de «Lecciones de Derecho Con-  
stitucional». En la página 300 de esa obra, que es el  
manual en que nuestra juventud estudia los sanos prin-  
cipios del Gobierno libre, el doctor González dice: «La  
« Cámara que tiene mayor número de miembros, la que  
« que representa el número, es naturalmente la llamada  
« á fiscalizar la conducta de los que ejercen las fun-  
« ciones de los otros Departamentos de Gobierno. Aún  
« cuando no sea para someter á un juicio á un emplea-  
« do que no corresponda debidamente á la confianza  
« que en él se ha depositado, se ha considerado que esta  
« es una de las más importantes funciones que puede  
« ejercer la Asamblea representativa, la que puede ser  
« más provechosa para la libertad, y contener eficaz-  
« mente los excesos de los que ejercen el poder. Aún  
« á su intervención en la formación de las leyes le  
« dan los maestros de la ciencia constitucional menos  
« importancia que al ejercicio de esa facultad fiscali-  
« zadora ».

El mismo Stuart-Mill ya citado, viene en apoyo del artículo en discusión, con las siguientes palabras transcritas por el doctor González: « El verdadero oficio de una Asamblea representativa, dice Mr. Mill, no es gobernar—es radicalmente impropia para él—sinó vigilar y fiscalizar el gobierno; poner en claro todos sus actos; exigir la exposición y justificación de ellos, cuando parecen contestables; censurarlos, si son condenables; arrojar de sus empleos á los hombres que componen el gobierno, si abusan de su encargo ó si lo desempeñan de un modo contrario á la voluntad expresa de la Nación y nombrar sus sucesores, sea expresa, sea virtualmente. »

A pesar de lo concluyente de las precedentes opiniones, puedo todavía invocar en mi auxilio la respetable autoridad de Clay, publicista de la más alta reputación en los Estados Unidos y cuyos discursos corren impresos en un tomo que no supongo ajeno á la ilustración del señor Diputado. En ellos, Clay distingue los Poderes Ejecutivos que emanan directamente de la Constitución, de los que incumben al Presidente como ejecutor de las leyes autoritativas. Siendo los primeros otorgados por el pueblo, á éste solo corresponde juzgar de su buen desempeño por medio del sufragio, medio indirecto, ó del juicio político, medio extraordinario, previsto por la ley fundamental, en el cual no procede el Congreso como Cuerpo Legislativo, sino en virtud de una facultad excepcional que el pueblo ha querido conferirle para casos también excepcionales. Pero cuando el Presidente obra á virtud de autorizaciones acordadas por el Congreso, á este corresponde corregir los errores á que diere margen su ejercicio, sin acusación alguna y solo por actos de legislación sobreviniente. El Congreso conoce el espíritu y alcance de sus autorizaciones: si sus votos no han sido satisfechos en la ejecución, al Congreso corresponde legislar para su mejor cumplimiento y remediar los errores cometidos al traducirlos en hechos reales.

No es, pues, el juicio el único medio de corregir los errores del Poder Ejecutivo al encarnar en los hechos

la voluntad del Congreso, é insistir en semejante pretensión sería desconocer las causas que puedan motivarlo, tergiversar su carácter especial y olvidar su verdadero objeto.

Las constituciones, las leyes, las sentencias y los autores nos enseñan á porfía que un simple error no es causa bastante para autorizar la acusación y la condenación que constituyen los elementos del juicio político. Tengo en la mano el extracto, no de catorce ni de veintiocho Constituciones Norte-Americanas, sinó de todas las Constituciones de nuestro país y de los Estados-Unidos, y ninguna de ellas admite el juicio político por un error cualquiera. Los que han ido más lejos, solo han llegado hasta establecerlo por mal desempeño en el ejercicio de las funciones oficiales, lo que exige cuando menos una série de errores capaces de revelar claramente la plena ineptitud del hombre para el puesto. Las leyes orgánicas sancionadas hasta la fecha confirman la misma doctrina. Las resoluciones dictadas en los raros casos de acusación política, demuestran también su verdad. Los publicistas, en fin, la profesan unánimemente. Ni podía ser de otro modo; puesto que esperar el acierto perpétuo habría sido ciega imprevisión, y castigar un simple error con la destitución sería falta imperdonable.—Ciega imprevisión, porque envolvería el desconocimiento de la naturaleza humana;—falta imperdonable, porque traería mayores males que el que debía reprimirse. (Aplausos).

El juicio político versa, por otra parte, sobre los hechos, pero solo afecta las personas, y las personas en cuanto á su carácter oficial. La destitución es su consecuencia forzosa en caso de condenación. Puede llegar hasta la inhabilidad para desempeñar puestos públicos; pero ahí se detiene. Sus efectos no alcanzan á los hechos; por ese medio no se borran, enmiendan ni modifican. Las personas mismas de los que fueron funcionarios públicos escapan á su acción limitada y es á los Tribunales de Justicia á quienes, mediante nuevo juicio, únicamente compete castigar el crimen ó la

falta. Y he dicho castigar, porque la destitución, más que una pena contra el magistrado por sus desmanes oficiales, es una garantía del pueblo contra sus propios desaciertos electorales. Así lo demuestra un estudio prolijo del Derecho Constitucional sobre el punto.

Por lo mismo, el objeto del juicio político no es juzgar los hechos para aplicarles la solución adecuada, sino desnudar á los hombres de su carácter oficial para impedir en lo futuro que conviertan en daño del pueblo el poder que para su bien se les confió. Así es como la grandeza del juicio político estriba en su propia pequeñez, si me es lícito hablar así. ¿Qué es el pasado, tan limitado por la naturaleza misma de las cosas, en presencia del porvenir cuya magnitud no es susceptible de ser medida por la inteligencia humana?

De consiguiente, el juicio político no puede por sí solo ser el medio más adecuado para remediar los errores que el Ejecutivo pudiera padecer en el ejercicio de la delicada facultad de intervenir; porque ó ellos darían margen á la destitución ó no. En el primer caso ¿sería lógico atropellar al funcionario y respetar sus desaciertos? En el segundo ¿respondería á los fines para los cuales todo gobierno ha sido instituido, cruzarse de brazos ante las dañinas consecuencias del error por más inocente que fuera? Todo menos eso. Rompamos, pues, valientemente las horcas caudinas á que se nos quiere sujetar y declaremos que el Poder Ejecutivo está obligado á someter á la revisión del Congreso todos los actos que ejecute en materia de intervenciones (Aplausos).

Me parece que he dicho bastante sobre el proyecto de la Comisión; pero tengo algo que agregar sobre el del Poder Ejecutivo.

Señor: En las memorables sesiones de Junio de 1852, el actual Ministro del Interior sostenía que no era la anarquía sino el despotismo lo que había perdido á la República. Desde el voto que rechazó el Acuerdo de San Nicolás, yo creía condenada para siempre la mons-

truosa teoría de los poderes fuertes; pero, en presencia del proyecto del Poder Ejecutivo que pretende rehabilitarla, tenemos que aprontar las armas para combatirla de nuevo. Parece que estuviéramos destinados á no tener más que gobernantes que vengan á exigirnos poder tras poder y á no presenciar jamás el espectáculo consolador de un Presidente que no necesite más facultades que las que le acuerda nuestra carta fundamental, que no requiera más poder que el poder de la ley y de la opinión. (Aplausos).

Porque ¿qué significa en definitiva el proyecto cuya sanción se nos demanda? Según la inteligencia oficial, significa la concesión de las facultades más amplias, absolutas y extraordinarias en materia de intervenciones, la sanción más completa, segura é indebida para todos los errores del P. E. en estos asuntos y la impunidad más inmoral, abusiva y peligrosa para todas las faltas que pudiera cometer en adelante (Aplausos). Despojémonos de la facultad de intervenir, declarémonos desarmados contra los desaciertos del P. E., no nos reservemos más que la prerogativa del juicio político y entregaremos las provincias á la discreción del Presidente, daremos carta blanca á todos sus caprichos y no tardaremos en caer en la más vergonzosa impotencia ante sus mismas culpas. Dado nuestro estado actual, desde entonces en adelante las autoridades provinciales tendrán que buscar todo apoyo en la buena voluntad del Presidente; éste podrá hacerlas ó deshacerlas á su antojo, y á su turno hallará en ellas sus elementos para formar un Congreso, cuyo personal convertirá el mismo juicio político, no en la débil garantía de que habla Mill, sinó en la engañosa ilusión de mejores tiempos. Bajo tal estado de cosas, el pueblo no tendría más arca de salvación que la misma voluntad del Presidente que no quisiera abusar de su omnímodo poder. Pero en todo pueblo libre las garantías públicas no deben reposar sobre el arbitrio de los hombres sinó sobre la eficacia de las instituciones. (Aplausos).

No es esto por cierto lo que se ha hecho en los mismos Estados Unidos á quienes se nos propone imitar una vez más. Allí ni las leyes ni la jurisprudencia autorizan al Presidente para intervenir á fin de garantir la forma republicana de gobierno.—Allí en ningún caso lo habilitan para negarse á someter sus actos al examen del Congreso. Allí por el contrario, la requisición de una Cámara basta para el envío hasta de la correspondencia epistolar sobre intervenciones. Pero, aún cuando así no fuera, la doctrina del Poder Ejecutivo, buena tal vez allá, sería pésima entre nosotros á causa de las profundas diferencias que existen entre las situaciones respectivas de entre ambos países.—Los Estados Unidos, durante cerca de un siglo de vida constitucional, apenas han tenido el anuncio de una intervención en Rhode Island y otra intervención ejercida para la reconstrucción de los Estados del Sud que se habían revelado con el siniestro propósito de desligarse de sus hermanos del Norte; mientras que la República Argentina, en poco más de una docena de años que vive bajo el régimen de la Constitución Federal, ha sufrido multitud de intervenciones que, por fútiles pretextos, la han ensangrentado á veces desde el Plata hasta los Andes. (Aplausos). Por esto es que los publicistas que se nos propone consultar, Curtis y Jhonson, Pomeroy y Sumner, excelentes constitucionalistas Norte-Americanos, serían unos pésimos legisladores Argentinos, pues ignoran completamente las condiciones de nuestro país y no podrían aprovechar las lecciones de nuestra historia, de nuestra triste y luctuosa historia en materias de intervenciones. (Bravos y ruidosos aplausos en la barra).

*Señor Presidente* — Permítame el señor Diputado, voy á hacer leer los artículos del reglamento relativos á las manifestaciones de la barra. (Se leyó)

Sentiría verme en el caso de tener que cumplir el reglamento haciendo desalojar la barra.

*Señor Quintana*—Por eso es que nosotros, no debemos esperar el consejo de esos constitucionalistas, sobre todo cuando (yo debo decirlo en honor de nuestro país)

no hemos necesitado del ejemplo de los Estados Unidos para realizar pacíficamente y en honor de los principios una de las más grandes conquistas de la humanidad—la abolición de la esclavatura—que cincuenta años más tarde ha pasado allí como medida de guerra después de una contienda que ha costado varios años de luchas, muchos millares de hombres y más millones de pesos.

Dejar las cosas en su estado actual, á pesar de las declaraciones oficiales acerca de la peligrosa facultad de intervenir, sería abdicar las prerogativas del Congreso exponiendo seriamente la paz pública que debemos empeñarnos en salvar á toda costa, porque es la gran necesidad de estos países tan azotados por la guerra civil. Salir de esta situación por medio del proyecto de la Comisión no es debilitar al P. E., sinó dejarlo tal cual es por la constitución—demasiado fuerte para posternarse ante la anarquía; demasiado débil para fundar el despotismo. La confusión y el desorden solo pueden venir de la inacción, si el Presidente, en defecto de la autorización que pide, interviene indebidamente con fuerzas de línea ó deniega no menos indebidamente una intervención constitucional. El caos político no dejaría de venir, si se produjese una disidencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo acerca de la situación de una Provincia cualquiera. Todo revela la necesidad de someter en último resultado la materia al crisol de un solo Departamento y ese Departamento no puede ser otro que el Legislativo.

Si los Congresos fueran como los ha bosquejado el señor diputado disidente con los colores más recargados de su paleta y cuyas palabras deben haber caído como plomo hirviendo sobre el corazón de sus colegas, no debía detenerse donde se ha detenido, sinó que, avanzando con energía en el camino de la verdad, ha debido decir franca y lealmente á los pueblos que, lejos de servir para custodiar sus instituciones, eran un peligro que los amenazaba de muerte, que eran una rémora puesta á su adelanto, que eran un resorte perjudicial á la buena marcha de la máquina política y que debían en tal concepto suprimirse.



*Señor Montes de Oca*—Me permitirá señor Diputado que le interrumpa. Yo le aseguro que he de demostrar al fin de esta sesión que no lo he dicho yo, que no lo he inventado, y sí que lo ha dicho é inventado uno de los primeros hombres de la América del Norte.

*Señor Quintana*—Pero yo he de replicar al señor Diputado, anunciando á la Cámara que ha olvidado prevenirle que ese hombre, Madisson, se refería al antiguo Congreso de la Confederación en condiciones opuestas al nuevo Congreso de la Unión, y agregando que ningún publicista medianamente acreditado de los Estados Unidos ha osado afirmar de éste lo que Madisson decía de aquél.

Y sobre todo trayéndolo al terreno de nuestra propia historia, cuya luz debe guiarnos siempre en el debate, yo preguntaría al señor Diputado ¿cuáles son los Congresos Argentinos de donde partió la usurpación, que han producido la anarquía ó que han fundado el despotismo de nuestro país? Los vetos han sido muy raros en nuestros anales parlamentarios, nuestros Congresos se han distinguido más bien por sus complacencias hácia los P. E. y una crónica sangrienta está ahí para decirnos que las facultades extraordinarias no pudieron ser arrancadas sinó con el puñal sobre el pecho de los Diputados. (Aplausos).

Más, voy á concluir, señor Presidente, porque he sido demasiado extenso y me siento excitado por estos lúgubres recuerdos.

Así como estudiar las instituciones ajenas para amoldarlas á las condiciones propias es proceder como hombres de Estado, así, copiarlas sin discernimiento y aplicarlas sin criterio, es convertirse en imitador servil.

Por esto es que, aceptar nosotros el proyecto del P. E., con la extensión que oficialmente se le atribuye, sería echar los cimientos del despotismo y de un despotismo peor aún que el personal de los caudillos, porque sería el despotismo legal de una doctrina liberticida.

Por esto es que sancionar el proyecto de la Comisión sería dar á cada Departamento del Gobierno lo que constitucionalmente le corresponde á fin de guardar el equilibrio de los poderes, salvando el porvenir de las libertades públicas.

En esta disyuntiva, la eleccion del Congreso Argentino no puede ser dudosa.

El pueblo confia en sus representantes y ellos deben ponerse á la altura de las esperanzas de este pueblo, escaso en población y nuevo en la vida constitucional, pero rico en heróicos sacrificios y digno de instituciones libres.

Por fin, he dicho. (Grandes y prolongados aplausos, entre los cuales pasó la Cámara á cuarto intermedio).

---



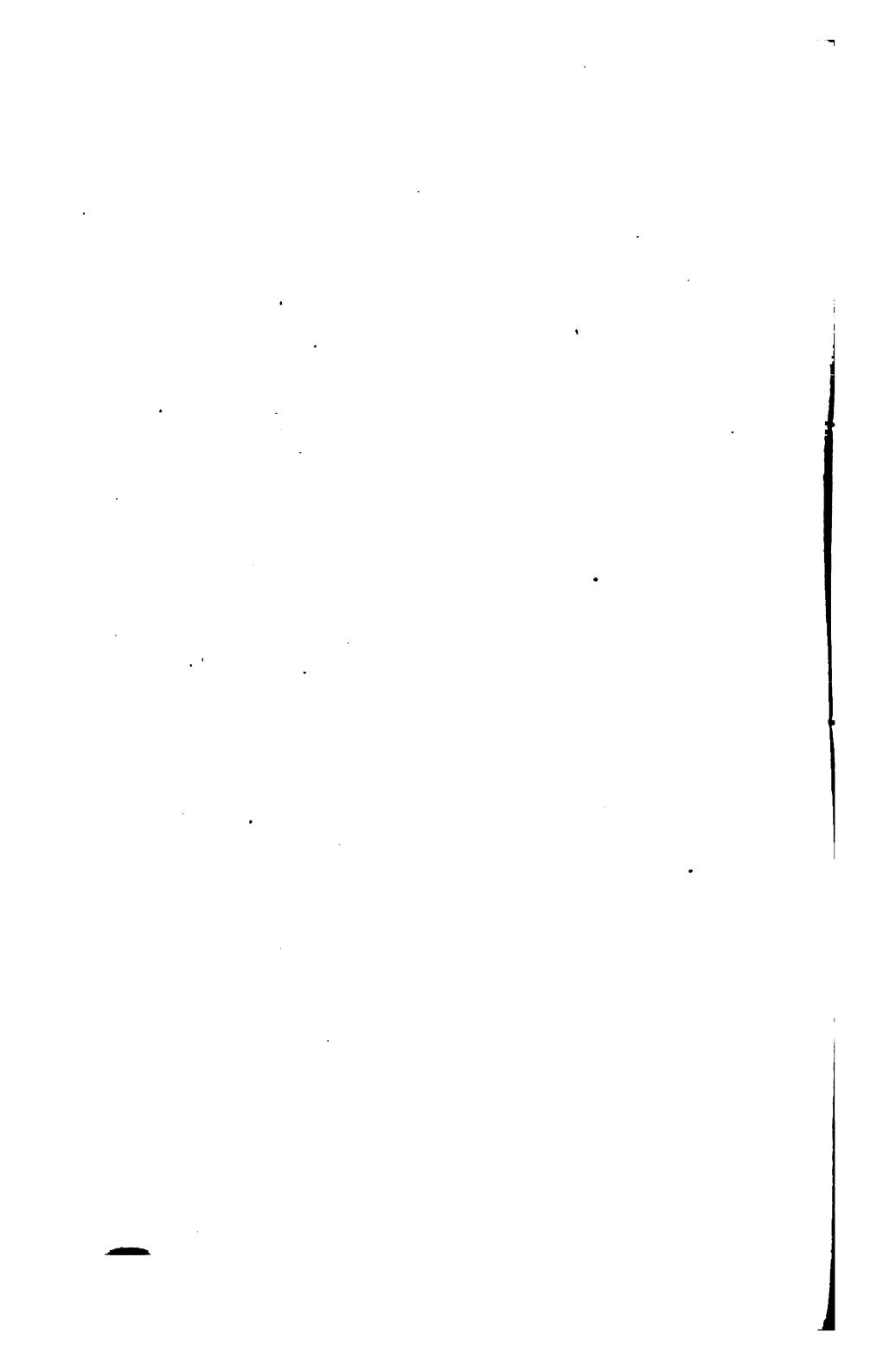
**DISCURSOS PARLAMENTARIOS**

**SOBRE EL DERECHO DE INTERVENCIÓN**

**POR EL SENADOR**

**NICÁSIO OROÑO**

10



Las palabras con que encabeza esta publicación explican suficientemente el motivo que nos ha determinado a hacerla.

Ella tiene por objeto además, dar a mis compatriotas una explicación de mi conducta en el Congreso; y ninguna mejor podría ofrecerles que la publicación de los discursos que he pronunciado en las principales cuestiones que han agitado y continúan agitando al Congreso y al país.

En ellos se verá que las doctrinas que he defendido este año, son las mismas que sostuve el año pasado.

sobre Capital, sobre intervenciones á las Provincias, reducción del ejército, disminución de los uestos y de los gastos, procurando nivelar stos con el producto de aquellos, así como sobre otras cuestiones fundamentales, mantengo todavía mis opiniones, robustecidas por el estudio y experiencia.

Esta persistencia pudiera serme personalmente odiosa, pues nadie es más odioso para los parientes que aquel que no acepta todas sus pasiones y se atreve á sostener y defender una opinión. Pero no importa; prefiero la odiosidad que de otro me resulte á verme obligado á inclinar la cabeza en presencia de aquellos á quienes hubiese dado el derecho de disponer de mi voluntad y mi conciencia.

Si procediendo como lo he hecho, hubiese podido contribuir al triunfo de los principios, y he interpretado fielmente las nobles aspiraciones del pueblo que me honró confiándome su representación en el Congreso, mis deseos habrían quedado satisfechos. A nada más aspiro, porque a nada más necesito.

Pero si por el contrario, me hubiese separado del seno de alguno de mis comprovincianos de la verdadera intención que los indujo á encomendarme la representación de sus derechos, me quedará al ménos la satisfacción de haber defendido las instituciones, y en ellas los derechos federales de los Estados, acreditando una vez más mi adhesión á la libertad, sin la cual en mi concepto, no hay orden ni paz posible en los Estados, sino

el orden y la paz que imponen los tiranos y que aceptan humillados los esclavos.

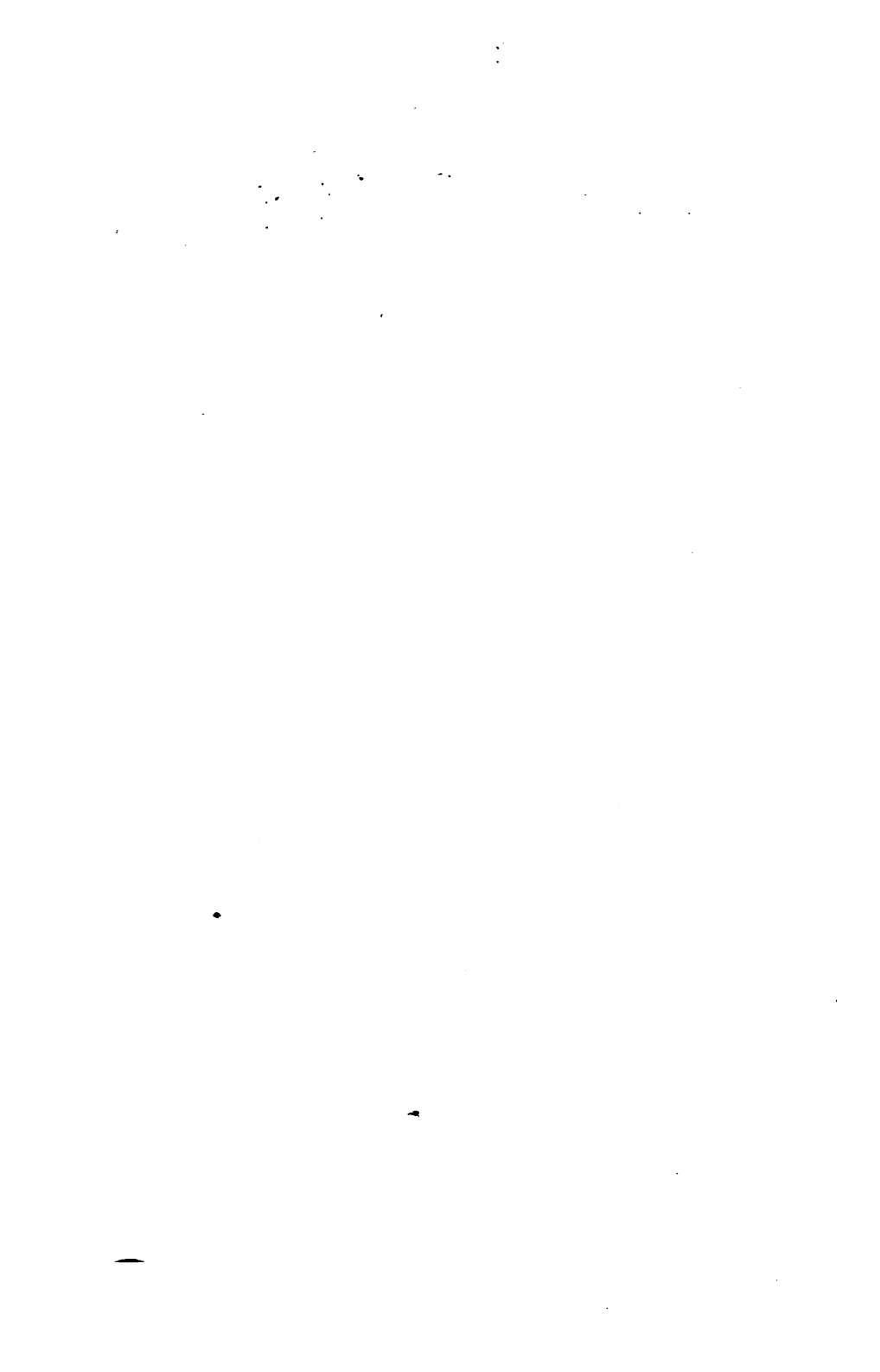
Y á aquellos de mis amigos, que hubiesen querido que yo subordinara mis opiniones á cierto orden de ideas, ó á los preceptos de esa moral especulativa que momentáneamente prevalece á despecho de la moral republicana, yo les diré con las palabras de aquel grande hombre de los Estados Unidos:—«Aspiro al hermoso privilegio de conservar mi entendimiento y mis acciones, resultado de mi reflexión, libres é independientes como el aire».

N. OROÑO.

Buenos Aires, Noviembre 1° de 1869.

---







## SENADO NACIONAL

---

**Sesión del 29 de Junio de 1869**

*Señor Oroño*—Señor Presidente: Antes de entrar al fondo de la cuestión, la Cámara me ha de permitir recordar algunas palabras que pronuncié el año pasado tratándose en este recinto de un asunto análogo al que en este momento se discute.

Yo decía entonces, señor Presidente, que esperaba que el nuevo gobierno que se iba á establecer, abriría al país nuevos horizontes, y que lo encaminaría por la vía de los intereses materiales, que son los intereses del «progreso y de la libertad».

Pero que si no sucedía así, si mis esperanzas eran defraudadas, se vería entonces que mi espíritu no se hallaba dominado por ninguna pasión innoble; que la única pasión que agitaba mi alma, conmovía mi corazón y exaltaba mi inteligencia, era el deseo de ver libre, próspera y feliz á mi patria. Que mi puesto en esta Cámara y mi débil palabra, estarían siempre al servicio del pueblo, al servicio de las buenas ideas, jamás al de los hombres, por que por más respeto que me inspirase su talento y sus virtudes, era mayor mi respeto y veneración por la Constitución.

Así contestaba, señor Presidente, al señor Ministro del Interior entonces que me reprochaba la vehemencia y pasión de mis opiniones, inculpación no menos infundada é injusta, que la que el señor Ministro del Interior hizo en la sesión anterior al señor Senador por Buenos Aires, miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales, tratándose del proyecto en discusión.

En nuestro país, señor Presidente, donde las costumbres republicanas, los usos parlamentarios y los hábitos constitucionales no tienen todavía profundas raíces; donde si bien la libertad forma parte de nuestro derecho escrito, no hay todavía la práctica de la tolerancia ni ese respeto á los derechos ajenos que la constituye; es costumbre mirar con cierta aprensión la franca manifestación de la verdad; y en el Poder Ejecutivo se ha notado siempre una predisposición invencible á considerar toda oposición á su política, como una resistencia calculada y sistemática de parte de aquellos que quieren estorbar su marcha en el camino de los abusos.

Toda observación por justa y fundada que sea, aún que no salga de los límites que la Constitución, la sana razón y los intereses del país señalan al tranquilo é ilustrado criterio de los representantes del pueblo, ha de ser mirada como un acto de hostilidad al Poder Ejecutivo.

Este proceder, señor Presidente, viene en cierto modo á coartarnos en el ejercicio de aquellos derechos preciosos que la condición de hombres independientes y de representantes de un pueblo libre, nos acuerdan.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores no se sentiría ciertamente conmovido en presencia de lo que él observa con tanta extrañeza, si hubiese leído los debates que en estos momentos tienen lugar en las Cámaras Francesas, en las que por los Diputados liberales se le increpa á Napoleón, no sólo sus faltas, sino sus crímenes, con una libertad de que por desgracia no hemos dado ejemplo todavía, nosotros republicanos de medio siglo.

No es, pues, un sentimiento de hostilidad hacia el Poder Ejecutivo el que me mueve en esta discusión. Son los principios comprometidos, el deseo de la paz cuya estabilidad veo en inminente peligro, y sobre todo, el deseo de corresponder á los altos deberes que me impone la Constitución y el puesto de honor y de confianza que en virtud de ella tengo en esta Honorable Cámara, como me lo indica mi conciencia, y como lo entienden los hombres bien intencionados.

A estas ideas y principios responderá mi conducta en esta ocasión, porque ningún interés extraño me domina, ni sirvo á otros propósitos que á los de la Constitución.

Militando en las filas de los que sinceramente anhelan el bien de su país, he aprendido á estudiar y comprender la Constitución, inspirándome en las doctrinas de los hombres que he considerado como maestros del derecho constitucional.

Ellos contribuyeron con su ciencia á la perfección de aquella obra, fruto de medio siglo de esfuerzos y de sacrificios gigantes, provocando la reforma de la Constitución que se habían dado los pueblos argentinos, para hacerla más práctica, más conforme á nuestras necesidades, y sobre todo, más en armonía con el sistema federal y con la independencia de las Provincias, en el ejercicio de aquellas facultades que no habían sido expresamente delegadas al Gobierno Nacional.

Si ellos se han desviado de ese camino; si los halagos del poder les ha hecho perder el rumbo que les señalaba su propia experiencia; si ellos han renunciado al rol glorioso de maestros olvidando á sus discípulos, para aceptar la consigna de defensores del poder, de lidiadores en favor de una causa perdida y condenada por la razón y la opinión, la culpa y la responsabilidad será de ellos y no nuestra que no hacemos sino defender los principios que nos enseñaron.

Yo he aprendido, señor Presidente, en las doctrinas del señor Ministro del Interior, á entender la Constitución de mi país; pero este señor se encuentra ahora en

opuestas filas, abandonando su puesto y su bandera para afiliarse al enemigo. A estar á sus propias decisiones debia ser juzgado por un consejo de guerra y sentenciado á muerte.

El ha dicho en esta Cámara, que el soldado que se pasa al enemigo, *debe ser pasado por las armas*, según una ley recopilada.—El señor Ministro se ha pasado, ha desertado de las filas de la buena causa, ha dado la espalda á los principios para combatir la Constitución y las mismas doctrinas que sostenía en otro tiempo; ha incurrido por consecuencia en la pena establecida en aquella ley recopilada.

Pero puede estar tranquilo el señor Ministro; no lo hemos de juzgar por la monstruosa ley que él ha recogido del polvo de los archivos para aplicarla á un desgraciado!

Es tan importante la vida del señor Ministro; son tan conocidos sus talentos y tan meritorios sus esfuerzos; el país espera tanto de su reconocida suficiencia, y él le ha consagrado con tan buena voluntad sus sacrificios, que no dudo que reconociendo su error, ha de volver á las filas de sus amigos y les rendirá nuevos é importantes servicios.

Viniendo ahora á la cuestión y resumiendo el extenso discurso del señor Ministro de Relaciones Exteriores, reducido á probar que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultad de intervenir, estén ó nó en receso las Cámaras Legislativas de la Nación, yo diré que está en error, y que este error puede traer funestas consecuencias sinó se le detiene con la energía y oportunidad que la paz de la República y la estabilidad de las instituciones nos reclaman.

El señor Ministro pretende apoyar sus opiniones en las doctrinas de los comentaristas *norteamericanos*, y en los precedentes de las intervenciones que han tenido lugar en las provincias de Sante Fé, La Rioja y Catamarca.

Y por lo mismo, ante todo deseo que el señor Ministro me responda á esta pregunta: ¿cree que esas intervenciones han sido legalmente ejecutadas?

*El señor Ministro de Relaciones Exteriores*—Si, señor Senador.

*Señor Oroño*—Desde luego, señor Presidente, el reproche dirigido al señor Senador por Buenos Aires es injusto.....

*Señor Ministro de Relaciones Exteriores*—Yo no he hecho reproche alguno al señor Senador. Si me permite.....

*Señor Oroño*—Si, señor Ministro; esto es lo que ha dicho.

Pero vamos adelante. El señor Ministro ha pretendido apoyar sus doctrinas en la jurisprudencia establecida por el gobierno anterior, y entonces resulta lo siguiente: ó que esas intervenciones han sido mal ejercitadas, ó que han sido perfectamente ajustadas á la Constitución.

Si lo primero, el señor Ministro no ha debido invocar precedentes tan desautorizados para sostener su opinión: si lo segundo, si las intervenciones han sido bien desempeñadas; si ningún principio ha quedado violado en su ejecución, entonces resulta que la inculpación que se ha hecho al señor Senador por Buenos Aires es injusta. El señor Ministro puede optar en esta alternativa por lo que mejor le parezca.

La Comisión, señor Presidente, no ha querido entrar á examinar la manera cómo se ha ejecutado la intervención en San Juan; ha prescindido de esta cuestión; ha procurado huir de ella por no complicar la cuestión principal de que se trata.

No se trata en efecto, de saber si el Poder Ejecutivo debió ó nó intervenir en la Provincia de San Juan, ni si esa intervención fué bien ó mal ejercida. La Comisión se ha concretado al punto consultado, es decir, á dictaminar si debía ó no intervenir nuevamente para reponer al Gobernador Zavalla que ha sido derrocado por la sedición.

A esto responde el proyecto de ley: trata solo del restablecimiento de las autoridades legalmente constituí-

das que existían el 24 de Marzo funcionando en la Provincia de San Juan.

Si se me preguntase mi opinión sobre la intervención á San Juan, yo respondería sin vacilar que aquella intervención fué acordada sin derecho y desempeñada contra el derecho. Yo diría, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultad de intervenir en receso del Congreso sinó en casos muy determinados como lo probaré más adelante; pero que ninguno de esos casos había llegado en San Juan.

La Comisión, como he dicho, se ha abstenido estudiosamente de tomar en consideración la intervención á San Juan, esperando que otros motivos trajesen la discusión, y limitándose á formular su juicio sobre la intervención requerida por el Gobernador Zavalla.

Creo oportuno y conveniente explicar las diversas opiniones de los cinco miembros de la Comisión en presencia de la solicitud del señor Zavalla, para desvanecer ciertas aprensiones que sehan querido hacer valer contra el proyecto.

Cuando esta solicitud fué presentada y hubo de ser tomada en consideración, el señor Senador por Buenos Aires me dirigió esta pregunta: «¿Cómo considera usted esta nota y la petición del Gobernador Zavalla?» Yo le contesté: simplemente como un antecedente ilustrativo de la cuestión, pero que no podía tomarse como punto de partida para fundar en ella una resolución; que era necesario pedir al Poder Ejecutivo todos los datos y antecedentes sobre los hechos que habían tenido lugar en la Provincia de San Juan. Esta opinión prevaleció en la Comisión y la Cámara resolvió que dichos antecedentes fuesen pedidos.

Cuando la comisión hubo de ocuparse del estudio de este asunto, el señor Senador por Córdoba se declaró inhabilitado para entrar á la cuestión y llegó hasta rehusar su comparencia al seno de la Comisión.

El señor Senador por La Rioja, aunque tuvo la deferencia de asistir á las conferencias de la Comisión, se

declaró también impedido para formar juicio sobre los hechos ocurridos en San Juan.—Entonces, señor Presidente, entramos los tres miembros restantes á la discusión del asunto.

Cada uno tenía una opinión distinta.—El señor Senador por Jujuy, pretendía que se desconociesen los poderes públicos de San Juan; que se desconociese al Gobernador Zavalla y á la Legislatura, pues ambos, á su juicio, se habían hecho indignos de la protección del Gobierno Nacional, y que se decretase por el Congreso una intervención al solo objeto de presidir á la reorganización de los poderes públicos de aquella Provincia.

El señor Senador por Buenos Aires proponía que se autorizase al Poder Ejecutivo para intervenir en la Provincia de San Juan, con el objeto de restablecer al Gobernador Zavalla, depuesto por la Legislatura.

Yo, señor Presidente, ni aceptaba la proposición del señor Senador por Jujuy, ni estaba en el todo conforme con la del señor Senador por Buenos Aires. Quería que la intervención fuese preceptiva y no autoritativa, porque conociéndose la parcialidad del señor Presidente de la República, y su oposición á reponer al Gobernador Zavalla, una ley que lo autorizase á hacer lo que él no quería, sería completamente ilusoria, quedando burlado el Congreso del mismo modo que lo había sido el Gobernador de San Juan.

Así, pues, era preciso sustituir la palabra autorizase con estas palabras: *intervendrá para reponer los Poderes Públicos que existían funcionando legalmente el 24 de Marzo*.—Hé aquí el origen del proyecto de ley que tanta alarma ha producido en el Gobierno y sus amigos.

Bien, pues; este proyecto de ley no ha tenido por móvil el deseo de hacer oposición al gobierno: ni es el resultado de ninguna combinación dirigida por la mano que se ha creído que impulsaba las resoluciones de la Comisión.—El es solo el producto del convencimiento y de la tranquila discusión, mediante la cual se ha arribado á formularlo, sin designio de oposición, porque no



podía existir en mi ánimo una intención semejante, ni la he reconocido en mis colegas.

Si algún interés nos ha animado, señor iPresidente, ha sido solo el de salvar al gobierno, al mismo tiempo que los principios comprometidos, allanándole el camino para dar á los disturbios de San Juan una solución constitucional, que satisficiese á todos, y que hiciera posible una reconciliación verdadera entre el Gobernador y la Legislatura de aquella Provincia.

Después de esta explicación, señor iPresidente, creo que la Cámara comprenderá que solo el cumplimiento de nuestro deber nos ha inducido á proceder en la forma que lo hemos hecho.

He dicho, señor Presidente, y voy á sostener, que el Poder Ejecutivo Nacional no puede, ni debe intervenir en las provincias sin autorización del Congreso; que la facultad de calificar las conmociones y la invasión exterior, debe ejercitarse conjuntamente por el Poder Ejecutivo y el Congreso.—Esta doctrina, yo no la he inventado: ella pertenece á los tratadistas de derecho constitucional, y está consagrada por nuestra ley fundamental.

La facultad de intervenir en los negocios internos de los Estados, conferida al Gobierno federal en el artículo 6º, ya sea con requisición ó sin ella, según los casos, tiene por limitación racional igualmente autorizada, los derechos del pueblo sobre el cual se ha de ejercer la intervención. Así es que, el Gobierno Nacional no está forzosamente obligado á intervenir aún cuando la intervención le sea requerida, toda vez que á su juicio el ejercicio de esta facultad pudiera comprometer aquel principio.

Así como cada ciudadano tiene derecho de gozar completamente de su libertad personal y civil, de la misma manera todo pueblo tiene derecho de gozar completamente de su autonomía y de su independencia política en sus negocios internos.

Más aún, la independencia de los pueblos es todavía más extensa y eminentemente celosa, y más inviolable

que la libertad civil misma, porque en ciertos casos esta última se somete á la superioridad moral de la primera; y en ciertas extremidades, á la autoridad electiva del organismo del Estado, mientras que el pueblo como soberano no reconoce ningún superior legítimo, y no encuentra otro límite al ejercicio de su autonomía que la ley suprema del derecho á que ha querido sujetarse.

Cada Estado, pues, obra independientemente de toda influencia exterior, mientras que por sus actos no lastimen á otra personalidad política igual ó superior á la suya.

Desde el momento que en el ejercicio de sus derechos él traspase los derechos legales, y ataque á otras personalidades legales también, éstas tendrán el derecho de quejarse y pueden justamente limitar el ejercicio de aquellos derechos, por los cuales han sufrido y han sido vulnerados.

Estos principios, igualmente verdaderos, han sido muchas veces falseados en su aplicación para legitimar el pretendido derecho de intervenir en los negocios interiores de los Estados, y de reglamentarlos por la fuerza, ó de cualquier otro género de violencia, ó por vanos temores, ó por la inútil ambición de extender sobre los Estados una influencia personal.

Como el derecho que tienen los pueblos de no ser intervenidos es tan absoluto y primitivo como el que tienen los individuos al goce de su vida, de su libertad, de su propiedad, al goce de todas aquellas facultades necesarias, condiciones indispensables de su personalidad legal, la no intervención viene á ser la regla general en los países libres y aún en las monarquías bien regladas.

En vano nos jactaremos de libres si no reconocemos y aceptamos la inviolabilidad del individuo, del distrito, de la villa, de la ciudad, del Estado y de la Nación; porque esta garantía, esta sabia distribución del poder, es lo que constituye definitivamente el *Self government*.

Sin él, jamás habrá en los actos sociales ni espontaneidad, ni desarrollo moral, ni progreso material, ni responsabilidad nacional, cosas que no pueden esperarse de autómatas que encargan á otros los cuidados de su propia conservación, y que se resignan á deber á otros su educación y la escasa porción de bienestar que quieren procurarles.

Exceptuad algunos millones sobre el globo y contaremos por muchos más los rebaños de la especie humana que vegetan sin idea de su propia personalidad —Contra este hecho oprobioso protestan todas las instituciones que consagra nuestra Constitución.

La no intervención en los asuntos interiores de las Provincias es en ella la regla general, tanto en el orden político como en el orden judicial, económico y administrativo. La intervención por el Poder Nacional es la excepción, y como tal restringida á casos especificados literalmente y ejercida bajo condiciones fijas de garantía y acierto.

El Congreso debe sancionarla y el Ejecutivo ejercerla, dando cuenta y sujetándose á la aprobación de la representación del país. ó á su censura y reprobación. Es absurdo pretender que puedan existir bajo el régimen de una constitución libre, atentados irreparables.—Sancionaríais la revolución, derecho terrible que ningún pueblo ha sancionado, pero que todos lo tienen en reserva.

La intervención, pues, es la excepción en nuestra ley fundamental, especialmente en caso de invasión de una Provincia sobre otra ó de un poder extraño; cuando fuese requerida por las autoridades legales de una Provincia; cuando en ella se estableciese una monarquía, porque la Constitución ordena garantizar á todo el país la *forma republicana*.

Toda interpretación sería de actos tan graves, debe ser honesta, honrada y consecuente. Es imposible admitir que la veracidad de un instrumento fundamental, se haya puesto en contradicción flagrante, con todos sus propósitos, armando al gobierno con la frase—*ga-*

*rante la forma republicana* de un poder absoluto y arbitrario para destruir toda la autonomía de las Provincias á pretexto de que en unas se han tolerado fraudes en las elecciones; que en otras se ejercen influencias indebidas; que en aquellas la educación se descuida y que los tribunales cometen injusticias, y que en algunas pueden ocasionalmente producirse hechos ó delitos como salteos, robos, muertes, etc.

Por desgracia, señor Presidente, el lenguaje humano jamás es tan exacto que no se le pueda hacer decir cuando la pasión interviene, otra cosa distinta del pensamiento que nos proponemos expresar.

En el caso que nos ocupa, en los Estados Unidos siempre se consideró que esa garantía constituía solo el repudio de la forma monárquica.—Después de algunos años el Presidente Monroe proclamó la doctrina confirmativa de aquella idea, declarando ante el mundo una vez para siempre, que la América era para los Americanos bajo la forma republicana.

Esta declaración fué aceptada por el asenso tácito de todo el continente en contraposición del acuerdo de la Santa Alianza, que se había ligado para impedir en Europa toda revolución liberal con tendencias democráticas, y para extender sobre el mundo el manto funerario del poder absoluto de los monarcas, según el modelo de los comprometidos en tan inicuo propósito.

Pero, ved ahí en el año de 1867,—que el Congreso de los Estados Unidos de América anuncia al mundo que la gran república, modelo hasta entonces y esperanza del género humano, había vivido bajo el más abominable despotismo, que no tenía la *forma republicana* ni nada que se aproximase al tipo imaginado por Mr. Sumner, Stevens y sus correligionarios; que treinta millones de blancos tenían en esclavitud á cuatro millones de seres humanos, y que mientras este hecho garantido por la Constitución existiese, ni la Nación ni los Estados estaban en la forma republicana:—Estados, Gobiernos, Constitución y Nación nacida de la voluntad del pueblo de los Estados Unidos.

De esta interpretación nació una serie de medidas que han producido en aquel país una verdadera revolución social; si para bien ó para mal, no nos incumbe discutir ni pronunciar nuestro juicio: — pero deducimos que si esta interpretación autoriza la que el Ejecutivo Nacional ha dado en la intervención de San Juan para restablecer la *forma republicana*—aquí como en los Estados Unidos, esa interpretación nos conduciría al trastorno de todas nuestras instituciones, acaso sin la justificación que por el resultado pudo tener en los Estados Unidos.

¿Puede el Gobierno hacer esa interpretación? No la ha hecho en los Estados Unidos. Es el Congreso el que la ha hecho. Si aceptais, pues, esa interpretación, os constituís en aquel Congreso de los Estados Unidos de 1867, colocando al Presidente de la República en la misma situación del Presidente Johnson.—Elegid.

Ni los precedentes de los Estados Unidos; ni la opinión de sus hombres de Estado más notables; ni nuestra Constitución, á pesar de la ambigüedad de la frase—*para garantizar la forma republicana*—nada, en fin, puede justificar la intervención á San Juan y la manera como aquella intervención ha sido ejecutada.

La intervención fué acordada para garantizar la *forma republicana*. ¿Había sido acaso subvertida en San Juan? ¿No existía en vigencia su Constitución local, y funcionando los poderes públicos que ella ha establecido? ¿Puede racionalmente sostenerse que el significado de aquella frase es otro que el que hemos señalado anteriormente? Veamos entonces lo que dice la historia de los Estados Unidos y la interpretación que han dado los hombres más notables de aquel país á la cláusula de su constitución, que nosotros trasplantamos á la nuestra, quizá sin suficiente discernimiento.

Cuando se organizaron los Estados Unidos, entraron en la composición de sus constituyentes dos tendencias diametralmente opuestas.—La una quería constituir un

Gobierno fuerte por la centralización de facultades en el gobierno general; y la otra quería conservar la mayor suma de poder á los Estados. Las ideas francesas tenían á la sazón gran proselitismo en aquel país, cuya libertad é independencia había sido alcanzada con el concurso de los hijos de aquella Nación. El partido demócrata, representado por Jefferson, acusaba á Washington y á Hamilton de abrigar el pensamiento secreto de monarquizar la América. De aquí nació la cláusula 4ª de la Constitución de los Estados Unidos, que fué una protesta y una garantía contra la Europa monárquica y contra los partidarios de este sistema que se suponía existían en la Unión.

Así es, pues, que no se ha visto en los Estados Unidos un solo caso de intervención para restablecer la *forma republicana*. En la misma convulsión de California, donde se violaron todas las formas establecidas, instituyéndose tribunales especiales, derrocando sus autoridades constituidas, el gobierno de la Unión se abstuvo de intervenir apesar de la requisición, porque no consideró haber llegado el caso de la garantía.

La definición que de esta palabra han hecho los señores Ministros, no es, pues, exacta. Ellos no pueden deducirla del texto de la Constitución Americana ni del espíritu de la cláusula 4ª.—Los autores Americanos la explican de otro modo.

« En tanto — dice Hamilton en el *Federalista*—que las  
« formas republicanas existentes se continúen por los  
« Estados, están garantidos por la Constitución federal.  
« —Toda vez que los Estados quieran constituir otras  
« formas republicanas, tienen derecho á hacerlo y á  
« reclamar del Gobierno federal garantía para éstos.—  
« La única restricción impuesta á los Estados, es que  
« no cambiarán las Constituciones Republicanas por  
« otras anti-republicanas ».

El célebre Curtis citado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, dice á este respecto lo siguiente:  
« La Constitución de los Estados Unidos declara que  
« un Gobierno que tenga los caracteres esenciales de

« un sistema republicano, será garantido por los Estados Unidos; es decir, que no se permitirá el establecimiento de ningún otro.—Ella reconoce el derecho de cada Estado á ser protegido contra los disturbios domésticos, en cuya expresión debe incluirse toda especie de fuerza dirigida contra el Gobierno, excepto la voluntad del pueblo cuando obre el cambio por medio de las formas constitucionales establecidas. »

Sesenta años más tarde, Mr. Laboulaye en su precioso libro «La legislación comparada», explica también lo que se entendió y se entiende en Estados Unidos por *forma republicana* «La Constitución de Estados Unidos ha confiado al Gobierno Federal el cuidado de los negocios comunes ó exteriores, reservando á cada Estado su gobierno interior.—Los Estados son en cierto modo Provincias mediatizadas. Cada uno de ellos puede darse su Constitución: no se les exige sino una cosa, que sean Repúblicas, pues no se quiere el establecimiento de monarquías en el continente. Estas Constituciones pueden ser lo que el pueblo quiera, les está permitido tener una ó dos Cámaras; un poder judicial dependiente ó independiente: existe toda especie de libertad para hacer todas las experiencias posibles. »

Los reformadores de la Constitución argentina, los señores Sarmiento, Vélez y Mitre, miembros de la Comisión que debía presentar el plan de reformas, han explicado también lo que importaba la frase—*interviene para garantizar la forma republicana* que ellos agregaron á la Constitución argentina.

« Debe entenderse, decían aquellos señores en su informe, que una Provincia se halla fuera de las condiciones republicanas, cuando se pretendiese por ella, ó por una fracción del pueblo superior á las fuerzas de las autoridades, establecer la forma monárquica, ó perpetuar el poder en una misma persona contra los principios de la democracia y contra lo estatuido en su propia Constitución para la sucesión del poder. »

Se quiere una interpretación más auténtica del verdadero significado y alcance de esta disposición? — Los mismos reformadores nos la dan, y á su irrecusable testimonio debemos sujetarnos aunque la jurisprudencia de los Estados Unidos estuviere en oposición á esta opinión. Pero, afortunadamente la práctica de 80 años de vida constitucional en los Estados Unidos, y nuestros mismos precedentes pueden invocarse con confianza en apoyo de nuestras opiniones.

No hay una sola intervención antes de la de San Juan, que se haya efectuado á pretexto de restablecer la *forma republicana*.—Con requisición ó sin ella, antes ó después de la reforma, todas las intervenciones han tenido lugar para reponer autoridades depuestas por la sedición, ó para contribuir á derrocar las autoridades constituidas sirviendo de auxiliar á los partidos, tal cual ha sucedido en San Juan.

¿Qué forma republicana ha ido á establecer el gobierno nacional en aquella Provincia? ¿Qué había sucedido en San Juan? ¿Qué motivos graves indujeron al Poder Ejecutivo para *intervenir por derecho propio*?

Una desavenencia de opiniones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, un conflicto entre ambos poderes, de que no es el juez el gobierno nacional. He aquí todo.

Pero se dice que había sido *encarcelada la Legislatura*, y que estaba, por consiguiente, subvertida la forma republicana.—Prescindiendo de que la Legislatura no puede ser encarcelada, porque ella solo constituye un poder moral fuera del alcance del poder material, y admitiendo el hecho de la prisión de algunos Diputados y la requisición desautorizada de éstos ¿podía el Ejecutivo Nacional intervenir por sí solo para definir las cuestiones que se habían suscitado en la Provincia de San Juan?

Decididamente no: y mucho menos, para ir á constituirse en juez y parte poniendo en libertad á los Diputados presos y apoyando la causa de la Legislatura.



¿Tenía facultad para eso? No; si la prisión era justa los reos debían estar á las consecuencias. Si no lo era, ellos tenían un recurso en las garantías que les acuerda la Constitución.—Ellos debieron pedir al Juez Federal de San Juan el mandamiento ó privilegio del *habeas corpus*, mediante el cual, aquella autoridad nacional, la única competente, habría conocido de la causa de la prisión, mandando ponerlos en libertad si no había causa que justificase su prisión. Este era el único procedimiento legal. Era cuestión de justicia, nada más y nada menos. Lo sabe bien el señor Ministro del Interior que tanto conoce el derecho federal.

Pero en lugar de hacer esto y de garantizar la *forma republicana*, el Ejecutivo Nacional ó su Comisionado, la subvertía, constituyéndose en Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial en la Provincia de San Juan.

Pero no se limitó á esto el Ejecutivo Nacional. Reconoció una Legislatura que no era tal sinó un Club revolucionario para deponer al Gobernador Zavalla y asistió á ese mismo Club, con su apoyo y sus consejos para que consiguiese este fin.

En las instrucciones mismas dadas al Comisionado del Gobierno Nacional, está esto confesado. Allí se aconseja á la Legislatura que *acuse*, que *destituya* á Zavalla.

El poder moderador, el poder que los pueblos han constituido para garantía de sus libertades y derechos, no podía ni debía hablar en el lenguaje del partidario. El no podía declararse amigo, partidario y consejero de una fracción, comprometiendo su propia autoridad y decoro.—¿Qué hizo entonces aquella Legislatura?—Es claro, siguiendo el consejo que había recibido de su oficioso protector, acusó y destituyó á Zavalla!

Pero noto, señor Presidente, que me he anticipado.—Tengo todavía mucho que decir en el terreno de los principios y del derecho antes de entrar á los hechos.

He sostenido, señor, que el Ejecutivo Nacional no puede intervenir en las Provincias sin autorización del Congreso. En apoyo de esta doctrina está la Constitución y los precedentes argentinos.

Apenas instalado el Congreso Nacional en Buenos Aires en 1862, se presentó á su consideración la comoción de dos provincias argentinas—Corrientes y Catamarca. La requisición fué hecha al Poder Ejecutivo como era natural. ¿Intervino éste por sí? No; recabó la autorización del Congreso é intervino en virtud de ella. En 1864, con motivo de los disturbios de Salta, el Ejecutivo pidió al Congreso autorización para intervenir en aquella Provincia. El Congreso no pensó que debía intervenir: negó la autorización y el Ejecutivo no intervino.

En 1866, requerida la intervención del gobierno nacional por las autoridades de Catamarca, el Ejecutivo recabó la autorización del Congreso y en virtud de ella intervino.

Las autoridades de La Rioja la requirieron también el año pasado, y el Poder Ejecutivo se dirigió al Congreso solicitando autorización para intervenir.

¿Puede hacerse, señor Presidente, un reconocimiento más explícito por parte del Poder Ejecutivo de las facultades del Congreso? ¿De cuándo acá se nos niega este derecho? ¿Semejante pretensión puede resistir el análisis á la luz de la Constitución y de la jurisprudencia argentina? Nótese, señor Presidente, que yo llamo jurisprudencia á los casos juzgados por los tribunales ó poderes políticos de la Nación conforme á sus facultades constitucionales, y de ningún modo á los abusos y los crímenes que se quieren hoy hacer valer como jurisprudencia por los impugnadores de este proyecto.

Hemos dicho que los señores Sarmiento y Vélez fueron los que más principal parte tomaron en la reforma de la Constitución. El primero de estos señores propuso la supresión de la palabra *sin ella* del artículo 6º de la antigua Constitución, y al hacerlo declaró que lo

hacia *para que nunca pudiese intervenir el Ejecutivo Nacional sin acuerdo del Congreso*. Es sabido, señores, agregaba—« que á estas palabras puede hallárseles otra « interpretación como á todas las cosas; pero, como se « ha dicho en el debate, Buenos Aires no es San Juan, « razón por la que no debe alarmarnos la ambigüedad « de la frase.

« El hecho que ha ocurrido es espantoso. Se ha « mandado quitar un gobernador precisamente por- « que la ley dice: para restablecerlo si hubiese sido « depuesto por la sedición. La facultad de intervenir « sin requisición ha traído los horrores de San Juan, « entendiéndose que la facultad era discrecional, re- « sultando la monstruosidad de que el gobierno na- « cional haga entrar en una Provincia donde las auto- « ridades funcionan sin obstáculo, aunque haya habido « amenaza de perturbarse el orden, su fuerza armada, « pretendiendo contra las autoridades mismas y contra « la evidencia, que el orden no está perturbado, obran- « do no sobre los perturbadores sinó sobre el mismo « gobierno ».

La supresión de la palabra *sin ella* fué, pues, una garantía contra los abusos del poder que había intervenido con la facultad que aquella palabra le daba, pretendiendo *que no necesitaba que las autoridades de las Provincias requiriesen la intervención en cualquier conflicto que se presentase, y negando que el gobierno de una Provincia pudiese ni siquiera levantar la vista y considerarse á la altura del gobierno nacional*.

Y es singular, señor Presidente, que los mismos señores, que aquello decían para aconsejar la supresión del *sin ella*, vengan á pretender la facultad de intervenir sin autorización del Congreso, eludiendo la eficacia de aquella reforma con el pretexto de la *forma republicana*.

¿De qué habría servido la supresión de aquella palabra si al Ejecutivo Nacional le estuviese atribuido el derecho de intervenir sin anuencia del Congreso, in-

terpretando á su manera y con su solo criterio cuando ha llegado el caso de garantir la forma republicana? Esta sencilla consideración bastará, señor Presidente, para demostrar que esa delicada facultad no puede el Poder Ejecutivo ejercerla por sí solo, ni aún en el receso del Congreso, á menos que motivos de un orden superior, pusieran en peligro la Constitución, y que la paz de la Nación lo obligara á ejercerla con calidad de dar cuenta.

El señor Ministro y yo estamos en este punto en extremos opuestos. El sostiene que el Ejecutivo Nacional puede intervenir sin autorización del Congreso aunque éste esté funcionando, y yo que no tiene esta facultad, ni aún en el receso del Congreso.

El señor Ministro cuenta sin duda con su indisputable habilidad para sostener su avanzada proposición; pero yo, aunque sin los recursos del señor Ministro, tengo en mi apoyo la Constitución y las mismas opiniones del señor Sarmiento.

En la antigua Constitución había un artículo cuya reforma fué propuesta por el señor Sarmiento. Ese artículo decía lo siguiente: — « Artículo 83 (atribuciones « del Poder Ejecutivo)—inciso 23—en todos los casos « en que según los artículos anteriores debe el Poder Ejecutivo proceder con el acuerdo del Senado, « podrá durante el receso de éste proceder por sí solo, « dando cuenta de lo obrado á dicha Cámara en la próxima reunión, para obtener su aprobación».

La reforma fué aceptada y el inciso 23 pasó á ser 22, redactado en esta forma:—« El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante el receso, por medio de nombramientos en comisión, que espirarán al fin de la próxima legislatura. »

Se vé, pues, que la Constitución lo ha despojado al Poder Ejecutivo de aquellas facultades expresamente conferidas en otro tiempo en receso del Congreso. Si en receso del Congreso solo se le permite el nombra-

miento de los empleados para llenar las vacantes, y esto solo en comisión y dependiente de la aprobación ó desaprobación del Senado, ¿cómo puede aceptarse la doctrina de que puede intervenir sin participación del Congreso? Si el ejercicio de aquellas facultades meramente administrativas está de tal modo restringido que solo puede usarlas en receso del Senado ¿cómo y en qué artículo de la Constitución pudiera fundarse la pretensión de ejercer por sí solo una función de carácter político, la más delicada y trascendental de todas?

El mismo señor Sarmiento al tratarse de la reforma, decía que ello importaba dejar establecido que los actos del Poder Ejecutivo debían someterse á la aprobación del Congreso; pues sin esa prescripción (la del inciso 22) *y con solo la disposición implícita se había visto que todos los empleados nombrados en el receso habían seguido en sus puestos, sin que se recabase después el consentimiento de la Legislatura.*

Si tal era la mente de los reformadores tratándose de los empleos ó nombramientos que requieren el acuerdo del Senado, con mucha más razón debemos suponer que lo sería también tratándose de un asunto tan grave como las intervenciones.

Me parece, señor Presidente, que el argumento es victorioso y que difícilmente podrán contestarlo los señores Ministros.

Pero se dice que los defensores de este proyecto de ley pretenden subordinar el Poder Ejecutivo al Congreso desconociéndole las facultades que la Constitución le atribuye. Esto no es exacto, señor Presidente; nosotros sostenemos la independencia de los poderes, porque ella es la base de la buena administración y la más positiva garantía de los derechos de los Estados. Y es precisamente porque defendemos esa independencia que no queremos que el Poder Ejecutivo invocando necesidades supremas, despoje al Congreso de sus peculiares funciones.

Los defensores del gobierno confunden las facultades

inherentes al Poder Ejecutivo con las facultades concurrentes que ejerce conjuntamente con las Cámaras.— Yo quiero conceder que en el primer caso los actos del Poder Ejecutivo no puedan modificarse por el Congreso; que no haya otro remedio á los abusos, á los errores ó á las faltas, que la acusación cuando se trata del desempeño de una facultad propia. ¿Pero, cómo no ha de tener intervención el Congreso, ya sea para autorizar los actos del Poder Ejecutivo por medio de leyes, ó para aprobar ó desaprobar aquellos que no han debido consumarse sin su acuerdo? Decir que un poder no puede reever los actos que de él dependen, porque otro poder los ha producido indebidamente, importaría á la vez que sancionar un abuso, hacer una abdicación culpable.

La Cámara de Diputados acusará cuando se trate del mal desempeño del Ejecutivo en el ejercicio de una de sus peculiares atribuciones; pero en el caso que nos ocupa no solo puede y debe juzgar el acto de la intervención, sinó revocar aquellas disposiciones que hubiesen emanado de ella.—El mismo Poder Ejecutivo no ha podido pensar que su denegación á Zavalla era un acto perfecto é irrevocable. Si así lo hubiese entendido no lo habría sometido al Congreso.

Si se entendiese que el Congreso no tiene más recurso que el de la acusación, cuando el Poder Ejecutivo, faltando á sus deberes, ó creyendo cumplirlos, ha ejercido atribuciones que no le están expresamente deferidas, resultaría entonces que verificado el juicio y condenado el Presidente, el hecho que tal acusación había motivado quedaría sin reparación y la Provincia perturbada en su orden interior.

El juicio político solo puede tener lugar cuando el Presidente ha infringido la Constitución atribuyéndose facultades que aquélla no le acuerda, ó cuando ha desempeñado mal las que expresamente le hubiesen sido delegadas; pero de ninguna manera por haber dejado de ejercer por sí solo atribuciones que la Constitución confiere á los dos poderes Ejecutivo y Legislativo.

No es, pues, el caso de la acusación, y no siéndolo el único remedio para reparar el mal causado por la sedición, es restablecer el poder que ha sido derrocado. En el caso presente este remedio es tanto más justo cuanto que la sedición ha sido apoyada por fuerzas nacionales.

Se ha citado á Pomeroy, señor Presidente, para abatir la misión del Congreso, y yo reclamo el apoyo de su opinión para levantar su autoridad. «El dice que los poderes ejecutivos pretenden considerar á los Congresos como instrumentos; ellos son los que dan la ley de que el Ejecutivo es mero ejecutor. Solo en las excepciones de aprobar las leyes ó desaprobarlas por medio del *veto*, se ve una limitación á esta regla, que se cumple aún en las atribuciones privativas del Presidente.»

El Poder Ejecutivo reúne las milicias y hace los tratados. Pero ¿qué milicia puede reunir, ni qué tratados puede celebrar, sin la autoridad del Congreso? Y si esto sucede en las facultades privativas del Ejecutivo, ¿qué no sucederá en las que corresponden á ambos poderes como en la intervención?

El hecho mismo, considerado por su lado práctico, nos está mostrando que es imposible la intervención del Ejecutivo Nacional sin la anuencia del Congreso. ¿Cómo intervendría el Ejecutivo sin que el Congreso movilizase las milicias y le votase los fondos?

Pero se dice que puede hacer todo esto y dar cuenta. ¿Pero dónde está la ley que así lo dispone? ¿En virtud de qué principio se concede al Ejecutivo y se niega al Congreso la facultad de intervenir el uno, con prescindencia del otro?

Los poderes son independientes.

Pero nadie lo ha negado!

Por lo mismo, nosotros no reconocemos esa prepotencia de unos poderes sobre otros; esa omnipotencia de las Legislaturas cuando se trata de los Ejecutivos de las provincias, y esa subordinación absoluta de los Congresos cuando se trata de los Presidentes.

No hay poderes prepotentes. Todos ellos están subordinados á la Constitución y no tienen más facultades que aquellas que les han sido expresamente delegadas.

Ni el Ejecutivo ni las Cámaras son el pueblo, sinó mandatarios de éste que ejercen la soberanía delegada. No hay más soberanía originaria que la que reside en el pueblo; y de aquí se deduce otro principio cuya consecuencia haré servir más adelante para demostrar, que tanto la acusación como la destitución del Gobernador Zavalla, no deben considerarse sinó como el resultado de la sedición en que ha tomado parte la fuerza nacional.

Sosteniendo á mi vez la independencia de los poderes, dije que no me apoyaría en las doctrinas de Pomeroy, autor que por lo que se vé es tenido en grande estima por los defensores del Gobierno.

Veamos cómo se expresa respecto á la división de los poderes.—« A la vez que el Congreso no debería entrometerse con el Presidente, en el cumplimiento de aquellas funciones que le están encomendadas por la ley orgánica, la Legislatura no debe tener menos libertad para obrar dentro de la esfera de sus propias atribuciones. El primer magistrado no debería ultrapasar la línea que separa sus respectivos dominios. La Constitución evidentemente hace del Congreso el gran cuerpo Legislativo, y del Presidente el gran funcionario Ejecutivo. Esta es fuera de duda la idea esencial, fundamental de ese gran plan. La ley orgánica, sin embargo, reconoce excepciones á la universalidad de este principio, y más allá de esas excepciones, ni el Congreso ni el Presidente deben ir. Una de esas excepciones acabamos de establecerla. La otra existe en el hecho de que el Presidente puede revisar todas las leyes y aprobarlas ó desaprobarlas, y que si desaprueba debe dar las razones que le han inducido á ello. Pero él no puede iniciar medidas ó debatirlas. ó expresar sus vistas sobre ellas sinó cuando desaprueba un proyecto que le ha sido



« sometido, ó cuando las recomienda á la consideración de la Legislatura. El espíritu de la Constitución que separa las atribuciones ejecutivas y legislativas, se extiende hasta ahí y nada más. Sin embargo, no puede negarse que la práctica ha dado mucha más extensión á ese espíritu, y ha procurado por ese medio destruir una de las principales salvaguardias del Gobierno libre y constitucional—la independencia de los departamentos Ejecutivo y Legislativo. El resultado final é inevitable de esta práctica, será la acumulación de todos los poderes gubernamentales en las manos del solo funcionario Ejecutivo; el Congreso será virtualmente despojado de su carácter de rama independiente, coordinada, y constituido en el mero registrador de los irregulares decretos del Presidente. Este cambio gradual de la letra y el espíritu de la ley orgánica, y la creciente tendencia á mirar todos los empleos como simples recompensas políticas, y el uso de la facultad de nombrar empleados como medio de influir en la legislación, ha debilitado el bien trazado sistema de frenos y equilibrios que debiera haber impedido que ese departamento de Gobierno usurpase las funciones de otro. »

¿Se quiere, señor Presidente, una contestación más categórica de parte del autor por el que tanta predilección se manifiesta, á la tendencia del Ejecutivo Nacional á despojar al Congreso de sus facultades?

Si ella no es suficiente para moderar esa sed de poder, ahí está lo que el mismo autor dice más adelante: — « El poder de hacer las leyes necesarias reside en el Congreso; el poder de ejecutarlas en el Presidente. Ambos poderes implican otras muchas facultades auxiliares. Ambos encierran la autoridad necesaria para su perfecto ejercicio. Pero ni el Presidente puede entrometerse en tiempo de guerra más que en tiempo de paz, en la autoridad exclusiva del Congreso, ni el Congreso en la autoridad exclusiva del Presidente. Ambos dependen del pueblo cuya voluntad está expresada en la ley fundamental. »

Qué más puede decirse, señor Presidente, para dejar establecido el derecho del Congreso para dar una ley que como la presente solo tiende á reparar un mal causado por imprevisión ó por un mal combinado cálculo político?

Las razones que se alegan por los defensores del Gobierno para justificar su proceder en los asuntos de San Juan, no son ménos inconsistentes que las doctrinas en que las fundan.—El reconocimiento de una Legislatura revolucionaria, el patrocinio prestado á sus propósitos disolventes, y la connivencia que resulta del estudio de los hechos, comprometen sériamente la alta imparcialidad que debfa observar el Poder Ejecutivo Nacional.

Aquella Legislatura obedeciendo á las indicaciones del Presidente de la República, se reúne y expide la ley de enjuiciamiento. Mientras esto tenía lugar, viene el Ministro Albarracín á la ciudad de Buenos Aires.—Conferencia y arregla con el señor Presidente las dificultades que habfan dado márgen para la declaración de rebelde que se hizo al Gobernador Zavalla. Desde ese momento, á trueque de un sometimiento humillante, aquel revoltoso, aquel rebelde que merecía ser juzgado por un consejo de guerra, queda absuelto por el Poder Ejecutivo Nacional y se le mandaba rendir las armas.

En virtud de ese arreglo el Gobernador reconoce á la Legislatura, y ambos poderes son reconocidos por la autoridad nacional.

He aquí, señor Presidente, la razón por que hemos determinado la fecha del 24 de Marzo, porque en esa fecha tenían lugar los hechos referidos. Al poner en práctica este arreglo tan felizmente terminado, surge la dificultad sobre el tiempo en que debía reconocerse á la Legislatura. El Gobernador pretendía que debía ser desde la fecha del arreglo, y la Legislatura desde que empezó la lucha con el Poder Ejecutivo. Esta emergencia, intencionalmente provocada por los que querían llevar adelante los propósitos de consumar la revolución

originó una consulta al Ejecutivo Nacional, iniciada por el general Arredondo, que no tenía en la Provincia de San Juan ni el carácter ni la autorización de Comisiona-Nacional.

El señor Presidente contesta á esa consulta en 3 de Abril, explicando cómo debía entenderse el arreglo, en términos los más amistosos y conciliatorios. El rebelde había desaparecido; se trataba únicamente del Gobernador de San Juan. Pero mientras esto tenía lugar, la Legislatura, cuyo propósito evidente era destituir al Gobernador de San Juan, expidió una ley dictada el 27 á la noche suspendiendo en sus funciones al Gobernador Zavalla, mandando al día siguiente las fuerzas militares á que se apoderasen de las oficinas públicas.

Destituído el Gobernador Zavalla, porque esto era lo que importaba la suspensión, se retira á la Provincia de San Luis, y de allí requiere la intervención. Entonces vuelve á aparecer la rebelión con todos sus caracteres alarmantes; y el señor Ministro de Relaciones Exteriores le contesta al Gobernador de San Juan con la nota cuyos principales párrafos me voy á permitir leer. (Leyó).

El señor Presidente entendía que funciones ordinarias eran deponer al Gobernador y agrega: « por lo que respecta á la posición en que V. E. se ha colocado tengo el sentimiento de decirle que V. E. no se encuentra en el pié regular de las relaciones oficiales con el Gobierno Nacional ».

¿Qué significa, señor Presidente, esto de pié *regular*? Es un término para mí desconocido en el lenguaje constitucional. ¿Cuáles son los Gobiernos que están en condiciones regulares y cuáles no? Esta palabra inventada para salir de apuros no tiene ningún significado racional tratándose de Gobiernos que forman parte de la Nación, que obedecen la Constitución.—Los Gobernadores de Provincia, ó son rebeldes cuando se alzan contra las instituciones, ó no lo son si obedecen la Constitución, y en este caso son acreedores al apoyo y protección del Gobierno Federal.

*rante la forma republicana* de un poder absoluto y arbitrario para destruir toda la autonomía de las Provincias á pretexto de que en unas se han tolerado fraudes en las elecciones; que en otras se ejercen influencias indebidas; que en aquellas la educación se descuida y que los tribunales cometen injusticias, y que en algunas pueden ocasionalmente producirse hechos ó delitos como salteos, robos, muertes, etc.

Por desgracia, señor Presidente, el lenguaje humano jamás es tan exacto que no se le pueda hacer decir cuando la pasión interviene, otra cosa distinta del pensamiento que nos proponemos expresar.

En el caso que nos ocupa, en los Estados Unidos siempre se consideró que esa garantía constituía solo el repudio de la forma monárquica.—Después de algunos años el Presidente Monroe proclamó la doctrina confirmativa de aquella idea, declarando ante el mundo una vez para siempre, que la América era para los Americanos bajo la forma republicana.

Esta declaración fué aceptada por el asenso tácito de todo el continente en contraposición del acuerdo de la Santa Alianza, que se había ligado para impedir en Europa toda revolución liberal con tendencias democráticas, y para extender sobre el mundo el manto funerario del poder absoluto de los monarcas, según el modelo de los comprometidos en tan inicuo propósito.

Pero, ved ahí en el año de 1867,—que el Congreso de los Estados Unidos de América anuncia al mundo que la gran república, modelo hasta entonces y esperanza del género humano, había vivido bajo el más abominable despotismo, que no tenía la *forma republicana* ni nada que se aproximase al tipo imaginado por Mr. Sumner, Stevens y sus correligionarios; que treinta millones de blancos tenían en esclavitud á cuatro millones de seres humanos, y que mientras este hecho garantido por la Constitución existiese, ni la Nación ni los Estados estaban en la forma republicana:—Estados, Gobiernos, Constitución y Nación nacida de la voluntad del pueblo de los Estados Unidos.

De esta interpretación nació una serie de medidas que han producido en aquel país una verdadera revolución social; si para bien ó para mal, no nos incumbe discutir ni pronunciar nuestro juicio: — pero deducimos que si esta interpretación autoriza la que el Ejecutivo Nacional ha dado en la intervención de San Juan para restablecer la *forma republicana*—aquí como en los Estados Unidos, esa interpretación nos conduciría al trastorno de todas nuestras instituciones, acaso sin la justificación que por el resultado pudo tener en los Estados Unidos.

¿Puede el Gobierno hacer esa interpretación? No la ha hecho en los Estados Unidos. Es el Congreso el que la ha hecho. Si aceptais, pues, esa interpretación, os constituís en aquel Congreso de los Estados Unidos de 1867, colocando al Presidente de la República en la misma situación del Presidente Johnson.— Elegid.

Ni los precedentes de los Estados Unidos; ni la opinión de sus hombres de Estado más notables; ni nuestra Constitución, á pesar de la ambigüedad de la frase— *para garantizar la forma republicana*—nada, en fin, puede justificar la intervención á San Juan y la manera como aquella intervención ha sido ejecutada.

La intervención fué acordada para garantizar la *forma republicana*. ¿Había sido acaso subvertida en San Juan? ¿No existía en vigencia su Constitución local, y funcionando los poderes públicos que ella ha establecido? ¿Puede racionalmente sostenerse que el significado de aquella frase es otro que el que hemos señalado anteriormente? Veamos entonces lo que dice la historia de los Estados Unidos y la interpretación que han dado los hombres más notables de aquel país á la cláusula de su constitución, que nosotros trasplantamos á la nuestra, quizá sin suficiente discernimiento.

Cuando se organizaron los Estados Unidos, entraron en la composición de sus constituyentes dos tendencias diametralmente opuestas.—La una quería constituir un

Gobierno fuerte por la centralización de facultades en el gobierno general; y la otra quería conservar la mayor suma de poder á los Estados. Las ideas francesas tenían á la sazón gran proselitismo en aquel país, cuya libertad é independencia había sido alcanzada con el concurso de los hijos de aquella Nación. El partido demócrata, representado por Jefferson, acusaba á Washington y á Hamilton de abrigar el pensamiento secreto de monarquizar la América. De aquí nació la cláusula 4<sup>a</sup> de la Constitución de los Estados Unidos, que fué una protesta y una garantía contra la Europa monárquica y contra los partidarios de este sistema que se suponía existían en la Unión.

Así es, pues, que no se ha visto en los Estados Unidos un solo caso de intervención para restablecer la *forma republicana*. En la misma convulsión de California, donde se violaron todas las formas establecidas, instituyéndose tribunales especiales, derrocando sus autoridades constituidas, el gobierno de la Unión se abstuvo de intervenir apesar de la requisición, porque no consideró haber llegado el caso de la garantía.

La definición que de esta palabra han hecho los señores Ministros, no es, pues, exacta. Ellos no pueden deducirla del texto de la Constitución Americana ni del espíritu de la cláusula 4<sup>a</sup>.—Los autores Americanos la explican de otro modo.

« En tanto - dice Hamilton en el *Federalista*—que las  
« formas republicanas existentes se continúen por los  
« Estados, están garantidos por la Constitución federal.  
« —Toda vez que los Estados quieran constituir otras  
« formas republicanas, tienen derecho á hacerlo y á  
« reclamar del Gobierno federal garantía para éstos.—  
« La única restricción impuesta á los Estados, es que  
« no cambiarán las Constituciones Republicanas por  
« otras anti-republicanas ».

El célebre Curtis citado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, dice á este respecto lo siguiente:  
« La Constitución de los Estados Unidos declara que  
« un Gobierno que tenga los caracteres esenciales de

« un sistema republicano, será garantido por los Estados Unidos; es decir, que no se permitirá el establecimiento de ningún otro.—Ella reconoce el derecho de cada Estado á ser protegido contra los disturbios domésticos, en cuya expresión debe incluirse toda especie de fuerza dirigida contra el Gobierno, excepto la voluntad del pueblo cuando obre el cambio por medio de las formas constitucionales establecidas. »

Sesenta años más tarde, Mr. Laboulaye en su precioso libro «La legislación comparada», explica también lo que se entendió y se entiende en Estados Unidos por *forma republicana* «La Constitución de Estados Unidos ha confiado al Gobierno Federal el cuidado de los negocios comunes ó exteriores, reservando á cada Estado su gobierno interior.—Los Estados son en cierto modo Provincias mediatizadas. Cada uno de ellos puede darse su Constitución: no se les exige sino una cosa, que sean Repúblicas, pues no se quiere el establecimiento de monarquías en el continente. Estas Constituciones pueden ser lo que el pueblo quiera, les está permitido tener una ó dos Cámaras; un poder judicial dependiente ó independiente: existe toda especie de libertad para hacer todas las experiencias posibles. »

Los reformadores de la Constitución argentina, los señores Sarmiento, Vélez y Mitre, miembros de la Comisión que debía presentar el plan de reformas, han explicado también lo que importaba la frase—*interviene para garantizar la forma republicana* que ellos agregaron á la Constitución argentina.

« Debe entenderse, decían aquellos señores en su informe, que una Provincia se halla fuera de las condiciones republicanas, cuando se pretendiese por ella, ó por una fracción del pueblo superior á las fuerzas de las autoridades, establecer la forma monárquica, ó perpetuar el poder en una misma persona contra los principios de la democracia y contra lo estatuido en su propia Constitución para la sucesión del poder. »

Se quiere una interpretación más auténtica del verdadero significado y alcance de esta disposición? — Los mismos reformadores nos la dan, y á su irrecusable testimonio debemos sujetarnos aunque la jurisprudencia de los Estados Unidos estuviese en oposición á esta opinión. Pero, afortunadamente la práctica de 80 años de vida constitucional en los Estados Unidos, y nuestros mismos precedentes pueden invocarse con confianza en apoyo de nuestras opiniones.

No hay una sola intervención antes de la de San Juan, que se haya efectuado á pretexto de restablecer la *forma republicana*.—Con requisición ó sin ella, antes ó después de la reforma, todas las intervenciones han tenido lugar para reponer autoridades depuestas por la sedición, ó para contribuir á derrocar las autoridades constituidas sirviendo de auxiliar á los partidos, tal cual ha sucedido en San Juan.

¿Qué forma republicana ha ido á establecer el gobierno nacional en aquella Provincia? ¿Qué había sucedido en San Juan? ¿Qué motivos graves indujeron al Poder Ejecutivo para *intervenir por derecho propio*?

Una desavenencia de opiniones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, un conflicto entre ambos poderes, de que no es el juez el gobierno nacional. He aquí todo.

Pero se dice que había sido *encarcelada la Legislatura*, y que estaba, por consiguiente, subvertida la forma republicana.—Prescindiendo de que la Legislatura no puede ser encarcelada, porque ella solo constituye un poder moral fuera del alcance del poder material, y admitiendo el hecho de la prisión de algunos Diputados y la requisición desautorizada de éstos ¿podía el Ejecutivo Nacional intervenir por sí solo para definir las cuestiones que se habían suscitado en la Provincia de San Juan?

Decididamente no: y mucho menos, para ir á constituirse en juez y parte poniendo en libertad á los Diputados presos y apoyando la causa de la Legislatura.



¿Tenía facultad para eso? No; si la prisión era justa los reos debían estar á las consecuencias. Si no lo era, ellos tenían un recurso en las garantías que les acuerda la Constitución.—Ellos debieron pedir al Juez Federal de San Juan el mandamiento ó privilegio del *habeas corpus*, mediante el cual, aquella autoridad nacional, la única competente, habría conocido de la causa de la prisión, mandando ponerlos en libertad si no había causa que justificase su prisión. Este era el único procedimiento legal. Era cuestión de justicia, nada más y nada menos. Lo sabe bien el señor Ministro del Interior que tanto conoce el derecho federal.

Pero en lugar de hacer esto y de garantizar la *forma republicana*, el Ejecutivo Nacional ó su Comisionado, la subvertía, constituyéndose en Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial en la Provincia de San Juan.

Pero no se limitó á esto el Ejecutivo Nacional. Reconoció una Legislatura que no era tal sinó un Club revolucionario para deponer al Gobernador Zavalla y asistió á ese mismo Club, con su apoyo y sus consejos para que consiguiese este fin.

En las instrucciones mismas dadas al Comisionado del Gobierno Nacional, está esto confesado. Allí se aconseja á la Legislatura que *acuse*, que *destituya* á Zavalla.

El poder moderador, el poder que los pueblos han constituido para garantía de sus libertades y derechos, no podía ni debía hablar en el lenguaje del partidario. El no podía declararse amigo, partidario y consejero de una fracción, comprometiendo su propia autoridad y decoro.—¿Qué hizo entonces aquella Legislatura?—Es claro, siguiendo el consejo que había recibido de su oficioso protector, acusó y destituyó á Zavalla!

Pero noto, señor Presidente, que me he anticipado.—Tengo todavía mucho que decir en el terreno de los principios y del derecho antes de entrar á los hechos.

He sostenido, señor, que el Ejecutivo Nacional no puede intervenir en las Provincias sin autorización del Congreso. En apoyo de esta doctrina está la Constitución y los precedentes argentinos.

Apenas instalado el Congreso Nacional en Buenos Aires en 1862, se presentó á su consideración la comoción de dos provincias argentinas—Corrientes y Catamarca. La requisición fué hecha al Poder Ejecutivo como era natural. ¿Intervino éste por sí? No; recabó la autorización del Congreso é intervino en virtud de ella. En 1864, con motivo de los disturbios de Salta, el Ejecutivo pidió al Congreso autorización para intervenir en aquella Provincia. El Congreso no pensó que debía intervenirse: negó la autorización y el Ejecutivo no intervino.

En 1866, requerida la intervención del gobierno nacional por las autoridades de Catamarca, el Ejecutivo recabó la autorización del Congreso y en virtud de ella intervino.

Las autoridades de La Rioja la requirieron también el año pasado, y el Poder Ejecutivo se dirigió al Congreso solicitando autorización para intervenir.

¿Puede hacerse, señor Presidente, un reconocimiento más explícito por parte del Poder Ejecutivo de las facultades del Congreso? ¿De cuándo acá se nos niega este derecho? ¿Semejante pretensión puede resistir el análisis á la luz de la Constitución y de la jurisprudencia argentina? Nótese, señor Presidente, que yo llamo jurisprudencia á los casos juzgados por los tribunales ó poderes políticos de la Nación conforme á sus facultades constitucionales, y de ningún modo á los abusos y los crímenes que se quieren hoy hacer valer como jurisprudencia por los impugnadores de este proyecto.

Hemos dicho que los señores Sarmiento y Vélez fueron los que más principal parte tomaron en la reforma de la Constitución. El primero de estos señores propuso la supresión de la palabra *sin ella* del artículo 6º de la antigua Constitución, y al hacerlo declaró que lo

hacía *para que nunca pudiese intervenir el Ejecutivo Nacional sin acuerdo del Congreso*. Es sabido, señores, agregaba—« que á estas palabras puede hallárseles otra « interpretación como á todas las cosas; pero, como se « ha dicho en el debate, Buenos Aires no es San Juan, « razón por la que no debe alarmarnos la ambigüedad « de la frase.

« El hecho que ha ocurrido es espantoso. Se ha « mandado quitar un gobernador precisamente por- « que la ley dice: para restablecerlo si hubiese sido « depuesto por la sedición. La facultad de intervenir « sin requisición ha traído los horrores de San Juan, « entendiéndose que la facultad era discrecional, re- « sultando la monstruosidad de que el gobierno na- « cional haga entrar en una Provincia donde las auto- « ridades funcionan sin obstáculo, aunque haya habido « amenaza de perturbarse el orden, su fuerza armada, « pretendiendo contra las autoridades mismas y contra « la evidencia, que el orden no está perturbado, obran- « do no sobre los perturbadores sinó sobre el mismo « gobierno ».

La supresión de la palabra *sin ella* fué, pues, una garantía contra los abusos del poder que había intervenido con la facultad que aquella palabra le daba, pretendiendo *que no necesitaba que las autoridades de las Provincias requiriesen la intervención en cualquier conflicto que se presentase, y negando que el gobierno de una Provincia pudiese ni siquiera levantar la vista y considerarse á la altura del gobierno nacional*.

Y es singular, señor Presidente, que los mismos señores, que aquello decían para aconsejar la supresión del *sin ella*, vengan á pretender la facultad de intervenir sin autorización del Congreso, eludiendo la eficacia de aquella reforma con el pretexto de la *forma republicana*.

¿De qué habría servido la supresión de aquella palabra si al Ejecutivo Nacional le estuviese atribuído el derecho de intervenir sin anuencia del Congreso, in-

terpretando á su manera y con su solo criterio cuando ha llegado el caso de garantir la forma republicana? Esta sencilla consideración bastará, señor Presidente, para demostrar que esa delicada facultad no puede el Poder Ejecutivo ejercerla por sí solo, ni aún en el receso del Congreso, á menos que motivos de un orden superior, pusieran en peligro la Constitución, y que la paz de la Nación lo obligara á ejercerla con calidad de dar cuenta.

El señor Ministro y yo estamos en este punto en extremos opuestos. El sostiene que el Ejecutivo Nacional puede intervenir sin autorización del Congreso aunque éste esté funcionando, y yo que no tiene esta facultad, ni aún en el receso del Congreso.

El señor Ministro cuenta sin duda con su indisputable habilidad para sostener su avanzada proposición; pero yo, aunque sin los recursos del señor Ministro, tengo en mi apoyo la Constitución y las mismas opiniones del señor Sarmiento.

En la antigua Constitución había un artículo cuya reforma fué propuesta por el señor Sarmiento. Ese artículo decía lo siguiente: — « Artículo 83 (atribuciones « del Poder Ejecutivo)—inciso 23—en todos los casos « en que según los artículos anteriores debe el Po- « der Ejecutivo proceder con el acuerdo del Senado, « podrá durante el receso de éste proceder por sí solo, « dando cuenta de lo obrado á dicha Cámara en la pró- « xima reunión, para obtener su aprobación».

La reforma fué aceptada y el inciso 23 pasó á ser 22, redactado en esta forma:—« El Presidente tendrá facul- « tad para llenar las vacantes de los empleos que « requieran el acuerdo del Senado y que ocurran « durante el receso, por medio de nombramientos en « comisión, que espirarán al fin de la próxima legisla- « tura. »

Se vé, pues, que la Constitución lo ha despojado al Poder Ejecutivo de aquellas facultades expresamente conferidas en otro tiempo en receso del Congreso. Si en receso del Congreso solo se le permite el nombra-

miento de los empleados para llenar las vacantes, y esto solo en comisión y dependiente de la aprobación ó desaprobación del Senado, ¿cómo puede aceptarse la doctrina de que puede intervenir sin participación del Congreso? Si el ejercicio de aquellas facultades meramente administrativas está de tal modo restringido que solo puede usarlas en receso del Senado ¿cómo y en qué artículo de la Constitución pudiera fundarse la pretensión de ejercer por sí solo una función de carácter político, la más delicada y trascendental de todas?

El mismo señor Sarmiento al tratarse de la reforma, decía que ello importaba dejar establecido que los actos del Poder Ejecutivo debían someterse á la aprobación del Congreso; pues sin esa prescripción (la del inciso 22) *y con solo la disposición implícita se había visto que todos los empleados nombrados en el receso habían seguido en sus puestos, sin que se recabase después el consentimiento de la Legislatura.*

Si tal era la mente de los reformadores tratándose de los empleos ó nombramientos que requieren el acuerdo del Senado, con mucha más razón debemos suponer que lo sería también tratándose de un asunto tan grave como las intervenciones.

Me parece, señor Presidente, que el argumento es victorioso y que difícilmente podrán contestarlo los señores Ministros.

Pero se dice que los defensores de este proyecto de ley pretenden subordinar el Poder Ejecutivo al Congreso desconociéndole las facultades que la Constitución le atribuye. Esto no es exacto, señor Presidente; nosotros sostenemos la independencia de los poderes, porque ella es la base de la buena administración y la más positiva garantía de los derechos de los Estados. Y es precisamente porque defendemos esa independencia que no queremos que el Poder Ejecutivo invocando necesidades supremas, despoje al Congreso de sus peculiares funciones.

Los defensores del gobierno confunden las facultades

inherentes al Poder Ejecutivo con las facultades concurrentes que ejerce conjuntamente con las Cámaras.— Yo quiero conceder que en el primer caso los actos del Poder Ejecutivo no puedan modificarse por el Congreso; que no haya otro remedio á los abusos, á los errores ó á las faltas, que la acusación cuando se trata del desempeño de una facultad propia. ¿Pero, cómo no ha de tener intervención el Congreso, ya sea para autorizar los actos del Poder Ejecutivo por medio de leyes, ó para aprobar ó desaprobar aquellos que no han debido consumarse sin su acuerdo? Decir que un poder no puede reveer los actos que de él dependen, porque otro poder los ha producido indebidamente, importaría á la vez que sancionar un abuso, hacer una abdicación culpable.

La Cámara de Diputados acusará cuando se trate del mal desempeño del Ejecutivo en el ejercicio de una de sus peculiares atribuciones; pero en el caso que nos ocupa no solo puede y debe juzgar el acto de la intervención, sinó revocar aquellas disposiciones que hubiesen emanado de ella.—El mismo Poder Ejecutivo no ha podido pensar que su denegación á Zavalla era un acto perfecto é irrevocable. Si así lo hubiese entendido no lo habría sometido al Congreso.

Si se entendiese que el Congreso no tiene más recurso que el de la acusación, cuando el Poder Ejecutivo, faltando á sus deberes, ó creyendo cumplirlos, ha ejercido atribuciones que no le están expresamente deferidas, resultaría entonces que verificado el juicio y condenado el Presidente, el hecho que tal acusación había motivado quedaría sin reparación y la Provincia perturbada en su orden interior.

El juicio político solo puede tener lugar cuando el Presidente ha infringido la Constitución atribuyéndose facultades que aquélla no le acuerda, ó cuando ha desempeñado mal las que expresamente le hubiesen sido delegadas; pero de ninguna manera por haber dejado de ejercer por sí solo atribuciones que la Constitución confiere á los dos poderes Ejecutivo y Legislativo.

No es, pues, el caso de la acusación, y no siéndolo el único remedio para reparar el mal causado por la sedición, es restablecer el poder que ha sido derrocado. En el caso presente este remedio es tanto más justo cuanto que la sedición ha sido apoyada por fuerzas nacionales.

Se ha citado á Pomeroy, señor Presidente, para abatir la misión del Congreso, y yo reclamo el apoyo de su opinión para levantar su autoridad. «El dice que los poderes ejecutivos pretenden considerar á los Congresos como instrumentos; ellos son los que dan la ley de que el Ejecutivo es mero ejecutor. Solo en las excepciones de aprobar las leyes ó desaprobarlas por medio del *veto*, se ve una limitación á esta regla, que se cumple aún en las atribuciones privativas del Presidente.»

El Poder Ejecutivo reúne las milicias y hace los tratados. Pero ¿qué milicia puede reunir, ni qué tratados puede celebrar, sin la autoridad del Congreso? Y si esto sucede en las facultades privativas del Ejecutivo, ¿qué no sucederá en las que corresponden á ambos poderes como en la intervención?

El hecho mismo, considerado por su lado práctico, nos está mostrando que es imposible la intervención del Ejecutivo Nacional sin la anuencia del Congreso. ¿Cómo intervendría el Ejecutivo sin que el Congreso movilizase las milicias y le votase los fondos?

Pero se dice que puede hacer todo esto y dar cuenta. ¿Pero dónde está la ley que así lo dispone? ¿En virtud de qué principio se concede al Ejecutivo y se niega al Congreso la facultad de intervenir el uno, con prescindencia del otro?

Los poderes son independientes.

Pero nadie lo ha negado!

Por lo mismo, nosotros no reconocemos esa prepotencia de unos poderes sobre otros; esa omnipotencia de las Legislaturas cuando se trata de los Ejecutivos de las provincias, y esa subordinación absoluta de los Congresos cuando se trata de los Presidentes.

No hay poderes prepotentes. Todos ellos están subordinados á la Constitución y no tienen más facultades que aquellas que les han sido expresamente delegadas.

Ni el Ejecutivo ni las Cámaras son el pueblo, sinó mandatarios de éste que ejercen la soberanía delegada. No hay más soberanía originaria que la que reside en el pueblo; y de aquí se deduce otro principio cuya consecuencia haré servir más adelante para demostrar, que tanto la acusación como la destitución del Gobernador Zavalla, no deben considerarse sinó como el resultado de la sedición en que ha tomado parte la fuerza nacional.

Sosteniendo á mi vez la independencia de los poderes, dije que no me apoyaría en las doctrinas de Pomeroy, autor que por lo que se vé es tenido en grande estima por los defensores del Gobierno.

Veamos cómo se expresa respecto á la división de los poderes.—« A la vez que el Congreso no debería entrometerse con el Presidente, en el cumplimiento de aquellas funciones que le están encomendadas por la ley orgánica, la Legislatura no debe tener menos libertad para obrar dentro de la esfera de sus propias atribuciones. El primer magistrado no debería ultrapasarse la línea que separa sus respectivos dominios. La Constitución evidentemente hace del Congreso el gran cuerpo Legislativo, y del Presidente el gran funcionario Ejecutivo. Esta es fuera de duda la idea esencial, fundamental de ese gran plan. La ley orgánica, sin embargo, reconoce excepciones á la universalidad de este principio, y más allá de esas excepciones, ni el Congreso ni el Presidente deben ir. Una de esas excepciones acabamos de establecerla. La otra existe en el hecho de que el Presidente puede de revisar todas las leyes y aprobarlas ó desaprobarlas, y que si desaprueba debe dar las razones que le han inducido á ello. Pero él no puede iniciar medidas ó debatirlas, ó expresar sus vistas sobre ellas sinó cuando desaprueba un proyecto que le ha sido



« sometido, ó cuando las recomienda á la considera-  
« ción de la Legislatura. El espíritu de la Constitución  
« que separa las atribuciones ejecutivas y legislativas,  
« se extiende hasta ahí y nada más. Sin embargo, no  
« puede negarse que la práctica ha dado mucha más  
« extensión á ese espíritu, y ha procurado por ese me-  
« dio destruir una de las principales salvaguardias del  
« Gobierno libre y constitucional—la independencia  
« de los departamentos Ejecutivo y Legislativo. El  
« resultado final é inevitable de esta práctica, será la  
« acumulación de todos los poderes gubernamentales  
« en las manos del solo funcionario Ejecutivo; el Con-  
« greso será virtualmente despojado de su carácter  
« de rama independiente, coordinada, y constituido  
« en el mero registrador de los irregulares decretos  
« del Presidente. Este cambio gradual de la letra  
« y el espíritu de la ley orgánica, y la creciente tenden-  
« cia á mirar todos los empleos como simples recom-  
« pensas políticas, y el uso de la facultad de nombrar  
« empleados como medio de influir en la legislación, ha-  
« debilitado el bien trazado sistema de frenos y equili-  
« brios que debiera haber impedido que ese departa-  
« mento de Gobierno usurpase las funciones de otro. »

¿Se quiere, señor Presidente, una contestación más categórica de parte del autor por el que tanta predilección se manifiesta, á la tendencia del Ejecutivo Nacional á despojar al Congreso de sus facultades?

Si ella no es suficiente para moderar esa sed de poder, ahí está lo que el mismo autor dice más adelante: — « El  
« poder de hacer las leyes necesarias reside en el Con-  
« greso; el poder de ejecutarlas en el Presidente. Am-  
« bos poderes implican otras muchas facultades auxilia-  
« res. Ambos encierran la autoridad necesaria para su  
« perfecto ejercicio. Pero ni el Presidente puede en-  
« trometerse en tiempo de guerra más que en tiempo de  
« paz, en la autoridad exclusiva del Congreso, ni el Con-  
« greso en la autoridad exclusiva del Presidente. Am-  
« bos dependen del pueblo cuya voluntad está expresada  
« en la ley fundamental. »

Qué más puede decirse, señor Presidente, para dejar establecido el derecho del Congreso para dar una ley que como la presente solo tiende á reparar un mal causado por imprevisión ó por un mal combinado cálculo político?

Las razones que se alegan por los defensores del Gobierno para justificar su proceder en los asuntos de San Juan, no son ménos inconsistentes que las doctrinas en que las fundan.—El reconocimiento de una Legislatura revolucionaria, el patrocinio prestado á sus propósitos disolventes, y la connivencia que resulta del estudio de los hechos, comprometen sériamente la alta imparcialidad que debía observar el Poder Ejecutivo Nacional.

Aquella Legislatura obedeciendo á las indicaciones del Presidente de la República, se reúne y expide la ley de enjuiciamiento. Mientras esto tenía lugar, viene el Ministro Albarracín á la ciudad de Buenos Aires.—Conferencia y arregla con el señor Presidente las dificultades que habían dado márgen para la declaración de rebelde que se hizo al Gobernador Zavalla. Desde ese momento, á trueque de un sometimiento humillante, aquel revoltoso, aquel rebelde que merecía ser juzgado por un consejo de guerra, queda absuelto por el Poder Ejecutivo Nacional y se le mandaba rendir las armas.

En virtud de ese arreglo el Gobernador reconoce á la Legislatura, y ambos poderes son reconocidos por la autoridad nacional.

He aquí, señor Presidente, la razón por que hemos determinado la fecha del 24 de Marzo, porque en esa fecha tenían lugar los hechos referidos. Al poner en práctica este arreglo tan felizmente terminado, surge la dificultad sobre el tiempo en que debía reconocerse á la Legislatura. El Gobernador pretendía que debía ser desde la fecha del arreglo, y la Legislatura desde que empezó la lucha con el Poder Ejecutivo. Esta emergencia, intencionalmente provocada por los que querían llevar adelante los propósitos de consumar la revolución

originó una consulta al Ejecutivo Nacional, iniciada por el general Arredondo, que no tenía en la Provincia de San Juan ni el carácter ni la autorización de Comisiona-Nacional.

El señor Presidente contesta á esa consulta en 3 de Abril, explicando cómo debía entenderse el arreglo, en términos los más amistosos y conciliatorios. El rebelde había desaparecido; se trataba únicamente del Gobernador de San Juan. Pero mientras esto tenía lugar, la Legislatura, cuyo propósito evidente era destituir al Gobernador de San Juan, expidió una ley dictada el 27 á la noche suspendiendo en sus funciones al Gobernador Zavalla, mandando al día siguiente las fuerzas militares á que se apoderasen de las oficinas públicas.

Destituído el Gobernador Zavalla, porque esto era lo que importaba la suspensión, se retira á la Provincia de San Luis, y de allí requiere la intervención. Entonces vuelve á aparecer la rebelión con todos sus caracteres alarmantes; y el señor Ministro de Relaciones Exteriores le contesta al Gobernador de San Juan con la nota cuyos principales párrafos me voy á permitir leer. (Leyó).

El señor Presidente entendía que funciones ordinarias eran deponer al Gobernador y agrega: « por lo que respecta á la posición en que V. E. se ha colocado tengo el sentimiento de decirle que V. E. no se encuentra en el pié regular de las relaciones oficiales con el Gobierno Nacional ».

¿Qué significa, señor Presidente, esto de pié *regular*? Es un término para mí desconocido en el lenguaje constitucional. ¿Cuáles son los Gobiernos que están en condiciones regulares y cuáles no? Esta palabra inventada para salir de apuros no tiene ningún significado racional tratándose de Gobiernos que forman parte de la Nación, que obedecen la Constitución.—Los Gobernadores de Provincia, ó son rebeldes cuando se alzan contra las instituciones, ó no lo son si obedecen la Constitución, y en este caso son acreedores al apoyo y protección del Gobierno Federal.

pesos, ó acusar al Presidente por malversación de los dineros del Estado?

Pero el señor Ministro ha establecido la teoría de que el único derecho del Congreso en este caso, es dar una ley para lo sucesivo, es decir, una ley que diga en adelante el Presidente no invertirá un millón de pesos en premios al ejército. El absurdo resulta aquí de bulto.

Como este decreto del millón hay muchos otros: hay uno derogando la ley de patentes de invención; otro creando un departamento topográfico; otro suprimiendo empleos en la Capitanía del Puerto, y tantos otros que sería innecesario enumerar.

Todos ellos han sido dictados por el Presidente con calidad de dar cuenta al Congreso. ¿Para qué da cuenta, repito si no reconoce en el Congreso la facultad de aprobarlos, ó de restablecer las cosas al estado que tenían antes? ¿O es simplemente una precaución administrativa, una noticia para que se consigne el hecho en el archivo?

No, señor Presidente, es para que le digamos que eso de que nos dá cuenta ha sido bien ó mal hecho; para que le prestemos nuestra conformidad ó lo reprobemos, no para que lo acuse la Cámara, porque este, no es el caso de la acusación: el acto no pertenece á las funciones del Presidente; « No hay mal desempeño de sus funciones ». No es un acto de un carácter permanente, ni obligatorio, ni tiene un carácter definitivo, mientras que el Congreso no lo apruebe.

El señor Ministro hace una confusión muy lamentable de las facultades ejecutivas y legislativas. El Congreso no puede deshacer los procedimientos del Poder Ejecutivo dice, y en esto hay un grave error sobre el cual llamo la atención de la Cámara.

El Congreso no puede, en efecto, restringir las atribuciones del Poder Ejecutivo como no puede ampliar las que le ha concedido la Constitución; pero puede establecer reglas para su ejercicio en virtud de la atribu-

ción 28: puede prohibirle que disponga de los dineros del Estado en otra forma que la establecida en el presupuesto, bajo la responsabilidad que estime conveniente establecer. El Congreso no puede decirle al Ejecutivo, usted señor Presidente está ejecutando mal esa ley; pero tiene en reserva la acusación ó la censura según la gravedad del caso.

El señor Ministro nos ha citado una sentencia de la Suprema Corte, declarándose incompetente para juzgar sobre un acto del Ejecutivo, deduciendo de aquí que ni los Tribunales pueden revocar los actos del Poder Ejecutivo, mientras que pueden declarar sin aplicación las leyes del Congreso.—El hecho que nos ha citado el señor Ministro no es aplicable; él no prueba lo que quiere. La Corte Suprema se declaró incompetente porque la demanda versaba sobre indemnización de perjuicios causados en la guerra. Reclamaciones de este género, ni la Corte ni el Poder Ejecutivo pueden atender; ellas corresponden sólo al Congreso que es el que dispone del tesoro.

Estos son los argumentos del señor Ministro. . . .

*Señor Ministro de Relaciones Exteriores*—No son estos los fundamentos de la sentencia.

*Señor Oroño*—Puede leerla otra vez el señor Ministro.

*Señor Ministro*—Verá como dice terminantemente que el Poder Ejecutivo no puede ser demandado. . . .

*Señor Granel*—Sería bueno que no hiciéramos diálogos.

*Señor Oroño*—No importa que me interrumpa el señor Ministro cuantas veces quiera.

Tengo que ser lo más sencillo que me sea posible en mis explicaciones porque importa á la verdad y á la ilustración de la cuestión.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad *en estado de sitio* de ordenar la traslación de un individuo de un punto á otro: sobre esto no hay cuestión, ni nadie puede negarle ese derecho. Pero en tiempo de paz se le ocurre ordenar la traslación de un ciudadano sea cual sea el motivo; principia por encarcelarlo ó emplea la fuerza para

hacerlo salir. '¿Qué debe hacer, señor Presidente, el ciudadano agredido en sus derechos? ¿Obedece la orden del Presidente? No, señor Presidente. Reclama de la justicia la garantía que le acuerda la Constitución, y el Juez declara que el Ejecutivo no ha podido privar de su libertad á ese ciudadano. El acto queda revocado sin apelación y el ciudadano objeto de la persecución, en libertad por la simple acción del privilegio del *habeas corpus*.

El Poder Ejecutivo ordena la reunión de las milicias de Chivilcoy por ejemplo, y las manda á la frontera; pero como no hay ley que autorice tal movilización, los Guardias Nacionales se presentan reclamando las garantías personales que les acuerda la Constitución, y el Juez en virtud de la Constitución declara que no están obligados á prestar ese servicio.

Creo, señor Presidente, haber demostrado que la Justicia federal puede y debe en su plenísimo derecho deshacer los actos arbitrarios é inconstitucionales del Presidente, á solicitud de parte. Para eso ha sido instituída la justicia.

La tercera cuestión que nos ha propuesto el señor Ministro es la siguiente: ¿Puede el Congreso juzgar las leyes de un Estado? Decididamente no, señor Presidente—no tratamos de juzgar ninguna ley del Estado de San Juan.

Nuestro juicio versa sobre la intervención requerida; sobre la revolución que ha tenido lugar en San Juan, y sobre las condiciones en que se encuentra esa Provincia para hacer en ella efectiva la garantía.—Más todavía; nuestro juicio se refiere á la Constitución nacional, á su interpretación en el caso ocurrido. Pero al hacer este juicio no podemos prescindir del examen de los hechos y de las disposiciones legislativas de las autoridades de San Juan que se relacionan con ella. Necesitamos traer á juicio todos los antecedentes de la cuestión. Es necesario saber quién es Zavalla; por qué ha sido destituido; qué valor legal tiene el juicio que se le ha promovido, y lo que es la Legislatura de San Juan

De otro modo el Congreso no podría ejercer con acierto la augusta misión que le está encomendada, y se convertiría en una máquina de pasiones é intereses inmorales. Cuando se va á acordar la intervención, es menester saber quién la solicita, qué poder tiene para ello, y las condiciones en que se halla la Provincia que va á ser intervenida.—¿Por qué habría de hacerse efectiva la garantía del artículo 5º de la Constitución, si la Provincia ó su gobierno no se hallan en las condiciones requeridas por aquella misma disposición?

El último atrincheramiento de los señores Ministros parece ser las recriminaciones al señor Zavalla. Se dice que era un mandón arbitrario, que había cometido todo género de atentados, siendo el último de ellos el haberse revelado contra la autoridad nacional.

Estamos tan acostumbrados, señor Presidente, á presenciar los atentados del poder, y el abuso de la fuerza, que no es posible mirar sin repugnancia tales hechos y dejar de ponerse del lado de la ley y de los derechos del pueblo.

El delito de rebelión por su naturaleza y consecuencias es tan grave, que si el Ejecutivo Nacional no lo condenara, ahí está la justicia federal con sus poderes constitucionales para hacerlo. Pero la rebelión es un delito perfectamente definido por la ley. Cometen este delito los que se *levantan públicamente en armas contra las autoridades nacionales*. ¿Se hallaba en este caso el Gobernador Zavalla? ¿Se había levantado públicamente contra las autoridades nacionales? Si era, pues, rebelde ó sedicioso, ha debido estar en poder de la justicia federal. ¿Quién lo ha autorizado al Ejecutivo Nacional para apropiarse el conocimiento de causas que corresponden á otros poderes? Si Zavalla era rebelde ¿por qué se encuentra requiriendo la intervención en vez de estar en la cárcel? ¿O la pena del delito de rebelión en los Gobernadores es la revolución?

Señor Presidente, en el fondo de todo esto se en-

cuentra el desprecio de todas las garantías y el mal uso que se ha hecho de la fuerza no solo contra el Gobernador de San Juan, sinó contra el Congreso, y contra los Tribunales. Por eso he dicho, señor Presidente, que los que vienen á sostener estos actos como legítimos, sostienen las *facultades extraordinarias*, la absorción de todos los poderes del Estado por el Ejecutivo Nacional.

El simple estudio del discurso del señor Ministro de Relaciones Exteriores, á pesar de que ha procurado engalanarlo con un estilo florido y con frases sonoras para cautivar la imaginación de los que escuchan, bastará para descubrir esta tendencia, al mismo tiempo que la sin razón, la falta de solidez en su argumentación, y la inoportunidad de las citas de autores americanos.

No es en los tratadistas norteamericanos donde debemos estudiar nuestra Constitución y la jurisprudencia que tenemos que seguir. Después de 15 años de vida constitucional, en que hemos vivido siempre preocupados de las intervenciones, no es posible que nos manifestemos ignorantes de lo que prescribe nuestra ley fundamental, y que desaprovechemos las lecciones fecundas de la historia. En cada año hemos tenido una intervención á las puertas. Cada año hemos tenido que considerar hechos análogos y estudiar en la Constitución el medio de darles una solución conveniente.

De ese estudio resulta, que jamás el medio de la fuerza fué eficaz ni constitucional en la forma empleada por el Ejecutivo. Algún hecho sangriento, algún escándalo ha sido el resultado del empleo de esos medios, dejando á la Provincia, en nombre de cuya paz se ha intervenido, en peor situación que la que tenía al requerir la intervención. Es, pues, ilusorio pretender encontrar la relación de estos hechos en los libros americanos. Allí no han ido, ni irán á ningún Estado esas intervenciones oficiosas de la fuerza; allí no irán las fuerzas nacionales á situarse en las capitales



de los Estados, porque saben que las sacarían á *bayonetas*; allí saben que los derechos de los pueblos están arriba de los derechos de los individuos, porque tales son las garantías que han querido asegurar en la Unión.

Entre nosotros parece que se cree lo contrario. Se considera muy llano, muy sencillo, el mandar á los comandantes y á los batallones á ocupar las Provincias á pretexto de presuntos peligros, ejerciendo en ellas por este medio una influencia decisiva sobre los Gobernadores y sobre el pueblo.

Si no hubiera, señor Presidente, otros motivos y otros hechos para apoyar la opinión de que el Ejecutivo Nacional quiere absorber los poderes del Congreso y de los Estados, bastaría la presencia de las fuerzas nacionales en las Provincias. ¿Qué interés honesto tiene el Ejecutivo Nacional en estas intervenciones permanentes? ¿Qué interés tiene en ser él sólo el que intervenga en las Provincias, cuando ellas reclaman el apoyo del Gobierno Nacional? ¿Por qué quiere cargar sólo él con la responsabilidad? ¿No es mejor que la comparta con el Congreso?

¿No cree que alguna vez pueden pedirle cuenta de los millones que indebidamente se han gastado en esas desautorizadas intervenciones? ¿Cree que ha de tener siempre una mayoría decidida en la Cámara de Diputados, dispuesta á no dejar sentir los impulsos de la libertad ni á escuchar la palabra acusación?

Se nos viene á hablar de la independencia de los poderes. ¿Cuál es la independencia que nos deja el Ejecutivo? ¿La humillación, la sumisión á sus mandatos? ¿Desempeñamos acaso otro rol que el de meros autómatas para decir sí á todo lo que nos propone el Ejecutivo? Ni el derecho á usar en el juicio de las graves cuestiones que se nos presentan de nuestro propio criterio se nos quiere respetar. ¿Entonces para qué estamos en este lugar? ¿No sería preferible que satisfaciendo las pretensiones de los señores Ministros les diésemos un voto de confianza?

¿Se satisfaría el señor Ministro con una ley en estos términos? :

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º Quedan suspendidas las sesiones ordinarias del Cuerpo Legislativo, dejando al Poder Ejecutivo Nacional en plena libertad para gobernar la República según su *ciencia y conciencia*.

Art. 2º Las sumas destinadas por el presupuesto vigente al pago de las *dietas* de los miembros del Congreso, serán aplicadas á fomentar la guerra civil en las Provincias, y á derrocar á los Gobernadores en ellas establecidos.

Art. 3º Los actos del Poder Ejecutivo no podrán en ningún caso ser desaprobados por el Congreso, no debiendo aquél dar cuenta de ellos al Cuerpo Legislativo en sus próximas sesiones.

Art. 4º Comuníquese, etc.

¿Le satisfaría al señor Ministro una resolución del Congreso en estos términos?

*Señor Ministro de Relaciones Exteriores*—Yo le contestaré al señor Senador.

*Señor Oroño*—Puede ser que así nos encontrásemos de acuerdo y que de ese modo esta discusión tocase su término.

*Señor Ministro*—No me gustaría, desde ya se lo digo.

*Señor Oroño*—Sí, le había de gustar al señor Ministro desde que el Poder Ejecutivo en vez de entrar á la senda que le demarca la Constitución, se ocupa en gastar los tesoros de la Nación en mandar intervenciones á las Provincias.

*Señor Ministro*—Absolutamente no me gusta, la vetaría si fuera Presidente.

*Señor Oroño*—Esto es lo que en resumen nos han propuesto los señores Ministros en sus extensos discursos. No le digamos nada al Poder Ejecutivo, no tenemos derecho para decirle una palabra; él es árbitro de los destinos del país, y es el único que tiene el secreto de la felicidad de la Nación!

Pero que esto se venga á sostener por un joven tan distinguido como el doctor Varela, cuyo apellido sólo importa una gloria para nuestro país, es lo que más mortifica, señor Presidente, mi corazón argentino.

Esto es lo que nos propone, señor Presidente, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, sin recordar que estas *facultades extraordinarias*, que hoy defiende con tanto calor, fueron las que armaron del puñal el brazo del asesino Cabrera para hundirlo en el corazón de su ilustre padre! Esto propone el señor Ministro del Interior en el último tercio de su vida, después de haber contribuido á fundar el derecho constitucional en nuestro país....

*Señor Ministro del Interior*—No lo entiende el señor Senador.

*Señor Oroño*—Es que el señor Ministro hace lo que cierto abogado del imperio vecino. Encargado para redactar el Código Civil, después de ocho años de trabajo espensado por el gobierno imperial, le dice:—todo esto que he hecho no vale nada; necesitamos cambiar de sistema; pero es necesario que hagamos un nuevo contrato. He aquí lo que hace el señor Ministro del Interior.—La Constitución, todas sus doctrinas, sus servicios para fundar el derecho constitucional, todo ha venido á caer en tierra ante las teorías francesas, ante las leyes españolas que gobernaban la Colonia....

*Señor Navarro*—.....

*Señor Oroño*—No quiero que me interrumpa el señor Senador.

Y aquí surge, señor Presidente, una cuestión de gustos. Hay algunos señores Senadores tan solícitos, tan decididos defensores del Poder Ejecutivo, que estarían mejor en el sillón de un Ministro, que en las bancas del Congreso. (Aplausos)

Yo no concibo, señor Presidente, como el sentimiento de la propia dignidad y los deberes del puesto que desempeñamos, no hayan de considerarse heridos cuando se nos viene á decir: «vosotros no reprentais nada en el país». «No teneis otra misión ante la

Nación que recibir el sueldo que os acordamos todos los años ».

No, señor Presidente; nuestra misión es muy alta. El Senado especialmente, representa un gran papel en los Estados Unidos como que se compone de la representación de los Estados; y entre nosotros, está investido de delicadas funciones. Allí como aquí, ejerce no solo funciones legislativas, sinó administrativas, y es una especie de Consejo de Estado para ayudar al Presidente de la República al buen gobierno del país.

He dicho.

---





## DISCURSO

PRONUNCIADO EN LAS SESIONES DEL MISMO AÑO CON MOTIVO DE LA  
DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE  
INTERVENCIÓN QUE TUVO LUGAR EN EL SENADO NACIONAL

---

*Señor Oroño*—Señor Presidente: ya que el señor Senador por Córdoba quiere que entremos á la discusión de este asunto—. . . .

*Señor Navarro*—....

*Señor Oroño*—No me interrumpa, señor Senador.

Decía, señor Presidente, que desde que el señor Senador por Córdoba desea que entremos francamente á la discusión del proyecto de ley de intervención, y el Senado asintiendo á este deseo ha rechazado mi moción para que se votase sin discusión, nada es más justo que complacerlo, y yo voy á informar á la Cámara á nombre de la Comisión de Negocios Constitucionales en mayoría sobre los motivos que nos han inducido á aceptar estos proyectos de ley.

Antes de entrar en materia, la Cámara me ha de permitir, señor Presidente, que deje bien definida mi posición en el debate, porque quiero desvanecer las impresiones que pudieran hacerse valer contra el proyecto de ley, y la equívoca é injusta interpretación que se hace de nuestras intenciones, atribuyéndonos móviles

y propósitos, que por honor del Honorable Senado, me creo en el deber de rechazar.

Al proceder así, señor Presidente, no me mueve ningún interés personal, porque comprendo que mi persona nada vale al lado de los grandes principios comprometidos en esta discusión. Lo hago solo en el interés de que el resultado de este proyecto de ley, en el ánimo y en la decisión del Senado, corone los esfuerzos de sus iniciadores, satisfaciendo al mismo tiempo las aspiraciones del país, en la defensa y salvaguardia de aquellos principios en que reposa la libertad de los individuos y los derechos de los pueblos.

La prensa oficial y el mismo señor Presidente de la República, en un documento que ha visto la luz recientemente, se han permitido asegurar que este proyecto de ley responde á combinaciones subversivas del orden nacional, y que tiende al mismo tiempo á salvar á los Taboadas de los peligros que los amenazan. Semejante aseveración, si fuese exacta, bastaría para recomendar la adopción de este proyecto, porque ella revelaría la intención del señor Presidente de hostilizar al Gobernador de Santiago, emprendiendo desde luego una cruzada contra los gobiernos de las Provincias.

Pero tal aseveración, señor Presidente, es de todo punto infundada, y no tiene más antecedentes que, ó los naturales recelos de una conciencia culpable, ó los quiméricos temores que se forjan los espíritus inquietos y desconfiados, presintiendo como resultado lógico de sus errores una oposición intencionalmente calculada para resistirlos.

Por mi parte, señor Presidente, me hago un deber en declarar como un homenaje de respeto al Senado, que no estoy afiliado á ningún partido personal, ni soy de aquellos que sacrifican á sus pasiones é intereses los deberes que el patriotismo y la moral les imponen, haciendo traición á los principios para abrir el camino á las ambiciones personales ó al interés de los círculos.

No, señor Presidente; mi bandera es la Constitución

de la República; mi partido está ahí donde están sus defensores. Esta es la regla de mi conducta política—estos son los principios á que he subordinado espontáneamente mi voluntad y mi conciencia, y sobre las cuales reposa mi inquebrantable decisión de no transigir con aquello que de alguna manera se oponga á la ley suprema del país. Y no soy, señor Presidente, de los que cambian de opinión según las simpatías que profesan á los hombres del poder, ó según el interés que los induce á complacerlos.

Si no soy digno de que se me cuente en el número de los que tan enfáticamente se denominan liberales, me considero con derecho, señor Presidente, para formar en las filas de los que defienden las instituciones, buscando en la libertad de sus compatriotas y en la propia, la única apetecible recompensa del modesto y sincero sacrificio de trabajar por el bien del pueblo, y por la garantía de sus derechos. (Aplausos).

No tengo conexión con ninguno de los bandos políticos en que pudiera estar dividida la República, y mucho menos con aquellos que, según el mismo señor Presidente, le disputan el poder de que se halla investido por la Constitución. El señor Sarmiento y el señor Taboada no tienen para mí más importancia que aquella que les dá los principios que representan.

Esa minuta á que el señor Presidente se ha referido en su carta al Gobernador de Santiago, atribuyéndosela al señor Senador Zavala, si bien expresa las opiniones de los señores Senadores que la firmaron conmigo, me pertenece en su iniciativa y redacción, y ella contiene las ideas que he sostenido siempre en el parlamento y en la prensa.

He sido y soy enemigo de las intervenciones *oficiosas*. lo mismo en la presidencia del general Urquiza que en la del general Mitre, porque soy y seré siempre enemigo de los abusos del poder y de la pretensión de sojuzgar la libertad y los derechos de los pueblos á título del mayor saber, ó del mayor poder que puede emplearse para usurpar facultades que la Cons-



titución ha negado expresamente á los poderes nacionales.

Hé aquí brevemente explicada la razón de mi proceder en este como en cualquier otro asunto en que yo considere comprometidos los principios que defendiendo.

Los que defendemos este proyecto no somos, pues, opositores sistemados. Lo defendemos porque queremos que las garantías que la Constitución acuerda á los pueblos sean una realidad. Lo defendemos porque en él vá envuelto un derecho del Congreso, cuyas facultades y prerrogativas se desconocen, y que es nuestro deber reivindicar.

Lo defendemos, porque deseamos por honor de nuestro país, que el hombre que se halla al frente de sus destinos, sea fiel á los compromisos que ha contraído, que no se aparte del camino trazado por la Constitución, y que no caiga en la vulgar debilidad de buscar la fuerza y el apoyo que el ejercicio de las instituciones le reclaman, en el poder militar, en los medios extraordinarios arrancados á la condescendencia del Congreso, y en el ejercicio discrecional de facultades que ninguna ley le ha conferido.

Lo defendemos, finalmente, porque no queremos que el Gobierno Federal que hemos creado para asegurar la paz y los beneficios de la libertad, se convierta en enemigo de los pueblos y comprometa su tranquilidad, persiguiendo el quimérico propósito de constituir agentes suyos que satisfagan á sus miras, en el gobierno de cada una de las provincias, con menoscabo de las libertades consagradas por la Constitución y violando el pacto de unión que liga á los pueblos con la Nación.

Lo que defendemos, pues, lo que queremos, lo que deseamos y exigimos no es más que el cumplimiento de la Constitución, haciendo valer sus prescripciones y la clara inteligencia que de cada una de ellas se desprende, contra esa combinación peligrosa de la libertad en las palabras y la centralización y el despotismo

en los hechos, que colocan al Gobierno Nacional en la misma impotente condición de aquellos *grandes árboles sin raíces entregados á la furia de los vientos*. (Aplausos).

Nuestro deseo no puede ser ni más honesto ni más legítimo, y el señor Presidente de la República, mejor inspirado, habría reconocido la nobleza de nuestros sentimientos, la sinceridad de nuestros propósitos, recibiendo las opiniones y consejos de los que él llama opositores sistemados, como un aviso oportuno de los peligros que corre su gobierno arrastrado por pasiones é intereses, que no son los intereses y pasiones de la Nación, y quizá ni los del mismo señor Presidente de la República.

Si la historia es una escuela de gobierno, dice un publicista argentino, no debemos malograr sus lecciones porque sea mortificante su lenguaje. ¿Y quién mejor pudiera aprovecharla, señor Presidente, que aquel cuyos estudios y experiencia le han enseñado lo bastante para comprender que en la tolerancia de las opiniones ajenas se encuentra la más positiva garantía de nuestras propias opiniones; que en el respeto que se consagra por los que mandan á los derechos de los pueblos, hemos de hallar los medios más seguros para afianzar la paz, así como en el concierto y armonía de los poderes públicos encontraremos esa perfección moral que constituye la felicidad de otros pueblos, y que nosotros podemos también alcanzar, escuchando sin orgullo y sin esa vanidad pueril, impropia de los hombres de estado, las previsoras indicaciones de la prudencia.

Si el señor Presidente de la República tiene títulos para ocupar la más elevada posición á que pudiera aspirarse en el Gobierno del país; si ha contribuido á la organización nacional, y si esa misma elevación es un justo premio á sus talentos y servicios; esos títulos, esos servicios y talento, no le dan derecho para pretender imponernos su opinión por la violencia, ni para exigirnos esa servil imitación de lo que hacen ó han

hecho en otros pueblos, aunque no cuadre á nuestra situación, porque tal pretensión importaría una traición á los principios, un atentado contra la libertad de nuestras opiniones y contra la ley fundamental que las garante.

Regenerar á los pueblos por la fuerza y la amenaza, es el despotismo, es la usurpación, que en nombre de un interés honesto se quiere hacer de los derechos más preciosos de los pueblos.

Si las explicaciones que preceden son, como lo espero, suficientes para disipar las sombras que se quieren proyectar sobre nuestras intenciones, la exposición de los motivos que nos han decidido á aconsejar la adopción del proyecto de ley, que brevemente voy á hacer, lo serán igualmente para demostrar su constitucionalidad y conveniencia.

Despojada la cuestión de ese carácter odioso, ella tiene que ser considerada bajo el solo aspecto de las conveniencias nacionales, que no son otras que las conveniencias que resultan de la practicabilidad del sistema federal que nos rige.

Yo podría también, señor Presidente, traer en apoyo de las opiniones de la Comisión las doctrinas de los maestros de la ciencia constitucional, la de los comentaristas de la Constitución norteamericana que tan á menudo se han citado en estas discusiones, y la jurisprudencia de los Estados Unidos; pero no sería sinó para probar que en ningún caso ni por motivo alguno, no siendo el de invasión exterior ó de una Provincia sobre otra, debiera intervenir el Gobierno general en los asuntos internos de los Estados. Esto es lo que nos enseña la historia de ochenta años de práctica constitucional en los Estados Unidos; y esto es justamente lo que nos aconseja la experiencia de nuestras cosas.

Pero todo esto sería superfluo y redundante después de la luminosa discusión que ha tenido lugar en la Cámara de Diputados, en la que algunos de los más distinguidos oradores de nuestro parlamento han defendido

este proyecto de ley, contestando á las impugnaciones de los Diputados *ministeriales*, con la fuerza irresistible de la lógica y con la severa é incontestable elocuencia de la historia. Después de aquella luminosa discusión en que la simpática y persuasiva palabra del Diputado Quintana ha obligado á los opositores á reconocer el derecho del Congreso para dar la ley de intervenciones, ¿qué podría yo decir, señor Presidente, que no fuese un pálido reflejo de las ideas que con tanto brillo se han sostenido en la Cámara de Diputados.

La necesidad de una ley reglamentando el artículo 6º y el ejercicio de la facultad que él le confiere al Gobierno Federal, no solo nos la impone la misma Constitución, sinó la historia sangrienta de los hechos ocurridos, que deben ser el hilo conductor de nuestro juicio para no extraviarnos buscando en los ejemplos de otros pueblos, lo que nuestra misma historia nos enseña en cada una de sus luctuosas páginas.

La Constitución ha acordado en los artículos 5º y 6º la protección y garantía del Gobierno federal á las instituciones locales de cada Provincia; y este deber y compromiso de la Nación que ha creado un derecho para los pueblos, ha creado tambien como indispensable consecuencia la necesidad de establecer, por qué medios, en qué casos, y la forma en que esa garantía debe hacerse efectiva.

Este es el punto capital de la cuestión, y sobre el cual no es posible que haya divergencia de opiniones. Se ha sostenido, sin embargo, que el Congreso no tiene derecho para dar esta ley; que no tiene derecho para calificar los casos de conmoción interior y cuándo una Provincia se halla fuera de las formas republicanas. Pero los mismos sostenedores de esta inexplicable aberración para hacer más patente sus contradicciones, presentan á la consideración del Congreso aconsejando su sanción, otro proyecto de ley que trae por recomendación el ser la ley que rige en los Estados Unidos.

El mismo Ejecutivo ha tratado de oponerse á este

proyecto presentando otro, en el cual se transcribía la disposición de la ley dada por los Estados Unidos sobre la materia, sin meditar que la República Argentina no son los Estados Unidos; ni las necesidades, costumbres y hechos tienen algo de semejante con la vida de aquel gran pueblo, nacido de la práctica de la libertad y educado en los principios de la federación que precedió á su organización independiente, puesto que nosotros salimos del militarismo colonial que aún vive en nuestro espíritu, en nuestras tendencias y contra el cual venimos reaccionando desde la revolución de 1810.

Querer trasplantar á nuestro suelo la legislación de los Estados Unidos, sin trasplantar sus costumbres ó su vida social; es un grande absurdo, porque sería legislar para un pueblo que no tenemos aún, y que estamos creando en el molde de nuestra Constitución.

En este terreno son igualmente insostenibles las opiniones del Ejecutivo y sus sostenedores.

Si el Congreso no tiene derecho para reglamentar el artículo 6º en la forma que lo hace el proyecto de ley que se discute, es claro que tampoco lo tendrá para reglamentarlo de ninguna otra manera. Pero reconocido el principio de la facultad del Congreso para tomar la participación que le corresponde en las funciones relativas á la protección y garantía de las instituciones provinciales, la cuestión quedaría simplificada y reducida únicamente á las proporciones de la ley, y á la extensión de facultades que se habrán de conferir al poder interventor.

El derecho del Congreso y la necesidad de reglamentar los artículos 5º y 6º ha sido reconocido en todos tiempos como lo demostraré más adelante, tanto por el Poder Ejecutivo como por nuestros mismos publicistas. Antes de ahora nadie se ha atrevido á poner en duda este derecho que nace de la esencia misma del sistema republicano y de la indispensable división é independencia de los poderes públicos creados por la Constitución.

•

La pretensión, pues, de negarle al Congreso este derecho, es nueva, señor Presidente.—Ella felizmente no se apoya ni en la opinión de los tratadistas de derecho constitucional, ni en la jurisprudencia de los Estados Unidos, ni en nuestros propios precedentes.

El derecho y la incontrovertible facultad del Congreso para dar una ley, ya sea en esta forma, ya en otra, se deriva de la misma Constitución, y aún cuando rara vez lo ha ejercido, no puede deducirse de aquí que ha renunciado á sus atribuciones para constituir en favor del Poder Ejecutivo un derecho nuevo y exclusivo para determinar y resolver por sí solo los casos de intervención, y la manera de desempeñar esta elevada función política que tan íntimamente se relaciona con los derechos de los pueblos.

En 15 años que llevamos de vida regular, bajo el imperio de la Constitución, no ha surgido jamás ni siquiera la duda sobre la exactitud de esta doctrina. Todos los Congresos, los Poderes Ejecutivos; todos los publicistas han reconocido el derecho pleno del Congreso para dar la ley reglamentaria del artículo 6º, ó para decidir en cada caso la forma en que debiera ejercitarse la intervención.

La única objeción que se ha hecho el año pasado al proyecto de ley que se discutió en esta Cámara, se refería solo á la oportunidad; ninguna otra observación se hizo, ni por los señores Senadores, ni por los Ministros del Poder Ejecutivo contra la ley de intervención.

Pero ahora se dice, que no es solo al Congreso á quien corresponde resolver los casos de intervención. ¿Y quién ha negado al E. N. el derecho de participar en la sanción de las leyes? Sería absurdo pretender que las facultades conferidas por la Constitución al Gobierno Federal, fuesen solo ejercidas por cualquiera de los poderes aisladamente. ¿Quién le ha prohibido al P. E. que mande sus ministros al seno de las Cámaras á tomar parte en el debate? La participación de ambos poderes en la elaboración de la ley, es justamente lo que nosotros sostenemos: que el Congreso dé la ley

con la concurrencia del Poder Colegislador, y que el Poder Ejecutivo la ejecute como lo entienda mejor, quedando sujeto á la responsabilidad que la Constitución ha establecido.

¿Hay algo más sencillo, más natural, más ajustado á la Constitución y á los principios de todo buen gobierno?

¿De qué proviene entonces esta oposición al derecho escrito y el desconocimiento de las prerogativas del Congreso?

En la historia de la República, en los actos del Gobierno de la Confederación, y en los del Gobierno del general Mitre, vamos á encontrar tambien una solución satisfactoria á las dudas que surgen de la tenaz oposición que se hace á este proyecto de ley. Vamos á ver en el estudio de aquellos actos relativos á las intervenciones, que siempre que el Ejecutivo intervino fué en receso del Congreso, y que cuando fué requerida su intervención por las autoridades constituídas de las Provincias, estando el Congreso reunido, solicitó para acordarla la autorización del Congreso.

Mejor que los tratadistas norteamericanos, mejor que los publicistas hablarán los hechos con su incontestable elocuencia. Ellos van á demostrar por el orden y el desenvolvimiento de los acontecimientos, que antes de ahora ningún gobierno argentino se creyó autorizado para intervenir en los asuntos interiores de las Provincias sin ser previamente facultado por el Congreso; y que todas las intervenciones que han tenido lugar sin aquel indispensable requisito, han sido en receso del Congreso.

---

Examinemos primero las intervenciones que durante el gobierno de la Confederación tuvieron lugar en las provincias.

En 1853, poco tiempo antes de jurada la Constitución,

se nombró por el Gobierno Provisorio de la Confederación, una comisión compuesta del doctor don Márcos Paz y del presbítero Lavaisse, Diputado al Congreso Constituyente, para arreglar pacíficamente las diferencias ocurridas en las provincias del Norte, Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. El decreto lleva la firma de los señores del Carril, Zuviría y Fragueiro; y debe notarse que la comisión era simplemente pacificadora, sin autorización para emplear las armas, y que ella tuvo lugar antes de la organización definitiva de la Nación.

En 1854, después de constituido el Gobierno Nacional, fué declarada la provincia de Corrientes *en estado de sitio*, y comisionado el mismo Gobernador doctor Pujol, para pacificar aquella Provincia. No hubo propiamente intervención, ni las armas nacionales entraron al territorio de Corrientes. El decreto fué expedido por el general Urquiza, Presidente entonces de la Confederación, y lleva la firma del doctor don Benjamín Gorostiaga, su Ministro del Interior; y en uno de sus artículos se previene que se dará cuenta al Congreso, que aún no se había reunido, para su aprobación.

En julio de 1856, tuvo lugar la revolución de Santa Fé que derrocó al señor Cullen.—El Congreso se hallaba reunido en el Paraná, y casi unánimemente estaba dispuesto á restablecer en su puesto al Gobernador derrocado, y así lo habría hecho si el señor Cullen no hubiese renunciado. La renuncia del Gobernador legítimo hizo innecesaria la intervención; pero dos meses después, cuando el Congreso había cerrado sus sesiones ordinarias, en Octubre 26, se comisionó con el carácter de interventor al doctor Derqui.

El 23 de Noviembre del mismo año, fué retirado este comisionado y nombrado en su lugar el general don Juan P. López, promotor principal de la revolución.—El hecho fué escandaloso y trajo por consecuencia muchos otros; pero se había procurado salvar las formas y los respetos al Congreso y no había intervenido la fuerza



militar, limitándose á emplear la influencia moral del Gobierno Nacional.

El 5 de Marzo de 1857, se autorizó por el Ejecutivo Nacional del Paraná, la primera intervención á La Rioja, comisionándose al general Benavidez.—En 6 de Abril del mismo, se acordó la intervención primera á San Juan, comisionándose al doctor don Nicanor Molina.—El 18 de Abril de este mismo año, se le retiró la comisión al general Benavidez, cometiéndosela al doctor Molina.

El 3 de Octubre de 1857, se acordó otra intervención á La Rioja, nombrándose al doctor don Mateo Luque para que, trasladándose á aquella Provincia, procurase terminar pacíficamente las diferencias ocurridas entre los *poderes públicos* de ella.—El interventor fué solo, sin aparato de fuerza y sin más apoyo que la autoridad moral del Gobierno Nacional.

El 14 de Octubre de 1858, se acordó otra intervención á San Juan, comisionándose al general Galán y al doctor don Baldomero García.—Esta comisión era extensiva á las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja, y fué muy luego reforzada por el doctor Derqui.—La historia de este suceso es bien conocida de todos y los procederes de los comisionados se nos han recomendado pocos días há como *Jurisprudencia Argentina*, aplicable al caso de San Juan.

En 1859, en receso del Congreso, fué comisionado el general don Pascual Echagüe para intervenir en Mendoza. En Julio del mismo año se presentó al Senado de la Confederación, un proyecto de ley mandando suspender aquella intervención. El Poder Ejecutivo no negó al Congreso su derecho, y mandó retirar la intervención, aunque el proyecto no llegó á ser ley.

En 1860, en receso del Congreso, fué nombrado el señor Bustamante, actualmente Senador por la provincia de Jujuy, para intervenir en La Rioja. El podrá decirnos cuantos batallones llevaba á sus órdenes.

En Noviembre de 1860 tuvo lugar la más funesta

de las intervenciones á la provincia de San Juan, acordada con el consejo del Gobernador de Buenos Aires.

En Abril de 1861, el doctor Derqui en persona intervino en la provincia de Córdoba, derrocó al señor Peña, Gobernador de aquella Provincia, disolvió la Legislatura, desterró á los Diputados y reunió el ejército que trajo á Pavón.

En Julio del mismo año se acordó la intervención á Santiago estando el Congreso reunido, pero sin autorización de éste, por cuya razón el Gobierno de Santiago desconoció el carácter del comisionado Nacional fundándose en que la intervención no había sido autorizada por el Congreso.

Como se vé, todas estas intervenciones, exceptuando la de Córdoba y Santiago, han tenido lugar en receso del Congreso y de todas ellas se daba cuenta, ya en mensajes especiales ó en las memorias anuales de los Ministros, recabando la aprobación del Congreso.

No dejaré de hacer notar que las dos más funestas intervenciones del Gobierno de la Confederación, la de San Juan y la de Córdoba, se ejecutaron con fuerza armada y con el propósito deliberado de destruir el orden legal establecido en cada una de esas Provincias, avasallando su soberanía y quebrando los resortes del sistema constitucional establecidos por sus respectivas constituciones.

Pasaré ahora á las intervenciones de la administración del general Mitre, porque no quiero dejar la más mínima duda del reconocimiento que todos los Poderes Ejecutivos de la República hicieron de las facultades del Congreso.

En Agosto 12 de 1862 tuvo lugar la intervención á Corrientes autorizada por el Congreso.

En Septiembre del mismo año, intervención á la provincia de Catamarca autorizada por el Congreso.

En 1864, el Ejecutivo Nacional solicitó la autorización del Congreso para intervenir en Salta. Después de un

debate sostenido entre los Ministros y algunos señores Senadores, el Senado negó la autorización porque no consideraba que había llegado el caso previsto por la Constitución.

En 1866 el Congreso autorizó por la ley del 4 de Octubre la intervención á Catamarca y dió las reglas que debían observarse.

En 1867. Se acuerdan las intervenciones á Mendoza y Córdoba en receso del Congreso. Intervención á Santa Fé, en receso del Congreso. Intervención requerida por el Gobierno de La Rioja en Septiembre del año pasado y solicitada por el Ejecutivo Nacional en un mensaje especial; no fué posible despacharla y la paz se restableció en aquella Provincia.

La intervención á la provincia de Corrientes fué requerida en los últimos días de la administración del general Mitre. El Gobierno actual intervino, pero nó para reponer al Gobernador derrocado sinó para consumar la revolución.

Varias veces se ha intentado dar una ley reglamentaria del artículo 6°. En 1862 se presentó un proyecto por el Diputado doctor don Fenelón Zuviría. En 1867 se presentó otro por el Senador Rojo. En 1868 el Senador Piñeiro intentó legislar sobre intervenciones llevando su pretensión hasta atribuir al Congreso el derecho de designar la persona del interventor. En el mismo año los señores Zavallía, Aráoz y yo, presentamos el más extenso de todos, basado en los mismos principios que el que hoy se discute.

En ninguno de estos casos, ni dentro ni fuera del Congreso, se ha levantado una voz para negar el derecho de dar la ley al único poder que puede hacerlo. ¿En qué jurisprudencia podría entonces apoyarse el Poder Ejecutivo para desconocernos el derecho de legislar sobre la materia?

Resulta, pues, que tanto por la jurisprudencia de los Estados Unidos como por los precedentes argentinos, el derecho y la práctica están de acuerdo para reconocer esta facultad que hoy se nos quiere arre-

batar á pretexto de una superioridad que no podemos aceptar.

Si del estudio de los hechos pasamos á examinar las opiniones de los publicistas y de los hombres de estado, que alternativamente han ocupado los más altos puestos de la Nación, encontraremos en primer lugar las opiniones de los señores Sarmiento y Rawson, cuya competencia no puede desconocerse. No queremos citar á ninguna autoridad extranjera, no porque las miremos con desdén, sinó porque ellas no han podido juzgar nuestras cosas con el mismo criterio que nosotros. Oigamos al señor Sarmiento: « Despues de « publicado el Redactor he visto que aquel mismo go- « bierno ha declarado necesaria la requisición previa « para introducir fuerzas federales á las Provincias. « Motivos tan grandes como éste, que importan la sal- « vación de los pueblos y su tranquilidad, puesto que « la ingerencia del Gobierno Nacional desde el año « 52 hasta la fecha, lejos de garantir á los pueblos su « tranquilidad y sus instituciones, ha sido por el con- « trario, el perturbador que ha traído la guerra. Era « pues, necesario tomar las más sérias precauciones, y « la comisión no ha reformado más que una sola pala- « bra, la *sin ella*.

« Es sabido, señores, que á estas palabras puede ha- « llárseles otra interpretación como á todas las cosas, « pero como se ha dicho en el debate, Buenos Aires no « es San Juan, razón por la que no debe alarmarnos la « ambigüedad de la frase ».

El doctor Rawson, tratándose de la intervención á Catamarca el año 62, decía: « La comisión ha creído « que á diferencia de lo que se ha hecho hasta hoy, se- « ría útil establecer el antecedente de que la interven- « ción debe hacerse con la autorización del Congreso. « Así es que todo acto, cualquiera que sea, del Poder « Ejecutivo para intervenir en la política interna de las « Provincias, no sería ejercido en adelante, sinó por la « autorización del Cuerpo Legislativo de la Nación, por

« que solo así se consultaría detenidamente el interés y  
« derecho de las Provincia.»

El doctor Rawson ha sostenido siempre esta doctrina como puede verse en su memoria del año 64 y en sus discursos en la cuestión sobre la intervención á Salta. El señor Senador Bazán y el Senador por Catamarca pensaban lo mismo que el doctor Rawson.

El señor Elizalde sostenía idéntica opinión: « El Poder Ejecutivo no tiene derecho á intervenir en una Provincia sin previa autorización del Congreso; y este artículo viene á salvar completamente un principio de gran trascendencia para la conservación de las libertades públicas de la Nación».

En la extensa discusión habida el año pasado sobre esta materia, la opinión de los señores Senadores y de los Ministros era consecuente con estas doctrinas; negaban la oportunidad de la ley ó combatían la forma, pero reconocían el derecho del Congreso.

Uno de nuestros más distinguidos publicistas se expresa en términos que no dejan ninguna duda acerca de las facultades del Congreso.

« Ningún poder, dice, debe ser ilimitado: ninguno debe tener facultades extraordinarias.—La omnipotencia de cualquiera de los poderes hace desaparecer su división é independencia recíproca, y con ella la esencia del gobierno representativo.

« Las funciones ó facultades más importantes y peculiares del Poder Legislativo están reducidas en todos los sistemas del gobierno conocido:

« A crear y suprimir contribuciones.

« A presupuestar y examinar los gastos públicos.

« A levantar fuerzas militares y arreglar su organización.

« *A calificar los casos de conmoción interior ó exterior que exijan la suspensión de la seguridad personal.*

« Muchas más que éstas son las funciones que de ordinario tocan al Poder Legislativo; pero las enumeradas son de tal modo peculiares que no pueden

« ser ejercidas *en ningún caso ni bajo pretexto alguno* por otro poder que no sea el Cuerpo Legislativo ».

El año pasado, cuando los señores Senadores de La Rioja y Córdoba se encontraban en las mismas filas que yo, sostenían los mismos principios que hoy combaten y que yo sostengo con la misma fuerza de convicción. Se argüía entonces como ahora con la gravedad del asunto, como si el Congreso no debiera ocuparse de cuestiones graves; como si la misión del Congreso estuviera reducida únicamente á dar leyes de pensiones ó á aprobar los decretos del Poder Ejecutivo.

La gravedad misma de la cuestión, es una razón demás para que nos ocupemos y sancionemos este proyecto de ley, precisamente porque versa sobre una materia que afecta íntimamente la libertad, las garantías y los derechos de los pueblos.

Si descendemos, señor Presidente, del estudio de los hechos y de las opiniones de los publicistas, al análisis de los artículos de la Constitución, encontraremos nueva luz y doble fuerza á nuestro raciocinio, y mayores y más concluyentes pruebas para sostener que la facultad de autorizar las intervenciones es una facultad exclusiva del Congreso.

La Constitución confiere al Congreso la atribución de hacer la paz ó la guerra, hechos más graves y trascendentales que autorizar las intervenciones á las Provincias. Es también atribución del Congreso, fijar la fuerza de mar y tierra, autorizar la reunión de milicias de todas las provincias ó parte de ellas, cuando haya que sofocar insurrecciones ó repeler invasiones.

Si, pues, el Congreso tiene la facultad de movilizar las milicias y determinar en cada caso la reunión de la Guardia Nacional, y si es también una atribución del Congreso votar los gastos, determinar su aplicación, y del Senado prestar su acuerdo para nombrar embajadores, Ministros públicos, Jueces superiores é inferiores para la administración de Justicia Federal ¿cómo podría dejar de tener la facultad de calificar los casos de con-

moción interior y la necesidad de la intervención que tales sacrificios y erogaciones demanda al Gobierno Federal?

Se me dirá que con el ejército de línea pueden desempeñarse las funciones que la intervención requiere. Pero el ejército de línea está igualmente sujeto á las leyes del Congreso. El Congreso fija el número de fuerza de que se ha de componer; vota los sueldos y determina su organización, y en una palabra, determina también la colocación que el todo ó parte de él ha de tener en la frontera en virtud de la atribución 15 del artículo 67 de la Constitución.

Además de estas facultades importantes y decisivas que la Constitución confiere al Congreso, existen otras auxiliares, ménos trascendentes, pero que vienen conjuntamente á corroborar mi doctrina, desvaneciendo el error en que incurren los que hacen oposición á este proyecto.

¿Qué rol tendría el Congreso en la composición de un gobierno republicano si no tuviese ni siquiera el de discernir, cuándo y en qué extensión se han de invertir los dineros públicos en las intervenciones? Mero instrumento de la voluntad del Poder Ejecutivo, sería sólo una rémora á las deliberaciones de este, ó un censor fastidioso y molesto de todos sus actos.

Afortunadamente, señor Presidente, en las cuestiones de principios que versan sobre las prerogativas de los poderes públicos, un acto cualquiera, viene á dejar establecida la verdad y fuera de toda contraversia lo mismo que se ha pretendido negar.

El mismo Poder Ejecutivo, de cuya voluntad parece que quieren hacerse intérpretes los impugnadores de este proyecto de ley, ha reconocido explícitamente las incuestionables atribuciones y derechos del Congreso al someter á su consideración la ley que rige en los Estados Unidos, recomendándola como más adecuada para satisfacer la necesidad que se siente de una ley reglamentaria del artículo 6º. ¿Qué prueba más concluyente puede ofrecerse del incontrovertible derecho del Con-

greso? ¿No es verdad que esa ley viene á revelar lo mismo que se desea ocultar?

No queda, pues, otra cosa que examinar sinó, si la oportunidad de que el Congreso ejerza tan importante atribución ha llegado ó nó; si es mejor que dicte una ley general ó que se reserve el dictar una ley en cada caso. Los sostenedores de las ideas del Poder Ejecutivo se empeñan en demostrar la inconveniencia de dictar leyes bajo la impresión de los acontecimientos y al calor de las pasiones que ellos pudieran despertar. ¿Y cuáles son los acontecimientos que pudieran torcer nuestro juicio, extraviar nuestra razón y empañar con el aliento de la pasión las disposiciones de una ley?

Hoy no se puede decir que ninguno de los señores Senadores, ni los que sostenemos el proyecto, ni los que lo combaten, están prevenidos por las intervenciones que han tenido lugar, porque todos estamos con nuestro espíritu tranquilo y nuestra razón serena, preocupados sólo de discutir sin pasión los intereses de los pueblos.

Pero, si todas estas consideraciones no bastasen para aconsejar la sanción de una ley de intervención; si las razones teóricas que nos guían no fuesen suficientes, bastarían, señor Presidente, los hechos y la práctica de las intervenciones que han tenido lugar para que el Congreso no se desprendiese de sus facultades dejando al Poder Ejecutivo que intervenga sin su anuencia cuándo y cómo se le antoje.

Ahí está, señor Presidente, la historia sangrienta de la República, con todos sus excesos y extravíos en los quince años de vida constitucional, para probar que ninguna de las intervenciones que se han llevado á las Provincias, ha respondido á los propósitos del Poder Ejecutivo y del Congreso.

En ningún caso el Poder Ejecutivo ha podido afianzar la paz en las Provincias, objeto primordial de las intervenciones, ni satisfacer á los partidos que se disputaban el poder. No ha conseguido otro resultado que comprometer el crédito del Gobierno; comprometer su



prestigio tan necesario para la buena administración en las cuestiones locales en que ha tenido que mezclarse con ocasión de las intervenciones, debilitando el poder de las Provincias en vez de dilatar su esfera, de robustecer, en fin, la autonomía federal de cada una de ella.

Muchísima sangre y muchísimo dinero cuestan á la Nación, señor Presidente, las intervenciones, sin otro fruto que dejar permanentemente perturbada la tranquilidad de las Provincias. Y en presencia de estos hechos, de estos errores cometidos en la esfera de cada uno de los poderes ¿podráse insistir en la continuación de esa política de intervención, y de intervención discrecional del Poder Ejecutivo? ¿No es ya tiempo de que el Congreso reivindique sus derechos restringiendo el ejercicio de facultades usadas sin criterio y sin más regla que la voluntad del primer magistrado de la Nación?

¿No sería más sensato por parte del Poder Ejecutivo que en lugar de oponerse á esta ley, como lo ha hecho ya por actos públicos, hubiera venido á apoyar la iniciativa del Congreso, procurando la reglamentación del artículo 6º, que lo descargase de toda responsabilidad? ¿El excesivo celo que manifiesta por sus atribuciones no estaría mejor expresado respetando las atribuciones del Congreso?

No se necesita mucho estudio para comprender que esto era lo que le convenía al Poder Ejecutivo, lo que le aconsejaba la buena política y el sincero deseo de propender al bien de los pueblos.

El Congreso, señor, ha respetado siempre las atribuciones del Poder Ejecutivo. No hay un acto sólo de este cuerpo en el que haya extralimitado sus facultades. Por el contrario, es evidente que en muchos casos, ya fuese impelido por una extrema necesidad, ó porque las medidas eran de un carácter urgente, el Poder Ejecutivo, ha usado de las facultades del Congreso, viniendo en seguida á pedir la aprobación de sus actos.

En este mismo año hemos aprobado algunos decretos de carácter legislativo expedidos por el Poder Ejecutivo en receso del Congreso.

Acaba de leerse, señor Presidente, un proyecto de ley presentado por el señor Senador por Catamarca que corrobora lo que dejo expuesto.

El Congreso del año pasado en sus últimas sesiones le puso el sello de su conformidad á la ley de patentes de invención. El Poder Ejecutivo revocó esa ley por un decreto dos meses despues, y de ese acto se nos pide aprobación. ¿Puede citarse algún hecho del Congreso igual ó parecido al que acabo de señalar? ¿Hay algún antecedente que pueda revelar la intención por parte del Congreso de usurpar atribuciones del Poder Ejecutivo?

Entonces, pues, lo que corresponde para conservar la paz es no entorpecer la marcha y el juego de las instituciones; que cada uno de los poderes obre dentro de la órbita de sus facultades constitucionales, que ninguno de ellos ultrapase sus atribuciones, y que todos concurren con patriótico propósito á proveer al país de las leyes que necesita para su mejor gobierno.

Esta es nuestra misión, esta es la misión del Poder Ejecutivo y es también el deber de todos los hombres bien intencionados, que tengan verdadero interés en afianzar la paz y el bienestar de los pueblos.

Si hay presuntos ó fundados temores de que el orden público pudiera ser alterado, el proyecto provee al Poder Ejecutivo de todos los medios necesarios para atender á la seguridad nacional. El le deja, además, la facultad de intervenir en receso del Congreso cuando su intervención fuese requerida, con la especial circunstancia que no se le determina su proceder dejándolo árbitro para ejercer esta autorización según lo entienda. ¿Qué más puede exigirse, señor Presidente? Le damos una ley para que intervenga en las Provincias, para que movilice la milicia, para que gaste los dineros públicos, sin limitación de ningún género. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué puede necesitar para el ejercicio y desem-

peño de las altas funciones que la Constitución ha encomendado á los poderes públicos? ¿Se quiere hacer una cuestión de amor propio entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Puede ser esa la intención que preside la resistencia á esta ley? De ninguna manera; yo no hago tal ofensa á la circunspección que debe presidir todos los actos del Ejecutivo.

Pero, confieso que no comprendo cuál sea el móvil que haya podido impulsar al Poder Ejecutivo á dar á este asunto el carácter que le ha dado.

Necesitaría oír á alguno de los señores Ministros ó de los señores Senadores que se han encargado de ser los intérpretes del pensamiento del Ejecutivo.

Por lo tanto, señor Presidente, yo deseo y voy á dejar la palabra, que el señor Senador por Córdoba, miembro disidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, á quien no hemos tenido el gusto ni de escuchar en los debates de la comisión, que nos manifieste en este recinto las razones por qué ha firmado en disidencia, y cuál es la causa que impulsa al Poder Ejecutivo á desconocer este derecho que la Constitución ha conferido, que la razón aconseja respetar, y que la justicia y la buena política debieran inducirlo á proclamar. ¿Qué interés puede existir en hacer ilusorias las atribuciones inherentes al Poder Legislativo, negándole toda participación tanto en la política como en la administración? ¿Se quiere hacer del Congreso un elemento completamente negativo? La vida constitucional de otros pueblos nos demuestra que es imposible la marcha de las instituciones, el progreso y el buen gobierno del país, allí donde los poderes públicos no proceden de perfecto acuerdo en la aplicación de los principios que constituyen el gobierno que se ha adoptado. ¿Qué beneficios reportaría la Nación de un Congreso que no fuese en la práctica más que una reunión de autómatas, dispuestos siempre á decir *sí* á todo lo que les propusiera el Poder Ejecutivo? (Aplausos):

La historia nos dice lo que debemos esperar.

He dicho.

DESPUES DEL DISCURSO DEL SEÑOR PIÑERO

EN LA MISMA SESIÓN DEL 21

*Señor Oroño*—Pido al señor Secretario tenga á bien leer un proyecto de ley que he dejado sobre la mesa de la Secretaría que va á responder á las doctrinas que ha emitido el señor Senador por Córdoba con sus propias opiniones.

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º Derógase la ley de 28 de Septiembre de 1866 promulgada el 4 de Octubre del mismo año, que autorizó al Poder Ejecutivo á intervenir en Catamarca.

Art. 2º En adelante, cuando el Gobierno sea requerido para intervenir, es obligado á solicitar del Congreso autorización para llevar ó nó la intervención, debiendo igualmente solicitar el carácter y alcance de sus facultades y atribuciones y el objeto, con la denominación del nombre propio de la persona que deba llevar á cabo la intervención.

Art. 3º Desde la fecha de la promulgación de la presente ley, el Tesoro Nacional no pagará gasto alguno hecho después de dicha fecha, en la movilización de milicias ó uso de fuerza de línea, armamento, municiones, provisiones, vestuarios, etc., ni en los gastos personales, sueldos, etc., de ningún interventor, en tanto que la intervención no hubiese sido acordada por el Congreso.

Art. 4º Cesan desde esta fecha todas las intervenciones é interventores que existieren hasta esta fecha ejerciendo tales funciones.

Art. 5º Comuníquese.

*M. Piñero.*

Hé aquí, señor Presidente, la más cumplida refutación que se puede hacer del discurso del señor Senador por Córdoba.

*Señor Piñero*—Aquí tengo otro hecho del señor Senador.

*Señor Oroño*—Veremos qué es lo que tiene el señor Senador. Lo que ha de tener son preocupaciones sobre la facultad de intervenir que él la atribuye ahora exclusivamente al Poder Ejecutivo, y que el año pasado la suponía exclusivamente en el Congreso.

Lo que acaba de exponer el señor Senador respecto á la ley de los Estados Unidos, es un argumento irrefutable en pró de las facultades del Congreso.

Si aquella ley es distinta á la nuestra es porque son también distintas las condiciones orgánicas y políticas de cada país. A pesar, pues, de aquella ley, á pesar de la luz que había arrojado á la inteligencia del señor Senador para convertir su juicio contra los poderes del Congreso, él no ha podido desconocer que según nuestras propias instituciones, era facultad del Congreso dar la ley, como voy á demostrarlo haciendo un breve examen de su proyecto de ley.

*Señor Piñero*—El hecho es que no era esa mi opinión; quería contener al Congreso.

*Señor Oroño*—No; no era esa la intención del señor Senador al presentar ese proyecto de ley; y la prueba es el hecho de que cuando los miembros de la comisión de Negocios Constitucionales presentaron al Senado su proyecto de ley de intervención, el señor Senador les increpó el que no hubiesen tomado en consideración su proyecto de ley. Se sientan á mi lado dos señores Senadores, mis colegas de comisión del año pasado, que pueden rectificar este recuerdo sino fuere exacto.

*Señor Piñero*—Es cierto.....

*Señor Oroño*—Luego el señor senador quería que su proyecto fuese ley de la Nación; él creía que su proyecto era mejor que el nuestro.....

*Señor Piñero*—Porque el objeto que tenía era contener á la Cámara.

*Señor Oroño*—Perdone, señor Senador, su proyecto fué presentado un mes antes de que se discutiera el de la comisión, y antes de toda iniciativa de ley de inter-

vención. El fué concebido tres años después de haber conocido el señor Senador por primera vez la ley de los Estados Unidos. La ley dictada en los Estados Unidos en 1795, no debió ser por consiguiente la que hizo la luz en su juicio, puesto que en 1868 el señor Senador presenta un proyecto cuyas prescripciones entrañan principios diametralmente diversos. No, lo que le hizo entender mejor la Constitución, lo que verdaderamente modificó el juicio del señor Senador é hizo la luz en su inteligencia, no fué la ley de 1795, fué la de fecha del 12 de Octubre de 1868. (Aplausos).

*Señor Presidente*—A la segunda manifestación de este género la barra será despejada, y lo anuncio previéndola, porque ella sabe que cuando digo una cosa la cumplo.

*Señor Oroño*—El señor Senador por Córdoba pretendiendo rectificar la relación que he hecho de las intervenciones, para deducir la inconsecuencia de mi modo de ver estas cuestiones, me ha atribuido opiniones que no he manifestado nunca en esta Cámara. El Senador por Santa Fé, á que él se refiere, es el señor Senador doctor Granel.

La manera cómo ha traído este recuerdo el Señor Senador por Córdoba, acusa la intención de hacer entender á los señores Senadores y á la barra, que esa inconsecuencia que hoy he hecho notar en él existía en mí. Yo no fui quien dijo esas palabras, fué mi colega Senador por Santa Fé; pero no se fundaba en que el Congreso no tenía autorización, sinó en que al calor de las pasiones, la oportunidad en que la ley quería darse, no era la más propia para dictar aquella ley.

*Señor Piñero*—En la sesión está que el señor Senador fué y puedo citarle. . . .

*Señor Oroño*—No me ha de citar nada, señor Senador.

*Señor Piñero*—Yo le he de citar el hecho más grave, y es que hoy está reunido con los interventores que derrocaron su gobierno, que está unido en ideas y en propósitos con ellos.

*Señor Oroño*—Eso no probaría más, señor Senador,

que el elevado espíritu que preside mis actos. Yo no veo ni tomo en cuenta las personas, sinó los principios, y cuando yo sostengo un derecho de los pueblos ó un derecho del Congreso, no pregunto quiénes son los que lo defienden conmigo. (Aplausos).

Me complace mucho, señor Senador, que los que intervinieron en la provincia de Santa Fé, ó los que ordenaron aquella intervención, se encuentren á mi lado sosteniendo lo que yo considero una verdad constitucional.

*Señor Piñero*—Es el señor Senador que está á su lado.

*Señor Oroño*—Ni yo estoy del lado de los que el señor Senador cree, ni ellos están del mío en el sentido que se ha dado á esta palabra; estamos todos en la misma fila, con la bandera de la Constitución en la mano, unidos por un mismo sentimiento de dignidad y por la misma resolución de resistir á los avances del Poder Ejecutivo, resistiendo al mismo tiempo las pretensiones absorbentes ó depresivas de la dignidad del Congreso, obedeciendo á los deberes que nos impone el mandato que hemos aceptado; y yo, por mi parte, obedeciendo también á profundas convicciones.

Para probar hasta donde llega la consecuencia de mis opiniones de hoy con las del año pasado, y las que he sostenido siempre, pido al señor secretario que se sirva leer los dos primeros artículos del proyecto de ley que presentamos el año pasado, reglamentando el artículo 6° de la Constitución.

*El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, sancionan con fuerza de ley.*

Artículo 1° Toda intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el territorio de las Provincias de la República, á los objetos del artículo 6° de la Constitución, será previamente autorizada por el Congreso, con sujeción á las prescripciones de esta ley.

Art. 2° Cuando el Congreso se halle en receso, la intervención podrá llevarse á efecto por el Poder Ejecu-

tivo á requisición de las autoridades constituidas, dando cuenta al Congreso de su resultado en los primeros días de sus sesiones.

---

Ahí tiene la prueba el señor Senador de que el año pasado pensaba yo del mismo modo que ahora, con la sola diferencia que entonces proponía una ley reglamentaria del artículo 6º estableciendo reglas para todos los casos, ya fuese que el Congreso autorizase la intervención, ó que el Poder Ejecutivo interviniese en su receso.

Por lo demás, señor Presidente, si yo como Gobernador de Santa Fé, requerí la intervención del Gobierno Federal, lo hice haciendo uso del derecho que la Constitución acuerda á las Provincias, sin que me fuese lícito juzgar en ese momento si la intervención había sido bien ó mal acordada, porque tal derecho no puede existir en el Gobierno de la Provincia que solicita la intervención del Poder nacional.

Se votó el proyecto en general y fué aprobado, quedando pendiente para la próxima sesión la discusión en particular.

---

### **Sesión del 24 de Agosto de 1869**

*Señor Oroño*—Todo lo que el señor Senador por Córdoba acaba de exponer en su discurso, se reduce á sostener las mismas doctrinas que ha emitido en la sesión anterior, á complementar la exposición de los fundamentos en que apoya el desconocimiento de las prerogativas del Congreso, á ratificar, en una palabra, su oposición al proyecto. Creo que este punto está fuera de toda discusión, porque él ha sido resuelto por la sanción de



ambas Cámaras, en sentido opuesto á las ideas del señor Senador.

No se trata ya por consiguiente, de investigar á quien corresponde la facultad de dictar la ley de intervención, ni es regular que nos detengamos á examinar de qué manera debe ejercitarse esta facultad en los casos ocurientes. Para esto sería necesario reabrir la discusión variando las formas del proyecto de ley aprobado en general.

Lo que ahora debe discutirse son las condiciones que esta ley debe revestir, procurando la mayor perfectibilidad posible en sus disposiciones, para satisfacer las exigencias de la Constitución que autoriza al Gobierno Federal á intervenir en las Provincias cuando sea requerida su intervención, ó cuando la forma republicana hubiese sido revocada por otra forma contraria.

Nada ha dicho de esto el señor Senador por Córdoba; ha prescindido de la cuestión revelando, al parecer, el propósito de insistir en su oposición á la sanción de la ley, ó en el desconocimiento de las facultades del Congreso que ha sostenido en la sesión anterior.

Todas las Constituciones de los pueblos libres han consignado el principio salvador de la división de los poderes, porque han querido evitar la concentración en una sola mano, ó en una sola rama del gobierno, de un gran poder que, nulificando las atribuciones de los otros departamentos en que está dividido el gobierno, vendría á constituir un poder dictatorial, sin contrapeso, sin responsabilidad, y ageno completamente á la índole del gobierno representativo.

La Legislatura de Massachussetts imprimía al frente de su Constitución la siguiente declaración.—«Queremos que los poderes estén divididos, porque queremos que en Massachussetts gobiernen las leyes, no los hombres». Este es el principio proclamado por todos los pueblos libres; el nuestro no puede ser una excepción. La Constitución Argentina no ha podido autorizar á uno solo de los tres poderes que componen el Gobierno Federal, para ejercer autoritativamente las funciones co-

metidas á los demás, ó conjuntamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.

Es evidente, pues, que el Gobierno Federal tiene la facultad de intervenir. No hay una sola persona, exceptuando el señor Senador por Córdoba, que desconozca esta facultad —No hay un solo tratadista de derecho constitucional, una sola cláusula de la Constitución que no reconozca este principio.

¿Pero qué se entiende por Gobierno Federal, y cuál es el poder que ha de ejercer la facultad de intervenir? Parece deducirse de las palabras del señor Senador por Córdoba, que el Gobierno Federal es únicamente el Poder Ejecutivo, desde que pretende que solo éste debe intervenir con sujeción á su propio criterio y opiniones, con prescindencia del Congreso.

Sería ofender la ilustración de la Cámara si yo me propusiera hacer la definición constitucional de la palabra *Gobierno Federal*. La Constitución no admite otra interpretación que la que el derecho público reconoce, ni es posible suponer que las palabras del código fundamental de la Nación, expresen una idea ó un pensamiento distinto del que legalmente se desprende de ellas. ¿Cuál sería el poder público llamado á intervenir con mayor grado de perfección, el Poder Ejecutivo ó el Congreso? El señor Senador dice que ha resuelto la dificultad diciendo: «*siempre* el Poder Ejecutivo, llámese Derqui, Urquiza, Mitre ó Sarmiento, el Poder Ejecutivo ha de intervenir siempre mejor que todos los Congresos».

De esta opinión parece deducirse también que él entendiera que el Congreso quiere arrogarse la facultad de ejecutar la intervención. El Congreso no puede pretender un absurdo; la ley no puede contenerlo. ¿Quién puede pensar que al dar la ley que estamos discutiendo, el Congreso se reserve el derecho de ejecutarla, de trasladarse á las Provincias á ejercer la intervención? Nadie; se trata únicamente de establecer condiciones de garantía y acierto en el desempeño de funciones que son tanto más delicadas, cuanto más graves sean

las circunstancias y los hechos que motiven la intervención.

Si hay peligro que el Congreso se apasione; si se teme que pueda precipitarse ofuscado por los acontecimientos que se desenvuelvan en la Provincia conmovida; si puede errar cediendo á las exigencias de los partidos, interesados unos en que se intervenga, y otros en que no; ese peligro es doblemente mayor con referencia al Poder Ejecutivo compuesto de una sola persona, porque al fin los Ministros no son sinó meros consejeros del Presidente. Ese peligro es tanto más grave en el Presidente de la República, porque está más expuesto á interesarse en las cuestiones locales, favoreciendo á aquellos que secundan su política, ó apasionándose contra los que manteniéndose alejados é independientes de su influencia, los considere adversarios.

En nuestra vida federal, la ilimitación de facultades ha hecho que los gobernantes cometieran abusos de todo género.

En Estados Unidos pueden darse leyes revistiendo al Presidente de poderes absolutos. Allí esos poderes no dañarían como entre nosotros; porque allí cada pueblo sabe lo que le corresponde, cada pueblo sabe hasta qué punto se consultan los derechos individuales, y cada pueblo, en fin, sabe que un Presidente no se atrevería á ser conspirador perpetuo contra las autonomías provinciales, porque caería como conculcador del sistema federal.

Entre nosotros es muy distinto Conferir poder absoluto á un Presidente para ingerirse en la marcha de las localidades, es acabar con el federalismo.

No se debe perder de vista la diferente evolución que se ha operado y se opera entre nosotros y los Estados Unidos.

Nosotros luchamos por acabar con el espíritu colonial que es el unitarismo. Toda nuestra marcha debe tender á la descentralización del poder y á dar vida propia á las Provincias

Los Estados Unidos no han tenido que reaccionar

como nosotros. El sistema federal fué la nutrición colonial de los Estados. Allí no se comprende esa lucha del unitarismo con el principio federal. De allí la enorme diferencia en nuestra vida republicana con la de aquel país.

De esa diferencia nacen los tópicos que deben guiarnos en el desempeño de la tarea de legisladores, consultando ante todo el desarme del *vireynato* para dejar imperante la federación.

Los reformadores de la Constitución Argentina, teniendo presente un hecho sangriento como el que había tenido lugar en San Juan, se pusieron en todos los casos al reformar el artículo 6°. El señor Sarmiento sosteniendo la reforma y la conveniencia de suprimir la palabra *sin ella*, decía: «quiero quitar esta facultad que ha hecho que se ensangrienten los pueblos, que ha causado males sin cuento entendiéndose que el Poder Ejecutivo podía intervenir á su antojo».

El señor Senador ha manifestado tanto en la sesión anterior como en esta, una especial predilección por las doctrinas constitucionales de Pomeroy, y yo voy á servirme de esas doctrinas para sostener el derecho del Congreso, y para rebatir con las opiniones de aquel publicista la errada interpretación que se hace del espíritu de la Constitución.

« El poder de hacer las leyes necesarias reside en el  
« Congreso, el poder de ejecutarlas en el Presidente.  
« Ambos poderes implican muchos otros poderes inferiores y auxiliares para su perfecto ejercicio. Ni el  
« Presidente puede entrometerse en la autoridad exclusiva del Congreso, ni el Congreso en la autoridad exclusiva del Presidente. El Presidente, como comandante en jefe, pone en ejercicio otras atribuciones  
« cuya ocasión de aplicarlas ha proporcionado la Legislatura. El Congreso puede dirigir el modo en que el  
« Presidente ha de ejercer su poder, usando de su facultad para levantar ejércitos, mantener escuadras,  
« proveer de recursos, etc., porque en el hecho no haría  
« sinó ejecutar sus mandatos. Como el Congreso tiene

« que decretar los gastos, puede fijar los objetos especiales á que se ha de aplicar el dinero. En todos los casos se puede dejar mucho ó poco á la discreción del Ejecutivo y sus subordinados según le parezca mejor á la Legislatura.

El señor Senador por Córdoba, interpretando un párrafo de este libro, amenaza al Congreso con las facultades del Presidente; pero M. Pomeroy no dice lo que se le quiere hacer decir; lo que dice es, que el Poder Ejecutivo es exclusivo en la ejecución de la ley, así como el Congreso es exclusivo para dictarla.

Ya vé, pues, como hasta las facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo están limitadas por la acción del Congreso.

*Señor Piñero*—Convenido, señor Senador.

*Señor Oroño*—Y si está convenido el señor Senador en que el Congreso tiene la facultad de dar la ley, ¿por qué no convendrá en que la facultad de intervenir en las Provincias no puede ser exclusiva del Poder Ejecutivo, porque está de por medio el derecho de los pueblos?

*Señor Piñero*—Ya le explicaré después que deje la palabra; no quiero interrumpirlo.

*Señor Oroño*—Puede hacerlo el señor Senador, aunque me ha de explicar como lo ha hecho ya, y en ese sentido es inútil toda explicación.

Mientras que insista el señor Senador en negar al Congreso la facultad de dar la ley, le declaro una vez por todas que no me ha de convencer. Ahora, si quiere presentar reformas á la ley, no será difícil que nos entendamos, porque pudiera ser que sus opiniones fuesen aceptables, y yo estaré siempre dispuesto á admitir toda indicación justa y conveniente.

Es, pues, fuera de duda, que conservando el Congreso el derecho de dictar las leyes sobre intervenciones; que reservándose el derecho de aprobar ó desaprobado los actos del Poder Ejecutivo en la ejecución de las intervenciones, hay más garantía de acierto; y el peligro de la paz interna de las Provincias, y la violación de sus derechos, será siempre más remoto.

La experiencia nos enseña á desconfiar de la debilidad de los hombres. Si nuestras instituciones son idénticas á las de los Estados Unidos, la práctica no es la misma ni el buen sentido de nuestros hombres públicos nos inspira esa ilimitada confianza que el pueblo Americano ha manifestado en sus hombres de Estado.— Allí prevalecía la política de la no intervención en los asuntos internos de los Estados.—El célebre Jaksson, el Presidente más belicoso de Estados Unidos, profesaba esa doctrina, y en una ocasión solemne, cuando se insurreccionaron las Carolinas resistiendo las leyes del Congreso sobre las tarifas, Jaksson se limitó á tomar ciertas medidas conminatorias, pero no juzgó que debía intervenir.—El asunto terminó por una transacción como han terminado todas las dificultades en aquel país de tan admirable buen sentido; y esa transacción es conocida hasta hoy con el nombre de Klay, su iniciador.

Yo no he dudado nunca, señor Presidente, y me sorprende que en el recinto del Congreso Argentino, se venga á arrojar por la primera vez la duda de que esta facultad le está vedada al Poder Legislativo. Si se dijera que esta ley no es conveniente, que puede ser mejor hacer en ella una reglamentación más extensa, determinando con claridad y precisión los deberes del interventor, yo no lo extrañaría; y por el contrario, encontraría pertinente y racional esta observación. Pero sostener que el Congreso no debe calificar los hechos que den motivo á una intervención, que debemos ser testigos impasibles de los errores ó de los abusos del poder; que debemos contemplar en silencio los males y la ruina de los pueblos, es sostener la negación de todos los principios fundamentales en que reposan las instituciones; sería constituir en el hecho un poder omnipotente, superior al derecho de los demás poderes que la Constitución ha organizado.

Si no tiene el Congreso el derecho de fijar la regla á qué debe subordinarse el interventor, si no puede reveer los actos del Poder Ejecutivo para aprobarlos ó enmen-

darlos según las disposiciones de la Constitución, ¿cuál sería entónces el derecho que le quedaría? ¿No es verdad que por este camino constituiríamos un poder absoluto en pugna con todas las disposiciones de la Constitución? Pero se dice que si el Poder Ejecutivo viola la Constitución, y la viola con la intención dañada de hacerlo, tenemos como correctivo la acusación y la destitución. Pero la acusación no es siempre posible, señor Presidente, y lo será tanto ménos siguiendo la práctica de las intervenciones oficiosas, pues que los Gobiernos de las Provincias no serían otra cosa que la expresión de la voluntad del Presidente de la República; y entonces yo pregunto ¿qué expresarían los Senadores y Diputados elegidos bajo la influencia de un orden de cosas semejante?

¿Sería posible la acusación de esta manera?—¿Acusaría al Presidente, una Cámara y un Senado, fruto de la intervención de los agentes nacionales en las Provincias? De seguro que no.

Tan exacta es esta observación y tan fundados mis temores, señor Presidente, que puedo apoyarla en las juiciosas apreciaciones del mismo señor Sarmiento que todos hemos leído en un folleto intitulado: «Comentarios de la Constitución Argentina».—El señor Sarmiento consagra muchas páginas de aquel panfleto al examen del art. 107 de la Constitución (hoy 110) que dispone que los Gobernadores de Provincia sean agentes naturales del Gobierno Federal.

« Durante la tiranía de Rosas, la falta de responsables  
« agentes oficiales del gobierno general en las provin-  
« cias, aconsejó lo que es la fuente de todos los males  
« del país, el agente oficioso, el espión, por donde un  
« individuo sin carácter político alguno, era sin embar-  
« go, entendido que estaba en correspondencia con el  
« tirano y recibía de él órdenes; tiranía subalterna más  
« deplorable que la pública porque no responde de sus  
« actos. Más subversivo fué aún el expediente adopta-  
« do, para el mismo fin, de reconocer en cada Provincia  
« dos ó más jefes y oficiales de milicia provincial como

« jefes de línea, y pagarles salario el tirano á quien iban  
« á demandar esta gracia, pues entonces el Gobierno se  
« sentía sometido á sus subalternos temeroso de que lo  
« denunciasen como ménos ferviente y sostenedor que  
« ellos mismos.

« Pero la peor de las medidas de compensación que  
« trae este funesto sistema, es que el Jefe del Estado  
« necesita en las Provincias tornarse en conspirador,  
« para deshacerse de esos *naturales agentes* que le dá  
« el acaso, para substituirlos por otros que respondan  
« mejor á sus propósitos. » Tal era la manera como  
el señor Sarmiento consideraba esa atribución de que  
podría servirse ahora para hacer ilusoria su responsa-  
bilidad.

El señor Senador insiste en hacer notar mi inconse-  
cuencia, pretendiendo que el año pasado estaba en opo-  
sición á que se diera la ley de intervención. Mi discurso  
se ha publicado en estos días, y puede verse. En él sos-  
tenía lo mismo que sostengo hoy: que la facultad de dar  
la ley corresponde al Congreso, que no existe otro poder  
que pueda darla.

*Señor Piñero*—Pero se opuso á las leyes especiales.

*Señor Oroño*—Me opuse á que se dejara de dar una  
ley; sostuve que era mejor que se reglamentasen las  
facultades del interventor, que se estableciesen reglas  
fijas para sus procedimientos, para librarlo así de las  
responsabilidades que están dispuestos á hacer pesar  
sobre él los partidos contendientes; y esta es hasta hoy  
mi opinión.

Si hemos de dejar al Poder Ejecutivo, decía entonces,  
« la libertad de decir, «acuerdo ó no la intervención»,  
« interpretando á su modo el artículo 6º de la Consti-  
« tución y ejerciendo discrecionalmente esta facultad,  
« los resultados no se harán esperar, y ellos lejos de  
« ser un correctivo á los males que deploramos ven-  
« drán á reagrarlos empeorando nuestra situación. »

Pero ahora no se trata de discutir aquella ley, sino la  
que ha iniciado la Cámara de Diputados; y yo digo  
que ya que no me es posible hacer triunfar mis ideas,



me adhiero á este proyecto, porque en cierto modo responde á los mismos principios, y al propósito de restringir al Poder Ejecutivo colocándolo en el caso de no ejercer la facultad de intervenir sin autorización del Congreso, ó de someter á su aprobación el resultado de las intervenciones que hubiesen tenido lugar en su receso.

Ahora yo pregunto al señor Senador por Córdoba, si mis temores, que pueden considerarse como una profecía, respecto á la renuncia del derecho del Congreso en favor del Ejecutivo, se han realizado ó no? Si es evidente que en lugar de evitar los males que se querían precaver, han sido éstos reagravados por las intervenciones oficiosas, que no son reclamadas por ninguna Provincia sinó que se hacen espontáneamente arrancando esta facultad de la atribución 17 del artículo 86 de la Constitución.

Es que se trata de provincias que no tienen representación bastante poderosa para exigir el respeto y consideración que merecen sus derechos; que no pesan en la balanza de nuestras opiniones con la fuerza y energía que su derecho les da.

Esas intervenciones no se han de ejercitar en la provincia de Buenos Aires. Ya se guardarían muy bien de hacerlo, señor Presidente, porque Buenos Aires no es San Juan, Catamarca y La Rioja, Provincias que casi han desaparecido por el aniquilamiento y la anarquía, del mapa de la República. (Aplausos).

*Señor Piñero*—Eso no será por el actual gobierno de la República, si han desaparecido será en tiempo del anterior.

*Señor Oroño*—Yo no sé en que tiempo ni quién tiene la culpa. Yo no me ocupo de la administración pasada ni de la actual en el juicio de sus aciertos ó errores. Estoy tratando del Gobierno actual en sus relaciones de derecho con el Congreso y con las Provincias. (Aplausos).

Recuerdo, señor Presidente, que el señor Senador por Córdoba en una sesión del año pasado, aflijido,

contrariado y desesperado de que sus opiniones no prevaleciesen en el Congreso, decía estas palabras que tengo muy presentes: « El Senado Nacional está mal compuesto con una pequeña fracción que en todas las cuestiones políticas, sociales y administrativas detiene la marcha de las discusiones tendentes á levantar el país. Así se explican esos proyectos para defender á Urquiza y Cáceres». Se refería el señor Senador á mi proyecto de ley nombrando una comisión para arreglar pacíficamente los disturbios de la provincia de Corrientes, abandonando la fatal rutina de las intervenciones armadas.

Aquella facultad que yo quería que el Congreso la ejerciera con toda la solemnidad y circunspección que exigían las circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional después del 12 de Octubre, la ejerció por sí solo representado por el señor Ministro del Interior, quien declaraba que dejaría triunfante un partido, haciendo lo mismo de que se quejaba el señor Senador por Córdoba.

Es porque nuestros hombres públicos, señor Presidente se dejan influenciar de los hechos ó de circunstancias pasajeras; es porque no tenemos todavía una conciencia formada respecto de ciertas cuestiones, ni se han arraigado en nuestro espíritu los principios del sistema constitucional que hemos adoptado.

Ha dicho bien el señor Senador por Córdoba: son cuestiones nuevas, es una materia todavía desconocida para nosotros; y debe ser tan desconocida, señor Presidente, que hasta las nociones más rudimentales del derecho constitucional parece que se desconocen.

Terminaré, señor Presidente, diciendo que el artículo 1º de este proyecto no importa otra cosa que la consignación del principio sancionado por ambas Cámaras. El Congreso ha decidido que es de su competencia dictar la ley de intervenciones, y este artículo no hace otra cosa que darle forma á aquel pensamiento.

El artículo 2º puede ser materia de discusión porque trata de la intervencion en receso; pero discutir sobre el

artículo 1º es volver á la discusión de lo que ya está sancionado. Debe, por lo tanto, votarse y no detener con discusiones inútiles la resolución definitiva de este asunto.

He dicho.

---

Ocupación Militar de las Provincias contra la Letra y Espíritu de la Constitución.—ERRADA INTERPRETACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN 17, ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN.—CONSECUENCIAS Y MALES QUE SE DESPRENDEN DE ESTE ERROR. — MODO DE EVITARLOS.

«El Gobierno, dice Laboulaye, no es más que el mandatario del país.—Su gloria estriba en ello y debe cifrar su honra en hacer la prosperidad de la Nación como la Nación lo desea, pues no se hace la felicidad de los pueblos contra la voluntad de éstos.»

Pero entre nosotros el Gobierno se cree el país mismo, y olvidándose que su poder lo recibe del pueblo para labrar su bienestar, compromete á cada paso la suerte del país en empresas descabelladas. Se olvida que la fuerza y el número deben inclinarse ante la razón que dominan á ambas.

Se ha creído vencer las resistencias con soldados, error funesto que lo hemos pagado á más caro precio que nuestra misma libertad.

Con las bayonetas, decía cierto rey de Prusia, tendremos siempre razón, las bayonetas lo consiguen todo. Pero, ¿con qué se gobiernan las bayonetas? Con la opinión, único poder bastante fuerte y eficaz para garantizar las instituciones. Es preciso, pues, tenerla de nuestra parte. Sin ella no se puede gobernar á los pueblos sinó tiranizándolos, á la manera del Czar de Rusia ó de Napoleón III.

De los errores políticos que surgen de la teoría de los gobiernos fuertes por la presencia de los ejércitos permanentes, han nacido todos los tiranos que han enlutado

la humanidad. Consultad las historia si queréis persuadirlos de esta verdad.

Pero antes que á la historia, consultemos la Constitución que nos gobierna y á cuyas prescripciones debemos ajustar nuestros actos, porque ella es la regla para los que mandan y los que obedecen.

La Constitución ha organizado los poderes públicos dando á cada uno de ellos los medios y las facultades que necesitan para el gobierno de la sociedad, y para llenar los altos fines que se han tenido en vista al realizar la unión de la Nación.

No se concibe la existencia de un poder ó de un Estado, con ciertas obligaciones y derechos, sin los medios y la capacidad de cumplir esas obligaciones y hacer respetar esos derechos.

Discurrir de otra manera sería sustentar un absurdo y sostener el ridículo como doctrina constitucional. Sería preciso carecer hasta de las más sencillas nociones de la ciencia del Gobierno, y del sentido común que rara vez falta á los hombres de nuestra raza.

Yo no quiero ni puedo pretender que el Gobierno Nacional quede despojado de atribuciones que le están expresamente conferidas por la Constitución. Pero sí deseo que se mantenga dentro de los límites que le han sido trazados por la ley suprema, porque saliendo de ellos tiene que chocar forzosamente con otros derechos que emanan de la misma fuente, y son tan sagrados como los de la Nación, produciéndose por consecuencia la desarmonía entre los poderes y gobiernos que están llamados á proceder de concierto para afianzar el bienestar común.

El artículo 104 de la Constitución ha reservado á las Provincias todo el poder no delegado expresamente á la Nación.—El artículo 105, les confiere el derecho de darse sus propias instituciones y gobernarse por ellas, elegir sus gobernadores y legisladores sin intervención del Gobierno Federal.—El artículo 108, que es restrictivo de las facultades de los gobiernos locales, les concede, sin embargo, que puedan armar buques de

guerra ó levantar ejércitos en caso de invasión exterior, ó de peligro tan inminente que no admita dilación, con la sola condición de dar cuenta al Gobierno Federal.

Se vé, pues, que los gobiernos de Provincia tienen los medios para defenderse de una invasión exterior, y para prevenir ó sofocar las conmociones internas.

Si algo les falta, si esos medios no son suficientes ó eficaces, tienen además el derecho de recabar la protección del Gobierno general, de requerir la intervención con arreglo á los artículos 5, 6, y 109 de la Constitución, y conforme á ellos el Gobierno Federal tiene el deber de hacer efectivas aquellas garantías.

Ahora bien. ¿Cómo pueden armonizarse estas disposiciones de la Constitución con las facultades que el señor Ministro atribuye al Ejecutivo Nacional?

Si no hay que repeler invasión exterior, ni restablecer la *forma republicana*; si no ha sido requerida la intervención ni ha ocurrido el caso de guerra civil ¿en virtud de qué derecho el Gobierno Nacional podría situar fuerzas militares en las capitales de las provincias, ó en el territorio poblado sujeto á la jurisdicción provincial? ¿Cómo pueden conciliarse las garantías consagradas por la Constitución en favor de los Estados y los derechos de los ciudadanos, con la facultad discrecional de introducir un ejército en cualquiera de las provincias en tiempo de paz?

Si el Ejecutivo Nacional está encargado de la organización y distribución del ejército, es solo *conforme y según las necesidades de la Nación*; y esas necesidades deben ser determinadas por el Congreso, autorizando por una ley ó de otro modo al Poder Ejecutivo para llenarlas en la forma y extensión que se juzgue conveniente.

¿Y qué necesidad nacional se consulta en hacer la policía á los gobiernos de provincia y dejar abandonada la frontera á merced de los salvajes?

¿De qué gobierno representativo sacaría ejemplos el

señor Ministro para autorizar su doctrina?—Los estados Unidos no le suministrarán ninguno sinó en la época de la guerra; y en este caso yo no le niego al Gobierno Nacional la facultad de colocar sus fuerzas donde lo exija la seguridad y el honor de la Nación. Fuera de estos casos, tanto en los Estados Unidos como entre nosotros, la misión del ejército no debe ser otra, que defender la frontera de las invasiones de los indios, garantizando la propiedad y la vida de los laboriosos habitantes de nuestra campaña.

El sistema federal sería una burla, si los *principios, garantías y derechos* reconocidos por la Constitución, pudieran ser alterados por disposiciones administrativas del Ejecutivo Nacional, ó por leyes que reglamentasen su ejercicio.

El principio de la soberanía del pueblo y la *forma republicana* de gobierno, serían vanas palabras colocadas en la ley fundamental de la Nación para engañar á los incautos, con la promesa de su exacta aplicación, haciendo ostentación de liberalismo en las formas para radicar un sistema contrario y repugnante en el fondo, al que hemos aceptado.

La introducción de fuerzas militares al territorio poblado de una provincia sin un objeto evidentemente nacional, cuando la paz no ha sido alterada en aquellos Estados ni reclamada por ellos la protección del Gobierno Federal, es una usurpación injustificable de los derechos de los pueblos y una amenaza á las libertades públicas, tanto más grave cuanto mayores sean los desórdenes que se haya experimentado ya por esa causa.

Por este medio se conseguiría fácilmente anular la federación burlando el espíritu y la letra de la Constitución.

Las fuerzas militares han sido más de una vez la causa de la guerra civil y del desquicio de las Provincias, por el mal uso que han hecho de ella los gobernantes abatiendo las instituciones y libertades de los pueblos.

En resguardo de esas libertades, la Constitución ha prohibido á los mismos Gobiernos de Provincia qué tengan ejército en tiempo de paz. ¿Y cómo sería posible que les hubiera negado esta facultad á los Gobiernos de los Estados y se la hubiera concedido al Gobierno Federal, anulando por este hecho la autonomía de las Provincias?—¿Y cómo sería posible que lo que la Constitución ha negado expresamente al Gobierno Federal, es decir, el derecho de intervenir en el territorio de las Provincias, sinó en los casos previstos por la misma Constitución, se lo hubiese conferido al Ejecutivo Nacional por solo la atribución 17 que se refiere á la *organización y distribución del ejército*?

¿No comprende el señor Ministro que esta facultad en su aplicación importaría el derecho de intervenir en el territorio de los Estados, en los actos de su vida interior y en el ejercicio de sus más preciosas libertades? ¿Se puede desconocer que semejante facultad así considerada, dejaría de ser puramente mecánica y de simple administración para convertirse en un derecho supremo, superior á los concedidos al Gobierno Federal, superior á los del Congreso y aún á la misma Constitución, que vería burlada la independencia de los Estados que ella ha querido garantir con exquisito cuidado? ¿Quién puede dudar que la presencia de los ejércitos permanentes han sido y son en todas partes un grave peligro para las libertades? ¿Quién duda que los batallones de línea situados en las capitales de las Provincias son la causa de las perturbaciones que sufren, porque, ó van á sostener á los gobernadores contra los pueblos, ó apoyar una fracción, á un partido contra la marcha y los propósitos de los gobernantes?

Si hay duda sobre esto, ahí están los hechos para desvanecerla. Respondan por mí y de la exactitud de mis observaciones, las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mendoza y Santa Fé, que se encuentran hoy bajo la tutela del Ejecutivo Nacional.

Semejante pretensión es insostenible á la luz de los principios y de la ciencia del Gobierno libre. El mismo Gobierno Nacional ha dado repetidas pruebas de su aversión á las ideas que hoy sostiene, rehusando poner á las órdenes de los gobiernos locales las fuerzas que guarnecen las fronteras en territorio de las Provincias, temeroso, sin duda, del abuso que pudiera hacerse por aquéllos contra las libertades de los pueblos.

A mí mismo, señor, me ha sido negada aquella autorización cuando, comunicando al Ejecutivo Nacional los temores que abrigaba respecto de la revolución que tuvo lugar más tarde, solicité que pusiese á mis órdenes las fuerzas de la frontera norte para sofocar la conmoción. El señor Rawson me contestó que un hecho semejante importaría una intervención disimulada del Gobierno Nacional en los asuntos locales de aquella Provincia, y que el Gobierno Nacional no podía autorizarla sinó cuando la revolución hubiese estallado y fuese requerida su intervención.

Esta opinión está confirmada por los precedentes de los Estados Unidos y por lo que decía el señor Sarmiento, tratando de la reforma del artículo 6º. «Tenía  
« ya este artículo por comentario un hecho terrible y  
« sangriento ocurrido en una Provincia del interior de  
« la República, que había sido invadida por el Gobier-  
« no Nacional. El hecho es espantoso; se ha mandado  
« quitar un Gobernador precisamente porque la ley  
« dice, *para restablecerlo si hubiese sido depuesto por*  
« *la sedición*. La facultad de intervenir sin requisi-  
« ción, ha traído los horrores de San Juan, entendién-  
« dose que la facultad era discrecional, resultando la  
« monstruosidad de que el Gobierno Nacional haga  
« entrar en una Provincia, donde las autoridades fun-  
« cionan sin obstáculos, aunque haya habido amenazas  
« de perturbarse el orden, su fuerza armada, preten-  
« diendo contra las autoridades mismas y contra la evi-  
« dencia que el orden no está perturbado, obrando no  
« sobre los perturbadores, sinó sobre el mismo Go-  
« bierno».



El proyecto viene, pues, á poner un dique á esa burla continuada que se hace del derecho federal.

Viene á decirles á los gobiernos presentes y futuros: no violareis la Constitución para servir vuestros intereses de partidistas, para hacer de cada Gobernador un esbirro del Presidente que le mande representantes sin voluntad propia; esas fuerzas irán á las Provincias cuando haya necesidad de sostener la independencia de las localidades, evitar la guerra interna; y esto será calificado por el Congreso que representa la voluntad del pueblo y no tiene los intereses del Virey colonial.

Este proyecto, en fin, garantizará las Provincias en el ejercicio de su vida propia, quitando al Presidente el arma que tiene para cambiar Gobernadores y dar preponderancia con elementos nacionales á un círculo, ó al interés de unificación en la marcha de las ideas políticas.

La historia de todas las administraciones que hemos tenido, puede concretarse á una frase; absorber la vida de las provincias para que la voluntad del Presidente impere en todas ellas.

Todos los mandatarios no han podido despojarse del espíritu que les ha hecho considerarse como sucesores del Virey.

Forma unitaria, forma separatista, forma federal, todas han ido á confirmar ese propósito unificador del *Imperium Unum* de los mandatarios.

El Congreso responderá á una exigencia nacional, aprobando el proyecto sobre cesación de estas intervenciones oficiosas, y afianzará la paz batiendo en ese terreno el más poderoso atrincheramiento del espíritu centralizador.

---

NECESIDAD DE REDUCIR EL EJÉRCITO DE LÍNEA, Y LICENCIAR LA GUARDIA NACIONAL QUE SIRVE EN LA FRONTERA.—RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PARAGUAY, Y MOTIVOS QUE LO ACONSEJAN.—ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE LÍNEA Y DE LA GUARDIA NACIONAL.—NUEVO SISTEMA EN LA DEFENSA DE LA FRONTERA.—VIOLACIONES DE LA CONSTITUCIÓN.

---

*Señor Oroño*—Deseo, señor Presidente, que el señor Ministro de la Guerra que está presente, me diga cuáles son las miras del Gobierno respecto de la guerra del Paraguay, si todavía cree necesaria la permanencia de todo el ejército argentino en aquella República y qué antecedentes tiene sobre la terminación definitiva de esa guerra

*Señor Ministro*—En cuanto á la terminación de la guerra no soy adivino para augurar al señor Senador cuándo podrá terminar, y por lo que respecta al ejército bastará decirle, que mientras que el honor nacional nos imponga ese sacrificio, tendremos que continuar haciéndolo.

*Señor Oroño*—Yo no he creído que el señor Ministro tuviese el *don* de la adivinación ni el arte de descubrir las cosas ocultas invocando á los muertos ó usando de *bebidas y yerbas* como en la antigüedad; pero ni siquiera que posea una sola de las nueve especies de *adivinación* de que nos habla la Escritura.

Entre los paganos la *adivinación* constituía parte de su religión, pero como el señor Ministro es un buen católico, y además es hombre nuevo, no he podido ni pensar siquiera que creyese en *brujas* ni en *brujerías*.

Pero un hombre de Estado, un Ministro del Ejecutivo Nacional, encargado del Departamento de la Guerra, en posesión de todos los datos que se refieren á ella, siguiendo, como sigue, la marcha y desenvolvimiento de los sucesos que surgen de la guerra con el Paraguay, no sería extraño que pudiera decirnos el tiempo en que á su juicio puede terminar.

Esto es todo lo que yo he preguntado, lo que yo deseo saber del señor Ministro, para deducir de su contestación los medios que pueden emplearse, de acuerdo con el interés y el decoro de la Nación, á fin de remediar la situación por que atraviesa la República. Más si hasta estos antecedentes se nos rehusan, si ninguna luz tenemos que nos alumbre en la inmensa oscuridad que nos rodea, será imposible rasgar el velo misterioso que cubre el porvenir de la República, ni menos acertar en la adopción de las medidas que conviene tomar para mejorar el estado financiero del país, entrando así, á ciegas, á discutir la más importante de todas las cuestiones administrativas con peligro de nuestra situación política y económica.

Nadie ignora, señor Presidente, que el estudio y discusión del presupuesto es la más grave función del Congreso Legislativo.—En el presupuesto se discuten todos los ramos de la administración. La política, la hacienda, la justicia, la educación, las mejoras materiales, la guerra y hasta las condiciones más ó menos libres en que se encuentra el país, porque según la forma y los objetos en que se invierta el tesoro público, puede fácilmente colegirse cuáles son los propósitos y tendencias del Gobierno y el grado de libertad de que disfruta la Nación.

El pueblo, donde la mayor suma del tesoro público se gasta en ferrocarriles y telégrafos, en fomentar las ciencias y la industria, y en promover la educación de las masas y el desarrollo de los intereses materiales, ese pueblo, se puede afirmar sin temor de equivocarse, que es positivamente libre, y por consiguiente feliz. Pero aquel que consagra todos sus recursos, ó la mayor parte de ellos, á sustentar guerras exteriores ó interiores, apurando el capital, el trabajo y la industria, con onerosos impuestos para sostener un numeroso ejército, no es aventurado afirmar que se halla dominado por un despotismo degradante ó próximo á caer en él.

Tal pudiera creerse al estudiar nuestro presupuesto y

observar que casi toda la renta ordinaria se consume en el mantenimiento del ejército.

Según los *estados oficiales* recientemente publicados, el ejército de la República inclusive el que está en el Paraguay, asciende á la enorme cifra de 17.168 hombres.—De éstos, existen 7000 en el Paraguay, y el resto, 10.168, en las fronteras y en guarniciones en las Provincias.

La Nación no puede soportar el excesivo gasto que le ocasiona este ejército. Sus fuerzas ordinarias no bastan, y de aquí nace la necesidad de usar del crédito que ha elevado nuestra deuda á más de 50 millones de pesos.

Se priva al país de los beneficios del presente y se compromete el porvenir, ligando á las generaciones venideras por medio de esta inmensa deuda, á los desaciertos que hemos cometido ó hemos tolerado que se cometan por nuestros hombres públicos, sin atrevernos á murmurar siquiera tan perjudicial indiferencia ó tan culpable abandono de nuestros intereses.

Si el ejército que figura en el presupuesto existe efectivamente, si las fuerzas que se enumeran están sirviendo de guarnición en las Provincias, cuando ningún peligro exterior las amenaza, cometemos la doble falta de estar sosteniendo un ejército que impone al país una carga que no puede sobrellevar, y de infringir, en su distribución, la Constitución, con agravio de la libertad de los pueblos.

Si el ejército no existe en el número que se le fija; si consiste solo en las listas de revista como se asegura por algunos, entonces resulta que se hace una defraudación escandalosa de los caudales públicos, que se fomenta la inmoralidad y la torpe codicia de los que se propongan hacer su fortuna á costa del pueblo que paga crecidos impuestos á condición que les garantan sus derechos, su propiedad, su vida, su libertad y bienestar.

Un ejército de 17.000 hombres es muy superior á nuestros medios y necesidades. La Nación no puede,

no debe sostenerlo. La disminución de éste es aconsejada por las conveniencias del país, por su crédito y por la moralidad misma de la administración. Un ejército pequeño no sólo es más barato sino que es más fácil de establecer en él la disciplina.

El éxito de nuestras expediciones contra los indios jamás ha dependido del número de fuerzas, sino de las combinaciones más ó menos acertadas, ó de la idoneidad de nuestros jefes y de los medios de movilidad que se hayan empleado.

Reduciendo el ejército al número indispensable para guardar nuestras fronteras, economizaríamos 6 000.000 de pesos anuales, colocándonos en aptitud de atender á los intereses materiales del país, rebajando la deuda, enaltecendo nuestro crédito por la posesión de bienes que sólo pueden alcanzarse con la severidad y pureza en la administración de la renta pública; fomentando la inmigración extranjera, abriendo nuevas vías de comunicación, y libertando á cuatro ó seis mil argentinos del pesado é injusto servicio que arbitrariamente se les exige hoy.

Este solo resultado, que no es por cierto un sueño, bastaría para inclinar al Poder Ejecutivo á entrar en el camino de una reforma radical, haciéndole abandonar esos viejos medios, desacreditados é inútiles, que jamás responderán al resultado que se busca, para entrar de lleno á la noble tarea de vigorizar por medio del trabajo las instituciones libres.

Todos los pueblos libres han mantenido y conservan una fundada preocupación respecto de los ejércitos permanentes.— En ninguno de ellos se ha considerado el ejército como medio de gobierno. La paz doméstica de los pueblos no se debe á los ejércitos, sino á la feliz convicción de que las instituciones libres se desenvuelven por sí mismas, sin el apoyo forzado, las más de las veces negativo, cuando no peligroso, de los ejércitos.

La Inglaterra nos ha dado el más elocuente ejemplo, reduciendo su ejército á 16.000 hombres de línea, distribuidos en diversos puntos.

Los Estados Unidos hasta antes de su segunda guerra con la Inglaterra, no tuvieron más de 3000 hombres.— Después de aquella guerra elevaron el ejército á 6000. Esta cifra, relativamente pequeña, se conservó hasta la guerra con Méjico, para la cual se aumentó el ejército á 15.000 hombres.

Esta cifra se ha conservado por muchos años á pesar de tener que defender una frontera más extensa que la nuestra, y contra enemigos indios más belicosos y más diestros en las armas que los que nos acometen á nosotros.

Ahora mismo se nota la disposición del gobierno de los Estados Unidos á disminuir el ejército, y lo disminuirá, no tengo la más mínima duda, porque el pueblo americano sabe por experiencia que la libertad no se fecunda con las armas de la guerra, sinó con las armas de la paz y del trabajo.

Yo comprendo que nosotros, dadas las condiciones de nuestro país, obligados á defendernos de los indios, estamos también obligados á mantener un ejército.

Pero un ejército de 3 á 4000 hombres bien organizados y un buen sistema de defensa, serían suficientes para responder de la vida y de la propiedad de los habitantes de la campaña, y para reconquistar los valiosos territorios que hemos abandonado á los salvajes, á pesar de tener un ejército numeroso.

Cuando combatíamos con enemigos poderosos, diestros en las armas, con superiores elementos á los que nosotros podíamos disponer, no necesitábamos de ejércitos numerosos para vencerlos.

La independencia de América se debe al patriotismo de sus hijos, más que al número de sus ejércitos. San Martín y Bolívar nunca llevaron grandes legiones ni pesados bagajes. Con soldados bisoños y en escaso número, pero animados del espíritu de sus jefes, hicieron la grandiosa conquista de los pueblos esclavizados.

La experiencia nos revela el error en que incurrieron nuestros gobernantes manteniendo el defectuoso sistema de los *cantones militares*, que no dieron, ni han dado, ni

darán jamás otro resultado que la corrupción, la inercia, y el triunfo del elemento bárbaro sobre los pueblos cristianos.

He repetido hasta el fastidio que la seguridad de la frontera no la hemos de obtener por medio de grandes ejércitos, sinó por medio de acertados planes que economicen hombres y dinero, dando en la práctica los resultados que inútilmente nos afanaremos por alcanzar siguiendo el sistema que tenemos.

Los cantones militares colocados sobre una vasta línea de frontera, matarán la disciplina del ejército, harán imposible su organización, ocasionarán gastos inmensos al país, perpetuando la inseguridad, burlando las esperanzas de todos, menos las de los indios, que continuarán sus depredaciones con la impunidad con que hoy lo hacen.

Colocados los cantones de cuatro en cuatro, ó de ocho en ocho leguas distantes unos de otros, los indios vienen en pequeño número y pasan sin ser sentidos á hacer sus depredaciones y salteos, ó vienen en gran número, y en este caso harto hará la fuerza del cantón con salvar su seguridad al favor de los *fosos* y de los cañones del cantón.

Tratándose del presupuesto de la guerra, era natural por otra parte, que aquellos hechos se hubiesen tenido presente; que el gobierno al pedirnos que votáramos los recursos necesarios para sostener al ejército, nos hubiese presentado un plan de operaciones para demostrarnos que aquella exigencia estaba autorizada por la necesidad. Pero lejos de eso, se nos viene á pedir que votemos un ejército de 16.000 hombres en una forma irregular, sin acompañarnos la cuenta de inversión de las sumas anteriormente autorizadas, y negándose á dar las explicaciones que considero indispensables para formar mi juicio, tanto por lo que respecta al ejército del Paraguay como al que se ocupa en la frontera.

Se han insumido en la frontera sumas fabulosas; se han prodigado los tesoros de la Nación persiguiendo el quimérico propósito de conquistar el desierto y reducir

á los indios por medios ineficaces y contrarios á los mismos fines que se deseaban alcanzar.

Pérdida de tiempo, sacrificios de hombres y de dinero, todo ha sido estéril, porque no se ha querido adoptar el único medio capaz de resolver el problema, la *población*.

Desde 1862 hasta la fecha se han invertido 24.440.207 pesos fuertes solo en la frontera, y si á esto se agrega el monto de las propiedades particulares perdidas, el decaimiento de la industria, la depreciación de la tierra, el trastorno que causa el servicio forzado, el cautiverio de centenares de personas y la muerte de mayor número, tenemos que retroceder espantados ante este cuadro de desolación y ruina, cuya exactitud parecería sospechosa y hasta increíble, sinó estuviese confirmada por hechos que todos conocen, de una incontestable evidencia.

A los inconvenientes del sistema que se ha seguido hasta hoy, se ligan dificultades de un orden superior, tales como la escasez de recursos.

Aparte de la inmensa deuda que nos agobia, el déficit del presupuesto se eleva á la suma de 9 ó 10 millones de pesos y con la triste perspectiva de la disminución en la renta.

Esta situación nos impone el deber de ser muy parcos en las erogaciones, y tan celosos cuanto sea posible en la inversión del tesoro.

El mismo Poder Ejecutivo se felicitaría al sentirse apoyado por el Congreso en la regularización de los gastos poniéndolos en relación con la renta.

Crearle obligaciones, dictar leyes imponiéndole deberes sin que se le den los medios de llenarlos, es colocarlo en una pendiente fatal por la que irá infaliblemente á la bancarrota y el descrédito.

Juzgando la cuestión bajo el punto de vista de la Constitución, se nos presenta con caracteres doblemente graves, porque la manera como se ha procedido hasta hoy afecta profundamente las facultades constitucionales del Cuerpo Legislativo y la libertad y los derechos de las personas.



El Congreso no tiene facultad para autorizar gastos que no sabe cómo van á hacerse. El Congreso no puede despojarse de facultades que le son peculiares y que están ligadas al desempeño de sus deberes para con el pueblo.

Como mandatario del pueblo, como delegado de su soberanía, sus facultades no alcanzan á votar fondos sin conocer cómo se han invertido los caudales públicos, y cómo, y en qué, han de invertirse las crecidas sumas del presupuesto de la guerra que se nos presenta.

El Congreso impone contribuciones directas por tiempo determinado, y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, *siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan.*

Pero esta facultad lleva también la condición implícita de que no pueda ejercerla sin tener una conciencia clara de los motivos, objetos y fines á que esos gastos se han de aplicar.

¿De dónde arrancaríamos el poder para disponer de los dineros del pueblo caprichosamente?

El Congreso vota anualmente el *presupuesto de gastos de la administración y aprueba ó desaprueba la cuenta de inversión.* Y como para que no quede duda del espíritu de esta disposición constitucional, ha sido colocada en un solo artículo, demostrándose con esto que ambas funciones son correlativas, que deben ejercerse á un mismo tiempo, sirviendo la una de auxiliar á la otra.

Pero aquí sólo se nos dice:—que se necesitan 6.000.000 de pesos fuertes para los gastos de la guerra del Paraguay, y dos millones ochocientos mil pesos para atender la frontera. Se habla de millones como de cuatro reales, sin pararse en la consideración de las consecuencias que fatalmente han de sobrevenir!

¿Y por qué no se habla del retiro del ejército?—¿Tenemos todavía que continuar lavando el *honor nacional*? ¿No son suficientes los sacrificios hechos para dejar probado el valor y la constancia de nuestros

soldados y nuestra lealtad á los compromisos contraídos?

Se nos dice que la guerra está terminada: por lo menos es fuera de toda duda que López está reducido á la impotencia: su poder ha concluído para no levantarse jamás.

Huyendo á los bosques, sin armas, sin provisiones, con soldados desmoralizados y desnudos, ¿qué temor puede inspirar á nuestro ejército, aún cuando se redujese á la cuarta parte de lo que es hoy?

Ni López ni el Paraguay pueden ser ya objeto de temor ni en el presente ni en el porvenir. El Paraguay despedazado, reducido á la más espantosa miseria, despierta la compasión de todos, pero no inspira, ni puede inspirar temor ninguno.

No existiendo, pues, fundados temores sobre el poder de López, y estando evidenciado por los hechos que bastaría para hacerlo desalojar el Paraguay, si es que no se considera preferible el dar ya por terminada esa guerra, la cuarta parte del ejército aliado, pienso que no sólo es conveniente sino de estricta justicia el retiro de una parte de nuestro ejército, muy principalmente la Guardia Nacional.

Disminuiríamos así nuestros gastos en más de la mitad, y devolveríamos al hogar á esos soldados beneméritos que han soportado pacientes una campaña de más de cuatro años en medio de las más crueles privaciones.

¿Por qué si es el honor nacional el que se defiende han de ser sólo ellos los que estén obligados á pagar ese tributo, rindiendo su vida en holocausto á esta patria que es de todos?

Nuestros deberes como argentinos son iguales, como iguales son también nuestros derechos. Todos estamos en efecto, obligados á armarnos en defensa de la patria, conforme á las disposiciones de la ley. ¿Pero, qué ley les impone á estos ciudadanos el penoso deber de soportar exclusivamente las privaciones, la miseria y la ausencia del hogar?

Tan injustos somos con nuestros soldados en el Paraguay, como con los guardias nacionales que indebidamente se mandan á la frontera.

Parece que el despotismo y la crueldad con que tratamos á los pobres paisanos estuviese en la sangre y en la educación que hemos recibido.—Cuando ven al hombre de nuestros campos, al modesto agricultor, envuelto en su manta de lana, ó con su poncho á la espalda, les parece que ven al indio de nuestras pampas á quien se creen autorizados para tratar con la misma dureza é injusticia que los conquistadores empleaban con los primitivos habitantes de la América.

Así, cuando se quiere mandar un contingente á la frontera, ó se quiere organizar un batallón, se toma por sorpresa ó con violencia al labrador y al artesano, y mal de su grado, se le conduce atrincado á las filas.

¿Qué ley les impone este servicio? Ninguna; la ley garante su libertad y sus derechos, pero esa ley no tiene fuerza ni poder para salvar al pobre contra la arbitrariedad y la injusticia, del poderoso.

Pretender organizar el servicio de frontera por otros medios que los que aconseja la justicia y la razón, es perseguir una ilusión y cometer á sabiendas una infracción de la Constitución, tanto más repugnante cuanto que se atacan y hieren los derechos del individuo y de la sociedad.—Y todo esto para que los indios invadan y roben impunemente; para que los gastos se hagan sin otro resultado que consumir un atentado en cada una de las Provincias donde se arrebatan sus vecinos pobres para que vayan á cuidar la fortuna de los ricos!

Para probar la exactitud de mis observaciones basta entrar en el examen de algunas de las partidas de ese presupuesto.

El estado publicado por el Gobierno demuestra que en la frontera Norte de Santa Fé se paga una guarnición de seis cientos y tantos hombres, mientras que no existen sinó 124 hombres de línea y ciento cincuenta

guardias nacionales, que hacen por todo, incluyendo los indios que revistan, un total de 350 hombres.

La Nación, pues, paga un regimiento de 600 hombres y son tan solo 350 los que existen.

*Señor Ministro*—Me parece que no puede asignarse 600 hombres á un regimiento cuando por la ordenanza no tiene sinó 400.

En los 600 hombres á que alude el señor Senador, forma parte de un regimiento, de una compañía de infantería, de los indios del Sauce y toda la fuerza que cubre esa frontera.

*Señor Oroño*—Lo que puedo asegurar al señor Ministro es que la fuerza que figura en ese estado no existe en la frontera Norte.

Yo quisiera que el señor Ministro me dijera si el Estado paga 600 y tantos hombres. Si los paga, es indudable que se está defraudando al tesoro, porque la fuerza no existe.

Es conveniente que sepamos lo que hay sobre este punto, porque lo que sucede respecto de esta fuerza, puede suceder respecto de otras, importando este desorden muchos miles de pesos que se gastan sin provecho para la Nación.

De todos modos, no hay motivo alguno que justifique la conservación de un ejército tan costoso, á no ser el de hacer la guardia á los gobernadores de Provincia, ó de satisfacer esa especie de monomanía de las armas, y la vana ostentación de un poder no sólo inútil sinó perjudicial. Un ejército reducido, bien atendido, pagado puntualmente, con la disciplina que corresponde y situado convenientemente, llenará las aspiraciones de todos, y el país no podrá menos que agradecer al que tal hecho hubiese realizado.

La existencia de batallones en La Rioja, Salta, Tucumán, Mendoza y San Juan, donde ninguna necesidad nacional reclama su presencia, es una prueba evidente de que no necesitamos para asegurar la frontera, del ejército que se presupone.

Esas fuerzas no tienen objeto plausible en los pueblos;

deben estar en la frontera ó deben disolverse ahorrando á la Nación las ingentes sumas que demanda su conservación. Las Provincias fiscalizadas, viviendo bajo la influencia y la presión de las fuerzas militares, no llegarán á ser lo que la Constitución ha querido que sean:— Estados soberanos y libres.

He dicho.

En seguida habló el señor Ministro de la Guerra y el general don Bartolomé Mitre, ambos impugnando las ideas del Senador Oroño sobre el retiro del ejército del Paraguay, licenciamiento de la Guardia Nacional y disminución del ejército.

---

*Señor Oroño*—Comprendo, señor Presidente, la impaciencia de la Cámara por ver terminados sus trabajos legislativos. Ha transcurrido el término ordinario de las sesiones y los señores Senadores desean regresar á sus Provincias, al seno de sus familias.

Este sentimiento es muy natural y se explica por otras razones no menos fundadas. Pero yo no tengo la culpa de que un asunto de esta importancia haya sido sometido á la consideración de la Cámara en las sesiones prorogadas.

Sea por negligencia de las comisiones, ó por la misma gravedad de las materias objeto de su estudio, el hecho es que en este año, como en los anteriores, el presupuesto ha venido á la discusión al fenecer el término ordinario.

Nuestro deber entre tanto es estudiarlo detenidamente, examinar en su conjunto y en sus detalles, todos y cada uno de sus Capítulos, expresando francamente una opinión, ya sea favorable ó adversa, sobre la forma y tiempo en que se nos ha presentado.

Ahora solo me resta rectificar la opinión del señor Senador por Buenos Aires, que por lo mismo que merece

la consideración del Senado, me dejaría, si no la replicara, en una posición desventajosa

El señor Senador ha hecho la defensa del ejército cediendo á un sentimiento que se explica por los antecedentes de su vida pública y por la figura que representa en el ejército.—Yo aplaudo su celo, y sin que me ligen los mismos motivos á la noble profesión del soldado, yo habría acompañado al señor Senador con mi palabra á hacer la defensa del ejército, si ella hubiese sido provocada por alguno.

Los que combatimos el presupuesto, la manera en que se nos presenta y el número del ejército, no combatimos propiamente al ejército como institución. Por el contrario, queremos que el ejército sea reducido, porque queremos que sea atendido como corresponde y que sirva al importante objeto á que está destinado.

Bastaría considerar la vasta extensión de nuestras fronteras y la existencia de un enemigo que nos acecha constantemente, que esparce el terror y la muerte donde quiera que logra sorprender la vigilancia de nuestros soldados, para reconocer la necesidad del ejército.

Pero de la necesidad del ejército no se deduce que deba ser numeroso, y mucho menos que deba formarse de hombres arrancados por la violencia, obligados á abandonar sus hogares y sus familias, para conquistar con sus esfuerzos el bienestar de los mismos que los despojan de esos derechos y de afecciones que les son muy caras.

Donde el ejército es verdaderamente una institución del Estado, no debe su origen á la violencia ni al desprecio de aquellas instituciones tutelares que dignifican al hombre y ennoblecen la sociedad en que vive, porque aseguran para todos el goce tranquilo de la plenitud de sus derechos.

Por eso es que el ejército se sostiene y se paga por el pueblo, del producto de la contribución que todos depositan en manos de la autoridad, para que haga efectivas

las garantías individuales, nó para que atente contra ellas ni viole en una fracción del pueblo, por diminuta y desacomodada que sea, las libertades que al asociarse han querido mutuamente asegurarse, sin distinción de clases y condiciones.

Esta es la misión del ejército, y en este sentido yo no puedo desconocer su utilidad.

Pero, ¿puede llenar esta misión un ejército de presidiarios ó de hombres arrastrados por la injusticia de sus mandatarios? De ningún modo.

El ejército en tales condiciones deja de ser una institución, y en vez de ser un elemento de orden, una positiva garantía para la paz pública, es un perturbador incesante ó un agente habilitado y siempre dispuesto á servir á las pasiones de aquellos caracteres audaces que buscan en las revueltas la satisfacción de su ambición.

Así el ejército es un elemento peligroso y una amenaza á las libertades públicas, tanto más grave, cuanto mayores sean sus proporciones.

El señor Senador por Buenos Aires, pretendiendo defender al ejército, ha hecho un cargo inmotivado é injusto á los pueblos. Ha dicho que todas las revoluciones han partido de las poblaciones, no del ejército. Tan destituida aseveración está afortunadamente contradicha por la historia.

No se comprende cómo el señor Senador por Buenos Aires, que tan aficionado se muestra á los estudios históricos, ha pasado por alto la página en que con caracteres de sangre están consignados los hechos que desautorizan su opinión. ¿Quién ignora en nuestro país que todas las revoluciones, principando de la de Arequito inclusive la muy gloriosa revolución del 11 de Septiembre hasta nuestros días, han partido del ejército?

En todas partes donde una revolución ha asomado la cabeza ó se ha ostentado el triunfo de un partido sobre otro, el ejército ha decidido del resultado.—El pueblo ha sido siempre la víctima espíatoria, el punto objetivo de la revolución, pero no la revolución misma, si excep-

tuamos la iniciada por el pueblo para emanciparse de la España.

Si de las revoluciones pasamos á las dictaduras, á la tiranía de 20 años que llenó de cadáveres y sangre el suelo argentino, encontraremos al ejército sirviendo de pedestal y de instrumento al odio de los tiranos.

Todos los caudillos de la República, los que se han perpetuado en el poder con detrimento de la libertad de los pueblos, se han apoyado en el ejército, se han sostenido por el ejército, y han extendido su dominación y su influencia con el ejército.

Pero no por esto puede afirmarse de un modo obsoleto que el ejército sea inútil ó perjudicial. De que no sea indispensable no se sigue que no sea necesario.—Y no porque haya producido males dejará de ser susceptible de producir bienes, cuando las condiciones de su organización respondan á este fin.

Para mí, todo consiste en que sea bien organizado, y que su composición no se resienta del abuso y del error siempre funesto, de considerarlo como un medio indispensable de Gobierno.

El señor Senador por Buenos Aires ha dicho tambien, que los Estados Unidos han extendido y asegurado sus fronteras y conquistado un inmenso territorio con sus poblaciones.

Luego el señor Senador reconoce que el ejército no es de todo punto necesario, puesto que sin más elementos que el rifle del poblador europeo, y la influencia creciente de su civilización, ha hecho el pueblo Americano esas grandes conquistas de territorio, donde se han levantado más tarde ricas y vigorosas poblaciones y Estados prósperos y libres.

Es una verdad confirmada por la historia, que las conquistas de territorios que los Estados Unidos han realizado, han sido debidas en su mayor parte al espíritu viril de sus poblaciones, más que al ejército.

Entre nosotros tiene que suceder lo mismo que en los Estados Unidos. Alguna vez se ha de levantar el espí.



ritu público en nuestras poblaciones para disputar á los indios la propiedad y defenderse contra sus invasiones. —Este espíritu, ese interés por la tranquilidad del hogar y por la pacífica posesión de los bienes conquistados con el trabajo, complementará el servicio del ejército y dará por resultado la completa seguridad de nuestras fronteras, colocando entre los indios y las poblaciones cristianas, la insalvable barrera del interés particular y colectivo de la sociedad y del individuo.

Este ejército que no se quiere disminuir será innecesario el día que levantemos la opinión de los pueblos haciendo efectivos sus derechos, y que organicemos la Guardia Nacional, que es el ejército de los pueblos libres. Entonces podremos decir que tenemos un ejército capaz de ponernos á cubierto de las invasiones extrajeras y de los disturbios domésticos, asegurándonos la paz de que tanto necesita la República, y el ejercicio tranquilo de nuestros derechos.

Esa paz y esos derechos estarán en nuestras manos y serán por nosotros defendidos.

¿De qué otro modo han conquistado los Estados Unidos sus libertades y han asegurado el dominio de su civilización en los desiertos, sinó por el esfuerzo espontáneo del pueblo, representado por la Guardia Nacional, que es la que ha combatido allí contra los indios con una constancia inquebrantable, no arrastrada por la fuerza de la autoridad, sinó por la fuerza del interés común y de sus propias convicciones?

Grant y tantos otros generales distinguidos, han salido de las filas de la Guardia Nacional, y se han ilustrado en la guerra con los bárbaros. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo entre nosotros? Cuando hagamos de la Guardia Nacional, no sólo una escuela para el soldado, sinó para el ciudadano; cuando todo ciudadano lleve en sus manos un fusil para defender sus derechos y su calidad de hombre libre, no necesitaremos estar bajo la vigilancia del tutor, ni nuestras prerogativas serán vulneradas por la ignorancia ó mala voluntad de los agentes del poder.

El día que la libertad individual, ese derecho que el hombre tiene de ir, andar, volver, de ser dueño de sus bienes, gustos y familia, y de gozar en la vida privada de la plenitud de su independencia, deje de estar á merced de mandones irresponsables que atropellan sus derechos, prevalidos de la impunidad que les asegura la humilde condición de ofendido; ese día se habrán realizado ante nosotros los mismos hechos que en los Estados Unidos, porque ellos son el fruto de la libertad, que no se derrama sobre los pueblos como el agua que se desprende de las nubes para fecundar la tierra, sinó que nace del suelo al impulso del trabajo inteligente y de la lucha perseverante y diaria para conquistarla y defenderla.

El día, en fin, que nos despojemos del espíritu de desconfianza de que estamos dominados; que dejemos de temernos unos á otros como si fuésemos enemigos declarados; cuando dejemos de considerarnos insuficientes para responder á las obligaciones que la Constitución ha impuesto á cada ciudadano, á cada uno de los pueblos, y tomemos la participación que nos corresponde en la labor de afianzar nuestras instituciones; ese día podremos decir que tenemos un ejército más poderoso que todos los que se pudieran organizar; la paz y la libertad estarán garantidas.

Desde ese día podremos decir que formamos parte de un pueblo libre; porque desde ese día también se habrá emancipado el individuo de la servidumbre á que ha estado sujeto; el servicio *forzado* quedará proscripto, y el hombre libre, con la conciencia clara de sus derechos, podrá decir con noble orgullo: que forma parte de un pueblo verdaderamente libre! (Aplausos).

De acuerdo con el señor Ministro en que la ocupación del Río Negro no puede hacerse sinó con fuerzas de línea, no puedo de ningún modo estarlo, con el atentado que se comete contra las libertades del ciudadano, á pretexto de asegurar una línea de defensa menos distante de los centros de población.

La violación de los principios en uno y otro caso es

la misma y reviste la misma gravedad, ya sea que el servicio indebidamente exigido se haga á 150 leguas, ó á 300.

Si el Congreso deja pasar en silencio estos hechos, asume una inmensa responsabilidad para ante el país.

Nuestro silencio daría lugar á que se nos acusase de participación en la violación de la Constitución, y yo por mi parte declino toda responsabilidad, porque no quiero hacerme cómplice de ninguna infracción de nuestra ley fundamental.

Todos los Gobiernos han abusado de la inferioridad intelectual del hombre de nuestras campañas, para hacer pesar sobre él obligaciones que deben ser soportadas en común.

Ninguno ha pensado en organizar el ejército para hacer cesar el odioso servicio de la Guardia Nacional.— Todos han sido igualmente indolentes, limitándose á traer algunos soldados extranjeros, que engañados con promesas falaces han tenido luego que abandonar el servicio y el país.

¿Cuándo hemos visto al Gobierno Nacional ocupado seriamente de la organización del ejército?

¿Dónde están las pruebas de ese interés que les inspira el ejército?

Soldados impagos, desnudos y azotados por la más leve falta, hé ahí el medio empleado para organizar el ejército, supliendo las deficiencias de éste con la movilización de la Guardia Nacional, á la voluntad y al capricho de los jefes de frontera.

El servicio de la Guardia Nacional en la forma que hoy se hace, aparte de lo injusta, arbitraria y violenta que es la manera de ordenar el concurso de esos guardias nacionales, es de todo punto ineficaz y más costoso que el que ocasionaría un numeroso ejército de línea.

¿Quién no vé los inconvenientes, quién dejará de condenar tanto abuso, tanto desprecio por los derechos del hombre y tanta imprevisión para continuar en la senda abierta por el error de los que nos precedieron?

Por otra parte, ¿quién ha autorizado, señor Presidente, al Poder Ejecutivo Nacional para movilizar la Guardia Nacional?

*Señor Ministro de la Guerra*—Es rara la pregunta; en el presupuesto vigente existe la autorización dada por el Congreso y el señor Senador contribuyó....

*Señor Oroño*—Yo voté en contra de esa partida....

*Señor Ministro de la Guerra*—Es el Congreso entonces: ataque al Congreso y no al Gobierno.

*Señor Oroño*—Voy á defender al Congreso.

La determinación de una cantidad para gastos en la Guardia Nacional, no importa sinó la provisión de los medios que pueden ser necesarios para ejecutar las leyes del Congreso.

No hay ninguna ley que autorice la movilización de la Guardia Nacional, y siendo únicamente el Congreso el que puede hacerlo, en los casos especificados por la Constitución, resulta que el Poder Ejecutivo ha cometido dos faltas en vez de una— la movilización y la inversión de una suma contra la voluntad del Congreso.

Este hecho por sí solo bastaría para que el Congreso borrara esa partida, puesto que se entiende que al dejarla consignada en el presupuesto, se desprende de una facultad que le es peculiar, para abandonarla á la discreción del Poder Ejecutivo, y en muchos casos, á los jefes de frontera.

*Señor Ministro de la Guerra*—Si tal cosa se hiciera se despoblaría la frontera.

*Señor Oroño*—Yo no temo ese peligro, y si existiera, puede conjurarse de otro modo.

Que la Nación invierta todos los millones que quiera para sostener un ejército de línea, pero que no se comprometa un solo día, ni por ninguna causa, la libertad individual, fundamento y base de nuestra Constitución.

Si las rentas no bastan, impónganse al pueblo nuevas contribuciones para mantener un ejército numeroso ya que se considera indispensable; pero que no

se haga pesar el servicio de las armas exclusivamente sobre la clase más desfavorecida de la sociedad, solo porque su voz es impotente para hacerse escuchar. Gastemos los dineros del pueblo, pero salvemos su libertad. (Aplausos).

*Señor Ministro de la Guerra*—Estoy de acuerdo.

*Señor Bustamante*—Insisto en decir que hay una ley especial autorizando al Poder Ejecutivo para movilizar la Guardia Nacional de todas las provincias que tienen fronteras.

*Señor Oroño*—Está en error el señor Senador.

*Señor Bustamante*—Hay una ley especial.

*Señor Oroño*—Me veo obligado á rectificar el error del señor Senador, citando hechos que corroboren lo que digo.

El año 1864, guiado por los mismos sentimientos que me sirven de móvil, propuse la ley á que se ha referido el señor Senador por Jujuy, que fué aceptada; pero esta ley tenía por término dos años que se vencieron el 66, y desde entonces se ha continuado movilizandó la Guardia Nacional sin sujeción á la ley.

De consiguiente, la movilización arbitraria é injusta, de la Guardia Nacional, se ha hecho por los Jefes de frontera. El Presidente de la República delegaba en ellos facultades que él mismo no podía ejercer. Pero nó solo se ha estado haciendo todo eso arbitrariamente, sinó de la manera más odiosa que es posible imaginar.

El señor Ministro de la Guerra acaba de revelarnos un hecho que comprueba la desigualdad y la injusticia con que se exige ese servicio.

La provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de todas, ha tenido que *mendigar*, estas son sus palabras, á la provincia de Entre Ríos, algunas centenas de hombres.

El gobierno de Entre Ríos ha respondido á la exigencia mandando unos cuantos criminales, ó vecinos arrancados de sus hogares por la fuerza, para complacer á los que le habían hecho el pedido.

*Señor Ministro de la Guerra*—Yo no los pedí.

*Señor Oroño*—Tanto peor entonces, pues si no los pidió no tenía por qué constituirse en carcelero del Gobernador de Entre Ríos.

*Señor Ministro de la Guerra*—Esos hombres han sido destinados por los jueces, como son todos los que componen nuestro ejército.

*Señor Oroño*—El señor Ministro debe saber cómo se destinan esos infelices al servicio de las armas, y cuántos abusos se cometen á la sombra de esa facultad.

La prensa ha dado cuenta de la manera cómo se hacía el enganche voluntario en las provincias de Tucumán y Salta. Los voluntarios han pasado por Santiago amarrados tal como si fuesen criminales famosos.

*Señor Ministro de la Guerra*—No son enganchados; es un contingente que el Gobernador Luna entregó al general Arredondo.

*Señor Oroño*—¿Y quién había autorizado al Gobernador Luna para destinar al servicio forzado de las armas á ciudadanos que tienen los mismos derechos que él?

*Señor Ministro de Relaciones Exteriores*—La ley de Guardia Nacional que dispone que todo el que no esté enrolado sirva en los ejércitos de línea.

*Señor Oroño*—Esa ley fué una disposición de circunstancias, un medio para cubrir los claros que dejaba el enemigo en las filas de nuestros soldados.

*Señor Menistro de Relaciones Exteriores*—Es la ley de Guardia Nacional.

*Señor Granel*—La ley de enrolamiento.

*Señor Oroño*—La ley contra la Guardia Nacional, la ley que ahuyenta del hogar al campesino!

*Señor Ministro de Relaciones Exteriores*—Todo ciudadano argentino que no se enrola será destinado al ejército de línea.

El señor Senador pidió otra ley por la cual se pudiera movilizar la Guardia Nacional, y yo le voy á decir que cuando la guerra del Paraguay se dictó una ley man-

dando movilizar toda la que fuese necesaria, y esa ley está vigente.

*Señor Oroño*—Esa ley fué expresamente dictada para la guerra del Paraguay, para formar el ejército, y no se le puede dar ninguna otra aplicación. Esa ley es, sin embargo, el pretexto de que se valen para forzar á los ciudadanos al servicio ordinario de frontera.

El asunto es muy serio, señor Presidente. Yo no sé cómo podríamos estar ocupando nuestro puesto con la conciencia tranquila, después de lo que hemos escuchado á los miembros del gobierno, sin dictar una medida que repare estos abusos.

Si no hemos de reparar estos males ¿á qué queda reducida nuestra misión? ¿A votar altos impuestos, á gravar al pueblo con nuevas cargas sin que puedan justificarse ni como el precio de una libertad que no hemos podido alcanzar?

Pero se han votado escuelas y telégrafos.—Sí, pero la mejor escuela es la del ejemplo respetuoso á la ley, es la práctica de la libertad. Los mejores telégrafos son aquellos que llevan al extranjero el anuncio de que en este país la paz es un hecho realizado, que la vida y la propiedad están garantidas por un respeto inviolable hácia los derechos del hombre.

¿Qué vamos á anunciar por los telégrafos? ¿Que se aprisionan á los hombres sin causa justificada; que la seguridad personal, si bien es una realidad para el rico, es apenas una promesa para el pobre?

¿Que el pobre está condenado á que lo lleven á la frontera, á servir de peón en los establecimientos de los jefes, mientras que su mujer y sus hijos se mueren de hambre, ó se abandonan al vicio impelidos por la miseria?

¿No es este un motivo suficiente para llamar la atención del legislador, para echar una mirada de compasión sobre esa clase desheredada por la indiferencia de los poderosos?

Nuestra conducta para con ellos no es bastante para abrir una profunda herida en su corazón?

Y se extraña que el *gaucho* sienta aversión contra el hombre acomodado!

Confieso que no puedo presenciar estos hechos sin conmovirme.—Yo deseo, por honor de mi país, por el crédito de su Gobierno, en el interés de la paz pública, y de los grandes intereses del progreso y de la libertad, que tales hechos no se repitan.

Estamos proclamando por todos los medios posibles las felices condiciones y ventajas que nuestro país ofrece para el poblador inteligente; la libertad que se goza y el respeto á los derechos; y esa libertad tan decantada jamás la han saboreado los pobres. La libertad es para los ricos, para los pobres el desprecio, la opresión y la injusticia. (Aplausos).

La Constitución, en cuyas disposiciones se descubre sin esfuerzo el noble pensamiento de sus autores, ha querido sobre todo garantizar la libertad individual. Y no es procediendo como lo hemos hecho hasta ahora que hemos de cumplir con el deber que nos ha impuesto.

Demos leyes que pongan á cubierto de toda arbitrariedad estos derechos: organícese la Guardia Nacional bajo la base de que no será molestada en el servicio ordinario de frontera, organícese el ejército para servir á la defensa común del territorio y seguridad de la frontera, abandonando el pésimo sistema que hoy se sigue; y entonces se verá por los resultados, que aún cuando según la expresión del señor Ministro de la Guerra, sólo los militares pueden hacer proyectos sobre ejércitos y fronteras, las ideas que el señor Ministro encontraba buenas ayer y que las encuentra inconvenientes hoy, no han de ser del todo inútiles, sirviendo por lo menos para llamar la atención sobre estas cuestiones que son de un interés vital para nuestro país.

He dicho.

---





## PROYECTO

DE COMUNICACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE SACAR LAS FUERZAS  
NACIONALES DE LAS CAPITALES  
DE LAS PROVINCIAS Y SITUARLAS EN LA FRONTERA DE LA REPÚBLICA

Buenos Aires, Junio 18 de 1869.

*Al Poder Ejecutivo de la Nación.*

El Poder Legislativo de la República, dejaría de cumplir uno de sus primordiales deberes, si desoyendo la opinión pública, á cuyas indicaciones debe manifestarse muy atento, no se dirigiera, como ahora lo hace, al señor Presidente encargado del Ejecutivo Nacional, para manifestarle la conveniencia de disponer de la fuerza armada que existe en el territorio de la República, de manera que esta llene los objetos para que es creada y sostenida con el tesoro de la Nación.

La fuerza armada en la República es un peligro para sus libertades, si ella no está regida conforme á las miras de la Constitución, la cual hace del ejército sostenido por las contribuciones de los ciudadanos, un elemento de seguridad y de dignidad de la patria, encargándole exclusivamente de contener los ataques exteriores y de defender las poblaciones civilizadas contra la codicia de los salvajes que no reconocen otra ley que la de la fuerza.

El ejército, por consiguiente, para desempeñar estas funciones exclusivas, únicas, debe tener una ubicación en relación con ellas, de manera que pueda ocurrir pronto, en un momento dado, á repeler los dos enemigos únicos tambien que pudiéramos tener.

Para el ataque exterior, las fuerzas nacionales serán impotentes si no se hallan disciplinadas, moralizadas y llenas del espíritu militar que se desvirtúa en las guarniciones situadas en los centros de población; y para la defensa de la frontera cuyo mayor peligro nace de la rapidez é inesperado del ataque del enemigo, mal podrá desempeñarse el soldado de la Nación si no se hallara al frente de un enemigo doméstico contra el cual es preciso estar en perpetua vigilancia en el teatro mismo de sus depredaciones.

Esta función del ejército es de la mayor importancia, función, por otra parte, que justifica y hace llevadera para la masa contribuyente del país, la cifra crecida que representa en nuestro presupuesto la mantención de la fuerza armada, por cuanto se convierte en un gasto reproductivo desde que propende al desarrollo de las industrias rurales, hace posible la colonización de las tierras valdías, y garante la seguridad personal de una parte muy interesante de la población argentina.

El ejército colocado á lo largo de nuestra vasta y siempre amenazada frontera, vendría á tener el carácter que únicamente le corresponde en una República federativa. Bajo esta forma de Gobierno, la opinión pública, sin cuya influencia las autoridades no pueden producir el bien, se alarma y se perturba cuando las fuerzas nacionales vienen á colocarse como celadores del orden público, con el pretexto inadmisibile en un país libre, de que ese orden puede ser conmovido por la sedición contra las autoridades constituidas.

En tal caso los ciudadanos se sienten oprimidos, cuando menos moralmente; la dignidad misma de los pueblos se resiente y pierden la fé en la eficacia de las instituciones libres, bajo cuyo imperio solo puede nacer y robustecerse el orden público. Y como el soldado obe-

dece inmediatamente á los mandatos del poder más activo del Estado. y contra el cual es más fácil que se despierten las aprensiones de la democracia, resulta en la situación indicada, que el Ejecutivo Nacional se desprestigia ante esa misma opinión del país, y encuentra embarazos en su marcha, y muchas veces es difícil explicar la causa que los motiva.

Por estas ligeras observaciones, cuyo espíritu es fácil de comprenderse y comentarse para cualquiera que reflexione sobre ellas con conocimiento de nuestra historia pasada y de los hechos de actualidad, el Congreso Argentino se dirige al Jefe del Ejecutivo, presentándole estas consideraciones, con el objeto de que logre el mayor acierto en las disposiciones que adelante tome sobre la ubicación de la fuerza pública. Toda ella según la opinión y los intereses argentinos debe estar exclusivamente contraída á defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, amenazadas, comprometidas diariamente de una manera lamentable por los salvajes en sus frecuentes invasiones.

Al presentarse así el Congreso cumple con su deber y dá una muestra más al Presidente de la República del interés con que mira sus aciertos, de los cuales dependen en gran parte la paz y la prosperidad del país.

Dios guarde á V. E.

NICASIO OROÑO.

---

DISCURSOS

SOBRE

**LA OCUPACION MILITAR**

Ó SEA

**LAS INTERVENCIONES CLANDESTINAS**





## PREFACIO

---

La conquista de las instituciones libres ha sido una empresa difícil en todas partes; no debe extrañarse que presente también dificultades en la República Argentina.

Una prueba de nuestro aserto, es el folleto que publicamos á continuación: es la recopilación de los discursos que fueron pronunciados en el Senado Nacional, con motivo de las intervenciones *clandestinas* que el Poder Ejecutivo iba practicando, poniendo milicias á disposición de los Gobiernos Provinciales, para influir en las elecciones locales.

Tal procedimiento importa una falsificación verdadera de la Constitución, cosa que debe sorprender por parte de un magistrado, que en sus escritos derramó tan buenas doctrinas sobre las instituciones federativas.

Antes de haber ido á Norte América, el señor Sarmiento, sea como comentador de la Constitución de Mayo, sea como miembro de la Convención reformadora de Santa Fé, sea como Gobernador de San Juan, había sostenido los buenos principios.

Fundados, sin duda, en esos antecedentes, los electores se habían fijado en su personalidad para elevarlo á la primera magistratura de la República; pero una dolorosa experiencia debía demostrarles muy pronto que habían padecido una equivocación completa.

El Gobierno del señor Sarmiento ha sido tan interventor como los que le habían precedido, con ménos dis-

culpa que ellos, porque tenía de más que ellos los experimentos adquiridos, las reformas consumadas, los progresos de la vida constitucional verificados.

Para el observador imparcial producirá el efecto de un verdadero fenómeno cotejar la conducta del Presidente Sarmiento con las opiniones del publicista.

Muchos habían creído que el profesor de ciencia política nos vendría de los Estados Unidos con una educación complementada, á aplicar entre nosotros los conocimientos adquiridos; pero desgraciadamente salió todo al revés.

¿A qué debe atribuirse semejante matamórfosis?

¿A caprichos individuales, á idiosincrasia de un personaje considerado generalmente como *excéntrico*, á la circunstancia de haber estado en Norte América en mal momento, cuando la terrible guerra de secesión amenazaba la existencia de la gran República, cuando las garantías políticas estaban suspendidas por la dolorosa necesidad de la dictadura.

El defecto prominente del señor Sarmiento es la imitación, prueba evidente de inferioridad intelectual.

Horacio se burlaba de la *tropa servil de los imitadores*, y lo hacía con muchísima razón.

La imitación ciega no indica criterio propio: uno se expone á cometer errores estupendos cuando pretende importar á un país nuevo los procedimientos políticos que podrían tener su razón de ser en una sociedad organizada de otra manera, con elementos completamente distintos.

Parecería que el señor Sarmiento se ha propuesto plagiar á Lincoln y á Grant: en su furor de imitación, cree encontrar circunstancias análogas á las que perturbaron tan profundamente la Unión; es decir, que inventa fantasmas iguales á las realidades que allí existían para tener el gusto de combatirlas.

Pero ¿dónde está el peligro de secesión?

Si alguna vez llegase á formalizarse, no sería debido á la acción de los pueblos; sería más bien seguramente á la influencia funesta de los *desmanes del Gobierno Cen-*

*tral*, como él mismo lo escribió en otras circunstancias, en que no estaba alucinado por la atmósfera embriagadora del poder.

Hay que decirlo todo: no es solo la imitación mal entendida, *servil*, de las prácticas excepcionales de los Estados Unidos, que constituye el móvil del señor Presidente. Es preciso hacer la parte de los intereses personales.

Está fuera de duda que, si la Constitución Argentina permitiera la reelección como la Norteamericana, tendríamos por perspectiva la continuación del señor Sarmiento en el sillón presidencial: el mismo ha tenido la ingenuidad de comunicarnos su opinión á este respecto.

No pudiendo, por causa de la prescripción terminante de aquella, proseguir en la aplicación de sus máximas gubernativas, ha buscado un sucesor de su agrado á quien pueda entregar gustoso la ejecución de su testamento político, y lo ha encontrado.

Desde entonces toda la tarea administrativa está subordinada á preparar el éxito de aquella candidatura privilegiada.

El excéntrico Presidente pronunció una palabra característica: «como el nido es el pájaro».

Sabemos, pues, que el nido no vale gran cosa, pero el señor Sarmiento se ha encargado de encontrar el pájaro que venga á ocuparlo; puede decirse que lo ha criado; que lo ha calentado debajo de sus paternas alas, y que le ha enseñado á extender las suyas en la atmósfera política.

Al magistrado que abrigue tales propósitos, no hay que hablarle de prescripciones constitucionales, de código fundamental, de garantías legales, de autonomías provinciales, etc., etc. Su gran cuestión es hacer salir airoso al candidato de los amores patrios.

El fin, dicen los jesuitas, justifica los medios.

La Constitución puede violarse de vez en cuando, ó al menos falsearse con tal que Avellaneda salga triunfante de la urna electoral.

Uno de los medios empleados para conseguir este



resultado, era la movilización de milicias en varias provincias, las de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

La Constitución es terminante á este respecto.

Según el artículo 67, inciso 24, al Congreso incumbe autorizar la reunión de milicias cuando lo exige la ejecución de las leyes de la Nación y es necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones.

Ninguno de esos hechos se había producido en las Provincias susodichas, y sin embargo, el Poder Ejecutivo, abusando de las autorizaciones concedidas, tenía milicias movilizadas en ellas.

¿Con qué objeto?

Para influir sobre la política local, y particularmente sobre las elecciones.

Esta disposición inconstitucional constituía lo que el señor Torrent llamó una intervención *clandestina*.

Unos individuos del Senado propusieron poner coto á esa violación manifiesta.

Este fué el objeto del proyecto de ley cuya discusión motivó los discursos que publicamos á continuación, porque nos han parecido dignos de una publicación especial.

Son lecciones para el pueblo, son datos elocuentes á la vez que instructivos para la generación que se levanta, y que, más feliz que nosotros, gozará sin duda en fin de la aplicación de las instituciones republicanas que desde tanto tiempo venimos buscando, y no encontramos más que amargas desilusiones.

El luminoso informe del miembro informante, señor Aráoz, tan moderado como enérgico, manifiesta claramente que el Poder Ejecutivo consideraba al Congreso como un *autómata*, una máquina de votar milicias, que se portaba como si fuera el único árbitro de las necesidades de la Nación, y que trataba de convertirse en verdadero *autócrata* de la República Argentina, sobre el mismo Congreso.

Vienen después los elocuentes discursos de los señores Torrent, Oroño y Quintana.

Sería un pleonasmo repetir que las palabras del último se recomiendan particularmente á la atención del lector. El doctor Quintana tiene el genio de la elocuencia; su dialéctica irresistible ilumina su inteligencia, sus acentos patéticos arrastran los corazones. El, con potente mano, pulveriza los sofismas y hace rodar en el suelo las orgullosas pretensiones de esos atrevidos conculcadores de la Constitución y de las leyes. No se puede detener un sentimiento de admiración conmovida cuando se le oye protestar contra la inconstitucionalidad de las doctrinas del Poder Ejecutivo, y se aplaude con entusiasmo cuando se le vé arrojar la flecha que va á herir en medio del pecho á los apóstatas que renegaron de sus doctrinas y escupieron sobre sus principios, presentando á los pueblos el espectáculo más repugnante, más desmoralizador que pueda presenciarse.

El señor Torrent tiene rasgos de ironía soberana contra ese Gobierno *elector*, confesado de haber violado abiertamente la Constitución.

El señor Oroño es como siempre, intrépido en la brecha, defensor constante y ardiente de la ley conculcada; él manifiesta como en todas las discusiones, conocimientos que sorprenden en un hombre que lo debe todo á sí mismo, y á quien sus enemigos políticos han pretendido ridiculizar, porque no había arrastrado su cuerpo en los bancos universitarios; él es indudablemente uno de los que mejor comprenden la esencia de las instituciones libres, y sabe exponer sus pensamientos profundos con verdadera elocuencia.

Quisiéramos hacer citas, en prueba de lo que afirmamos, pero allí van los discursos aunque no tengan el calor y la vida que les presta la elocuencia, estamos ciertos de que cualquier amigo de la libertad y de la patria no podría leerlos sin estremecimiento, y sin lamentar como nosotros que el Senado no haya votado el proyecto de ley que habían defendido.

Pero, como lo observó muy bien el señor Araoz, « la mayoría de los Congresos no siempre tiene razón. »

Nosotros agregaremos: *muy á menudo*, el triunfo del número no es más que una transformación de la fuerza, en vez de ser la expresión de la justicia.

Esta triste verdad quedó confirmada una vez más cuando el señor Oroño combatió inútilmente el mensaje por el cual el Poder Ejecutivo pedía el estado de sitio para la Provincia de Mendoza.

¡Qué singular República en que el estado de sitio se vuelve crónico, endémico!

Pero así mismo, eso no satisface al señor Sarmiento.

Sus tendencias lo llevan siempre adelante en la pendiente resbalosa del despotismo.

Quiso vengarse del Senado, y pensó encontrar su víctima en el señor Oroño.

El lector conoce esa ridícula historia, en la cual el señor Presidente, después de haber rebajado considerablemente su dignidad, encontró el medio de comprometer tristemente hasta al Poder Judicial, y después se puso á escribir manifiestos, como si con eso remediará el paso desacertado que diera.

*Littera manet.* En primer lugar, no es necesario que un Presidente venga á hablarnos en latín, en un idioma muerto; debe expresarse en el lenguaje vulgar, si quiere ser entendido.

En segundo lugar, no es justo que el Presidente emplee los dineros del Estado en costear folletos contra sus adversarios políticos. Eso es también una violación de la Constitución, pero son tantas que ya no las contamos.

En tercer lugar, es altamente indecoroso que un Presidente de República se ponga á escribir folletos contra los oradores del Senado porque no quisieron entregarle la víctima que pedía para la satisfacción de sus venganzas. Con eso, el irritado escritor no hace más que manifestar que, si tiene talento literario, carece completamente de las cualidades que constituyen el hombre de Estado. Mejor hubiera valido para la República que el Presidente no supiese escribir: no tendríamos el suplicio de ver al primer magistrado de la Nación convertido en

periodista vulgar, arrojando el insulto á manos llenas á los miembros más distinguidos de esa honorable corporación, cosa que sería sorprendente, si algo pudiera sorprender por parte del señor Sarmiento, si todos no supiéramos que ese distinguido personaje parece no haber recibido una educación muy distinguida.

Talleyrand decía, hablando de Napoleón:—« ¡qué lástima que tan grande hombre sea tan mal criado! » Recordamos el dicho de Talleyrand toda vez que leemos algo del señor Sarmiento, si hay alguna comparación posible entre esos dos seres.

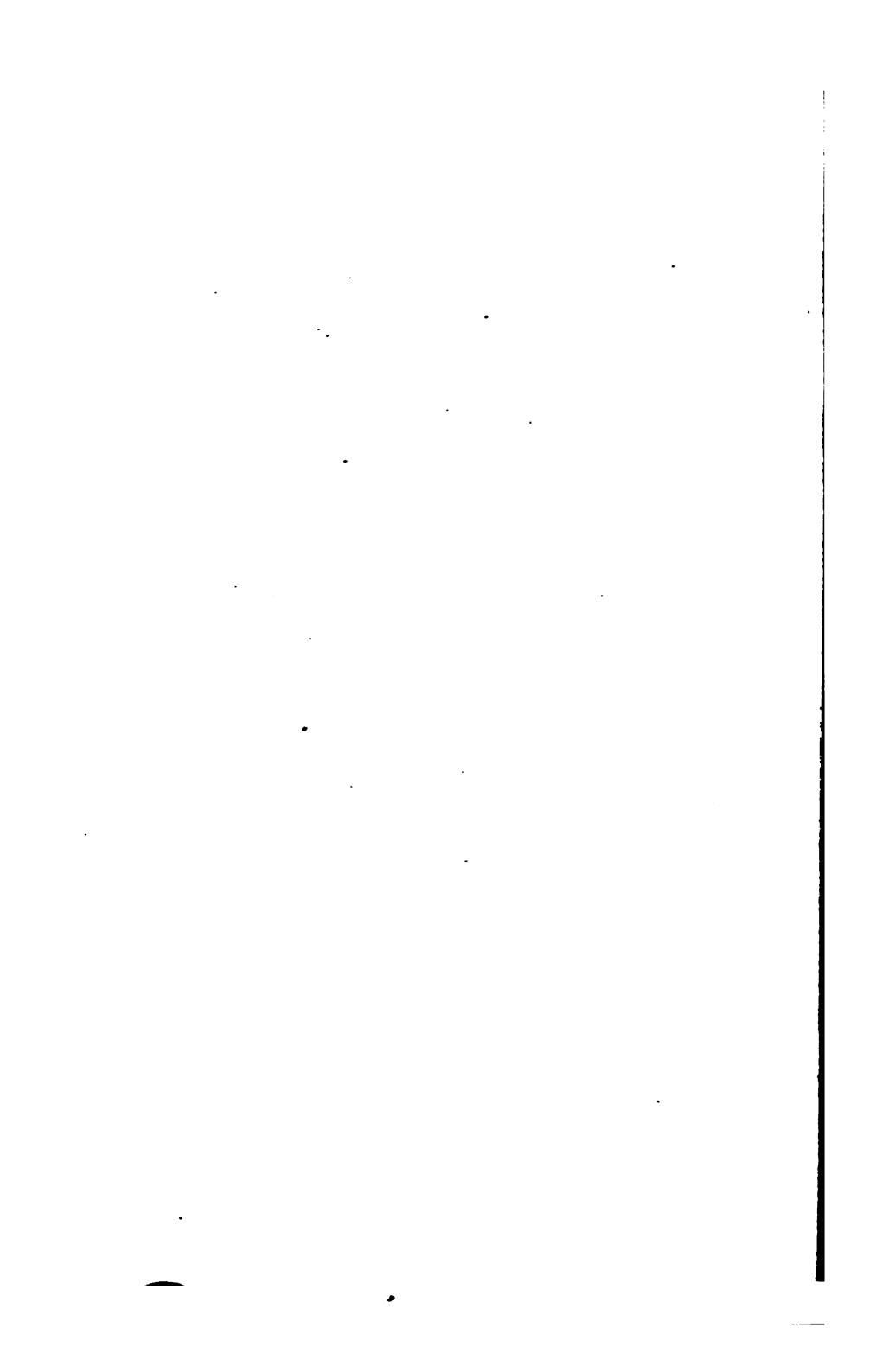
*Littera manet!* Sí, la letra queda para decir á los coetáneos y repetir á los venideros que el Gobierno presidido por el señor Sarmiento acumuló las arbitrariedades, las violaciones de la ley, los desatinos hasta rayar en la insensatez, y que lo odioso hubiera llegado á su colmo si lo ridículo no hubiese sido todavía mayor. Pero todo se sufre, y desde que el señor Sarmiento sabe el latín, concluiremos con el verso tantas veces repetido:

Quid quid devant reges, plectuntur Achivi (1).

*Alejos Peyré*

---

(1) Traducción para los que no son licenciados: Por más locuras que hagan los reyes, (Presidentes Jefes de Estado, etc.), los griegos (los pueblos) lo aguantan todo.





## SENADO NACIONAL

---

Honorable señor:

La Comisión de Negocios Constitucionales y de Guerra y Marina, han examinado detenidamente el proyecto presentado por los señores Senadores Torrent, Oroño y Quintana; y os proponen en sustitución el adjunto proyecto de ley.

Dios guarde á V. H.

*D. Ardos—Manuel J. Navarro*

*—M. Darat—Juan Llerena.*

En disidencia—*T. García.*

*El Senado y Cámara, etc.*

Artículo 1º La Guardia Nacional movilizada por las leyes vigentes que no se encuentre empleada en el servicio de las fronteras de la República ó en los ejércitos destinados á sofocar la rebelión en la provincia de Entre Ríos, será inmediatamente licenciada.

Art. 2º Comuníquese, etc.

*Daniel Ardos—Juan Llerena—*

*M. J. Navarro—M. Darac—*

*Joaquín Granel.*

En disidencia—*T. García.*

PROYECTO DE LEY

---

Artículo 1º El Poder Ejecutivo mandará licenciar en la fecha de esta ley toda la Guardia Nacional movilizada en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, que no esté en servicio de las fronteras de la República ó en los ejércitos destinados á sofocar la rebelión en Entre Ríos.

Art. 2º Comuníquese, etc.

*Torrent—N. Oroño—Quintana.*

---

Buenos Aires, Agosto 28 de 1873.

A las Comisiones de Guerra y de Negocios Constitucionales.

*Señor Araoz*—Pido la palabra. Encargado por las comisiones de Guerra y Marina y Negocios Constitucionales de informar sobre el fundamento de este proyecto, lo haré con la concisión que me sea posible.

Por el artículo 67 de la Constitución, atribución 24 del Congreso, es facultad de éste autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias ó parte de ellas, cuando lo exige así la ejecución de las leyes de la Nación, sea necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones, disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Nación, etc. «Es en virtud de este artículo, señor Presidente, de esta facultad primordial é importantísima del Congreso, que él autoriza la movilización de varias milicias en la República. Existen dos leyes con relación á esto, á más de la ley general de enrolamiento, para

formar el ejército de línea por la cual deben también movilizarse milicias por el Poder Ejecutivo en el caso de que sean indispensables al solo objeto de completar el ejército de línea hasta la fuerza de 10 mil hombres que fija el presupuesto.

Unas y otras, todas de autorización actual vigente al Ejecutivo, entrañan la condición fortuita, indeclinable, de que esas milicias no serán empleadas sinó en el servicio de las fronteras de la República para guardarlas ó en la sofocación de la rebelión de Entre Ríos. Así es que toda milicia que no se halle movilizada con este objeto, ó cualquiera de esas leyes que se haya cumplido en sentido diverso, y á las cuales se haya dado una interpretación distinta, en cuanto á esa movilización y en cuanto al objeto de ellas y á la colocación de esas milicias, tienen que adolecer de los defectos de no estar comprendidas en el espíritu y en las disposiciones terminantes y claras de esta ley.

Es esto, precisamente, lo que importa el proyecto de ley que se discute á mérito de hechos repetidos y reclamados surgidos ya sobre aquellos hechos: el Congreso sabe que existen milicias, en puntos que no son fronteras que guardar, ni la parte del territorio ocupada por la rebelión de Entre Ríos; se ha denunciado ya, por una solicitud que vino al Congreso dirigida por una comisión de vecinos de Mendoza y por diversos órganos de la opinión pública, la existencia de milicias movilizadas por el Poder Ejecutivo y colocadas en varias capitales de provincia, en número considerable y donde no hay rebelión; es esto á lo que responde genéricamente el proyecto de ley. Es evidente el hecho de que existen milicias movilizadas en varias provincias, especialmente en las de San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja.

A más de las respuestas dadas por el Ministro del Interior y de Guerra, como contestación á las interpelaciones dirigidas por varios miembros del Senado, en la sesión en que tuvo efecto esa interpelación, la comisión lo ha llamado dos veces á su señó, señor Presidente, para investigar nuevamente los hechos relativos á este



punto importante de la movilización de milicias, y cerciorarse de un modo evidente. El señor Ministro en esas dos conferencias, ha ratificado las declaraciones que hizo anteriormente en el seno de la Cámara, dando algunas explicaciones más, sobre los motivos de esa movilización y la situación de esas fuerzas; pero de todo eso, resulta evidente, declarado oficialmente por el señor Ministro delante de todos los miembros de ambas comisiones reunidas, que existen en la ciudad de Mendoza fuerzas de línea tomadas del ejército de las fronteras y guardias nacionales movilizados, una cantidad de servidores que no baja de 300 hombres situados casi todos ellos principalmente en la misma capital de Mendoza.

En la capital de San Luis, por declaración del señor Ministro, existe movilizado un batallón de guardias nacionales, para atender, según él decía, al servicio de los diversos departamentos de la provincia de San Luis, lo mismo que insinuaba tener el mismo objeto, la fuerza movilizada en Mendoza; sin embargo de que ella estaba en la misma ciudad y no en los departamentos siquiera; no digo en la parte de fronteras desguarnecidas, más abiertas á los ataques exteriores é interiores de los salvajes y de alguna parte de montonera que hubiere quedado, de uno que otro bandido como Guayama.

En la ciudad de San Luis no había ningún interés legítimo que atender, ningún amago que prevenir, ninguna situación anormal, que indujera á creer que esa movilización era necesaria en la ciudad donde está ese batallón, y mucho menos, desde que se sabe también la naturaleza de esa movilización, que en gran parte es compuesta, según informes fidedignos que tiene la comisión, de uno de sus miembros, el señor Senador por San Luis; se compone el batallón movilizado de casi todos los comerciantes y jóvenes de San Luis, incluso algunos industriales; parte de él está destinado á cabezas de departamento, el resto en la misma ciudad de San Luis.

Con esta circunstancia especial, que ha llamado mucho la atención de las dos comisiones, y que debe llamar la de la Cámara al encontrarse esa movilización de

fuerzas sin una razón explicativa; porque las razones que ha dado el señor Ministro no bastan, no son causales suficientes; porque no las ha presentado á juicio de la comisión. Existen á las órdenes, respito, del gobernador de Mendoza, pues es él quien dispone de ese cuerpo. Hecho inusitado, por lo menos durante un período largo de la administración anterior del general Mitre, jamás se había llegado hasta ese punto, hasta el extremo de autorizarse por el Poder Ejecutivo á un gobernador de provincia, la permisión de movilizar y colocar fuerzas.

Esto, pues, viene á reagrar más la condición de esa movilización y la inexplicabilidad de su necesidad á toda luz, y por consiguiente, la importancia y hasta la gravedad del hecho. No estando demostrado, como no lo está á juicio de la comisión, la necesidad de esas fuerzas en San Luis, es claro que entonces no se puede explicar que continúe la movilización allí en cualquier servicio que sea.

Por lo que hace á San Juan y á La Rioja, los informes fidedignos, especialmente del Ministro y algunos miembros de la Cámara de Representantes, son que en realidad existen allí 80 hombres más ó menos, que han pertenecido al ejército de fronteras unos, y otros que son guardias nacionales movilizados con el objeto de atender á la seguridad de la parte más desguarnecida de la provincia, y evitar los ataques de alguno que otro montonero que suele surgir y que amenaza las vidas y las propiedades de los vecinos, es con ese objeto que ha expuesto el señor Ministro que tiene esas fuerzas.

Respecto de estas dos provincias, la comisión ha encontrado que no es tan grave el hecho, porque se trata solo de evitar las montoneras que asaltan á los propietarios y aún atacan sus vidas; no contando con fuerzas propias, ni recursos bastantes para mantener 100 hombres de línea ó de guardias nacionales movilizados, para un asunto tan importante, hasta cierto punto encuentra justificada la colocación de esa fuerza en esos puntos, con ese solo y exclusivo objeto; pero las comisiones creen que sería mucho más aceptable que esas fuerzas

fuesen de línea no de guardia nacional, porque el ejército está destinado á guardar fronteras ó á sofocar rebeliones y sería más propio que ese fuera el destino que se les diera; sin embargo, si el Ministro, como expongo, se encuentra en la dificultad de poder mandar fuerzas de línea del ejército que están casi todas ocupadas en destruir la rebelión de Entre Ríos, en su mayor parte, y otra porción en la frontera en su parte más vulnerable, pudo haberse hecho esa movilización en virtud de algunas leyes, en esa cantidad reducida para atender á esos fines. Sobre esto no habría gran cargo que hacer; pero sobre los otros puntos en los que la comisión no ha podido ser satisfecha de lleno, encuentra realmente inusitados esos hechos: no puede darse explicación exacta, no puede creer que existan verdaderas necesidades para mantener fuerzas en las capitales de Mendoza y San Luis; mucho menos, señor Presidente, en circunstancias en que diversos órganos de la opinión pública y aún vecinos reclaman de la colocación de esas fuerzas en momentos de elecciones en esa provincia con motivo de que ellas pueden tener más afinidad por uno que otro partido, y aunque no sirvan á ese objeto directamente, fuerzas en esas condiciones, tienen que ejercer presión y coacción sobre la población, desde que representan un elemento separado como se sabe y hace presumir, que todos sientan esa influencia que se ejerce en un sentido favorable á uno ú otro partido.

Precisamente para alejar esa influencia ilegítima, y colocar más altamente la situación del Gobierno Nacional y hacer que su posición sea más independiente y más imparcial y que no resulte comprometido en esta cuestión, ha aconsejado que toda movilización que no tenga esos fines exclusivos de la ley, no sea autorizada y que si se ha entendido por parte del Poder Ejecutivo que está autorizado á movilizar en virtud de leyes vigentes, por una interpretación equivocada ó por un error, con sana intención y con propósito laudable, que sea revocado ese error, para evitar que la fuerza ó elementos de ella que coloque en los diversos puntos de la

República, sirvan á fines que no sean perfectamente legítimos.

Es por eso, señor Presidente, que las comisiones han dado esa forma genérica, que tiene el proyecto de ley, para no comprender de un modo directo un hecho aislado y para no hacer pesar como un cargo, como un proceso, como una recriminación, como un ataque al Poder Ejecutivo, y que se vea por parte de él, que el Senado, con altura, con gran elevación de miras, toma la cuestión en un sentido genérico para que las leyes de la Nación sean bien aplicadas. No tiene, pues, un alcance de circunstancia que pudiera mirarse mal este proyecto y mucho menos, señor Presidente, un alcance retrospectivo sobre hechos anteriores, porque, si esas fuerzas han sido colocadas de tal ó cual manera por el Poder Ejecutivo, el Senado no entra á hacer cuestión sobre ellos, ni forma mal juicio, ni mucho menos hace procesos sobre los hechos anteriores al presente, sinó que dada la situación tal cual la encuentra, dice: toda fuerza nacional de milicia que se encuentra fuera de la frontera ó que sirva directamente para sofocar la rebelión, no debe continuar movilizada en términos inconstitucionales.

Esto es lo que importan, señor Presidente, todas las leyes vigentes, es decir, las dos anteriores: la de Octubre del año pasado relativa al enrolamiento, y á la última de este año sobre la movilización de los guardias nacionales para sofocar la rebelión de Entre Ríos,

Esta ley, pues, no viene á ser sinó una interpretación limitada de las anteriores, esplicando su sentido propio, su objeto y su alcance preciso para que no pueda prestarse á interpretaciones diversas. Esto es lo que importa exclusivamente el proyecto de ley de la comisión, y creo que merecerá el honor de ser aceptado por la Cámara, desde que es aconsejado por estos motivos poderosos y por estar fundado en las atribuciones legítimas del Congreso respecto á la movilización de guardias nacionales, para garantizar á los ciudadanos que no se empleen sinó cuando sean necesarios, á juicio del Congreso, que es el que autoriza esta movilización y el que

aprecia las causas que la motivan; al Poder Ejecutivo toca la parte de ejecución y administración de la ley y de los grandes móviles que han guiado al Congreso al dictarla.

Es por eso que, reduciendo á estos fundamentos que ambas comisiones han tenido para aconsejar ese dictamen, me limito á lo expuesto, y creo que es bastante para aceptar el proyecto.

---

*Señor Araoz*—Es sensible que el señor Senador se haya extraviado en esta discusión en la interpretación de las facultades de cada poder, y mucho más todavía en la aplicación de esas facultades.

El señor Senador empezó por decir, que como este proyecto respondía solamente á mandar retirar las fuerzas que el Gobierno Nacional tenía colocadas en Mendoza, él era innecesario porque había pasado la elección y que por consiguiente, todo había concluído.

Debo empezar por decir al señor Senador, que está equivocado en la interpretación de los conceptos que contiene el proyecto.

Este proyecto, señor Presidente, no responde solamente á Mendoza. No dice una palabra de Mendoza, ni se refiere á las fuerzas que estaban colocadas allí durante la elección que tuvo lugar el Domingo 7 de este mes.

Este proyecto no tiene el limitadísimo alcance, la acción parcial que le atribuye el señor Senador por Entre Ríos. Tiene una aplicación comprensiva y genérica; pero tampoco vá, como dice el señor Senador, á atar las dos manos al Poder Ejecutivo, é impedirle que coloque las fuerzas nacionales que tiene el derecho de colocar, es decir, el ejército de línea, en los puntos que crea conveniente.

No, señor; el proyecto no dice tal cosa; lo que queremos es que no haga con las milicias lo que únicamente tiene derecho de hacer con el ejército de línea.

Se trata, pues, de impedir diversos hechos, ó mejor dicho, de ponerles límite, para que la continuación de ellos no sea la violación de las leyes actuales, el abuso del ejercicio de las autorizaciones que el Congreso ha dado, que él solo puede dar y que es el único que puede también retirarlas.

Entonces, este proyecto se refiere, no solamente á Mendoza relativamente á las milicias que están colocadas en la ciudad capital, donde no tiene objeto esta colocación de milicias, puesto que no están allí para mantener la paz y la organización, sinó que se refiere á todos los puntos que podría comprender esa movilización indebida; es decir, cuando fuera más allá de las tres leyes vigentes á que se ha referido el señor Senador en disidencia, y á que me había referido antes también.

Todo lo que estralimite el espíritu de esas leyes es indebido, inconveniente, no responde á un interés legítimo, y son hechos que no pueden aprobarse ni ratificarse.

Así es que la movilización de Mendoza es indebida; porque, como he dicho ya, no responde á ningún fin legítimo, á ningún propósito autorizado por la ley.

Lo mismo sucede con la movilización de San Luis en la ciudad capital. La ciudad de San Luis ni ninguna parte de las provincias está amagada ni por indios, ni por montoneras. Así es que no solamente en la ciudad capital, pero tampoco en los pueblos cabezas de departamento tiene objeto conveniente tal movilización.

¿Se puede sensatamente defender semejante colocación de milicias? ¿Responde á qué fin?—A ninguno,—y la Cámara de Senadores no puede aprobar semejante movilización, á estar al espíritu de la disposición constitucional que invoca el señor Senador.

Esa disposición á que se refiere el señor Senador, se refiere solamente al ejército de línea, no á las milicias cuya movilización autoriza parcial ó totalmente el Congreso en virtud de casos especiales, como diré después.

No responde, pues, esa movilización á un objeto legítimo; y entonces, ¿con qué fin se mantiene? ¿Es justo que siga adelante? ¿Ha sido hecha en virtud de leyes actuales? Estoy seguro que nadie se atreverá á sostener que ha sido hecha en virtud de leyes actuales.

Ahora, he dicho bien claramente que si hay algunas milicias entre los ochenta ó cien hombres que existen en La Rioja y en San Juan, es que son necesarias para atender á las montoneras que existen allí, y para cuidar de la vida de los habitantes. Reconoce, pues, la comisión, que si el Gobierno se ha servido de algunas milicias en esas provincias, han sido bien empleadas.

Vea, pues, el señor Senador cómo es muy diferente lo que la comisión sostiene de lo que él asevera.

Ahora, la movilización que se ha hecho en Santa Fé, que dice el señor Senador que también es comprendida en el proyecto, no lo es, porque es como la que se ha hecho en Corrientes, para dominar la rebelión, y está movilizada bien.

Era preciso preservar las fronteras de Entre Ríos de las montoneras que allí ejercen sus desmanes; y es por lo que el Congreso ha autorizado esa movilización, tanto en Santa Fé como en Corrientes. De modo que no puede tener semejante alcance, ni dársele tal extensión que pueda comprenderse que deberá cesar la movilización de Santa Fé.

No se le ha ocurrido á la comisión semejante cosa, ni puede decirlo el proyecto. El proyecto, clara y precisamente se limita á decir que, toda movilización de milicias en virtud de leyes vigentes, debe servir á completar el ejército en el servicio de fronteras y á atender á la rebelión de Entre Ríos y sofocarla.

Y yo pregunto: ¿La capital de San Luis, la capital de Mendoza, son fronteras ó forman parte de la rebelión de Entre Ríos?

¿Quién tiene la insensatez de responder afirmativamente á esas preguntas?

Luego, el proyecto no dice lo que le hace decir el señor Senador en disidencia.

Nadie niega, señor Presidente, (y he tenido el honor de reconocerlo más de una vez) que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de situar las fuerzas de línea de la Nación donde él lo crea más conveniente para atender á las necesidades de la República, es decir, á mantener el orden y la paz.

Pero, si la Constitución le acuerda esa facultad, también hace pesar sobre él la responsabilidad consiguiente, el deber de emplearlas bien.

No se trata de esas fuerzas ó de su buena ó mala colocación. Se trata de la movilización indebida de guardias nacionales; y eso es muy diverso.

El mismo artículo que me he permitido leer, y que es el fundamental y la base principal que ha tenido en vista la comisión para aconsejar este proyecto, dice textualmente: (repitió la lectura hecha antes).

Este artículo, señor Presidente, comprende, la facultad clara y terminante del Congreso, de abrir juicios sobre las causas y motivos poderosos que induzcan á autorizar esta movilización; tiene en cuenta los hechos, los examina, los pesa; y después de un maduro juicio, juzga la situación política de la República y de cada uno de sus Estados ó provincias; y entonces dice: autorizo ó no autorizo; debe movilizarse ó nó;—teniendo siempre la facultad de limitar las autorizaciones que ha dado ó extenderlas, dándole al Poder Ejecutivo bastante amplitud y suficiente poder para que cumpla el mandato del Congreso, que es superior en esa parte al Poder Ejecutivo, puesto que el Poder Ejecutivo no es más que el administrador de la cosa pública bajo el punto de vista político y militar.

*Señor Torrent*—Perfectamente.

*Señor Araoz*—El Congreso no es un autómatas, una máquina de votar milicias, como lo pretende el señor Senador en disidencia.

*Señor García*—No pretendo tal cosa.

*Señor Araoz*—Eso importa la facultad que pretende el señor Senador, de ser el Poder Ejecutivo el único árbitro, el único que pueda entender cómo se deben



comprender las necesidades políticas de la Nación, el único que es juez de esas necesidades, en fin.

No, señor Presidente, el Congreso es el que delibera, es el que pesa la situación del país, el que niega ó dá la facultad al Poder Ejecutivo.....

*Señor Torrent*—O la revoca.

*Señor Araoz*—Precisamente, iba á decir eso.

Cuando el Congreso ve que esa autorización puede prestarse ó se presta á abusos, extralimitando esa autorización, dice: retiro, revoco la autorización que he dado —hasta el punto que crea conveniente.

Así es que todo lo que pueda prestarse á mal uso, debe limitarse, para que no tenga más alcance que el que debe tener.

Eso importa el proyecto de la mayoría de la Comisión; puesto que ordena que todas las milicias que no sean necesarias para sofocar la rebelión ó para guarnecer las fronteras, sean licenciadas.

Esto importa, señor Presidente; y esto es lo que comprenden las leyes vigentes, y no otra cosa.

Si el Poder Ejecutivo cree que no son suficientes los medios que se le acuerdan, ocurrirá al Congreso y pedirá lo que crea necesitar, y entonces el Congreso se lo acordará ó no se lo acordará.

Porque el Poder Ejecutivo no es Juez único de las necesidades del país, como lo pretende el señor Senador en disidencia, con doctrinas hasta cierto punto abusivas, por no decir subversivas.

Mientras el Congreso llene su misión, no puede obrar de otro modo. Si no obrara así, no llenaría la misión que la Constitución, que el pueblo, soberano único, le ha dado; vendría á ser un autómeta.

Se dice que el Congreso no puede conocer las necesidades del país como las puede conocer el Poder Ejecutivo; que no puede saber cuál es la situación verdadera de cada provincia. Yo digo que puede conocer esas necesidades, que puede conocer la situación de cada provincia mucho mejor que el Poder Ejecutivo, que está situado á grande distancia de ellas y que tiene agentes

que pueden no ser los más fieles en la trasmisión de la verdad de los hechos; sin embargo, cada representante ve por sí mismo las necesidades y la situación de la provincia porque atraviesa; y así es muy buen juez y es una opinión autorizada para decir cuál es la verdad de los hechos y hasta dónde debe ir el Poder Ejecutivo con las autorizaciones que le acuerda el Congreso.

No es el Poder Ejecutivo el único árbitro, como se ha pretendido sostener, de las necesidades de la Nación. El Congreso es quien juzga de esas necesidades, y con la verdad por delante, dice al Poder Ejecutivo: *puede ir más allá*; si fuese necesario.

Esta doctrina que envuelve el proyecto, es la que sostiene la comisión muy sensatamente.

Y debo observar al señor Senador, para que tenga presente al contestar la doctrina que envuelve este proyecto, la altura en que se ha colocado y la elevación de las miras á que responde. La misma acepción genérica que tiene, disipa la duda de que pueda causar daño; atacar ó limitar en lo más mínimo al Poder Ejecutivo; responde solamente á precaver los hechos que pudieran resultar del mal cumplimiento de las leyes, y no atenderlos por leyes especiales, como pretenden algunos que deben atenderse. Este sentido genérico envuelve una idea muy recomendable, entraña un sentimiento muy alto que abona en honor de ambas comisiones y del Senado mismo, y es que la acepción genérica en que está concebido el proyecto no viene á hacer una improbación de los actos del Poder Ejecutivo: como he dicho antes, no los ataca para nada, no los llama á juicio, no los examina, no los reprocha. Dice: en lo sucesivo no se abuse, límitese á lo que quiere la ley que se limite, no se vaya más allá. ¿Para qué? Para salvar y garantizar precisamente al mismo Ejecutivo, sin dejar de darle por eso todo el poder y todos los medios necesarios para proveer con la mejor amplitud y eficacia al gobierno del país. El proyecto, pues, responde á eso, y á hacer inútil é innecesario al camino peligroso á que nos quiere llevar el señor Senador, que no halla otro remedio

para el caso de una extralimitación de la ley, que la acusación y la destitución. Para evitar eso, sensatamente, y con gran cultura, el Senado dice: no voy, no quiero ir allí, porque no es necesario ir, porque se puede encontrar el mismo resultado que se trata de buscar, con un remedio suave y sencillo que es la simple determinación del alcance de la ley, para salvar al Poder Ejecutivo de la responsabilidad con una simple revocatoria.

Pero suponiendo que fuéramos hasta allí—hasta revocar una ley que hubiera dado el Congreso para limitar las facultades del Ejecutivo,—sería bien dada la revocación, porque evitaría las acusaciones del Poder Ejecutivo. — Pero á lo que tiende el proyecto es á salvarlo de ella, limitando el alcance de la ley y por consiguiente, limitando los hechos que de ella pudieran resultar, para que no pudieran presentarse viciosos.

Vease, pues, cuán sabio es el proyecto actual, y cuán peligroso es el camino á que nos quiere llevar el señor Senador; mientras tanto la mayoría de la comisión con una simple interpretación de la ley en los términos que envuelve el proyecto, dice: hasta aquí voy, esto significan las leyes dictadas, este es el alcance que les doy yo, el Congreso, y no se vaya más allá.

Así se evita, con un remedio tan sencillo, que se produzcan esas fatales consecuencias que debemos tratar de evitar, y no recurrir á remedios heroicos á que debe solo apelarse en los casos extremos.

Por estas razones, la comisión sostiene este proyecto.

---

*Señor Araoz*—Dos respuestas á los dos únicos puntos puntos que ha tocado el señor Senador.

Pretender, como lo hace, que solo el Ejecutivo, señor Presidente, es el único llamado por la Constitución á conocer las verdaderas necesidades políticas y administrativas de la República. . . .

*Señor García*—Ya lo he dicho que no pretendo eso, señor Senador.

*Señor Araoz*—Es, á más de hacer decir á la Contitución lo que ella no dice, lo que no ha supuesto siquiera, convertir al Poder Ejecutivo en verdadero autócrata de la República Argentina sobre el mismo Congreso.

Esto, por lo que hace á la interpretación que dá el señor Senador.

Por lo que hace al otro punto relativo á la colocación de las milicias, el señor Senador está inculcando y extraviándose en la discusión y haciendo una confusión de ideas respecto de lo que comprende el proyecto, el alcance que él tiene, haciéndoles decir lo que no han pensado decir ninguna de las dos comisiones, ni dice el sentido, espíritu, ni la letra del proyecto.

¿De dónde deduce el señor Senador lo que dice, de que el proyecto manda retirar las milicias y que él cree que van á retirarse? De ninguna parte del proyecto, lo único que el proyecto dice bien, y muy bien es: «donde no haya fronteras que guardar, donde no haya rebelión que combatir, no haya milicia movilizada», ni se saque al ciudadano de su hogar. En otros términos; ratifica el sentido y alcance de los términos precisos de las tres leyes que he citado y que el señor Senador ha invocado, todas tendentes á autorizar exclusiva y únicamente al Poder Ejecutivo para dominar la rebelión en Entre Ríos y para atender al servicio de las fronteras; entonces todas las milicias que no tienen ese objeto—sacaras de su fin principal y lo que es más, invertirlas y aplicarlas para otros fines colocándolas donde no responden á esos objetos, claro es que con esto se extralimita la ley, va más allá de su objeto, se hace decir á la ley lo que ella no dice, se la interpreta dándole un alcance y extensión de facultades que no tiene. Entonces el Congreso dice por este proyecto: entiendan clara y terminantemente que la interpretación que doy á las tres leyes vigentes, es que solo pueden servir las milicias para atender las fronteras y sofocar las rebeliones. Esto dice, y yo pregunto: ¿el Congreso tiene facultad y derecho para decir eso? Creo que no lo negará el se-

ñor Senador, lo tiene para dar el alcance é interpretación á sus leyes y para darles la limitación que él cree que deben tener. Y es comprendiendo que á los hechos producidos ó que se pueden producir, se les puede dar interpretaciones diversas, que el Congreso, anticipándose, dice el sentido y alcance que las leyes deben tener. Esto es lo que importa.

Ahora, por lo que hace á las milicias, ¿quién es el que tiene la facultad de autorizar la movilización ó de removerlas si ellas están colocadas en provincias pacíficas y tranquilas donde no hay amagos de insurrección, donde no hay malos elementos que combatir, ni ningún fin constitucional ni siquiera legal, que atender, como sucede en las provincias de San Luis, Mendoza y La Rioja?

Entonces, dice el Congreso, están mal empleadas las milicias en esos puntos, y yo que soy juez de esto, puesto que autorizo la reunión de las milicias cuando los casos, motivos y fines me demuestran claramente, como los hechos que se están produciendo, las reclamaciones que se hacen ocasionadas por gran parte de los vecinos, que dicen que esas milicias no atienden en esas capitales ningún interés legítimo, que no tiene ninguna explicación conocida; entonces digo no conviene que estén allí. Es á eso á lo que responde el proyecto: á decir que esa colocación es indebida, porque no responde á ningún fin conveniente. Deberá decirse que se va á sofocar allí una rebelión ó preveer las invasiones; luego, si no se puede decir eso, no están bien situadas esas fuerzas. A eso es á lo que responde el proyecto de un modo claro y terminante. Con esto me parece que he contestado á lo que dice el señor Senador, y por mi parte he concluido.

*Señor Oroño*—Pido la palabra, no para continuar la discusión, sinó para hacer moción, por la hora avanzada, para que se termine la sesión, porque teniendo que tomar parte en esta cuestión, me parece que no habría tiempo material para hacerlo ahora. (Apoyado).

---

## Discurso del Senador Torrent

*Señor Torrent* — Señor Presidente: en virtud de las explicaciones que el señor Ministro del Interior á la Cámara sobre las preguntas referentes á la situación política de la provincia de Mendoza, varios señores Senadores presentamos los proyectos que la Cámara conoce.

Las comisiones de Negocios Constitucionales y de Guerra, unidas, han refundido esos dos proyectos en uno.

Como la Cámara recordará, uno de estos proyectos se limitaba á prescribir el licenciamiento de la Guardia Nacional de varias provincias de la República y el otro disponía la cesación inmediata de la intervención que indebidamente está ejerciendo el Gobierno Nacional en la provincia de Mendoza.

En mi carácter de firmante de esos proyectos, estuve presente en las discusiones de ambas comisiones, y me presté á que ambos proyectos quedasen refundidos en el que está en discusión, porque el pensamiento de los autores del proyecto originario quedaba enteramente salvado. Por consiguiente, señor presidente, presto mi apoyo, y daré mi voto y al proyecto en discusión.

Las comisiones de Negocios Constitucionales y de Guerra reunidas, aconsejan el licenciamiento de la Guardia Nacional, y aún cuando es extensiva esta disposición á todos los guardias nacionales movilizados en la República que no se encuentren en servicio de fronteras ó en el ejército destinado á combatir la rebelión de Entre Ríos, muy lejos de hacer la menor restricción al pensamiento originario, como la Cámara lo comprende, lo amplía y extiende, sirviendo, á mi juicio, á conveniencias positivas del país.

Además, como la intervención clandestina, como ocasión de calificarla, que el Gobierno Nacional está ejerciendo en la provincia de Mendoza, consiste principalmente en haber movilizado la Guardia Nacional y

puéstola á disposición del gobierno local y en haber llevado parte de la tropa de línea que guarnece la frontera, con el mismo fin; según él, para sostener al gobierno de la provincia, que se hallaba amenazado por una rebelión inminente; mandando licenciar la Guardia Nacional, cesaba de hecho la intervención que se estaba ejerciendo, salvándose al mismo tiempo las prerogativas del Congreso invadidas por el Poder Ejecutivo.

Por estas razones, señor Presidente, yo creo que debo prestar mi apoyo y votar el proyecto que está en discusión.

Entrando en el fondo del asunto, señor Presidente, debo empeñar por hacer una declaración franca y sincera respecto al verdadero significado de la cuestión.

Hablando con mi honorable colega, compañero en la confección de estos proyectos, el señor Quintana y otros señores Senadores más, les decía en la ingenua confianza que nos ligaba en ese momento, comunicándonos nuestros más íntimos propósitos, les decía, señor Presidente, que cuando formulé mis preguntas al Ministro, tenía la firme resolución de guardar completo silencio, ó declarar que sus explicaciones me habían satisfecho plenamente, si este era el resultado que esas explicaciones nos daban; que no me guiaba el menor interés como partidista en las cuestiones internas de Mendoza; que me llevaba solamente el deseo de salvar la justicia, de salvar la ley, de salvar las prerogativas del Congreso y de contribuir también á salvar la libertad de una provincia hermana. Por esto mismo declaré al señor Ministro del Interior en aquella ocasión, que esperaba sus explicaciones con espíritu tranquilo, deseando que ellas me pudiesen satisfacer.

En esta disposición de ánimo, señor Presidente, oí y recibí las explicaciones del señor Ministro y al oírlas no pude menos de adelantar ya una impugnación á los principios que él había sentado y á los hechos que había confesado; anunciando que me preparaba á formular y presentar un proyecto de ley en el sentido de mis ideas.

Yo entendía entonces, como entiendo hoy, que no era dado á ningún Senador escuchar declaraciones de esa trascendencia y guardar silencio.

El señor Ministro declaró explícitamente que había movilizado la Guardia Nacional en la provincia de Mendoza y puéstola á disposición del gobierno respectivo, porque éste había requerido el apoyo del gobierno general, para ser sostenido contra convulsiones internas de que, decía, se encontraba amenazado.

Esta declaración, señor Presidente, vino á confirmar cuán justas, cuán motivadas, y cuán previsoras habían sido las interpelaciones formuladas por mí, y aceptadas por la Cámara.

Quedó patentizado, pues, quedó descubierto el hecho, de que el gobierno general, intervenía en la provincia de Mendoza, para sostener á su gobierno contra convulsiones internas, que él decía temer; quedó confesado también, señor Presidente, el hecho de que el Poder Ejecutivo violaba abiertamente la Constitución de la República y trasgredía las facultades del Congreso Nacional, llevando su intervención de una manera clandestina y secreta á una provincia argentina, hallándose el Congreso reunido, sin dar á éste conocimiento de las medidas que adoptaba.

Yo me dije entonces, señor Presidente; y me lo diré siempre: si yo me hubiese sentido inclinado á guardar silencio por cualquiera consideración, en presencia de declaraciones semejantes, lo hubiera hecho, quizás; pero habría sido tomando mi sombrero y abandonando este puesto cuyos más importantes deberes me era imposible cumplir;—me parecía que era absolutamente incompatible con los deberes de cada uno de nosotros, escuchar una declaración de tamaña magnitud y asentirla.

Fué así, señor Presidente, como me encontré envuelto y comprometido con toda mi conciencia en los negocios internos de la provincia de Mendoza, porque veo comprometidos en ella todos mis deberes y la Constitución de la República.



Señor Presidente: estas consideraciones que son concluyentes y que, á mi juicio, tienen en sí el poder de acabar completamente con la cuestión,—si cuestión pudiera suscitarse á este respecto—estas consideraciones que colocan al Congreso frente á frente con la Constitución, que le crean una situación sin salida, por decirlo así, en presencia de la actitud del Poder Ejecutivo; si nosotros no condenamos esa intervención con una reprobación moderada, pero explícita y terminante, estas consideraciones tienen decía, á mi juicio, el poder de acabar con toda cuestión. Bastaría demostrar esto como se demuestra tan sencillamente, para que la Cámara votase el proyecto que está en discusión.

Pero me parece también, señor Presidente, que han pasado cosas, que siguen produciéndose hechos que afectan de una manera directa las conveniencias generales del país, quizá el orden y la paz pública, también las garantías constitucionales de los ciudadanos, también la regular y conveniente renovación de los poderes públicos que está para efectuarse; y entonces digo, es conveniente, tal vez es necesario abrazar horizontes más vastos y traer á tela de juicio otras cosas y otros hechos de actualidad.

Si el Poder Ejecutivo, en presencia de un acto del Senado, que importa el ejercicio inocente de una prerogativa innegable, ha creído, señor Presidente, deber mostrarse resentido ó herido y ha creído deber contestar al Senado la facultad con que procede, no obstante, señor, estar explícitamente autorizada por la Constitución; si el Poder Ejecutivo ha creído también que convenía á su política ó á su autoridad asumir esta actitud enviándole informes inconvenientes y hasta injuriosos para la Cámara; si el Poder Ejecutivo después de todo lo que se le ha visto hacer, ha creído que debía lanzar estas especies tendentes directamente á desautorizar á los Senadores y al Congreso, haciendo después un llamamiento al pueblo para traer solo sobre sí sus miradas, su consideración y su respeto; yo creo, señor Presidente, que sería conveniente también, que sería permitido al

menos, que las Cámaras recuerden y sostengan los derechos que tienen al respeto, á la consideración del pueblo que representan.

Hallo conveniente declarar que nuestra conducta no ha sido inspirada por el espíritu estrecho de dirigir recriminaciones estériles al Poder Ejecutivo; yo creo que no está demás decir, y dejar bien comprobado, que nos han guiado sentimientos tan patrióticos y nobles como los mejores que pudieran animar al Poder Ejecutivo; yo creo que no está de más decir que el Congreso, como los miembros del Senado que apoyaron la interpelación, no han merecido los reproches y las insinuaciones injuriosas con que el Poder Ejecutivo se ha creído con el derecho de contestar. Creo, también, que no está de más decir, que es necesario decir, que grandes intereses aconsejan de parte de la Cámara un proceder cauteloso y discreto en salvaguarda, en defensa de las libertades públicas que veo seriamente comprometidas por la actitud del Poder Ejecutivo.

Con la moderación que me es característica diré todo mi pensamiento á mi turno.

Yo creo que nos encontramos frente á frente de un Poder Ejecutivo eminentemente elector; yo creo, señor Presidente, que una suma de hechos y actos concordantes y persistentes del Poder Ejecutivo me dan derecho para considerarlo exclusivamente empeñado en tomar parte y trabajar en las elecciones de su futuro sucesor.

Señor Presidente: esta es cuestión de hechos, y yo digo lo que pienso, y lo que pienso lo digo con franqueza; el pueblo que me escucha, que sabe lo que digo, juzgará si tengo ó nó razón.

Yo diré entre tanto, señor Presidente, porque la afirmación es grave, en qué hechos la fundo.

Yo he visto la conducta del Poder Ejecutivo, señor Presidente; primero, en la provincia donde vió la luz el señor Presidente de la República, he visto que todo su proceder y todo cuanto hacía en ejercicio de su autoridad, llevaba el sello de una pasión y un interés electoral. Más tarde lo ví también asociándose á los que iniciaban

una rebelión en la provincia de Santiago del Estero; yo le ví protegiendo ese movimiento sedicioso, en nombre, por supuesto, de las libertades públicas. Yo me dije entonces: esta conducta no es la de la Constitución, esta conducta no es la de la ley, esta conducta, por consiguiente, no es inspirada por un móvil desinteresado y puramente patriótico. Le ví más tarde, señor Presidente, cómo se conducía en la provincia que tengo el honor de representar; y yo, desde el primer año que vine á tomar un asiento en esta Cámara, en fuerza de mi propia observación, en virtud de hechos que había estudiado con imparcial prolijidad, escribía al señor Baibiene diciéndole: «La situación de su gobierno es peligrosa; prevéngase, y prevéngase apoyándose y amparándose en el cumplimiento estricto y fiel de sus deberes, porque el Gobierno de la Nación es su enemigo, y el Gobierno de la Nación ha de acabar por derrocarlo». Yo, que le anunciaba esto, señor Presidente, al Gobernador de la provincia de Corrientes; yo, que ví más tarde al Gobierno Nacional protegiendo abierta y directamente con todos sus elementos y recursos la injustificable rebelión que allí estalló; yo, que ví al Gobierno Nacional pasar sobre todas las consideraciones de justicia, de conveniencia y de gratitud; yo, que ví á ese Gobierno Nacional pedir auxilio para realizar este hecho escandaloso á esos mismos hombres que pocos días antes habían caído vencidos por el brazo potente de los hijos de la provincia de Corrientes en la batalla de Naembé; yo, que ví al gobierno general congratularse de tener por aliados á esos mismos hombres, y armar su brazo para llevar el arma contra el corazón de los liberales patriotas, de esos nobles soldados y dignos magistrados que hacía aún tan poco habían abandonado sus puestos para ir á compartir los rigores y peligros de los combates que se libraban en defensa de su propia autoridad.

Yo, que le he visto armando el brazo de los que habían de dar muerte al doctor don Juan Lagraña, magistrado y voluntario de esas campañas, al joven Igarzábal,

noble hijo, de otro mártir de su deber y de su causa. á los jóvenes Valenzuela, José Vicente Gómez, Silva, Niella y muchos otros de esa juventud entusiasta y florida que corrió á los combates para defender las instituciones y la autoridad del actual Presidente y que era tan acreedora á su consideración y á su respeto.

Yo, que he visto todo esto, me digo á mí mismo: este gobierno no puede avanzarse á extravíos tan lamentables, sinó por algún móvil, por algún interés inconfesable.

Víle más tarde, señor Presidente, cómo se conducía en la provincia de Santa Fé; ví también cual era su conducta en la provincia de Entre Ríos.

Hechos semejantes veo producirse en las otras provincias de la República, y al fin, señor Presidente, librándose una cuestión que es interesante á los partidos del país, precisamente porque responde al grande objeto de la elección del futuro magistrado de la República en la provincia de Mendoza; le veo, señor Presidente, con más franqueza que en otras partes, por cierto, enrolarse abiertamente en las filas de uno de los partidos combatientes, llevar todo su poder y su apoyo á uno de ellos, llegar hasta el extremo de llevar la intervención nacional, violando la Constitución, pues reunido el Congreso no recaba su autorización; y me confirmo en que le guía un interés electoral y partidista, un móvil ilegítimo, porque todo lo que se hace contra la ley y el deber, no se hace sinó á impulsos de intereses, que, como he dicho antes, son... poco confesables, por no calificarlos de otro modo.

Víle también, señor Presidente, conservando numerosas fuerzas de guardia nacional reunidas en la provincia de San Luis. ¿Y con qué objeto? me he preguntado. La paz reina en esa provincia, uno de sus dignos representantes nos ha comunicado que ningún peligro la amaga; y que esa tropa, señor Presidente, está ejerciendo de antemano coacción sobre los habitantes de ella, preparándose á impedir que realice en paz y en libertad la elección de su nuevo gobernante á fin de que el que

resulte electo responda al candidato favorito del señor Presidente.

Toda la conducta, pues, del Poder Ejecutivo en la República, es á mi juicio, lo digo con toda conciencia, parcial, electora y culpable.

¿Tiene el Congreso derecho de proponerse todas estas cuestiones, de hacerse á sí mismo estas preguntas y de resolverlas en sus leyes y en sus actos? El señor Senador por Jujuy, dejó bien demostrado en la sesión anterior, que el Congreso no es un autómeta, y algo más; que el Congreso es un poder esencialmente inteligente, pues es deliberante, que debe meditar todo el alcance y considerar todas las facetas de cuantas leyes se hacen y que al hacerlas debe tener en vista la garantía de la libertad; porque él es quien debe contribuir á garantirla y defenderla con sus disposiciones.

Pienso, pues, que este proyecto, á la vez, como he dicho antes, que tiende á salvar la Constitución comprometida y atropellada por el Poder Ejecutivo, tiende á servir también conveniencias reales y positivas del país.

Por consiguiente, todo cuanto el Poder Ejecutivo ha escrito, ó todo cuanto el Poder Ejecutivo ha dicho contestando al Senado con motivo de la interpelación que se le ha dirigido, todo, todo ha tendido y tiende directamente á debilitar la autoridad de este cuerpo ó comprometer su decoro, y humillar en fin, su independencia y dignidad.

El Poder Ejecutivo olvida, que lo único que hay en pie hoy, en el espíritu de la opinión de la República, es el Congreso de la Nación; y que si el prestigio y la dignidad que debe rodear á este poder público, es quebrado ó le falta. entonces todo naufragará, entonces la gangrena que hoy tiene enferma esa rama de los poderes públicos que se llama Poder Ejecutivo, se extenderá á nosotros también, nos corroerá y nos precipitará en una completa disolución.

Nó! señor Presidente; la Cámara de Senadores al acordar su sanción á la moción de interpelación que tu-

ve el honor de hacer, no fué guiada por móviles estrechos, como el Poder Ejecutivo lo significa; la Cámara de Senadores al autorizar las preguntas, no procedió con el ánimo de hacer reclamaciones estériles al Poder Ejecutivo, sinó con el de redactar y sancionar disposiciones que corrijan abusos, que lleven garantías á los pueblos y á los ciudadanos: y el Poder Ejecutivo se hace juez hasta de las intenciones con que esas preguntas han sido dirigidas, humillando la autoridad del Congreso y creyendo que de esta humillación saldrá la exaltación y el prestigio del Poder Ejecutivo. Este es su objeto.

Si el Congreso consintiese pasivamente en que todo esto pase sin oposición alguna, en que todo esto reciba aunque más no sea la sanción de los hechos consumados, entonces, sí, quedaría, á mi juicio, justificado un dicho del señor Presidente que ha adquirido celebridad en estos días: «el nido es digno del pájaro» pudiendo, por lo tanto, empollar en nuestro seno su sucesor.

Señor Presidente: sucinta y brevemente he expresado mi pensamiento entero, he derramado mis sentimientos en el seno de la Cámara y de mis colegas.

Cualquiera que sea la apreciación que de ellas se haga, respecto á su exactitud, yo espero que me harán la justicia de creer que he hablado con franqueza y con sinceridad.

Por lo pronto, limito aquí lo que tenía que decir.

He dicho.

---

### Discurso del Senador Oroño

*Señor Oroño*—Señor Presidente: Si mis opiniones no fuesen tan conocidas del Congreso y del país, en la materia que trata de reglamentar el proyecto que está en discusión, yo sentiría la necesidad de justificar por la tranquila exposición de mis ideas, la razón por qué voy

á votar en favor de este proyecto, para destruir en su base las apreciaciones que injustamente se hacen, respecto de los móviles que han guiado á los Senadores que lo hemos firmado. Pero esta cuestión, señor Presidente, no es nueva entre nosotros: se puede decir que todos los años, desde que se estableció el Gobierno Nacional en Buenos Aires, con este motivo, con un motivo análogo al actual, ó con iguales proyectos al que se discute, el Congreso se ha ocupado de este asunto, ya en la Cámara de Diputados, ya en la Cámara de Senadores. No podía ser de otra manera, señor Presidente, cuando se manifiesta la tendencia en el Poder Ejecutivo de despojar al Congreso de sus más altas prerogativas constitucionales, para consagrar exclusivamente en su favor el derecho ilimitado que cree tener por las disposiciones mal interpretadas de la Constitución, para distribuir el ejército.

El mando del ejército, señor Presidente, es sin duda la más alta función del Poder Ejecutivo; y es la más alta función, porque precisamente es la atribución más peligrosa, pues así como el mando del ejército conferido al Presidente de la República, limitado ó circunscripto á las disposiciones de la Constitución, puede ser altamente provechoso para el país, puede ser también, como en el caso presente, bastante para destruir ó minar por su base todos los fundamentos de la Constitución, que son el respeto y la garantía que ha consagrado en favor de los Estados Federales la ley suprema de la Nación.

Se pretende, señor Presidente, deducir de una atribución de la Constitución que confiere al Poder Ejecutivo la facultad de distribuir el ejército conforme á las necesidades de la Nación. esa facultad ilimitada, y que puede bien en ciertos casos ser abusiva. hasta opresiva de la libertad; se quiere hacer extensiva á todas las provincias en paz ó en guerra, peligren ó no las instituciones, sin que haya ningún motivo ostensible ó real que justifique el empleo de estos medios, es decir, de esa fuerza en las capitales de los pueblos. Pero los que esto sostienen, señor Presidente, olvidan que arriba de esa dis-

posición puramente mecánica y de simple administración, está una facultad eminentemente política conferida al Gobierno General, para garantir, no para conculcar las libertades.

El artículo 6º de la Constitución es una saludable y previsorá limitación de las facultades del Poder Federal, á la vez que una garantía en favor de los Estados y de las libertades públicas de los pueblos y de los ciudadanos.

Por ese artículo no se puede intervenir en las provincias sinó á requisición de sus autoridades. ¿Y qué otra cosa es, señor Presidente, la introducción y presencia de las fuerzas militares de la Nación en una provincia cualquiera donde la paz pública no está perturbada, donde no ha sido requerida la intervención nacional por las autoridades constituidas? ¿Qué otra cosa, repito, que la violación de la Constitución, que una derogación de las disposiciones consagradas en el artículo 6º para garantir esas prerogativas y esas libertades? ¿De qué serviría, señor Presidente, la garantía acordada por el artículo 5º al ejercicio libre de las instituciones provinciales, si esa garantía en vez de ser para los pueblos, fuera para los gobernantes que se alzan contra la ley, contra el Congreso y contra los derechos é intereses de sus gobernados?

Si el Poder Ejecutivo, á virtud de esa atribución puramente mecánica y de simple administración, entendiera que tiene el derecho de ingerirse en los asuntos domésticos de los Estados, como lo hace actualmente en la provincia de Mendoza y en algunas otras de la República, ¿qué sería de la Constitución?

La paz y el orden no pueden cimentarse sin el respeto de parte de los que gobiernan á los derechos de los pueblos y de los ciudadanos. La libertad será una esperanza, simplemente una esperanza, si las instituciones que nos hemos dado para garantirlas, son falseadas en su aplicación por los encargados de ejecutarlas.

El mismo señor Presidente nos dá la razón á los que sostenemos la inconstitucionalidad é inconveniencia del



mantenimiento de fuerzas militares en los pueblos, y en Mendoza á las órdenes de su Gobernador para practicar elecciones, cuando dice en su último Mensaje que la Inglaterra y los Estados Unidos deben su gran prosperidad á la ausencia de los ejércitos permanentes. Yo agregaría, señor, que la prosperidad de que gozan aquellas naciones la deben á la libertad que han sabido establecer por el respeto á los derechos de todos, y no por la ausencia de los ejércitos, como parece pretenderlo el señor Presidente. Es precisamente á esas precauciones que deben su bienestar, y nosotros, dígame lo que se quiera, no iremos adelante en la práctica de la libertad, si no destruimos las barreras que se oponen á su paso.

En Estados Unidos se preocuparon desde el principio de su organización, de la elección de los medios para conseguir tan preciosos fines, y establecieron en la reforma de la Constitución que ningún militar podría alojarse en casa de un ciudadano sin su consentimiento.

¿Por qué se estableció, señor Presidente, esa saludable disposición en la Constitución de los Estados Unidos?

Porque comprendieron el peligro que existía contra la libertad civil y el abuso posible contra el derecho de los particulares, en la práctica antes consentida, y de la cual se había abusado, como se abusa casi siempre por el poder ó por los que representan la fuerza.

Este peligro es seguramente tanto más grave para la libertad política, si se acepta, se legaliza y se aplaude la disposición del Ejecutivo, la introducción de fuerzas militares á las capitales de los pueblos á pretexto de que la paz pública se halla amenazada por elecciones, ó por tranquilizar al Gobernador, asegurándole la impunidad de sus tropelías contra el pueblo y contra los ciudadanos.

Esta pretensión es de todo punto inadmisble, y las doctrinas que para justificarla se han expuesto, deben ser condenadas como contrarias á los preceptos claros é intergiversables de la Constitución, y á la práctica invariable de instituciones análogas á las nuestras en los

pueblos más libres, y por lo mismo los más felices de la tierra.

La fuerza pública militar que tiene una misión tan conocida, tan útil y fecunda, sirviendo de guardián á la prosperidad de la Nación, dispuesta siempre á la defensa del honor nacional, no puede distraerse en objetos extraños, ni en servir ambiciones personales de gobernantes desleales, que empequeñecen su misión y perverten al soldado.

El señor Presidente decía estas palabras que voy á leer, á propósito de la intervención llevada á la Provincia de San Juan por el Gobierno Federal, desautorizadamente.... nó; no desautorizadamente, porque en aquella época la Constitución disponía una cosa completamente diferente de lo que dispone ahora. Entonces el Gobierno podía intervenir con requisición ó sin ella en cualquiera Provincia, mientras que ahora es al revés: la Constitución establece que el Poder Ejecutivo no puede intervenir sin requisición de la Legislatura ó de los Gobernadores de Provincia, y así mismo con autorización del Congreso.

« El hecho que ha ocurrido es espantoso. Se ha mandado quitar un Gobernador, precisamente porque la ley dice: *para restablecerlo, si hubiese sido depuesto por la sedición.*

« La facultad de intervenir sin requisición ha traído los horrores de San Juan, entendiéndose que esa facultad era discrecional, resultando la monstruosidad de que el Gobierno Nacional haga entrar en una Provincia, donde las autoridades funcionan sin obstáculo, aunque haya habido amenaza de perturbarse el orden, su fuerza armada, pretendiendo, contra las autoridades mismas y contra la evidencia, que el orden está perturbado, obrando, no sobre los perturbadores, sino sobre el mismo Gobierno».

Podría, señor Presidente, sin recurrir á ningún testimonio, á ninguna autoridad extraña, sólo con la opinión del señor Presidente de la República, convencido de que, cuando ha estudiado la Constitución en la fuente

más pura del derecho federal, en la Constitución de los Estados Unidos, es cuando más ignorante se manifiesta de las instituciones federales. (Aplausos).

El mismo señor Presidente nos daba la razón en el 1855, de por qué miramos con fundadísimo recelo la presencia de fuerzas militares en las Provincias: porque ellas van á vigorizar los desmanes de los gobernantes; —y decía deliberadamente: « *los desmanes nos vienen de los gobernantes*; y por eso la Constitución debe establecer reglas de sumisión y sujeción, para que el Poder Ejecutivo, como encargado de dirigir los destinos de los pueblos, no pueda falsear los principios consignados en la Constitución».

Estas reglas son las que queremos establecer ahora; estas reglas que el señor Presidente aconsejaba como un deber estricto, como un precepto de la Constitución que hoy está vigente, y en virtud de la cual se encuentra en el puesto que ocupa.

« El poder federal no es árbitro en todas las conmociones interiores de las Provincias, sinó en aquellas que tienen por objeto obstruir é impedir la ejecución de las leyes de la Nación. »

Y sin embargo, él se cree autorizado para colocar fuerzas en la provincia de Mendoza, por el hecho de que hay partidas de bandoleros que recorren aquella Provincia; se cree autorizado para hacer allí la policía interna cuando este deber incumbe puramente por las instituciones provinciales, á las autoridades locales.

Pero se dice, señor Presidente: ¿qué peligro hay en que las fuerzas se coloquen en aquel pueblo?

El peligro lo estamos viendo: el peligro que hay, es que esas fuerzas puestas en manos de los Gobernadores, sirviendo como en el presente caso, á objetos electorales, den por resultado Diputados al Congreso que no sean la expresión genuina de la voluntad del pueblo: Diputados que no vengán á salvaguardar los intereses y las instituciones nacionales, sinó á representar los intereses y las aspiraciones del Poder Ejecutivo. Y entónces pregunto, señor Presidente: ¿será posible la acusación

al Poder Ejecutivo? ¿De qué manera podría la Cámara acusarlo, si él hubiera conseguido por esa combinación de la fuerza pública militar establecida en las Provincias, que el resultado de las elecciones recayera en personas completamente favorables á sus ideas?

Entonces el Senado, según las teorías del señor Senador por Corrientes, tendría que estar presenciando estos hechos y permanecer impasible, porque no habría una Cámara que acusase; porque la Cámara de Diputados estaría compuesta de hombres afectos en su totalidad al Presidente de la República, pues para eso había colocado la fuerza pública á las órdenes de los Gobernadores de Provincia: para que eligieran á sus amigos, á sus partidarios.

Si el Presidente de la República no fuese un *Poder Elector*, como lo ha calificado muy bien el señor Senador por Corrientes, en vez de entregar aquellas fuerzas á los Gobernadores, las pondría á las órdenes de jefes nacionales, como lo han hecho siempre los Gobiernos anteriores.

No ha habido ningún gobernante, antes del Presidente actual, que haya creído que tenía el derecho de colocar las fuerzas militares en manos de los Gobernadores de Provincia.

*Señor del Carril*—Padece un error el señor Senador. Las fuerzas de San Juan y de Mendoza fueron puestas por el Presidente Mitre á las órdenes de los Gobernadores de esas Provincias.

*Señor Oroño*—No, señor; voy á probarle al señor Senador que está equivocado.

*Señor del Carril*—No va á probar nada, porque es un hecho.

*Señor Oroño*—Cuando yo establezco principios ó ideas, siempre vengo apoyándome en documentos, para probar la verdad y exactitud que ellos tienen. (Aplausos).

Eso que el señor Senador acaba de decir, es cosa completamente diferente.

El señor Sarmiento era director de la guerra, y como

tal tenía á sus órdenes las fuerzas nacionales destinadas á sofocar la rebelión.

*Señor del Carril*—No es esa la cuestión. Las fuerzas de los gobernadores Zavalla y Figueroa en Mendoza y San Juan, fueron puestas á las órdenes de los respectivos gobernadores. 500 hombres en cada Provincia.

*Señor Oroño*—No, señor. Ahora le voy á probar al señor Senador, con la lectura de una nota, que pido al señor Secretario tenga la bondad de leer.... pero explicaré primeramente el motivo de esa nota.

Cuando era Gobernador de la provincia de Santa Fé, se me anunció por diversos conductos que se tramaba una revolución contra la autoridad. Entonces me dirijí al Gobierno Nacional, del que formaban parte el doctor Rawson, el señor Moreno, creo que el señor Elizalde y otros, pidiéndole que pusiera á mi disposición las fuerzas de la frontera para sofocar la revolución. La nota que va á leerse es la contestación del señor Presidente Mitre, y esa contestación está de acuerdo con los procedimientos anteriores y posteriores de ese mismo gobernante, como tendré ocasión de exponerlo más adelante.

El señor secretario leyó la siguiente nota:

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1867.

*Al Excelentísimo señor Gobernador de la provincia de Santa Fé.*

He recibido la nota de V. E. de fecha 24 del corriente, comunicando que con motivo de los trabajos electorales que se hacen en esa Provincia para la elección del próximo Gobernador y Presidente de la República, ese gobierno ha sido puesto en posesión de ciertos antecedentes que le hacen temer una revolución contra el orden actual de la administración provincial, y solicitando para prevenir la consumación de tales atentados, la autorización del Vice-presidente de la República para que

V. E. pueda disponer de las fuerzas nacionales que guarnecen la frontera norte de esa Provincia.

En contestación, tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que, no pudiendo tener lugar la intervención de la Autoridad Nacional, sinó en los casos previstos por la Constitución, no puede desde ahora este gobierno poner á disposición del de V. E., á los efectos indicados en su citada nota, las fuerzas nacionales que guarnecen la frontera de esa Provincia; pero puede contar V. E. con que otras fuerzas repondrán y mantendrán en el libre ejercicio de su autoridad á las de esa Provincia que fueran derrocadas por la rebelión, si tal caso llegara á producirse.

Dios guarde á V. E.

Firmado—

*José M. Moreno.*

Como se vé, señor Presidente, el Gobierno anterior consideraba el hecho de poner las fuerzas militares á órdenes de los Gobernadores de Provincia, como una intervención, y por lo tanto se rehusó á ponerlas á disposición del Gobernador de Santa Fé.

He dicho que este procedimiento era consecuente con los procedimientos anteriores del mismo gobierno, y voy á probarlo.

Durante los dos primeros años que siguieron á Pavón, y que las fuerzas militares ocuparon la provincia de Santa Fé en previsión de algún movimiento en Entre Ríos, esas fuerzas estuvieron siempre á disposición del Gobierno Nacional; jamás bajo el comando de las autoridades locales.

Estaba reservado al actual Presidente venir á introducir esta perturbación exajerada en nuestras instituciones, mandando á los gobiernos de Provincia que movilicen fuerzas; autorizándolos, ó movilizándolo mismo la Guardia Nacional, en virtud de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el Congreso, para que tuvieran

suficientes elementos con que oponerse á las manifestaciones libres de la opinión, sofocaran los actos más sencillos, más naturales y más inocentes de los ciudadanos de la República en el ejercicio de sus derechos.

¿Qué peligro había en la provincia de Mendoza, señor Presidente (y voy á circunscribirme á la provincia de Mendoza, porque quiero expresamente no traer á este debate á la provincia de Santa Fé, á pesar de lo mucho que tendría que decir de ella ó de su gobernante, para justificar mis opiniones y para abonar el proyecto de ley que está en discusión); ¿qué peligro había, repito, en la provincia de Mendoza? Se dice que con motivo de la rebelión de López Jordán, está amenazada de una revolución ó de una invasión exterior de parte de los emigrados argentinos residentes en la República de Chile. Pero no hay que olvidar, señor Presidente, que la presencia de esa fuerza militar allí, data de mucho tiempo antes. Ese batallón de que dispone el Gobierno de Mendoza, pagado por el Tesoro de la Nación, fué el que hizo la campaña del Paraguay; y desde entonces está movilizado y á las órdenes del Gobernador de aquella Provincia.

Si peligro existiese de que la paz pública pudiera perturbarse por los emigrados residentes en Chile, la Nación tiene en su territorio puntos más convenientes y adecuados donde colocar sus fuerzas, en mejor situación que en la misma capital de aquella Provincia.

¿Cómo se explica, señor, que en la provincia de Entre Ríos, cuando se ocupaba de elegir su gobernante, hubiera dispuesto el Presidente de la República por un acto público que todos conocemos, que las fuerzas militares se situaran á una distancia del punto donde la elección iba á tener lugar, y que no se le haya ocurrido hacer lo mismo en la provincia de Mendoza, cuando se trataba de la elección de su primer magistrado?

Este hecho, por más inocente que fuera de su parte, acusa la intención y el propósito de favorecer las miras del mandatario de la última de aquellas Provincias, sirviendo cálculos ó combinaciones electorales que den por

resultado el triunfo de un partido político que goza de los favores del Presidente.

En la provincia de San Juan, ¿qué peligros amenazan la paz pública? ¿Qué peligro existe en la de Córdoba, donde ha habido por mucho tiempo también un batallón, que hoy se dice que no existe, pero que ha existido antes de ahora, equipado y pagado por el Tesoro de la Nación? ¿Qué síntoma de rebelión aparece en Santa Fé, donde también había un batallón pagado por el Tesoro de la Nación? ¿Dónde está esa amenaza á la paz pública, esa perturbación próxima y probable que el Presidente de la República vé y cree le da derecho á usar del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución, para distribuir las fuerzas en cada una de las capitales de aquellos pueblos, dejando abandonada la frontera?

¿Qué sería de la independencia del Congreso, si autorizara un procedimiento semejante? Cuando por una ley acaba de trasladarse la línea de fronteras al Río Negro, ley que requiere naturalmente en su ejecución la concurrencia de todos los elementos de la Nación; cuando el Congreso le diga: es necesario llevar el ejército al Río Negro, el Poder Ejecutivo le dirá: yo quiero situar el ejército, en virtud de la facultad constitucional que tengo para distribuirlo, en las Provincias donde me convenga. Entonces resultaría una verdadera perturbación en el gobierno de la República, la violación patente de las leyes del Congreso y la impotencia de este Cuerpo para hacer ejecutar y cumplir las disposiciones que él ha creído más convenientes al progreso y bienestar de la Nación.

Se dice, señor Presidente, que no es una intervención la presencia de la fuerza pública militar en los pueblos.

He citado para probar que en realidad es una intervención, y de la peor especie, apoyado en las mismas opiniones del Presidente de la República. Pero me olvidaba recordar otro hecho más reciente, y que por consiguiente arguye mejor y de una manera más eficaz en favor de las doctrinas que estoy sosteniendo.



El Presidente de la República, consultado por un jefe de Entre Ríos el año pasado, respecto de la actitud que tomaría en la política interior de aquella Provincia, le contestó estas palabras que todos los señores Senadores deben recordar:

«La provincia de Entre Ríos está bajo el imperio de la intervención anterior, puesto que existen fuerzas nacionales establecidas en aquella Provincia.»

El consideraba que por el hecho, y á pesar de que la rebelión estaba terminada, de tener fuerzas nacionales allí, la provincia de Entre Ríos estaba bajo el imperio de la intervención anterior.

Ahora digo yo, señor: si el mismo Presidente de la República ha reconocido que es una intervención la presencia de fuerzas militares en los pueblos, y una intervención desautorizada, ¿no es verdad que tenemos sobrada razón para alarmarnos, y con justicia reclamar de este atentado á la Constitución, á fin de que estos hechos no se reproduzcan, para que cesen y no se repitan más en todos los pueblos?

¿Puede el Presidente de la República, ó los que sostienen sus ideas, sacar argumentos de alguna parte, de alguna Nación constituida bajo nuestro régimen, para venirnos á probar que el Jefe del Poder Ejecutivo tiene el derecho de introducir fuerzas militares en los pueblos, sin requisición de sus Gobernadores?

¿Hay algún hecho que pudiera citar, él que tan á menudo cita á los Estados Unidos, algún hecho anterior á la guerra, en la larga vida constitucional de aquella Nación, en que el Poder Ejecutivo haya colocado la fuerza militar en alguno de los Estados?

Yo provoco, señor Presidente, á los primeros constitucionalistas de la República y á todos los hombres que han formado su espíritu en la lectura de las obras de los autores americanos, á que aduzcan alguno en que el Gobierno Federal de los Estados Unidos haya introducido fuerzas militares en las capitales de los Estados.

Entonces, si no hay precedentes en los pueblos que nos han precedido en el ejercicio del gobierno libre, ¿de

dónde quiere arrancar la extraña doctrina que sostiene el Poder Ejecutivo?

¿Vamos á derivarla de las teorías y de los ejemplos que nos suministra la Francia, cuyas ideas condena el señor Presidente de la República en su Mensaje?

¿Se querrá acaso en este momento solemne mirar las ideas aristocráticas de Mr. Thiers, cuyos errores en una faz importante de su vida política, han rebajado la importancia del hombre de Estado ocasionando su caída?

Cuando la Comuna exigía lo que es de derecho común en Inglaterra y Estados Unidos—el gobierno propio y la independencia municipal—Mr. Thiers contestaba con las bayonetas del ejército. Ella, sin embargo, insistía en someterse al Gobierno, en deponer las armas y dejar que el Gobierno establecido en Versalles entrase á París: solo pedía que no entrase el ejército

Mr. Thiers contestaba con esa arrogancia que tan mal cuadra al jefe de una República:

«Nó! el ejército es la Francia; el ejército debe estar en todas partes; el ejército debe entrar primero que el Gobierno!»

No, señor Presidente: el ejército no era ni es la Francia, porque si la Francia hubiese sido el ejército, la Francia hubiera concluído en Sedán.

En un país libre no puede prevalecer esa doctrina.

La República Argentina no es ni puede ser el ejército: la República Argentina son los ciudadanos, es el progreso, es la justicia, es la libertad. (Aplausos).

Y allí donde no hay libertad para todos; donde el derecho del sufragio, el primero y más importante de todos los derechos, es ahogado por actos arbitrarios de los poderes públicos, ¿se puede sostener que existe un pueblo libre? (Aplausos).

No necesito, señor Presidente, justificar mis opiniones, porque se ve hasta la evidencia que no obedecen á ningún móvil interesado ó de partido.

La provincia de Mendoza ha manifestado sus opiniones en favor de candidatos conocidos.

La provincia de Mendoza no responde en sus manifestaciones, en uno y otro círculo, á la opinión que yo tengo, á mis afecciones y compromisos políticos.

Pero la provincia de Mendoza responde en sus manifestaciones á una idea para mi capital, y en este punto estamos completamente de acuerdo: Mendoza quiere emanciparse de la odiosa tutela del poder oficial, hace esfuerzos por libertarse de la opresión, y en una palabra, lucha por su libertad.

Para que impere allí como en todas las demás provincias, á fin de que el Presidente de la República sea la verdadera y genuina expresión de la opinión pública, es necesario que la fuerza y los elementos oficiales no se pongan al servicio de nadie.

Yo no quiero, señor, que el Presidente de la República sea el resultado de esas confabulaciones oficiales, ni de los resortes del poder puestos en juego para sofocar la opinión libre de la Nación.

Mi corazón argentino y patriota como el que más, desea sentir la agradable emoción que le produciría el hecho de ver á mi país regido en sus destinos por aquel á quien hubiere favorecido la verdadera opinión.

¿Qué me importa, señor Presidente, que pueda decirse por algunas personas de esas que cifran su habilidad política en esas convenciones artificiales que se hacen para obtener un favorable resultado en la elección, que mi actitud en este debate favorece á la candidatura del General Mitre, ó á la de otro candidato que no sea de mis simpatías?

Nada vale todo eso para mí, señor Presidente, porque yo no sirvo á las personas sinó á las principios.

Si fuese á patentizar de una manera más clara todavía, todos los abusos que se cometen con la presencia de fuerzas militares en las Provincias, no necesitaría hacer un grande esfuerzo para determinar hechos que avergüenzan á todo argentino.

Muy cerca de nosotros, las fuerzas movilizadas para

la guerra de Entre Ríos, asisten regimentadas con sus oficiales á la cabeza á inscribirse en el Registro Cívico, y lo que es más, así regimentadas, traídas como para un acto de servicio, han venido también á asistir al recibimiento de un elevado personaje.

Y yo digo, señor Presidente: si esto se hace en este momento, estando el Congreso reunido, cuando no hay todavía un interés inmediato; ¿qué sucederá cuando llegue el momento solemne, cuando los pueblos sientan el legítimo deseo de ejercitar su derecho, de manifestar su voluntad en las urnas electorales? Van á encontrar en vez de una urna en donde depositar su voto, las armas nacionales, puestas en manos de los ciudadanos para garantía del orden, sirviendo de medio de intimidación para todos. Van á encontrar en vez de las franquicias y de la libertad que la Constitución les acuerda, el garrote y el látigo del esbirro pagado para impedir el ejercicio de su derecho.

Es así como se van á hacer las elecciones en la República; y se van á hacer así, señor Presidente, por el uso immoderado cuanto perjudicial, que se hace por el Presidente de la fuerza militar de la Nación.

El Presidente de la República se ha alarmado de que haya surgido en el Senado esta interpelación, ó este deseo tan natural y tan legítimo de parte de los Representantes del pueblo, de saber cómo se manejan los intereses de la Nación y cómo se cumplen las leyes que da el Poder Legislativo del país. El Presidente de un país libre debiera, lejos de contrariar estos impulsos de la conciencia honestas de los hombres, estimularlos con buena voluntad.

No hace dos meses todavía que el eminente orador Julio Favre dirigió una interpelación al Gobierno de su país, no solo sobre hechos que él consideraba abusivos, sino para saber qué política se proponía seguir el gabinete, á dónde conducía á la Francia, y cómo se proponía resolver ciertas cuestiones. Nadie se alarmó; nadie se inquietó por esto, ni el Gobierno miró aquella interpelación como un acto de hostilidad al Ejecutivo. Por

el contrario, señor Presidente, el proceder del elocuente orador mereció un aplauso universal de toda la Francia, porque la aspiración que manifestaba en ese momento, era la aspiración del pueblo francés.

Pero á nosotros no se nos quiere reconocer ni ese derecho; y cuando alguna vez hemos querido usarlo en el interés del país, se nos ha contestado con calificaciones odiosas, con palabras hirientes. ¿Y se dirá después que hay en nosotros un espíritu de hostilidad al Presidente?

Este mismo señor Presidente, cuando era particular, nos hacía notar en sus «Comentarios á la Constitución Nacional», el inmenso peligro que tenía la cláusula establecida en ella, que hacía de los Gobernadores de provincia agentes naturales del Gobierno Federal. ¿No decía él, con muchísima razón entonces, que esta disposición de la Constitución iba á convertir al Poder Ejecutivo Nacional en un trastornador perpetuo de la libertad y tranquilidad de los pueblos, porque había el peligro de que fuese promoviendo revoluciones para ir haciéndose de agentes naturales á su paladar? No es el peligro que el Presidente tan sábiamente condenaba en sus comentarios á la Constitución, el que tratamos 'nosotros de evitar? No queremos que los gobernadores dejen de ser agentes naturales, pero sí que no se les dé aquellas facultades ó medios que no puede ejercer el mismo Presidente de la República; porque si por el hecho solo de ser agentes naturales del Gobierno Federal podían causar los temores que el Presidente preveía en aquella ocasión, con mucha más razón esos temores aumentarían, desde el momento que se les pusiera la fuerza pública militar á su disposición. Entonces vendrían á hacerse árbitros de los derechos de los pueblos y los únicos dispensadores de la libertad, y entonces, repito, no podrían los ciudadanos ejercerla sinó á merced y paladar de los gobernantes. (Aplausos).

Yo prescindo, señor, de la parcialidad que el Presidente de la República ha manifestado en todos sus actos desde el momento que subió al poder, porque el juicio y crítica de esos procedimientos he tenido el honor de

haéerlo en los años anteriores; pero no puedo dejar de inculcar en este hecho.

Yo he visto al primer magistrado de la Nación, como ha dicho muy bien el señor Senador por Corrientes, aprobando intervenciones, ó consintiendo en el derrocamiento de algunos gobernadores, al mismo tiempo que dispensando favores sin embozo á otros.

¿De dónde arrancaba esta facultad, este derecho, señor Presidente, el Poder Ejecutivo de la Nación? No podía arrancarlo de las fuentes puras de la Constitución. Ese derecho lo arrancaba el Presidente de la República de sus instintos, de sus intereses personales en favor de unos y en contra de otros.

¿Cuándo pudiera considerarse legítimo, según el sentir de algunos señores Senadores, que el Presidente de la República, por la simple amenaza. por el simple temor de perturbación de la paz pública en una provincia, coloque allí las fuerzas de la Nación, al mismo tiempo que se niega de una manera decidida y resuelta la intervención requerida para restablecer las autoridades en en otras? ¿Es este proceder racional y conforme á la Constitución, á las reglas, á los principios establecidos por ella? De ninguna manera, señor Presidente.

Si queremos ser libres; si queremos ser republicanos federales, como decía el señor Sarmiento, es menester que procedamos también de la manera que procede la Nación, de la cual hemos tomado por modelo su Constitución. No se puede tener una Constitución á la norteamericana y proceder á la francesa ó á la española, porque entonces resultará la más grave perturbación del sentido moral. Es entonces que el sentimiento público se corrompe y se pervierte, precisamente porque aquellos que tienen la obligación de ser los primeros en dar ejemplo de respeto y sumisión á las instituciones, no lo hacen y los precedentes se toman como reglas por los que suceden en el gobierno.

Cuando los gobernadores no respetan las instituciones ó se apartan de la ley, los ciudadanos se creen desligados de la obediencia y acatamiento que las leyes

exigen y que la Constitución establece, porque, como dice muy bien Blackstone, el gobernante que se aparta de la Constitución, que falsea las reglas establecidas por ella, no merece el respeto de sus ciudadanos, y por el contrario, merece la resistencia decidida y obstinada de todos ellos. (Aplausos).

Estas ideas no son liberticidas, como son las que sostiene el Mensaje del Presidente; estas ideas están basadas en la teoría inglesa, libremente acatada, sostenida y sancionada por numerosos ejemplos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.

Creer que el Presidente de la República tiene facultad de atropellar la Constitución, olvidar sus prescripciones, y que el Congreso argentino no tiene el deber ni el derecho de alzar su voz para condenar y censurar esos hechos, valiera lo mismo que no tener Constitución. No valdría la pena que los pueblos hiciesen el sacrificio de estar sosteniendo la representación nacional, que tan caro les cuesta, para que fuéramos espectadores impasibles de tales atentados, sin que pudiéramos en ningún caso, ni estuviéramos facultados para condenar esos avances.

Se ha dicho también que había conspiradores, que trataban de perturbar la paz pública en las provincias de Santa Fé y Corrientes. Con esta versión se ha pretendido autorizar las medidas arbitrarias tomadas por el Presidente.

El Presidente de la República, en cumplimiento de su deber, ha debido someter á los Tribunales á esos conspiradores, puesto que él los conoce, y no limitarse á hacer esa propaganda sombría é indeterminada contra personas que tal vez puedan acreditar ante el país y ante ese mismo Presidente, que han hecho más por la paz pública de la Nación que él en el puesto que ocupa. (Aplausos).

Es un proceder el que emplea el Jefe de la Nación, que no encuentro palabras para calificarlo, porque no podrían ser sinó términos demasiado fuertes los que empleara para designar á un mandatario que señala al Con-

greso y á la opinión pública, á personas que dice conspiran en las provincias de Santa Fé y Corrientes, y que en el círculo privado de sus amigos dice también á quiénes se refiere, pero no tiene el coraje de nombrarlas ó de ponerlas á la expectación pública, si no puede entregarlas á los tribunales. Ese Presidente: ó no reviste las cualidades necesarias para el mando, ó es un calumniador!

Y un calumniador, señor Presidente, colocado en ese puesto, que es el más alto que la Nación tiene, no sé que pena merecería ante la ley y la opinión pública de su país.

*(Manifestaciones de aprobación de parte de la derecha de la barra, y desaprobación por parte de la izquierda).*

¿Qué consideraciones tiene á los conspiradores, cuando precisamente para sofocar la rebelión se están gastando los tesoros y la sangre de la Nación?

¿Por qué hemos de tener consideración con aquellos que están más á la mano de la autoridad, para no entregarlos á la justicia?

Es, señor Presidente, que no se tiene razón, y que se quiere de esa manera encubrir las faltas haciendo esa propaganda insidiosa contra personas inocentes, que han acreditado y pueden acreditar en todo tiempo su anhelo más decidido en favor de la paz de la República, con el objeto de desconceptuarlas y desautorizarlas, desautorizando al mismo tiempo al Congreso de la Nación.

Señor Presidente: cualquiera que sea el resultado de este proyecto de ley, sea que la opinión de la mayoría del Senado le preste su sanción, sea que no, el hecho solo de haber sido presentado y de haber contado en su favor con la opinión de ilustrados miembros del Senado, es una conquista en favor de la libertad.

La idea va haciendo camino. Esta idea, lanzada en las sesiones del año 68, fué completamente derrotada; no encontró eco en la opinión. Hoy está en la concien-



cia de todos, y por consiguiente, en la de la mayoría del país, la conveniencia que habría en limitar esta facultad que el Ejecutivo se atribuye de colocar las fuerzas nacionales discrecionalmente, no conforme á las necesidades de la Nación, sinó conforme á las pretensiones, an-tojos y aún caprichos del Poder Ejecutivo.

Todas las ideas, todos los principios de libertad que hemos conquistado, son el fruto de grandes sacrificios y el resultado de la paciencia y de la perseverancia de los hombres que desean verlas prevalecer en este país.

Yo no desespero si en esta ocasión no triunfa el proyecto de ley, de que él ha de ser alguna vez motivo de la reforma de la Constitución para evitar las interpretaciones que se hacen, ó que se dé una ley que sea sancionada por aclamación de todo el Congreso de la Nación. Se han de persuadir, y va á llegar el momento en que se persuadan del inmenso peligro, y grandes inconvenientes que este proceder envuelve para las libertades públicas, para el ejercicio tranquilo de las instituciones en cada una de las Provincias argentinas. He dicho.— (Aplausos).

---

### Discurso del Senador Quintana

*Señor Quintana*—El señor Senador ha empezado y ha terminado su discurso pidiendo entera franqueza.

Ese llamamiento, en lo que me concierne, es absolutamente inútil.

He procedido siempre con franqueza, y en esta ocasión, verdaderamente solemne, procederé con la misma franqueza de siempre.

*Señor Villafañe*—Creo que el señor Senador no'es miembro de la Comisión, y mis palabras se dirijieron á ella.

*Señor Quintana*—Soy uno de los autores del proyecto, que es un poco más que miembro de la Comisión.

*Señor Villafañe*—Sea como sea.

*Señor Quintana*—Señor Presidente: por la felicidad de mi país y por honor de su Gobierno, desearía estar profundamente equivocado en la severa apreciación que hago de su política en los últimos tiempos; pero estudiándola detenidamente, consultando los hechos que no pueden escapar á la penetración de nadie, y buscando las inspiraciones sanas de mi conciencia, declaro con toda solemnidad, que abrigo la íntima convicción de que actualmente existe una conspiración electoral, urdida en las regiones gubernativas y desenvuelta con medios oficiales. (Aplausos).

Esa conspiración, fraguada desde algún tiempo atrás, se ha de manifestar después de la ya inminente clausura del Congreso, y estallará cuando el Poder Legislativo del país no pueda dictar las medidas necesarias para poner coto á los desmanes de sus autores.

Contra esa conspiración no hay más remedio que desplegar al viento, con energía y con fé, la gran bandera de la libertad electoral: la libertad electoral que salvará la soberanía del pueblo, fuente legítima y única de toda autoridad, de todo poder. Para combatir esa conspiración, todos los momentos son buenos, todas las ocasiones son oportunas;—y ninguna mejor que la que se presenta en este momento con la discusión del proyecto en tela de juicio.

Más, como el Poder Ejecutivo, al enviar su último mensaje pide indulgencia, y como los señores Senadores quieren encerrar el debate dentro de límites estrechos, voy á complacerles por esta vez, después de la franca y terminante declaración que acabo de hacer.

Señor Presidente: el gobierno de la República Argentina es, por su Constitución, un gobierno compartido, contrapesado y limitado. Es un gobierno compartido, porque la soberanía popular está delegada en los tres poderes públicos que componen el gobierno de la Nación. Es gobierno contrapesado, porque ninguno de

sus poderes puede escapar al control eficaz de los otros. Es un gobierno limitado, porque ninguno de sus poderes tiene, ni puede tener, más facultades que las que le están acordadas en la Constitución, que es la ley suprema del país.

Si entre estos poderes, así compartidos, contrapesados y limitados, hubiera alguno que pudiera reputarse preeminente, yo lo proclamo altamente, á la faz de todos: ese poder es el Poder Legislativo.—Y ¿por qué? Porque el Poder Legislativo es el gran poder de todo país constituido bajo el sistema representativo republicano de gobierno; porque so pena de faltar á las nociones más fundamentales del gobierno republicano, el Poder Legislativo es el único poder que ni colectiva ni individualmente está sujeto á responsabilidad legal; porque el Poder Legislativo es, en fin, el único que tiene el derecho de imponer contribuciones pecuniarias ó personales, y el único que goza de la facultad de disponer su inversión, por todo lo cual se dice que el Poder Legislativo es el que tiene «la bolsa y la espada».

Así, en todas partes donde hay un Poder Legislativo que comprenda toda la extensión de sus facultades y toda la magnitud de su misión, este poder es el que real y verdaderamente rige la política del país, porque sin dinero y sin soldados no hay gobierno ni política posible. (Aplausos).

Pero tan lejos van las doctrinas absorbentes del Poder Ejecutivo, que ya no se contenta con discutir las atribuciones de cada una de las Cámaras, sinó que llega también hasta suprimir las autonomías provinciales, suponiéndose facultado á ingerirse aún en las elecciones puramente locales.

Una apreciación tan avanzada requiere una prueba inmediata de mi parte, y esa prueba la tengo en el último mensaje del Poder Ejecutivo, en el cual, después del párrafo referente á los lamentables y sangrientos sucesos de Chivilcoy, agrega lo que ruego al Senado se tome la molestia de escuchar: (lo leyó).

Tan extraordinaria é inadmisible es la doctrina conte-

nida en esta parte del mensaje, que debo creer que el Poder Ejecutivo no ha meditado en el alcance de las palabras que acabo de exponer ante la consideración del Senado; porque si lo hubiera meditado tranquilamente, habría visto que su primera parte es la condenación de todas las doctrinas que viene sosteniendo, y que la segunda es la negación más completa de la soberanía local.

Si en los Estados Unidos solo se permite situar fuerzas en el lugar de las elecciones, para proteger la libertad electoral donde existen enemigos declarados de la Nación, ¿cómo, con ese ejemplo, se pretende justificar todos los actos que se han denunciado en esta Cámara, y que han sido confirmados por las explicaciones del señor Ministro del Interior? ¿Dónde estaba perturbada la libertad de la elección, para que las fuerzas nacionales intervinieran en el acto del sufragio? ¿Dónde se hallaban en armas los enemigos de la Nación, para autorizar y justificar la presencia de esas fuerzas, en número verdaderamente alarmante? Pero los tristes sucesos de Chivilcoy, sucesos que los buenos argentinos deploramos sinceramente, han inducido al Presidente al extravío de pretender que, no es solo en las elecciones nacionales en que tiene el derecho de velar por la conservación del orden, sino también en las elecciones provinciales para funcionarios puramente locales.

Con este punto de partida, fácilmente se comprende que la autoridad nacional tendría derecho de inmiscuirse hasta en la elección del último municipal de cualquier partido de la campaña con todo el aparato de su fuerza y poder. Y entonces, ¿qué sería de las leyes que prohíben la citación de milicias en días de elecciones.

¿Qué sería de las leyes que condenan la ostentación de fuerzas en el acto del sufragio?

¿Qué sería de las soberanías locales que no han delegado en la autoridad nacional la organización de sus poderes públicos? ¿Qué sería de la libertad electoral si el Presidente de la República tuviera derecho de pre-

sentarse á discreción con todas las fuerzas nacionales para imponer á los ciudadanos, en el momento de ejercer el más sagrado de los derechos que les acuerda la Constitución?

No, señor; tales doctrinas son inconstitucionales, son liberticidas, y deben ser condenadas en todo país que quiera salvar su derecho y su libertad. (Aplausos).

Entrando más directamente á la cuestión que nos ocupa, la sanción ó el rechazo del proyecto de la comisión que manda disolver toda la milicia que no esté inmediatamente empleada en la defensa de la frontera ó en la guerra de Entre Ríos, el asunto es todavía más claro; y contra las esperanzas del señor Senador por Tucumán, abrigo por lo mismo la creencia de que este Cuerpo, que si ha dado siempre ejemplos de moderación, los ha dado también de energía, aceptará ese proyecto, para salvar sus facultades comprometidas, para resguardar las autonomías amenazadas, para asegurar las garantías conculcadas.

Señor: con arreglo á la Constitución, el Poder Legislativo es el único que fija las fuerzas de línea de mar y tierra de la República, y es el único también que, en los casos previstos por nuestra carta fundamental, autoriza la movilización de las milicias y su conservación en el servicio activo. Así está estrito en los incisos 23 y 24 del artículo 67, que determina las atribuciones del Congreso.

Por tanto, estas facultades no han sido, ni pueden ser puestas en duda. Pero se ha discutido su alcance, y es necesario establecerlo.

Si el Congreso tiene el derecho de fijar el número de las fuerzas de línea por medio de una ley ¿no tiene el poder suficiente para aumentarlas cuando lo repunte necesario?

Evidentemente que sí; y si el Congreso tiene derecho para aumentarlas cuando así lo demandan las necesidades públicas ¿cómo negarle el de disminuirlas, cuando esas mismas necesidades desaparezcan en todo ó en parte?

Es, pues, incontestable, que así como tiene la facultad de aumentar las fuerzas de línea, tiene la de disminuirlas.

La ley que se refiere á la fijación del ejército de línea, es en efecto una ley que participa de la naturaleza de toda ley ordinaria. Las leyes no tienen vida sinó mientras las alienta el soplo vivificador de la voluntad legislativa; su vida es, por consiguiente, una vida accidental y pasajera, que depende de la voluntad de los poderes públicos que las dictaren. Siempre que entiendan consultar las necesidades ó los intereses públicos, enmendarlas, modificarlas, abolirlas; es derecho perfecto de esos poderes abolirlas, modificarlas, enmendarlas en forma constitucional.

La autorización para la movilización de las milicias que también corresponde al Congreso, se halla en condiciones todavía más favorables para los que sostenemos el proyecto de ley cuya sanción aconseja la mayoría de la comisión.

El inciso 24 del artículo 67 lo dice del modo más terminante. Según él, corresponde al Congreso autorizar la movilización de todas las milicias ó de parte de ellas. ¿En qué caso? El mismo artículo lo agrega:

«Autorizar la reunión de las milicias de todas las  
« provincias ó parte ellas, cuando lo exija la ejecu-  
« ción de las leyes de la Nación, y sea necesario con-  
« tener las insurrecciones ó repeler las invasiones,»  
etc., etc.

Fíjense los señores Senadores que dice: *«cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación ó sea necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones,»* etc., etc.

Así, pues, la facultad del Congreso, que es el único poder que moviliza milicias, no alcanza á autorizar en todo caso, sin discreción y sin medida, la reunión de las milicias y su conservación en servicio activo. El Congreso no puede anticiparlas constitucionalmente al servicio, sinó cuando lo exija el cumplimiento de las leyes

de la Nación y sea necesario contener insurrecciones ó repeler invasiones.

Sí, pues, no hay ley que ejecutar, ni insurrección que contener, ni invasión que repeler, no hay convocación de milicias, constitucionalmente autorizada, aún cuando todos los poderes públicos se pusieran de acuerdo para hacerla. (Aplausos).

La Constitución es la valla de todos los poderes públicos; ella traza su esfera de acción y el límite de sus facultades. Un ciudadano convocado á virtud de una autorización del Congreso á prestar un servicio personal sin que lo exigiese el cumplimiento de las leyes de la Nación, á fin de contener una insurrección ó repeler una invasión, tiene abiertas las puertas del alto poder, que, en protección de las garantías individuales, puede declarar que esa convocación no es obligatoria, y ese poder es la Justicia Federal.

El inciso invocado va aún más lejos. La Constitución no ha querido que las milicias, una vez convocadas y mantenidas en servicio activo, escaparan á la acción y á la solicitud del Congreso, para ser entregadas arbitraria y absolutamente á la discreción del Poder Ejecutivo, como lo entienden el Presidente de la República y los señores Senadores que apoyan su doctrina. Según varios incisos del artículo 86 de la Constitución, el Presidente de la República es el jefe de todas las fuerzas de mar y tierra de la Nación, dispone de las fuerzas militares del país y corre con su distribución y organización. Más, según el inciso 24 del artículo 67, el Congreso tiene derecho á lo que textualmente voy á leer, á fin de no restringir ni ampliar el alcance del precepto constitucional.

Después de la cláusula que anteriormente leí, agrega:

«Dispone la organización, armamento de dichas milicias y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviere empleada en servicio de la Nación.» ¿Cómo es que entonces se pretende excluir la acción del Congreso sobre las milicias; una vez puestas á la orden del Poder Ejecutivo de la República? ¿No ha

dicho la Constitución que el Congreso tiene el derecho de disponer la organización, administración y gobierno de esas milicias así puestas á servicio de la Nación? ¿Por qué recordar el inciso 15 del artículo 86, y relegar al olvido el inciso 24 del artículo 67 en que están declaradas las facultades del Congreso?

En esta virtud, si el Congreso, por las explicaciones del Poder Ejecutivo, por datos que pudo tomar ó por documentos fehacientes, llega á penetrarse de que la movilización de las milicias, aún cuando haya sido necesaria al principio, se ha convertido después en innecesaria por haber desaparecido las causas accidentales que la motivaron, ó á comprender que tales milicias están mal administradas, el Congreso tiene, con arreglo á estos incisos, perfecto derecho para licenciar estas milicias ó para proveer á su administración y gobierno en el único sentido en que debe proveerse:—para bien del país, y no para fines electorales. (Aplausos).

Esta es la verdadera doctrina constitucional, esta es la doctrina salvadora de las instituciones públicas, la única doctrina que pone á cubierto las facultades del Congreso, las autonomías provinciales y el derecho de los ciudadanos.

Si nosotros declaramos, rechazando este proyecto de ley, que el Congreso no tiene facultad para entender en la organización administrativa y gobierno de las milicias una vez movilizadas, ¿qué será de una de sus más preciosas facultades constitucionales? ¿No habremos borrado, por causas que no quiero enunciar; no habremos borrado, decía, una parte del inciso 24 del artículo 67 de la Constitución? ¿Si declaramos que el Poder Ejecutivo tiene arbitrio exclusivo y absoluto para organizar, administrar y gobernar las milicias en cualquier número que sea y como bien le parezca; no exponemos las soberanías locales á la influencia depresiva de la fuerza, sobre todo cuando ellas son puestas á las órdenes de los gobernadores de provincia? Si declaramos que las milicias pueden ser llamadas al servicio, aún sin razón alguna constitucional que lo autorice, ¿no pone-



mos las libertades públicas y las prerogativas de los ciudadanos á merced de los que mandan, cuando los que gobiernan no tienen más razón de ser que la voluntad y el bien de los gobernados?

La distribución de las milicias en las capitales de provincia donde nada amenaza perturbar la paz pública, dejando abandonadas las fronteras que debieran guardarse mejor de lo que están, ¿es disculpable siquiera por la necesidad de evitar las perturbaciones que pueden amagar el orden local ó nacional? Aquí la cuestión toma una nueva faz, porque semejante distribución de milicias importa tanto como ejercitar intervenciones preventivas, que no tienen su origen ni en la Constitución, ni en las libertades públicas, de modo que no son legítimas ni constitucionales.

El artículo 6º de la Constitución, á que se ha hecho referencia en el curso de este debate, determina categóricamente que el Gobierno Federal solo interviene en el territorio de una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, para repeler invasiones exteriores, sin requisición de las autoridades locales, y con su requisición, para sostenerlas ó restablecerlas si hubieran sido depuestas por la sedición ó invasión de otra provincia.

Bien: la forma republicana de gobierno, ¿está acaso amenazada en San Luis, en Mendoza, en San Juan ó en La Rioja, para justificar esta intervención? Evidentemente que no. ¿Existe acaso alguna invasión exterior de una potencia extranjera, que sea necesario repeler? Tampoco. Luego es evidente que la ubicación de esas milicias en aquellas provincias, importa tanto como una intervención desautorizada, cuyo resultado es oprimir las soberanías locales, sin el objeto de garantizar la forma republicana de gobierno ó repeler invasiones de potencias extranjeras.

Pero vengamos al otro extremo: á requisición de las autoridades locales, para sostenerlas ó restablecerlas si hubieran sido depuestas por sedición ó invasión de otra provincia. Parece que, desde que las autoridades loca

les de Mendoza, San Luis, La Rioja y San Juan consienten la ubicación de estas milicias en el territorio de sus respectivas provincias, subsanan, por decirlo así, el vacío de la requisición. Pero la intervención es arbitraria: no basta que la pida la autoridad local, ni que la acuerde la autoridad nacional para que ella sea constitucional. La Constitución ha dicho que solo puede pedirse y acordarse para sostener ó restablecer las autoridades locales depuestas por sedición ó invasión de otra provincia. Así, pues, si para que la intervención sea constitucional es absolutamente indispensable que la requisición se funde en una sedición ó invasión, es evidente que, sin sedición ó invasión, la requisición debe ser desatendida. Ahora bien, ¿cuál es la sedición que existe en San Luis, en Mendoza, en San Juan y La Rioja? ¿Acaso estas provincias están invadidas por otras? Evidentemente que no.

Sabemos, por el contrario, que ninguna de estas provincias lleva la guerra á otra, y sabemos también que para honor y seguridad del país, no existe en ninguna de ellas un solo hombre en armas contra el orden local ó nacional.

Entonces, ¿cómo puede sostenerse fundadamente que la intervención preventiva es constitucional?

Las leyes que han definido la rebelión, así como la sedición, exigen la existencia de hombres en armas, *públicamente en armas*, contra las autoridades que tratan de derrocar. Esas leyes, que son las de justicia nacional, prohíben, además, que se haga uso de la fuerza para someter á esos hombres públicamente en armas sin una previa y doble intimación de deponerlas. Por consiguiente, esta movilización de milicias, que envuelve una verdadera intervención para sostener poderes que nadie amenaza, implica una doble infracción: la de la Constitución y la de la ley. Entonces, también, ningún hombre que aprecie debidamente la necesidad de respetar las instituciones de nuestro país, fuera de las cuales no hay salvación posible, puede dejar de aceptar el proyecto en discusión.

Por lo demás, aún cuando el orden hubiera sido per-

turbado por hombres públicamente en armas contra las autoridades legales, desde que este hecho y la requisición consiguiente se hubieran producido durante las sesiones legislativas, el Poder Ejecutivo carecía de facultad bastante para acordar por sí y ante sí la intervención, sin previo conocimiento y asentimiento del Congreso.

No necesito extenderme á este respecto. Me basta invocar el artículo 6º de la Constitución, y recordar los extensos debates á que la materia de intervenciones ha dado márgen en años anteriores, quedando sancionado por la mayoría de ambas Cámaras y solo enervado por el veto del Poder Ejecutivo, que es atribución del Congreso autorizar toda intervención.

El Presidente de la República ha estado en su mensaje tan distante de la verdadera doctrina sobre la materia, que no ha trepido en asegurar al Congreso, que en los Estados Unidos, inmediatamente después de sancionada la Constitución, se dictó una ley que declaró en principio que es facultad del Poder Ejecutivo movilizar, emplear y servirse de las milicias de la Nación.

Esto no es exacto: envuelve un doble error. La ley fué dictada á los ocho años de sancionada la Constitución de 1787, porque es la ley de 1795, tantas veces invocada en las discusiones del Congreso. Esa ley, lejos de declarar en principio que es facultad del Poder Ejecutivo convocar las milicias, le acuerda, por el contrario, para casos dados, la autorización sin la cual el Ejecutivo jamás podría hacerlo.

Si era facultad del Ejecutivo convocar esas milicias, ¿á qué la ley acordándole autorización al efecto? La autorización prueba, precisamente, la ausencia de semejante facultad en el Ejecutivo.

Si esa facultad no solo era originaria y exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que era también arbitraria ¿á qué las corta-pisas de la ley, declarando que el Presidente solo podrá hacer uso de la autorización en los casos que la misma ley establece? Estas restricciones demuestran claramente que la facultad tampoco es ilimitada.

Y esa ley debe su origen á un ejemplo saludable, que los hombres públicos de nuestro país jamás debieran olvidar.

Ella fué sancionada á consecuencia de los disturbios acaecidos en varios condados de Pensilvania, donde algunos se negaron á pagar un impuesto nacional sobre las bebidas. Los medios ordinarios fueron insuficientes para reducir á los desobedientes al cumplimiento de la ley, y entonces el presidente Washington durante la clausura del Congreso convocó las milicias de los Estados vecinos para someter á los revoltosos.

Ni siquiera fué necesario hacer uso de las armas, ni aún llegó el caso de introducir las milicias á los condados insurgentes.

Bastó la convocatoria del Presidente, para que la autoridad policial recobrara su imperio; poco más de cien arrestos sirvieron para restablecer el orden en la Unión. ¿Acaso el presidente Washington, después de haber reducido los renitentes á la obediencia, ocupó los condados insurrectos?

¿Acaso conservó las milicias en servicio? Nada de eso. El presidente Washington, rindiendo homenaje á la soberanía local y salvando las garantías individuales, ordenó inmediatamente el licenciamiento y desarme de las milicias.

Pero, hay todavía un ejemplo más respetable que el que acabo de invocar, y que por conclusión presentaré al examen del Senado. Entre nosotros se pretende establecer, como doctrina corriente, que el Presidente usa benéficamente su facultad de distribuir las fuerzas nacionales según necesidades públicas, cuando, á la vez que abandona las fronteras indefensas á las incursiones de los bárbaros, las sitúa innecesariamente, y con fines electorales, en las capitales de provincia. Y en el dictamen del procurador general de la Nación, de que me ocuparé en la próxima sesión, se procura levantar el poder militar más alto que el poder civil, sujetando á los ciudadanos á la jurisdicción de los consejos de guerra....

*Señor Torrent*—Es exacto.

*Señor Quintana*—De cuán distinta manera se entendían las libertades públicas en los Estados Unidos, aún antes de la inmortal Constitución que las aseguró para siempre!

Releyendo una vez más el acta inmortal de la independencia de aquella gran Nación, he visto que dos de los más fuertes agravios que las colonias inglesas invocaron contra la Gran Bretaña para declararse independientes de ella, fueron precisamente la pretensión de colocar el poder militar sobre el poder civil, de ocupar militarmente las colonias en pleno estado de paz.

Estos dos abusos de la corona inglesa, con relación á sus colonias, fueron, como lo dejo dicho, dos de las más graves causas aducidas para motivar la declaración de la independencia. Y se pretende, señor, á la segunda mitad del siglo XIX, en un país representativo y republicano, con una Constitución ampliamente liberal, que los Senadores y Diputados no usan sinó abusan de sus derechos y hasta faltan á sus deberes, cuando levantan su voz para preguntar: ¿por qué sus conciudadanos son conservados sobre las armas, no para satisfacer las necesidades del país, sinó para responder á fines electorales? (Aplausos).

¡Oh, señor! es que los autores de tales abusos han olvidado completamente las doctrinas de la libertad en que se educaron; y que fuera del gobierno se ocupan del pueblo y sus libertades, pero que una vez en el gobierno, solo se acuerdan del poder y sus facultades. Mientras tanto, la historia de nuestro país nos enseña elocuentemente que no es la libertad, sinó el despotismo, lo que entre nosotros ha engendrado las revoluciones. He dicho. (Aplausos).

*Señor Presidente*—Si no hay quien pida la palabra se votará.

*Señor Arias*—Pido la palabra. He de dar mi voto negativo al proyecto, y por lo mismo quiero hacer comprender al Senado el sentido de él.

Mi voto no importa, señor Presidente, abonar la con-

ducta del gobierno, en lo relativo á los asuntos de Mendoza, San Juan y La Rioja; importa menos el desconocer que el Congreso está en su perfecto derecho para ordenar el licenciamiento de las milicias reunidas por el Poder Ejecutivo: mi voto expresará únicamente, que mi opinión es que en las circunstancias actuales tan difíciles por las cuales pasa el país, no es conveniente producir acto alguno, que importe la aprobación ó reprobación de las operaciones del gobierno respecto de Mendoza, porque eso importaría aumentar un peligro más á las críticas circunstancias porque atraviesa el país.

He dicho.

Votado el proyecto en general resultó negativa de 13 contra 11.

*Señor Araoz*—Los gobiernos rara vez defienden las libertades y los principios.

La mayoría de los congresos no siempre tiene razón. He concluido. (Prolongados aplausos).

*Señor Presidente*—Creo que con la consideración de este asunto ha concluido el objeto de esta reunión.

Se levantó la sesión.

*Señor Colodrero*—Pido la palabra: Las mayorías de los Congresos....

*Señor Presidente*—No se la puedo acordar al señor Senador, porque la sesión ha terminado ya.

Se levantó á las 5 1/2.

---

## Discurso del Senador Oroño

PROYECTO DE LEY, DECLARANDO EL ESTADO DE SITIO

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

*Señor Oroño*—En una circunstancia verdaderamente solemne para el país, en que se nos pide por el Poder Ejecutivo la autorización para intervenir, y la declara-

toria de estado de sitio para una provincia conmovida por la sedición, parecerá extraño, señor Presidente, que yo esté en oposición á esta medida.

Un instintivo sentimiento de patriotismo y el natural deseo de contribuir al restablecimiento del orden, lleva imprescindiblemente á todos los espíritus á aceptar esta clase de medidas, muchas veces sin el suficiente discernimiento, nada más que por no mostrarse ménos interesados y solícitos en favor de la paz pública.

Esas medidas, que en una época normal, en el orden regular de la marcha administrativa de la Nación, serían consideradas repugnantes y como una infracción manifiesta de la Constitución, se aceptan y se consienten cuando se invoca por el Poder Ejecutivo el mantenimiento del orden, cohonestándose con este interés, más aparente que real, las violencias á que sujetan á los pueblos y á los ciudadanos las disposiciones del Presidente de la República, emanadas de la intervención y del estado de sitio.

Yo pienso, señor Presidente, á este respecto lo mismo que el señor Senador por Corrientes que me ha precedido en la palabra. Pienso que no es con estas medidas que se ha de restablecer el orden, que se han de radicar las instituciones; pienso que solo el cumplimiento fiel de la Constitución, la estricta observancia de todos los principios en ella consagrados, será el mejor, más eficaz y poderoso medio para afianzar el orden al mismo tiempo que la libertad.

Los hechos mismos que se han producido en la provincia de Mendoza, y que han dado origen á la solicitud del Poder Ejecutivo, nos dan la prueba de que la paz pública no puede mantenerse inalterable sinó ajustándose á esa regla invariable que estamos obligados á obedecer, y á que están sujetos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos:—el respeto religioso á la Constitución.

Desde mucho tiempo há, señor Presidente, se venían denunciando los hechos que tienen lugar en la provincia de Mendoza. Cuando el Presidente de la República

nos dió cuenta en su Mensaje de que había puesto á disposición del Gobernador de aquella provincia los 75 hombres de línea que hoy se han sublevado, nosotros, los que pensamos de distinta manera que el Poder Ejecutivo en este punto; nosotros, los que creemos que no es con estas medidas de rigor ni con el empleo de la fuerza que se han de salvar las instituciones, preveíamos desde luego que lo que ha sucedido en Mendoza, iba irremisiblemente á suceder. No es posible violentar el orden establecido sin exponerlo; no se puede consolidar un edificio minándolo por su base.

La experiencia nos demuestra en nuestra breve historia constitucional, que cuantas veces los poderes públicos se han separado de las reglas establecidas en la ley fundamental, hemos tenido, como consecuencia necesaria y fatal, la perturbación del orden público con todo el cortejo de males que trae siempre aparejados.

Estos males nacen, señor Presidente, de la equivocada interpretación que se hace por los que gobiernan, de las disposiciones de la Constitución. El Presidente de la República cree que tiene el derecho, y el señor Ministro del Interior lo ha declarado así en esta Cámara, de ocurrir con la fuerza pública á cualquiera provincia, cuyo orden interior estuviese amenazado, aún cuando no sea requerida la intervención del Poder Nacional; y por más vagos y pueriles que sean los temores de parte del gobierno local, poner en sus manos la fuerza nacional.

Pero esta medida, señor Presidente, por más inocente que fuera, ejercida por el Poder Ejecutivo en las circunstancias actuales acusa la intención y el propósito de contribuir al triunfo de las candidaturas que esos gobernantes apoyan. (Aplausos).

Esta medida, señor Presidente, que la había excusado el Poder Ejecutivo en otras ocasiones, resistiendo á fundadas solicitudes en casos muy especificados por la Constitución, para sostener, como era de su deber, á otros gobernadores que habían sido depuestos por la



sedición, vemos que la emplea hoy con un interés inusitado, solo para *prevenir el caso posible* de una perturbación en la provincia de Mendoza. Esto importa, señor Presidente, á la luz de la verdad y haciendo un examen concienzudo y frío de los hechos, no ir á prevenir una perturbación en aquella provincia, sinó ir á poner en manos de su gobernante todos los medios de que la Nación puede disponer para mantener la paz y el imperio de las instituciones, para que haga prevalecer la candidatura de sus simpatías, aunque con el ejercicio de la fuerza ahogue el sentimiento del pueblo y deje burladas sus esperanzas, destruyendo así la más preciosa de las garantías que la Constitución acuerda. (Aplausos).

Esto no es permitido, señor Presidente, á ningún hombre que se encuentra al frente de los destinos públicos de la Nación, que tiene por lo mismo la obligación y el estricto deber de ser el más fiel ejecutor de la Constitución. Esto no es permitido, repito, sin rebajar la alta misión que tiene todo gobernante, prostituyéndola á las pasiones y á los intereses de los círculos que se disputan el triunfo de una candidatura cualquiera.

El Gobierno Nacional no podía ser extraño, señor Presidente; no podía ignorar los hechos que se producían en la provincia de Mendoza. La prensa lo denunciaba día por día, y el telégrafo repetía al oído del Presidente de la República los desafueros cometidos por ese gobernante. Las cárceles estaban llenas de ciudadanos como lo están actualmente, sin otro motivo que porque hacen oposición y resistencia á las pretensiones de ese mandatario infiel, que quiere á todo trance hacer triunfar la candidatura de sus simpatías. (Prolongados aplausos).

Si el Presidente de la República, estimulado por un espíritu de justicia, por un sentimiento de dignidad personal por la dignidad misma del puesto que ocupa; obedeciendo á los deberes que la Constitución le impone, hubiese querido hacer prevalecer las buenas ideas, cuando en la provincia de Corrientes tuvo lugar una

perturbación y la intervención fué requerida, habría acordádola. Habría escuchado siquiera al gobernador de esa provincia depuesto por la sedición, que vino á golpear las puertas del Congreso, á pedir el apoyo y la protección que le eran debidas por la Constitución.

Es notorio, sin embargo, el hecho de que á ese gobernador, no solo se le desatendió, sinó que no le fúé permitido siquiera explicar personalmente al Presidente de la República los hechos que habían ocurrido en su provincia.

Cuando estos hechos han tenido lugar, señor Presidente; cuando más antes habían tenido lugar también otros no menos graves y reprochables en la provincia de San Juan, donde la fuerza pública militar había contribuido á hacer la revolución que depuso al señor Zavalla, sin que se hubiese querido acordar la intervención, ¿cómo se nos viene á pedir ahora en nombre de la paz de la provincia de Mendoza, de la estabilidad de ese gobernante, no solo el estado de sitio, sinó la intervención que no ha sido requerida por las autoridades de Mendoza, la intervención oficiosa, el comedimiento, en una palabra, la prueba de la adhesión de la autoridad nacional á los atentados cometidos?

Sabemos, señor Presidente, por experiencia propia, porque todos los días nos lo demuestran los hechos, de qué modo se hace uso del estado de sitio por los gobernantes de esas provincias. Y es justamente para prevenir esos abusos que todos los días llegan á nuestros oídos, que yo, al ir á terminar las sesiones del Congreso, he propuesto la declaración de estado de sitio en la provincia de Entre Ríos, excluyendo á la de Santa Fé, nó porque sea teatro, como dice el Presidente, de mis maquinaciones revolucionarias, sinó para que no sea teatro de las torpes violaciones de la Constitución y de los abusos que esos gobernantes cometen. (Aplausos).

Quería también salvar, señor Presidente, á la provincia de Corrientes, porque no solo sé como usan los Gobernadores de provincia del estado de sitio, sinó como

piensa el Presidente de la República de las violencias que se ejercen al favor del estado de sitio.

El Presidente de la República decía á uno de los individuos desterrados por el gobernador de Santa Fé, (y llamo sobre ésto la atención de la Cámara): que la facultad de desterrar correspondía innegablemente al Gobierno local de cada provincia; que aún cuando de ella usase con una intención siniestra; aún cuando fuese para alejar á un ciudadano del hogar, no por intereses políticos ni por presuntivos temores, sinó por intereses de familia, siempre que lo hiciera el Gobernador estaba perfectamente bien hecho, á juicio del Presidente de la República.

Con estos antecedentes, con esta declaratoria de parte del primer magistrado de la República ¿qué podemos esperar que suceda en Mendoza, si se la declara en estado de sitio? ¿No es verdad que ese gobernante, siguiendo el propósito de *triunfar á todo trance*, ha encarcelado y engrillado á varios respetables ciudadanos porque le hacen oposición? ¿Qué límite, qué barrera podría contenerlo, autorizado por el estado de sitio para engrillar al pueblo de Mendoza, puesto que todo el pueblo de Mendoza le hace oposición? (Estrepitosos aplausos).

*Señor Presidente*—El reglamento de la Cámara prohíbe estas manifestaciones. Lo hago saber á la barra para su estricta observancia.

*Señor Oroño*—¿Para qué quiere, señor Presidente, el gobierno de Mendoza ó la autoridad nacional el estado de sitio? ¿Es para someter á los sublevados, para aprehenderlos y castigarlos con arreglo á la Ordenanza? He tenido ocasión de decirlo en la sesión anterior: el Gobierno Nacional en el caso ocurrido en Mendoza, tiene un derecho indisputable que no necesita sancionarlo con una autorización del Congreso, porque le es peculiar y privativo, de introducir la fuerza pública nacional á la provincia de Mendoza ó á cualquiera otra, para aprehender á los desertores ó sublevados donde quiera que los encuentre. Entonces no es para eso que se pide el

estado de sitio, porque no se necesita. Es respondiendo á otras miras y con otros propósitos, que se descubren claramente en los poderes públicos de la Nación: se nos pide, y debe decirse con franqueza, el estado de sitio, para asegurar el triunfo de una candidatura, desbaratando por medio de estos resortes del poder los esfuerzos del pueblo para defender sus libertades.

Si el Presidente de la República quiere contener esos motines; si quiere cerrar para siempre el periodo de las revoluciones armadas, que no solo en la provincia de Mendoza es posible que estallen continuando esas violencias que se hacen contra el derecho de los individuos, el medio más adecuado para conseguirlo sería no hacer violencia á ninguna aspiración legítima, á ningún derecho, á ninguna de esas facultades que, no solo están consignadas por la Constitución en favor de los pueblos y de los individuos, sinó que están más arriba de toda Constitución, porque corresponde á esa categoría de derechos que no están sujetos á ninguna legislación, y que nacen de la esencia misma de nuestro sistema y del derecho inalienable de todo hombre libre.

El Presidente de la República para cumplir su misión, respondiendo al sentimiento que lo ha elevado al poder, tiene además otros medios. Esos medios han sido indicados por el señor Senador por Corrientes, y consiste en tocar los resortes de la opinión, lanzarse en las corrientes del espíritu público inspirándose en los deberes que ha aceptado, y buscar en el concurso de otros hombres que compartan con él las tareas administrativas del gobierno, el prestigio y la opinión que le falta, reorganizando su Ministerio; llevando hombres ajenos á las luchas electorales, y manteniéndose él mismo sereno en presencia de las evoluciones de la opinión, para no incurrir en la tacha de partidario y sostenedor de una candidatura. Así habrá conseguido el Presidente de la República contener esos desórdenes y sofocar las rebeliones.

El estado de sitio no se ejerce en los pueblos, sinó

cuando está en peligro la Constitución y las autoridades creadas por ella. Nada de esto sucede en el caso presente. En Mendoza no están en peligro ni la Constitución, ni las autoridades nacionales, y las mismas autoridades provinciales funcionan allí sin obstáculo

Desde luego, el Congreso, por más deseos que tuviera de complacer al Poder Ejecutivo acordándole esta autorización, está por la Constitución virtualmente impedido de hacerlo. El Congreso no puede dar lo que no tiene, no puede conferir facultades que la Constitución le ha negado expresamente, á no ser que se quiera repetir el hecho de la declaratoria de sitio en Corrientes y Santa Fé, no obstante que la Constitución dice que *se declarará en estado de sitio la provincia ó territorio conmovido por la sedición.*

Es preciso no salir de estas reglas, porque saliendo de ellas nos exponemos á que toda la República, hoy con un pretexto, mañana con otro, sea declarada en estado de sitio; y esta facultad que tiene el Congreso, que la tiene á su vez el Poder Ejecutivo en receso de este cuerpo, no es un resorte ordinario de gobierno, y por el contrario, es una excepción á la regla general establecida en garantía de los derechos de los pueblos y los ciudadanos, que no pueden ser puestos en duda ni sugetos á las condiciones opresivas que puedan imponerles los gobernantes, ya de las provincias, ya de la Nación, en la suspensión transitoria de las garantías constitucionales, cuando en determinadas ocasiones se suspenden esas garantías.

Si no ha llegado esa ocasión, como no había llegado en las provincias de Corrientes y Santa Fé, ¿por qué se declararía en estado de sitio la provincia de Mendoza? ¿Por qué hay allí una amenaza de perturbación? ¿Por qué hay temores más ó menos fundados de una revolución? ¿Desde cuándo es este motivo para declarar en estado de sitio á una provincia? ¿No hemos visto á la provincia de Salta conmovida profundamente por una revolución, con dos partidos en armas disputándose el

triunfo de la elección de gobernador, y sin embargo, el Gobierno Nacional, el mismo Congreso rechazó la requisición de intervención? ¿Quién le ha dicho al Presidente de la República que las garantías contenidas en los artículos 5º y 6º de la Constitución, son para mantener en el poder á gobernantes desleales que infringen esa misma Constitución? Esas garantías son especialmente acordadas á los Estados, á los pueblos, á los ciudadanos y no á los gobernantes que atropellan sus libertades, que vulneran sus derechos y menosprecian la ley.

Siguiendo la doctrina del Presidente de la República, cada gobernante de provincia podría convertirse en un autócrata odioso, en un déspota incorregible, en un tirano repugnante.

Si interpretáramos la Constitución del mismo modo que el Presidente de la República, tendríamos la arbitrariedad entronizada, el despotismo imperando en todas partes y el pueblo encarcelado, en el cepo colombiano, como ha sucedido más de una vez en las provincias. (Aplausos).

Si se toleran los desmanes de esos gobernadores; si el poder tutelar de la Nación, en vez de contribuir á que se respete la justicia y se hagan efectivos los derechos, dá medios y elementos para robustecer á esos gobernantes ¿qué quedaría entonces de la Constitución? Si así se hubieran de entender las disposiciones de la ley fundamental, es claro que retrogradaríamos á las épocas de vergüenza en que solo imperaba la voluntad de los mandones.

Si el Presidente de la República no retrocede en este camino; si no reniega de las liberticidas teorías que quiere introducir en nuestro país; si no modifica sus opiniones ¿quién podrá responder de la paz pública de la Nación?

El, en otra época no muy lejana, cuando se presentaba como el campeón de las libertades públicas, aconsejaba al Gobierno de la Nación entonces establecido, que no se opusiera á la justa y legítima resistencia que le

vantaba el pueblo de San Juan contra el Gobernador Virasoro.

Se fundaba para ello en hechos menos odiosos, menos repugnantes que los que cometen el Gobernador Villanueva en la provincia de Mendoza y el Gobernador Iriondo en la de Santa Fé.

¿Por qué ha variado en sus oponiones, hoy que se encuentra en el poder? ¿Dónde está el constitucionalista señor Sarmiento, el hombre que venía á enseñarnos la verdadera doctrina constitucional bebida en las fuentes puras de los Estados Unidos?

¿Qué se ha hecho, señor Presidente, ese guardián tan celoso de las libertades públicas de la Nación, ese eterno conspirador contra los gobiernos establecidos, solo porque falseaban los principios? Es posible que cuando ha ido á los Estados Unidos; que cuando más debiera haberse perfeccionado en el conocimiento y el estudio del derecho federal, solo nos haya traído como testimonio de su residencia en aquella Nación, las monstruosas y subversivas doctrinas que había visto prevalecer en medio del incendio de la guerra civil?

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, por más grave que se me presente la cuestión de Mendoza; mientras yo no vea comprometida y en peligro la Constitución y las autoridades creadas por ella, he de negar mi voto, al proyecto de ley que se discute, y no solo le he de negar mi voto, sino que consideraré siempre abusiva la intervención que se ejerce por el Poder Ejecutivo Nacional sin requisición de sus autoridades.

No quiero que suceda lo que, cuando ocurrió la revolución en la provincia de Entre Ríos, invitados por el Presidente de la República para pedir nuestra opinión sobre si debía ó no intervenir en aquella provincia dada la gravedad del hecho del asesinato de su gobernador, cuando él buscaba nuestro consejo, el señor Presidente había intervenido por derecho propio, buscando solo nuestra opinión por una mera curiosidad, y haciéndonos hacer el desairadísimo papel de ir á tratar con toda la seriedad y conciencia de hombres honrados, de un

asunto que iba á decidir de la paz ó la guerra, cuando ya estaba decretada esta última por la sola voluntad del Presidente.

Si el señor Presidente quiere intervenir en la provincia de Mendoza; si lo ha hecho ya sin autorización del Congreso, que sea de él solo la responsabilidad, y él el único responsable de las consecuencias.

Yo por mi parte, señor Presidente, no he de consentir en que mi nombre quede ligado á un acto violatorio de la Constitución, que solo sirve para el triunfo de un partido electoral en Mendoza, respondiendo á los propósitos de la próxima elección presidencial.

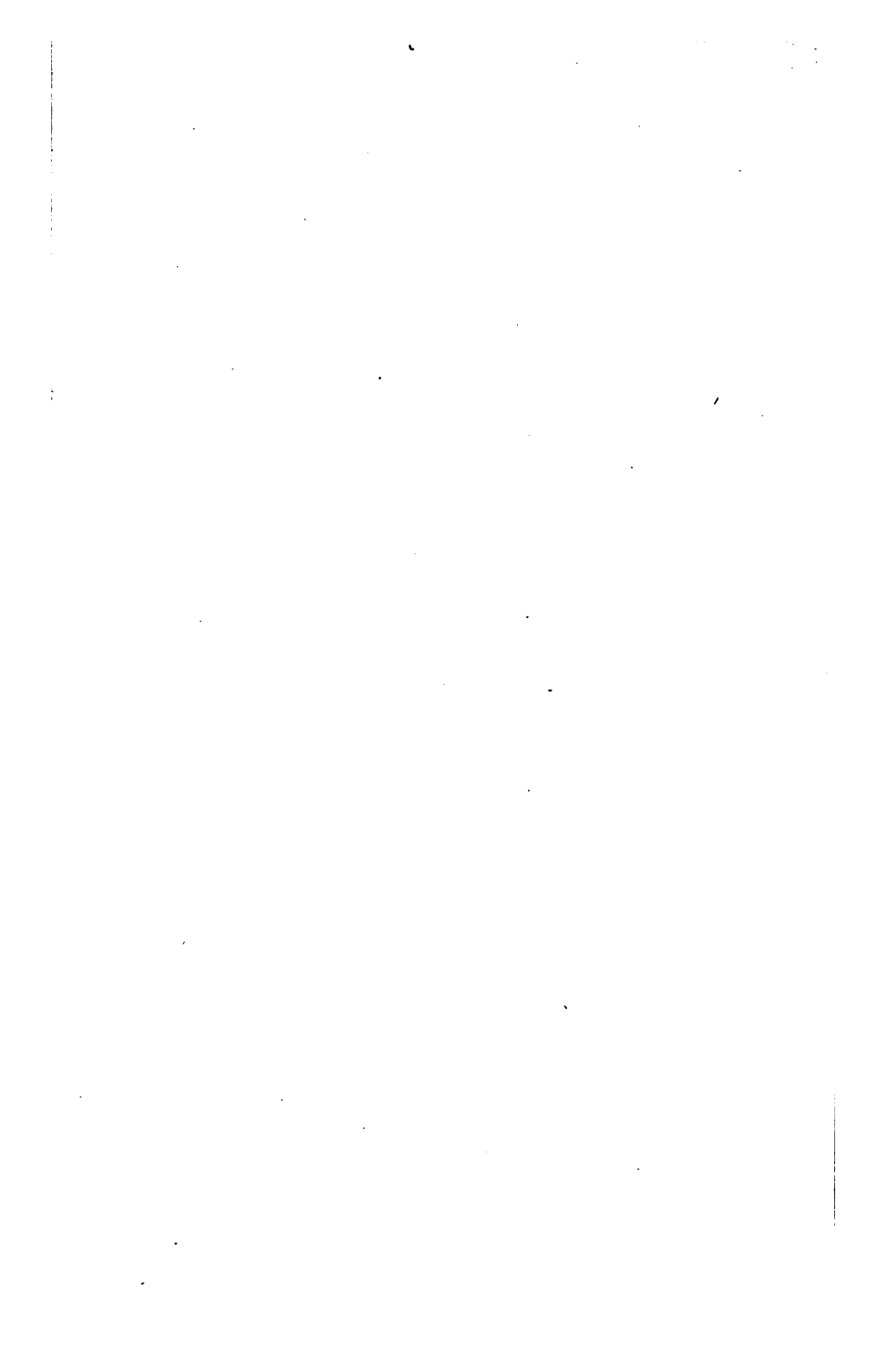
Es por esto que negaré mi voto á este proyecto de ley.

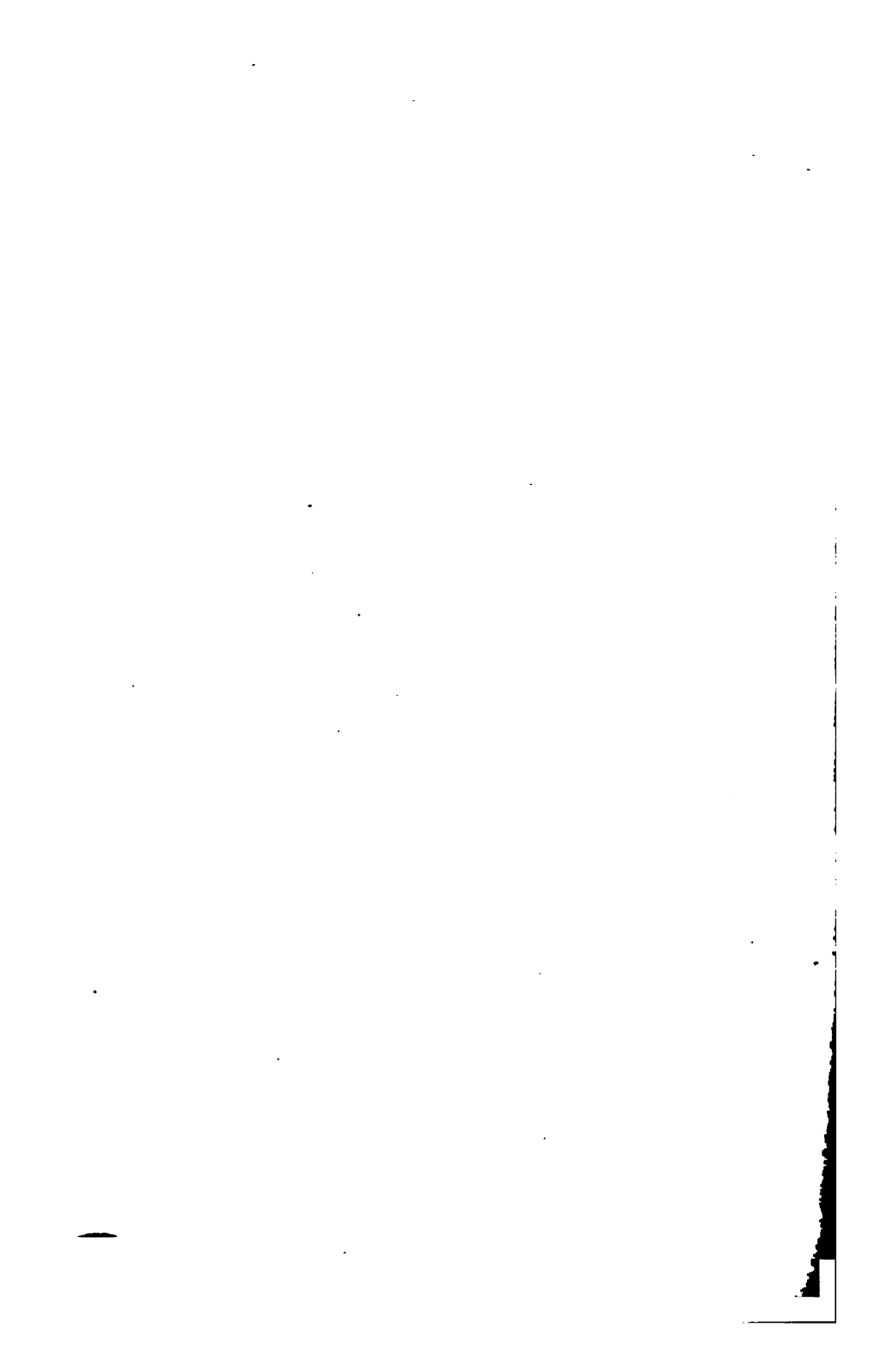
He dicho.

---













**This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.**

**A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.**

**Please return promptly.**

